





La izquierda radical ante ETA

¿El último espejismo revolucionario en Occidente?

La edición de este libro ha sido posible gracias a la financiación de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco.

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

JUSTIZIA ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Giza Eskubideen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección de Derechos Humanos



La izquierda radical ante ETA

¿El último espejismo revolucionario en Occidente?

F. Javier Merino Pacheco



Serie General

Director de la colección: Josu Ugarte

Coordinación editorial: Blanca Pérez

© F. Javier Merino Pacheco, 2011

© Bakeaz, 2011

Plaza Arriquirar, 3-1.º dcha. • 48008 Bilbao

Tel.: 94 4790070 • Fax: 94 4790071

Correo electrónico: bakeaz@bakeaz.org

<http://www.bakeaz.org>

ISBN: 978-84-92804-05-4

Depósito legal: BI-1430-2011

«Y con extraordinaria ceguera, se recurre a la violencia con la pretensión vana de ensanchar el espacio social de una debilitada práctica emancipatoria sin reparar en que la violencia no hace sino desmoralizar (en el doble sentido de retraer y de truncar la relación medios-fines) cualquier propuesta emancipatoria.»

Imanol Zubero (*hika*, 175, marzo 2006)

«El ser de izquierdas, en el plano personal, es más que una mera actitud reivindicativa, anticapitalista. El ser de izquierdas conlleva una moral, un espíritu solidario, es la asunción plena de todas las conquistas progresistas de la humanidad, como son los derechos del hombre, la libertad como legado histórico imperecedero. El ser de izquierdas es ser abierto y comprensivo con los demás, con el mundo; significa vivir positivamente las inquietudes sociales y nacionales del entorno, combatir todas las opresiones y marginaciones [...].»

José Luis López de Lacalle (2010: 45)



Índice

Introducción	11
.....	
I. Planteamientos historiográficos	17
Nacionalismo y socialismo hasta la Primera Guerra Mundial	17
La influencia del estalinismo	33
La izquierda y el nacionalismo en España	39
Aproximación a la historia del Movimiento Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria y el PCE-IU	45
El contexto político vasco	49
El discurso de la izquierda radical	56
.....	
II. La posición ante ETA de la izquierda radical a través de sus órganos de prensa	59
La evolución del PCE e Izquierda Unida	59
La evolución de la izquierda revolucionaria	89
.....	
III. Conclusiones	181
.....	
Lista de siglas	187
.....	
Bibliografía	189
.....	



Introducción

El objetivo de este texto es analizar la posición de una parte de la izquierda radical española ante el terrorismo de ETA a lo largo de la historia de esta. En concreto, se abordan las tomas de postura ante esta organización por parte del Partido Comunista de España (y, desde 1986, de la coalición en la que se integra, Izquierda Unida), de la Liga Comunista Revolucionaria y del Movimiento Comunista (y de Zutik, a partir de su constitución en 1991). El marco temporal arranca de los últimos años del franquismo, y se prolonga hasta prácticamente la actualidad, si bien los años más recientes presentan unos rasgos muy específicos, en los que las organizaciones de la extrema izquierda se caracterizan por la debilidad (o la desaparición) de sus lazos orgánicos y por la articulación de discursos notablemente dispares, lo que impide un tratamiento homogéneo de los mismos. No obstante, la aproximación a las tomas de posición más recientes permite cerrar el círculo del análisis, máxime en un momento en el que ETA parece próxima a su final, lo que implica la apertura de una nueva fase política en el País Vasco, en la que la evaluación del papel de ETA y de los factores que explican su prolongada trayectoria sin duda deben desempeñar un papel fundamental.

La elección de este objeto de la investigación se debe, al menos, a dos razones fundamentales. La primera es de carácter académico. No hay tratamientos rigurosos y sistemáticos del asunto.¹ Sin duda,

1. Tan solo hemos podido identificar aproximaciones parciales, por parte de protagonistas directos que reflexionan en textos no publicados y de difusión muy limitada, y alusiones muy colaterales en obras que abordan la cuestión de forma tangencial, como Muñoz Soro y Baby (2005).

la escasa visibilidad social de este sector de la izquierda en España —y en el conjunto de Europa, podríamos añadir en el momento actual— puede explicar la ausencia de interés por el tema. Lo cierto es que la bibliografía sobre la organización terrorista es muy extensa, e incluye acercamientos desde enfoques muy diversos; sin embargo, las posiciones de la izquierda radical no han suscitado apenas análisis, más allá de los apuntados desde algunos sectores vinculados a esta fracción del espectro político, que tampoco han sido precisamente pródigos, y de alguna aproximación muy aislada desde ámbitos periodísticos o directamente políticos. La segunda razón de la elección, no por orden de importancia, tiene que ver con motivaciones de tipo político y moral. La persistencia del terrorismo de ETA durante más de cincuenta años constituye una anomalía tan trágica por el sufrimiento que ha generado como difícil de explicar en primera instancia, dado el marco en el que se produce: un territorio enclavado en la Europa occidental, con un nivel de vida material más que satisfactorio según todos los indicadores convencionales, con un grado de autogobierno de los más elevados de Europa, y en un contexto en el que la inmensa mayoría de los grupos terroristas con los que ha coexistido a lo largo de su dilatada historia (la RAF, las Brigadas Rojas, el IRA..., y en España, el FRAP o los GRAPO) han desaparecido o limitado su actividad a niveles casi imperceptibles. Este estudio no pretende dar una respuesta global a la cuestión, pero sí que parte de una premisa probablemente complicada de demostrar fehacientemente, si bien susceptible de ser sostenida racionalmente en términos de análisis político riguroso: la de que la longevidad de ETA se ha visto favorecida por un abanico de actitudes ante ella por parte tanto del nacionalismo democrático como de la izquierda radical que ha oscilado entre el apoyo (con mayor o menor tibieza), la justificación y la tolerancia, y que siempre —salvo quizá en fechas ya muy próximas— se ha caracterizado por la negativa a la condena y la deslegitimación tajantes. Si sobre las relaciones entre el nacionalismo llamado democrático o moderado y ETA se ha hablado y escrito mucho, aunque aún es más lo que queda por desbrozar,² sobre la vinculación entre la organización terrorista y la izquierda el terreno sigue prácticamente virgen. Probablemente hay una tendencia a considerar la

2. Morán (2004) y Gurruchaga y San Sebastián (2002) analizan de forma monográfica el tema. Las alusiones en obras dedicadas al PNV, a ETA o a la política vasca en general son innumerables, al igual que los artículos de prensa o de revista.

naturalidad y coherencia de tal relación si se contempla el propio nacimiento de algunas organizaciones aquí analizadas (Movimiento Comunista y Liga Comunista Revolucionaria) desde el seno de la propia ETA. No obstante, la cercanía deja de ser tan obvia cuando se contempla a ETA —y, con ella, el mundo del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco— como una organización, más allá de cierta fraseología socializante cada vez menos habitual en sus proclamas, caracterizada básicamente por su nacionalismo radical. Y la profundización se hace necesaria cuando se comprueba, como se pondrá de manifiesto en este trabajo, que estas organizaciones de extrema izquierda acompañarán su separación orgánica de ETA con severas críticas a unas prácticas y a unos planteamientos que estiman muy alejados de los característicos de organizaciones de izquierda. Encontrar las razones del cambio posterior, cuando las críticas dejaron paso a la comprensión y el apoyo, es uno de los objetivos fundamentales de este trabajo.

En síntesis: una organización y un entramado político nacionalista radical, que además practica el terrorismo en buena parte de los casos indiscriminado y con víctimas inocentes, no suscita el rechazo más tajante por parte de organizaciones que se autotitulan revolucionarias (es el caso de la Liga Comunista Revolucionaria [LCR] y el Movimiento Comunista [MC], con Marx y Lenin como sus referentes teóricos fundamentales —más Trotski para la LCR—) o simplemente transformadoras, como el PCE e IU, partidarias asimismo de la superación del capitalismo para alcanzar una sociedad igualitaria. Estas organizaciones han gozado de un cierto capital moral en Euskadi y en toda España por haber formado parte destacada de la lucha antifranquista y haber sacrificado a muchos de sus militantes en la represión policial para convertirse probablemente en los grandes derrotados de la transición, donde desaparecieron del primer plano del escenario para dejar el sitio a los propios herederos del franquismo o a quienes habían participado de forma mucho menos activa en la lucha contra el franquismo. Es ciertamente la dilapidación de buena parte de este capital moral al no haber sabido contestar desde la caracterización adecuada y el rechazo del terrorismo de ETA lo que convierte esta cuestión en un episodio de revisión obligada para una parte de la izquierda con un presente y un futuro complicados, pero que aún lo serán más si no se procede a un análisis serio de las razones que condujeron a la degradación moral y política que implicó la posición ante ETA.

La elección de las organizaciones objeto de estudio —seleccionadas dentro del más amplio espectro de la izquierda radical—

viene dada por su significación e incidencia social. El PCE e IU han desempeñado un papel nada despreciable en la historia de España del siglo xx. Aunque en la actualidad la implantación de ambas organizaciones en la sociedad española se ha visto muy reducida, no cabe duda de que a lo largo del periodo analizado en este trabajo (última etapa del franquismo, transición y consolidación democrática) han representado un sector fundamental de la izquierda, en concreto, la fuerza más importante a la izquierda del PSOE, probablemente en algún sentido con una repercusión política y moral superior a su peso electoral. El EMK y la LKI en el País Vasco (y sus referentes en el conjunto de España, el MC y la LCR) representan los partidos de la extrema izquierda que lograron sobrevivir al naufragio de esta tendencia política tras el fin de la transición. En los últimos años sesenta y sobre todo los setenta, como consecuencia cruzada de los ecos del 68 y del declive del franquismo, surgieron numerosos partidos de la llamada en la época extrema izquierda, en ocasiones también izquierda revolucionaria. En su mayoría de autoadscripción maoísta (el Movimiento Comunista en primera instancia, el Partido del Trabajo de España y la Organización Revolucionaria de Trabajadores) o trotskista (la Liga Comunista Revolucionaria, la Liga Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores), no faltaron tampoco organizaciones que dieron apoyo a grupos armados, en la estela del «terrorismo rojo» de esos años (el FRAP, los GRAPO). Según Cucó (2008: 79), las organizaciones de la izquierda revolucionaria comparten cuatro atributos que emanan directamente del pensamiento de Lenin: el carácter revolucionario, la concepción del partido como núcleo de la revolución, el rechazo de la democracia burguesa y el antiimperialismo. Sin llegar al nivel de militancia e implantación social del PCE, el conjunto de estos partidos consiguió una influencia considerable, alcanzando cotas muy significativas a escala local en algunos territorios, y en cualquier caso un nivel de movilización notable. La aprobación de la Constitución y la progresiva normalización del sistema político español dieron lugar a su paulatino declive; la mayoría desaparecieron, pero el MC y la LCR mantuvieron una existencia con cierta presencia en los movimientos sociales, aunque con muy escasa influencia electoral e institucional, hasta su fusión en 1991. No por casualidad, el resultado de dicha fusión fueron organizaciones soberanas en cada una de las regiones y nacionalidades del Estado, por emplear su propia terminología; aunque la fusión no respondió a las expectativas generadas, siendo efímera la vida de las nuevas orga-

nizaciones en líneas generales, una de las que sobrevivió con cierto grado de actividad política e incidencia social fue Zutik, la organización fruto de la confluencia en Euskadi.

El trabajo se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. En la primera, de carácter historiográfico, se abordan varios aspectos mediante los cuales se intenta hacer inteligibles las posiciones mantenidas por las organizaciones referidas en relación con ETA; se incluyen a modo de reflexión, y en forma de breves aproximaciones, dadas las dimensiones del trabajo y los objetivos perseguidos:

- Una síntesis de las opiniones expresadas por los clásicos del marxismo sobre la cuestión nacional, así como de las complejas interrelaciones entre nacionalismo y socialismo en las organizaciones del movimiento obrero internacional hasta la Primera Guerra Mundial.
- Una reflexión sobre las implicaciones del estalinismo en las prácticas de la izquierda.
- Un breve recorrido histórico por la relación entre el pensamiento progresista y de izquierdas en España respecto al nacionalismo, que explica algunas posturas mantenidas por las organizaciones de izquierda en el posfranquismo.
- Una breve aproximación a la trayectoria histórica de los partidos analizados en el trabajo (la LCR, el MC y el PCE-IU).
- Una contextualización, también muy sumaria, de la situación política en el País Vasco durante los años estudiados, con una ligera reseña histórica de la evolución anterior.
- Una caracterización del discurso de la izquierda radical, en el marco del debate historiográfico sobre la relación entre el lenguaje y la práctica de los agentes sociales.

La segunda parte del trabajo está sustentada en la información obtenida fundamentalmente del seguimiento de varios órganos de prensa: *Zer Egin?*, órgano del EMK, entre 1970 y 1983, con periodicidad muy variable, sobre todo en los primeros años; *Combate*, órgano primero semanal y luego quincenal de la Liga Comunista Revolucionaria, que ha sido analizado entre 1978 y 1990; *hika*, órgano mensual de Zutik, entre 1991 y el 2000, y *Mundo Obrero*, órgano del PCE, entre 1978 y el 2000 (este medio tuvo varias etapas, que fueron desde un carácter diario hasta semanal e inclu-

so mensual). La elección de las fechas ha venido determinada por la disponibilidad de las fuentes.³ Se ha contado asimismo con documentos internos y resoluciones de congresos del EMK, Zutik y Batzarre.

3. *Combate y Zer Egin?* han sido consultados gracias a sendas colecciones particulares; *hika*, en la sede de Bakeaz, en Bilbao; *Mundo Obrero*, en el Archivo Histórico del PCE, depositado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Debo agradecer especialmente a José Antonio Velasco y a Javier Villanueva su colaboración mediante la puesta a disposición de esta investigación de sus fondos particulares.

I. Planteamientos historiográficos

NACIONALISMO Y SOCIALISMO HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Marx y Engels

La mayoría de los autores especialistas en el tema coinciden en que tanto Marx como Engels no desarrollaron una teoría sistemática sobre el nacionalismo.⁴ De hecho, hay una marginación de la cuestión nacional en la medida en que es un asunto que se trata de forma secundaria, y casi siempre subordinada a los que constituyen sus motivos de preocupación fundamental. La primacía de la clase sobre cualquier otra categoría histórica, la consideración de que la irrupción del nacionalismo en el siglo XIX no respondía sino a las necesidades de la evolución del capitalismo en Europa, y la convicción de que el propio desarrollo del capitalismo tendía a superar las divisiones nacionales, proceso que aún sería más evidente en una sociedad socialista, impregnan los puntos de vista de los dos «padres del marxismo». Marx cree que la burguesía no solo no tiende a abolir los antagonismos nacionales, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos (lucha por los mercados, explotación de una nación por otras, chovinismo...); la reacción del proletariado, en consecuencia, debería ser la de eludir una cuestión que no habría de

4. Para este apartado se han seguido fundamentalmente las obras de Haupt y Löwy (1980), Davis (1972) y Rodinson (1975).

conllevar más que divisiones y enfrentamientos ajenos a sus intereses. No obstante, es cierto que hay una modulación de estos principios generales en función de las circunstancias concretas, que lleva a Marx y Engels a defender las reivindicaciones nacionalistas en algunos casos y a despreciarlas o combatirlas en otros; incluso, se advierte una cierta revisión de dichos principios generales en la medida en que algunas realidades parecen no confirmarlos absolutamente.

De esta manera, su inclinación hacia los grandes Estados, como las formaciones más adecuadas para garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas, encuentra una excepción en el caso irlandés. A este territorio está dedicada una de las frases más repetidas posteriormente: «Un pueblo que oprime a otro no puede liberarse a sí mismo». La necesidad del apoyo de la clase obrera inglesa a la lucha por la independencia irlandesa propicia una nueva aproximación al tema: la lucha de naciones oprimidas puede servir de detonador para el propio combate de la clase obrera de la nación dominante. Asimismo, sostienen que la liberación nacional del pueblo oprimido permite superar la división y los odios nacionales y unir a los obreros de ambas naciones contra sus enemigos comunes, los capitalistas. La emancipación del pueblo oprimido debilita las bases económicas, políticas, militares e ideológicas de las clases dominantes de la nación opresora y contribuye así a la lucha revolucionaria de la clase obrera de esta nación. Se vislumbraría de esta manera la posibilidad de una alianza estratégica entre el movimiento nacional y el movimiento obrero. Se podrá deducir de aquí otra de las características de la posición de Marx ante el problema nacional, posteriormente continuada y profundizada por Lenin y otros teóricos y movimientos de la izquierda: el carácter táctico de las actitudes ante el problema nacional. El apoyo a los movimientos nacionalistas está en función de su conveniencia para el éxito de la revolución socialista. En relación con este predominio de los aspectos puramente tácticos frente a los propiamente ideológicos, habría que encuadrar igualmente la actitud de Marx y Engels ante la cuestión polaca, siempre presente de manera polémica en la Europa del siglo XIX. La separación de Polonia es percibida como una manera de debilitar el Imperio ruso, Estado que simboliza la reacción en la Europa de la época a los ojos de Marx y Engels; la posición ante las revoluciones del 48, precisamente, está orientada en función de este objetivo de debilitar el imperio de los zares. De ahí la hostilidad hacia los pueblos eslavos.

Mención aparte merece la noción acuñada por Engels sobre los pueblos sin historia, es decir, aquellas sociedades de mayoría predominantemente campesina, carentes de una burguesía capaz de impulsar un desarrollo económico capitalista, y, por consiguiente, susceptibles de ser dominadas por Estados más desarrollados económicamente. La consideración de estos pueblos como abocados a su desaparición en la medida en que el crecimiento económico los conduce a la dependencia de otros Estados encaja mal con la resistencia a la opresión, el igualitarismo y la defensa de los oprimidos que caracteriza el marxismo. Por otra parte, se trata de un concepto tomado de Hegel, y con más similitudes con los principios conservadores de la escuela histórica del derecho (Savigny) que con las tesis revolucionarias del materialismo histórico.

De ahí que fuera dejando paso, progresivamente, ya en vida de Engels y posteriormente en las siguientes generaciones de teóricos del marxismo, al arrinconamiento de tales planteamientos, cuya contradicción con las tomas de posición sobre Polonia o Irlanda, por ejemplo, ya ha sido puesta de manifiesto. No obstante, estos cambios de opinión, además de confirmar la referida subordinación de los planteamientos sobre el nacionalismo a las necesidades de los objetivos principales (la lucha del proletariado y la revolución socialista), expresan la falta de profundización en el análisis y la poca atención prestada en la aproximación teórica a las cuestiones relacionadas con el nacionalismo.

No obstante lo anterior, es igualmente cierto que tanto Marx como Engels entendieron siempre la nación como el marco en el cual desarrollar la acción de los trabajadores y sus organizaciones. Esta constatación, pese a su apariencia banal, no está exenta de consecuencias para el futuro. Efectivamente, de tal reconocimiento del marco nacional como una realidad a la cual adaptarse se desprenden unas prácticas que irán integrando progresivamente a los trabajadores y sus organizaciones en las realidades generadas por los marcos nacionales. Esta será la experiencia de la II Internacional, y el final de la misma tendrá que ver con esa «práctica nacional» en buena medida contradictoria con la retórica y la teoría internacionalista. En definitiva, habría que entender el término *internacionalismo* en su acepción más próxima a su propio origen etimológico, y contrapuesto en consecuencia a *cosmopolitismo*.

A pesar de estas modificaciones en la caracterización del fenómeno, que responden a los cambios que la realidad de la situación introduce, se puede resumir señalando que Marx y Engels se mueven

entre el rechazo del nacionalismo y su instrumentalización taticista. Fieles a sus premisas de rigurosidad y espíritu científico, rechazan un movimiento de fuerte impronta idealista; no obstante, advierten en algunos territorios la fuerza de este y no dudan en tomar partido por la opción que, en su opinión, ayuda en mayor medida a acelerar la revolución socialista. No faltan en sus argumentaciones algunas contradicciones y tomas de posición poco fundamentadas; sin duda, pesan en las mismas la escasa sistematización de que adolece el pensamiento de Marx y Engels sobre el nacionalismo.

El austromarxismo

La configuración multinacional del Imperio austrohúngaro presenta los mayores retos para la socialdemocracia del periodo. El Imperio ruso y el turco también padecían similares problemas en relación con la existencia de numerosos pueblos en sus respectivos territorios, con reivindicaciones igualmente extendidas de carácter nacional, pero el imperio dual incluía territorios con un grado de desarrollo industrial considerable, y, no por casualidad, el Partido Socialdemócrata había adquirido una implantación estimable. No es de extrañar que en este contexto surgieran propuestas teóricas de amplio alcance en relación con el problema nacional.

La endeblez del bagaje teórico del marxismo inicial será sin duda lo que estimule la elaboración teórica de varios intelectuales y dirigentes de la socialdemocracia austriaca. Otto Bauer reconoce la realidad nacional como un elemento que los trabajadores y el partido obrero no pueden obviar. Se formula así una política relativa al planteamiento de alternativas a la cuestión de las nacionalidades que pasa por el reconocimiento de la autonomía nacional en el marco de un imperio multinacional. Nació así el denominado *austromarxismo*, que aportó una reflexión seria y un conjunto de hallazgos no exentos de polémica e incluso de duras críticas desde otros sectores del marxismo, pero que abrió vías de notable interés para la resolución de problemas complejos en relación con la convivencia de pueblos diferentes en el marco de Estados multinacionales. Las tesis de Otto Bauer parten de la consideración de la nación como una categoría individualizada en función de la evolución histórica y una configuración determinada que desemboca en un «carácter nacional», concepto que recibió numerosas críticas, pero que no pretendía aludir a un fenómeno metafísico ni eterno, sino a la consecuencia de una concatenación de procesos históricos, susceptibles a su vez de modificación por el propio devenir (Bauer,

1979: 10). La definición de Bauer («La nación es el conjunto de los hombres vinculados por una comunidad de destino en una comunidad de carácter») no pretende ser una fórmula normativa, sino un postulado metodológico. Combina categorías neokantianas con las del materialismo histórico.

Bauer rechaza la teoría marxista tradicional propuesta por Kautsky, la cual, partiendo de la tendencia a la identificación entre Estado capitalista y nación, considera la lengua como el factor esencial del hecho nacional y asimila la comunidad lingüística a la nación. A partir de este reconocimiento de la nación como algo más que una simple emanación de los intereses económicos de la clase dominante, Otto Bauer pretende proponer una alternativa al Imperio austrohúngaro, espacio multinacional con numerosos problemas incluso de supervivencia ante la emergencia de múltiples movimientos nacionalistas en el centro y el este de Europa. El reconocimiento de las peculiaridades de los distintos pueblos que componen el Estado austriaco (y ya no solo de la componente húngara, cuyo reconocimiento conformó el llamado Estado dual) implicaba el ejercicio de sus derechos lingüísticos principalmente, junto con la posibilidad de disponer de órganos de autogobierno. Bauer no rehúye el concepto de autodeterminación, pero lo dota de un significado algo distinto al habitual: acuña la idea de la autonomía de base personal, no territorial, es decir, que la solución para la supervivencia del imperio, y a la vez para el reconocimiento de las realidades nacionales presentes en él, pasaría por el reconocimiento de su autonomía, que tendría un carácter principalmente cultural. De esta manera, Bauer postula la creación de órganos de gobierno de las nacionalidades, que tendrían la misión de velar por la defensa de los derechos lingüísticos y culturales de las minorías (Bauer, 1979: 309 y ss.). Despojar a estos órganos de atribuciones económicas o políticas implica no reconocer las fronteras dibujadas entre las distintas nacionalidades del Imperio como líneas de separación entre pueblos que pueden compartir en muchos casos los mismos intereses económicos (los trabajadores checos, húngaros o eslovenos deben anteponer sus intereses de clase a las fronteras nacionales, como es obviamente el parecer de un marxista), pero entre los que existen diferencias que no se pueden ignorar y, lo que es más importante, que, contrariamente a los pronósticos de Marx y Engels, no parece que el tiempo vaya haciendo desaparecer.

Las tesis de Bauer son completadas por Renner desde un enfoque más próximo al derecho. El plan conciso y detallado pro-

puesto por Renner para reorganizar el Imperio multinacional en un Estado supranacional, y las soluciones que esboza, se desprenden del concepto según el cual los intereses nacionales se limitan, en lo esencial, al terreno cultural y lingüístico, mientras que las cuestiones económicas son, por esencia, internacionales (Blas, 1984: 110-114). La defensa por parte de la clase obrera de esos derechos sería otra manera de ejercer el «internacionalismo proletario», ya que no significaría sino la defensa de los mismos principios aplicados a cada territorio en función de sus particularidades. Igualmente, la base económica de los planteamientos referidos a las nacionalidades no es abandonada. Todos los trabajadores estarían interesados en la defensa de la clase obrera de las distintas nacionalidades; la explotación de los otros pueblos, en definitiva, acaba perjudicando a la clase obrera de la nación dominante. Estas consideraciones llevan a la conclusión de la defensa de una autonomía cultural-nacional de carácter extraterritorial. Es decir, su propuesta implica defender el mantenimiento del Imperio austrohúngaro, reconociendo las particularidades nacionales reflejadas sobre todo en la lengua, e institucionalizadas en la existencia de unos órganos de gobierno encargados de la salvaguarda de los derechos de las minorías nacionales. Este planteamiento recibe en alguna ocasión la denominación de *autodeterminación*, pero no deja de ser una alternativa al uso más habitual de este término, y desde luego a la aplicación que de él hace Lenin. La tarea de la Internacional debe y puede consistir no en nivelar las especificidades nacionales, sino en realizar la unidad internacional en la diversidad nacional.

Las tesis de Bauer no carecieron de críticas entre los pensadores socialistas. Según Lenin, el error fundamental de Bauer es formular un nacionalismo refinado, sin explotación, sin discordia, pero nacionalismo en definitiva. Kautsky, por su parte, reprocha a Bauer el haber obstaculizado, con sus premisas, la vía hacia una síntesis fundamental entre nacionalismo e internacionalismo y, por consiguiente, el subestimar las fuerzas de la aspiración a la creación de Estados nacionales.

Fruto del debate en el seno de la socialdemocracia austriaca y de la necesidad de articular una propuesta política para el complejo Imperio austrohúngaro, el Congreso de Brno de 1899 aprueba un programa que sitúa la autonomía de los pueblos que componen el Imperio como uno de los objetivos del Partido Socialdemócrata, de acuerdo con cuatro líneas básicas: resolución del problema dentro del ámbito del Estado, supresión de privilegios nacionales, existen-

cia de territorios autónomos sobre base étnica y fin del carácter estatal del idioma alemán (Blas, 1984: 111).

Rosa Luxemburgo y Lenin

La aportación de Rosa Luxemburgo en estas cuestiones es muy importante. Probablemente más fiel a la letra de los textos de Marx, Rosa Luxemburgo defiende fervientemente la primacía de las posiciones de clase, y la necesidad de que sean estas las que marquen los fundamentos de la política socialista. Rosa Luxemburgo se niega a dar una primacía táctico-estratégica a la cuestión. Como en el caso de Marx, su preocupación tiene carácter teórico y general, y no puede adoptar la extrema flexibilidad que las necesidades del combate político imponen a Lenin. Sus ideas clave girarán en torno a la esencial confusión del concepto de nación, a la falta de rigor en las ideas relativas a la opresión nacional, a la endeblez de la identificación nacionalismo-democracia y a la ambigüedad esencial que ve en cualquier movimiento nacionalista. Hay una oposición de principio a la propia idea de nación. Rosa Luxemburgo entra en polémica con Karl Kautsky, otro teórico destacado de la época, primero en los márgenes de la ortodoxia, y finalmente repudiado y condenado por Lenin. Mientras Rosa Luxemburgo atribuye a la cuestión nacional ese carácter subordinado y solo susceptible de ser abordado en el terreno concreto de la política práctica, Kautsky propone una política propia del movimiento obrero también en la cuestión nacional que le permita practicar una política ofensiva con capacidad de intervenir en las luchas nacionales. Rosa Luxemburgo, por su parte, entiende que la política nacional debe modularse en función de las circunstancias concretas, que cambian en los diferentes países. En general, se muestra reticente a la aplicación del derecho de autodeterminación, sin negarlo, pero marca distancias con Lenin, y se enfrenta a sus compañeros independentistas del Partido Socialista Polaco en su empeño de impedir que las reivindicaciones nacionales distraigan a los trabajadores de sus objetivos esenciales. De hecho, afirma que si la clase obrera polaca es capaz de liderar la lucha por la independencia, con mayor motivo debería dedicar sus energías a la revolución. Su propuesta defiende la unidad de las clases obreras polaca y rusa, cuyo interés común pasaría por la consecución de la revolución proletaria.⁵

Distinto es el planteamiento sustentado por Lenin. Aunque de una manera que se considera vinculada a la táctica más adecuada

para incorporar adeptos a la revolución, Lenin formula la defensa del derecho de autodeterminación para los distintos pueblos que componen el Imperio ruso. Se hace derivar este principio de un planteamiento estrictamente democrático, en virtud del cual cada pueblo debe ser dueño de su destino; a la vez, se combina este derecho con una posición contraria a la ruptura de los Estados existentes por parte del partido obrero.

La posición de Lenin, como no podía ser de otra manera, está muy condicionada por la problemática del comunismo ruso, si bien hay un importante esfuerzo analítico y de elaboración teórica. Como en el conjunto de su obra, Lenin toma de Kautsky sus fundamentos teóricos, y hace suya la concepción histórico-económica de la nación; sin embargo, Lenin modifica el acercamiento marxista tradicional a la cuestión, y sobre todo subordina la teoría a la praxis, aunque hay también un esfuerzo considerable de reflexión teórica y de actualización del pensamiento marxista a los cambios experimentados por la realidad internacional en su época respecto a la de Marx. En opinión de Lenin, los partidos obreros tienen que asumir la igualdad de derechos de las naciones oprimidas y al tiempo reforzar la unión de los proletarios de todas las naciones del Estado dado, por encima de fronteras trazadas por la burguesía.

Lenin polemiza con los marxistas que han teorizado sobre la cuestión nacional. Su posición es bastante similar a la de Kautsky antes de 1914, pero crítica su visión unilateral y casi exclusiva de la lengua como base del hecho nacional y su falta de claridad y de vigor en la formulación del derecho de las naciones a la separación. Después de 1914, las posiciones ambiguas y contradictorias de Kautsky sobre los derechos de las naciones en el marco de la guerra son violentamente denunciadas por Lenin como «hipócritas» y «oportunistas».

Lenin rechazó la propuesta de Bauer de una «autonomía nacional-cultural» como un elemento burgués que tendería a dividir a los obreros. Se pronuncia a favor de una cultura internacional y no de una cultura nacional de varias burguesías. Sin embargo, defiende un amplio autogobierno y autonomía de las varias regiones, que, entre otras cosas, tuvieran fronteras de acuerdo con las diferencias de nacionalidad. Lo que por ello se entendía era una auto-

5. *El pensamiento de Rosa Luxemburgo. Antología a cargo de M.^a José Aubet*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983. Extractos reproducidos en edición electrónica de Lorenzo Peña (España Roja), disponible en <<http://er.users.netlink.co.uk/biblio/luxembur/luxembur.pdf>> (consultada el 15 de julio del 2009).

nomía cultural que no pusiera estorbos al desarrollo económico del país en general.

Lenin no estaba a favor de la autodeterminación como un principio absoluto. Sostuvo que ninguna de las exigencias democráticas era absoluta: «una exigencia democrática no debe considerarse en sí misma sino a escala mundial [...] Toda demanda democrática (incluida la autodeterminación) está, para los obreros con conciencia de clase, subordinada a los intereses superiores del socialismo» (1972, t. 2: 8). También sostuvo, en la estela de Marx, que los intereses de un número de grandes y muy grandes naciones europeas están por encima de los intereses del movimiento de liberación de las pequeñas naciones, y criticó duramente, como Rosa Luxemburgo, a los socialdemócratas polacos por haber adoptado el nacionalismo y la secesión como parte de su programa.

El principio general, el «derecho absoluto» por el cual Lenin estaba luchando, no era, pues, ningún «derecho natural» a la autodeterminación, sino el derecho de resistencia a la opresión, que siempre coincidía con los intereses de los obreros en su lucha por la libertad y el socialismo (Lenin, 1972, t. 2: 20). Uno de los argumentos más significativos esgrimidos con posterioridad a favor de las guerras coloniales de liberación y de los movimientos antiimperialistas, en general, ha sido el de que tales movimientos intentan atacar al capitalismo en su punto más débil. Ahora bien, esta teoría de la vinculación más débil pertenece a un periodo posterior. Antes de la Revolución rusa se creía, en general, que el capitalismo recorrería su camino —o sea, hasta llegar a su etapa suprema de desarrollo— antes de que degenerara en socialismo. Así, por tanto, el problema en el periodo en cuestión era: ¿apresurarán los movimientos antiimperialistas el desarrollo capitalista, o más bien lo interferirán? Los revisionistas (se denomina así a quienes plantean la posibilidad de que el socialismo puede llegar por medio de reformas graduales del sistema capitalista, renunciando a la revolución, por lo que son duramente denostados por Lenin) solían argumentar que, toda vez que tales movimientos interferían el pleno desarrollo del capitalismo, tendían, en realidad, a retrasar la llegada del socialismo, en la cual los revisionistas aún pretendían creer. Lenin, por el contrario, alegó que «la oposición a la política colonial y al pillaje internacional a través de la organización del proletariado, de la defensa de la libertad por la lucha proletaria, no frena el desarrollo del capitalismo, sino que lo apresura, puesto que le obliga a emplear métodos más civilizados y técnicamente más desarrollados» (Davis, 1972: 255).

Como se ha señalado, los planteamientos teóricos de Lenin están muy vinculados a las luchas políticas en las que participa activamente. Así, se pueden distinguir tres etapas en la evolución del pensamiento y la acción leninistas sobre el tema: una primera hasta 1913, en la que elabora lo esencial de su percepción del problema nacional; la segunda, entre 1913 y 1917, en la que intenta utilizar las fuerzas nacionales en el movimiento revolucionario, apoyando las reivindicaciones nacionales de los pueblos sometidos al Imperio zarista;⁶ y una tercera, entre 1917 y 1922, en la cual sus ideas deben adaptarse a las exigencias de la realidad: así, un ferviente centralista como él debe aceptar la configuración de la URSS como un sistema federal, única opción susceptible de mantener al conjunto de los pueblos que conformaban la Unión (Carrère d'Encausse, 1977: 63).

Stalin, por su parte, es responsable de las formulaciones sobre la cuestión nacional que marcarán el marxismo escolástico durante las siguientes décadas. Junto con ello, la orientación oportunista de su práctica política influirá en la toma de posiciones de las organizaciones comunistas en el mundo. Al igual que Lenin, se pronuncia a favor del derecho a la autodeterminación, pero también condicionará este derecho a los intereses del proletariado, siempre interpretados por su vanguardia.

Stalin subraya la importancia del elemento territorial en la definición del hecho nacional. El interés igualmente taticista y coyuntural en esta cuestión tendrá como consecuencia hacer inviable desde la perspectiva comunista la línea de solución apuntada por los austromarxistas con la nación de base personal. Mientras que Stalin en su trabajo teórico perfila una teoría de la nación, en su práctica política va sentando las bases para la construcción de la gran nación soviética, cuyo encaje en sus propias categorías teóricas es más que complicado. Naturalmente, ni Marx ni Lenin hubieron de enfrentarse, como Stalin, a la problemática derivada de la defensa de un Estado socialista rodeado del mundo capitalista. Ambos habían previsto el triunfo de la revolución socialista de forma más o menos simultánea en los principales países industriales avanzados, lo cual evitaría cualquier problema vinculado a la cuestión nacional. La construcción de la Unión Soviética, sin embargo, hubo de conceder protagonismo a la misma, tanto en el ámbito interno

6. Javier Villanueva (1987: 514) subraya la importancia de la dominación imperialista en el cambio de percepción respecto a los movimientos nacionales por parte de Lenin.

como en el externo, incluso después de la implantación del socialismo en otros Estados.

La época del imperialismo

Los años finales del siglo XIX han pasado a la historia como la época del imperialismo. Para los teóricos del marxismo, el imperialismo representa una nueva etapa del desarrollo capitalista, cuya explicación aparece claramente vinculada al mismo, como resume Lenin en el título de su conocida publicación sobre el tema: *El imperialismo, fase superior del capitalismo*. No obstante, la visión canónica de Lenin no fue la única que desde las filas de la socialdemocracia de la época se planteó en torno al imperialismo. Precisamente las divisiones que se moldearon sobre el tema anuncian las que resultaron definitivamente con la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, los textos de Marx y Engels daban pie a interpretaciones no unívocas. Si desde posiciones igualitarias parece evidente la necesidad del rechazo de una dominación, en algún caso particularmente cruel, de pueblos en un estadio del denominado «desarrollo civilizatorio» inferior al de la Europa occidental, lo cierto es que las consecuencias de la teoría de los pueblos sin historia dejaba lugar a pocas dudas sobre el hecho de que la colonización por parte de los pueblos más avanzados del planeta habría de tener un efecto de aceleración del desarrollo económico cuya consecuencia lógica no podría ser otra que adelantar la deseada llegada del socialismo. Sin llegar en ocasiones a formulaciones tan rotundas, sí hay una defensa de la labor civilizatoria de los pueblos europeos en otros continentes, en la línea expuesta por alguno de los principales exponentes políticos de los partidos gubernamentales, y sin entrar en fuertes contradicciones con la doctrina de los fundadores del marxismo. No obstante, la defensa del imperialismo (o al menos la no oposición al mismo) no deja de provocar fuertes disputas en el seno de los partidos socialistas. Probablemente lo que subyace a esta fractura es el grado de integración en las realidades nacionales y en las sociedades capitalistas de los líderes y las organizaciones obreras. En la medida en que los partidos de los trabajadores están pasando a formar parte del sistema político de cada país, no abandonan la retórica revolucionaria, pero sí adoptan una en ocasiones inevitable práctica reformista, al pretender adaptar el sistema político y económico para la integración en este de la clase obrera. El relativo éxito en este empeño tiene la consecuencia de que la retórica revolucionaria progresivamente se va alejando de una realidad

vinculada a las reformas y la mejora progresiva de las condiciones de vida y trabajo de los obreros. Mejoras que muchos de los socialistas consideran precisamente vinculadas a los beneficios obtenidos por los países capitalistas en su expansión imperial, aunque no falta en la literatura del periodo un planteamiento polémico en torno a la veracidad de dicha conclusión: frente a la afirmación de la mejora de las condiciones para los trabajadores derivada de la explotación de los países colonizados, otros autores hacen ver los inconvenientes que en términos de aumento de los gastos militares y subida de impuestos se derivan para los más afectados por estas medidas, en Estados donde la mayor parte de la carga fiscal recae en la clase obrera (Droz, 1984, vol. 2: 770 y ss.).

Es cierto que los pronunciamientos anticoloniales siguen siendo mayoritarios en los Congresos de la II Internacional de París (1900), Ámsterdam (1904) y Stuttgart (1907); se trata de críticas dirigidas primordialmente contra los riesgos bélicos implícitos en el proceso de colonización o el peligro para los trabajadores europeos derivado de la explotación de los trabajadores indígenas. Las consecuencias para los trabajadores de la dominación colonial empiezan a dividir a los dirigentes obreros: Bebel y Bernstein, por ejemplo, si plantean algún elemento de crítica es a la forma en que se ejecuta el imperialismo, no al fenómeno en sí mismo; Lenin y Kautsky polemizan sobre los fundamentos económicos del mismo (Bernstein y otros, 1978: 15 y ss.). Hay, no obstante, una idea común de superioridad de la civilización europea, muy acorde con la mentalidad del siglo XIX, y evidentemente con la idea de progreso predominante desde la Ilustración, y que era totalmente compartida por los pensadores socialistas (Rodinson, 1975: 17).

La Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial marca un momento decisivo en la relación entre nacionalismo y socialismo. En los años previos a su estallido, y, sobre todo, en el momento de la conflagración, entran en colisión de manera inevitable los postulados internacionalistas característicos de las organizaciones del movimiento obrero desde su aparición y la alineación con el propio país, difícilmente eludible en un escenario bélico. La opción por la Unión Sagrada adoptada por la mayoría de los partidos socialistas de Occidente rompe con la unidad mundial del proletariado, y provoca una división que se consolidará de manera radical y duradera tras la Revolución rusa. No obstante, los debates en torno a la actitud ante la guerra reflejan

con extraordinaria nitidez los problemas inherentes a la contraposición nacionalismo/internacionalismo. En este sentido, adquiere una concreción de enorme importancia lo que había sido hasta entonces un debate fundamentalmente teórico.

Este desenlace probablemente responde a la evolución y las características desplegadas por la organización desde su fundación en 1889. A diferencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores, disuelta en 1874 debido fundamentalmente a las disensiones entre las distintas corrientes del movimiento obrero, la II Internacional adopta un esquema organizativo que tiende más a la coordinación de las secciones nacionales que a una verdadera organización centralizada con órganos decisorios y capaces de dirigir por sí mismos el movimiento obrero internacional. Se trata de un modelo implantado de forma intencionada, como el más proclive a permitir la pervivencia del organismo, y que hunde sus raíces en las organizaciones nacionales, verdaderas protagonistas del movimiento y núcleos vertebradores de los trabajadores organizados. De esta manera, es el espacio nacional el que encuadra y condiciona los partidos socialistas, auténticos protagonistas de esta fase del movimiento obrero europeo. En la medida en que estos partidos van participando de manera creciente e integrándose en sus respectivos sistemas políticos, el escenario del Estado de cada una es el que configura las propuestas y las características de los respectivos partidos. Se va produciendo una integración progresiva en los sistemas políticos por parte de los partidos socialistas, a la vez que el conjunto de los trabajadores ve mejorada su situación y participa de forma creciente de prestaciones y servicios otorgados desde el Estado capitalista. Esta paulatina transformación tiene un reflejo en las posiciones políticas defendidas por los partidos socialistas. Primero mediante la aparición de corrientes revisionistas, cuyo representante principal, pero no único, es el alemán Eduard Bernstein. Las tesis de Bernstein vienen a elevar al plano teórico lo que se va progresivamente decantando en el terreno práctico y de la actividad cotidiana: la perspectiva de un estallido revolucionario capaz de acabar con el capitalismo y de alumbrar una sociedad socialista está cada vez más lejana. El capitalismo, contrariamente a lo pronosticado por Marx, es capaz de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores (hecho reconocido por Engels en sus escritos finales), lo que se traduce en actitudes políticamente reformistas por parte de la mayoría de la clase obrera. Aunque minoritaria, la posición de Bernstein no es sino un síntoma de una evolución que se mani-

fiesta de forma decisiva en la posición adoptada ante la guerra (Droz, 1984, vol. 2: 770 y ss.).

La adopción por parte de casi todos los partidos de la Internacional de decisiones que anteponen la solidaridad con la propia nación a la solidaridad obrera internacional viene a sellar un cambio de proporciones considerables, hasta el punto de constituir el primer paso en la ruptura de la propia Internacional obrera. El internacionalismo queda así relegado en la mayor parte de los casos a un expediente retórico con escasa plasmación en la realidad cotidiana.⁷ Tal y como Marx y Engels ya habían previsto, el marco de actuación de partidos y sindicatos obreros era el nacional; el internacionalismo inherente a la defensa del socialismo no deja de representar un horizonte alejado de la experiencia de los trabajadores. En el momento inevitable de optar, la decisión recae en la defensa de la propia nación, aunque ello implique la unidad con la burguesía frente a otros trabajadores. No obstante, Hobsbawm matiza esta conclusión subrayando la existencia de varias lealtades no incompatibles en el seno del movimiento obrero, de forma que la defensa de la patria no tendría por qué colisionar con la adhesión al socialismo, de la misma manera que los trabajadores mantenían otras vinculaciones de índole cultural o religiosa sin abdicar por ello de su militancia política o sindical (1991: 132).

Muy significativa a este respecto es la argumentación que apela al derecho de autodeterminación para justificar el apoyo a la guerra. Un término extraído del arsenal nacionalista, aunque asumido por dirigentes como Lenin, y empleado habitualmente para defender los derechos de las naciones oprimidas, es esgrimido por partidos obreros para justificar el apoyo al nacionalismo agresivo propio del momento prebélico. No faltan argumentos de carácter «progresista» para justificar la «Unión Sagrada»: para los franceses, combatir el expansionismo y el militarismo alemán es una necesidad para alejar los peores fantasmas del porvenir europeo; para los ale-

7. «En todos los países europeos, el nacionalismo se había convertido en un sistema de vida, lo mismo para la clase obrera que para los demás, hasta el punto de que los obreros que hablaban de internacionalismo practicaban corrientemente el nacionalismo. Incluso violentos antipatriotas como Hervé se convirtieron en nacionalistas cuando los ánimos disminuyeron. Las únicas excepciones fueron algunos poquísimos pacifistas totales —a los que no hay que confundir con la izquierda “pacifista” que se limitaba a no apoyar a la guerra— y un grupúsculo de revolucionarios que no vacilaron en pronunciarse por la derrota de la patria imperialista, en nombre del socialismo internacional» (Davis, 1972: 175).

manes, la autocracia rusa es el enemigo a derrotar (como ya Marx y Engels habían avisado en su época). Solo la izquierda de la socialdemocracia superó estas dicotomías para hacer un llamamiento a la conversión de la «guerra imperialista» en una revolución que acabara con la burguesía que había conducido a Europa a un conflicto de dimensiones desconocidas hasta entonces.

El sindicalismo revolucionario

Los años previos a la guerra son testigos de la emergencia de una síntesis política que, teniendo su origen en teóricos y organizaciones vinculados al movimiento obrero, desbrozará nuevos territorios doctrinales al conjugar nacionalismo y socialismo como dos propuestas no solo ya compatibles, sino también, desde su concepción, complementarias.⁸ Se trata de dirigentes del sindicalismo revolucionario, particularmente el francés e italiano, y por encima de todos Georges Sorel (2005), que reclaman la herencia de Marx, pero la despojan de sus rasgos más genuinos. De hecho, el socialismo que preconizan no incluye ya la supresión de la propiedad privada, ni siquiera implica una impugnación del sistema capitalista. Recuperan de Marx la lucha de clases como medio, pero la despojan de los elementos teóricos que sustentaron la obra del fundador del socialismo científico. De hecho, rechazan el positivismo, el materialismo y la herencia ilustrada que constituyeron el sustrato del marxismo y de las construcciones culturales y filosóficas del siglo XIX. En su lugar, la apuesta por el irracionalismo encuentra su plasmación en la búsqueda de mitos que den sentido a la concepción heroica que debe acompañar a la clase capaz de liderar la lucha por el cambio social. La huelga general se convertirá para este grupo en el medio susceptible de transformar la sociedad desde esa perspectiva épica que sustituye al análisis racional del marxismo clásico, y que, sobre todo, debe contribuir a terminar con el parlamentarismo y la sociedad burguesa, incluido el socialismo reformista, cuya única misión es adormecer al proletariado con concesiones y reformas que amenazan con destruir sus virtudes tradicionales. La consideración de la democracia y el socialismo reformista como los grandes enemigos abre una senda de enormes consecuencias: la prioridad otorgada a la demolición de estos dos

8. Para la conexión entre Sorel y los sindicatos revolucionarios con el fascismo francés e italiano, son imprescindibles los libros de Sternhell (1986) y Sternhell, Sznajder y Asheri (1994).

grandes enemigos, culpables de los vicios de la sociedad burguesa puestos de relieve por la literatura irracionalista del cambio de siglo, es lo que explica la connivencia, cuando no el apoyo explícito a cualquier alternativa que sirva para dicho fin. El siguiente paso en esta peligrosa pendiente se dará cuando la clase obrera se muestre incapaz de responder a tan elevadas expectativas. La agitación sindical en algunos de los años previos a la Primera Guerra Mundial dejó paso a la Unión Sagrada. La guerra iba a contribuir al cambio del sujeto capaz de responder al mito. Si la clase obrera seguía respondiendo mayoritariamente a las consignas de sus líderes aburguesados, quizá no se pudiera obtener de ella el fruto esperado. La guerra da pistas para la búsqueda del sustituto adecuado: la nación. El mito nacional sí muestra un vigor considerable. La nación sigue siendo capaz de movilizar a la población en su conjunto hasta alcanzar las cotas más extremas de violencia, como la Primera Guerra Mundial ha puesto de manifiesto. La síntesis avanza un nuevo peldaño con la acuñación de la noción de naciones proletarias (planteada, por ejemplo, por Labriola para el caso italiano, con influencia muy directa en la retórica y las prácticas mussolinianas), es decir, cuando la dialéctica de la opresión de clases se traslada al ámbito internacional, con la pretensión de obtener legitimidad para la apelación a la movilización y a la violencia del conjunto de la nación.

A la combinación de nacionalismo integral y revisionismo revolucionario se agrega, hacia 1910, un tercer elemento: el futurismo (Gentile, 2009). Esta síntesis total impregnó el fascismo otorgándole sus caracteres de movimiento de rebelión y revuelta: de revuelta cultural y, más adelante, de revuelta política. Difícilmente puede exagerarse la importancia del elemento vanguardista en el fascismo y la importancia de la estética revolucionaria que este contiene. A esta combinación de sindicalismo revolucionario y nacionalismo radical que maduraba en la primera década del siglo, Marinetti aportó, con la publicación del Manifiesto Futurista en 1909, el entusiasta apoyo del vanguardismo cultural.

La detección de elementos en los episodios del pasado susceptibles de repetirse en situaciones recientes no debe dar lugar a conclusiones apresuradas y a la elaboración de comparativas simplistas; no obstante, el pasado a veces sí que ilumina los mecanismos que explican deslizamientos teóricos e impulsos movilizados que en ocasiones no resultan fáciles de identificar. El sindicalismo revolucionario aquí someramente descrito no ha dejado una huella excesiva en el sentido de posibles herederos que se

autorreclamen de dicha tradición, más allá de la reconstrucción desde la historiografía de un movimiento significativo en su época y precursor de fenómenos posteriormente reconocibles en variadas coyunturas históricas. Lo específico del sindicalismo revolucionario fue su fidelidad a la retórica revolucionaria pese al cambio del sujeto que debía llevar esta a cabo; el anticapitalismo, el rechazo de la sociedad burguesa y la voluntad de acabar con ella son los elementos supervivientes a una trayectoria cambiante. El paso de la nación a la clase prefigura la evolución que seguirán, en épocas más recientes, las elites del Este ante el derrumbe de los regímenes del socialismo real, y que es perceptible asimismo en los partidos comunistas analizados en este escrito; el esquema funciona de la misma manera en las coyunturas históricas analizadas: el impulso revolucionario hacia el objetivo de una sociedad igualitaria pierde capacidad movilizadora, y el mantenimiento del rechazo de la sociedad existente orienta la búsqueda del sujeto revolucionario hacia un objeto con mayor posibilidad de arraigo: la nación. Determinados elementos de la tradición comunista, posteriormente analizados, facilitarán este desplazamiento, pero un rasgo común, bien visible en el sindicalismo revolucionario, es esa voluntad de transformación radical, encarnada ya no en un cambio revolucionario de las relaciones de clase, sino en un impulso «antisistema» común a movimientos radicales, como lo serán los fascismos, y del que participa el nacionalismo radical, con la ventaja de que en determinados países y sociedades sus posibilidades de implantación amplia en el tejido social son mucho más numerosas.

LA INFLUENCIA DEL ESTALINISMO

Las dimensiones de este texto impiden abordar un análisis en profundidad de lo que fue el estalinismo, desde su configuración en la Unión Soviética hasta su plasmación en las teorías y las prácticas del movimiento comunista internacional, incluyendo su presencia en las organizaciones comunistas de la Europa occidental, y de España en concreto. Sin embargo, se hace necesaria una breve aproximación para enmarcar y hacer inteligibles algunos de los comportamientos de dichas organizaciones.

De las múltiples facetas del estalinismo conviene resaltar dos de cara a los fines de este estudio. Por un lado, por lo que representa de reconversión nacional del ideal comunista, en una suerte de adaptación forzada del internacionalismo proletario a la reali-

dad de una revolución socialista triunfante en un solo país, y amenazada por tanto por un contexto capitalista hostil. La necesidad de defender la Revolución soviética dio lugar a la subordinación del movimiento comunista internacional a las necesidades de la URSS. No otro fue el objetivo de la III Internacional (Hájek, 1984), incluida su propia disolución, decidida por Stalin en 1943 en función de sus intereses, vinculados en ese momento a la colaboración con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo, presente ya en las formulaciones de los dirigentes soviéticos en los años treinta, alcanza su paroxismo con la victoria en la «Gran Guerra Patriótica». El mito de la URSS, por otra parte, siempre presente en el sector del movimiento obrero que rompe con los partidos socialistas tras la Revolución bolchevique, contribuye en gran medida a facilitar la supeditación de las políticas comunistas a las necesidades de la patria del socialismo. Se difunden así unos planteamientos que tienden a subordinar los principios que constituyen el bagaje ideológico de los partidos y organizaciones de inspiración comunista al objetivo principal, que es la defensa de la URSS. La contradicción que puede suponer la primacía otorgada a la nación sobre la clase, que había dividido el movimiento obrero en vísperas de la Primera Guerra Mundial, queda salvada en primera instancia por la consideración de que la patria reverenciada en este caso ha abolido las diferencias de clase, pero la rendija que deja abierta la nueva orientación va a permitir el trasvase del lenguaje patriótico a los territorios de cada uno de los partidos comunistas (será el caso de los partidos comunistas francés [Kriegel, 1978] o español, por ejemplo, que en ocasiones combinan ese apoyo a la URSS con las proclamas, a veces sobreactuadas para evitar acusaciones de dependencia exterior, de nacionalismo propio). El lenguaje patriótico de la guerra civil española así lo demuestra, apoyado en la consideración de la contienda como una defensa de la patria frente al enemigo exterior —Alemania e Italia, en este caso— (Núñez Seixas, 2006).

La «contaminación» por el lenguaje de raíz nacionalista no abandonará el movimiento comunista internacional. El ensanchamiento del bloque socialista, con el glacis soviético alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, y la aparición de un nuevo gigante comunista, con el nacimiento de la República Popular China en 1949, no alteran sustancialmente los términos de la cuestión. Sí que pondrán a prueba una vez más las previsiones de la ortodoxia marxista, ya que la implantación del socialismo no solo no tiene la consecuencia prevista de terminar con los problemas de origen nacio-

nal, sino que incluso desemboca en conflictos entre los propios países socialistas.

La otra faceta del estalinismo que se pretende poner de relieve es la que se deriva de su carácter totalitario, con todo lo que ello implica (Traverso, 2002). La dictadura del partido, cuando no la de su líder sacralizado, y la consiguiente subordinación de los medios a los fines decididos por uno u otro, impregnan las prácticas de los partidos comunistas. Las consecuencias de estas no se agotan en los años de la dictadura de Stalin, como pretendió el conocido Informe de Jruschov al Congreso del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) en 1956. La desestalinización, e incluso el alejamiento del bloque soviético emprendido por los partidos comunistas occidentales, con un fuerte protagonismo del PCE, no implican la erradicación de prácticas hondamente arraigadas, como pondrá de manifiesto la propia evolución del PCE en los años de la transición española. Es sabido que hay quienes atribuyen estas características de la degeneración estalinista a la deriva del régimen soviético tras la muerte de Lenin (por ejemplo, Medvedev, 1977, o Reiman, 1982), y quienes consideran que estos rasgos totalitarios están implícitos en Lenin, e incluso en Marx (entre los clásicos, Kolakowski, 1983). Sin entrar en estas disquisiciones, lo que en este marco interesa destacar es que estas características explican en parte algunas de las reacciones que estudiaremos ante hechos como los que se vinculan a la práctica terrorista de una organización como ETA. Señalaremos tan solo algunas de las que se pueden verificar con claridad y frecuencia en la historia de las organizaciones comunistas. En primer lugar, el partido siempre tiene razón, premisa que en ocasiones se traslada hacia aquellos a quienes se ha decidido apoyar; deben ser respaldados, por tanto, aunque hagan cosas difícilmente comprensibles y mucho menos razonables (es el caso de nuestro análisis con respecto a ETA). La realidad se aborda siempre en términos dicotómicos, de tal suerte que no es posible acometer el análisis de la misma captando la variedad de matices y restringiendo la capacidad de discernir lo admisible y lo rechazable en función de los hechos y no exclusivamente en función de su autor; la aprehensión de la realidad en términos de sujetos colectivos (la clase o la nación) relega al individuo no solo a un papel secundario, sino prácticamente inexistente cuando así conviene al discurso dominante. Así, las víctimas desaparecen de una realidad que se caracteriza por producirlas de forma sistemática, bien porque su degradación política y moral no requiere la menor consideración hacia su suerte, bien porque la elevación de la causa (sea esta nacional, social o a la

vez social y nacional) convierte en perfectamente irrelevante el destino de aquellos que se opusieron a la misma o incluso de quienes fueron indiferentes o extraños. La combinación de los factores expuestos genera los anticuerpos apropiados para eludir cualquier cuestionamiento problemático de la bondad del campo elegido: caer en la duda supone hacer el juego a un enemigo previamente caracterizado como mal absoluto. La pertenencia al grupo es el valor fundamental que da sentido a una elección vital de amplio alcance, y que está muy por encima de algunas dudas secundarias que se puedan alegar.

Si el estalinismo es un elemento central en el análisis de la izquierda radical en la segunda mitad del siglo XX, la caída del bloque del Este y sus repercusiones inmediatas tuvieron asimismo una incidencia enorme, desde varios puntos de vista. Desde uno más global y de más amplio alcance en todos los sentidos, cabe señalar que la implosión de la URSS y sus aliados, simbolizada universalmente en el derribo del Muro de Berlín, vino a poner fin a la alternativa anticapitalista vigente durante la mayor parte del siglo XX. Dicho de otra forma, vino a convertir en vía muerta ese mito soviético que antes se citaba (bien es verdad que ya estaba seriamente deteriorado para esas fechas). Las consecuencias de esta constatación son difíciles de exagerar: sin formulaciones tan explícitas, las organizaciones de la izquierda comunista son conscientes de que las transformaciones en vigor en los años noventa habrían de tener consecuencias de largo alcance, y de ahí sus reformulaciones programáticas y organizativas. Es verdad que la gran mayoría de estas organizaciones se habían distanciado con anterioridad del modelo soviético con toda claridad, pero no lo es menos que la Revolución bolchevique venía a ser el referente indiscutible y el patrimonio indisputado de todas ellas. Cabe distinguir, de todas formas, en este aspecto la crítica temprana y sistemática del estalinismo efectuada desde las organizaciones trotskistas del alejamiento mucho más tardío y menos analizado en profundidad de los partidos comunistas tradicionales o incluso de los maoístas, que en su denuncia del estalinismo no llegaron a formular teorías consolidadas que fueran mucho más allá de la degeneración introducida por dirigentes alejados de la línea correcta o por procesos de burocratización inasimilables a la doctrina de base. La evolución en los países del Este vino a subrayar la emergencia de formulaciones nacionalistas enarboladas habitualmente por las propias burocracias excomunistas. Los planteamientos de raíz comunitaria adquirirían así una notoria continuidad tanto en sus bases teóricas como en sus aplicaciones

prácticas, transmutando de la clase a la nación el eje central de las prioridades políticas. Si en las antiguas repúblicas soviéticas el derrumbe de la doctrina comunista facilitó la proliferación de las reivindicaciones nacionalistas de las elites dirigentes (que de esta manera se aseguraron el continuar disfrutando de sus posiciones de poder), la antigua Yugoslavia se convirtió en el más claro y trágico ejemplo de esta deriva, que recuerda en parte la experimentada por sectores del movimiento revolucionario en los años próximos a la Primera Guerra Mundial. Slobodan Milosevic probablemente fue uno de los primeros dirigentes que supo ver las oportunidades que abría la apelación a las rivalidades nacionalistas; la falta de escrúpulos y el desprecio por los derechos humanos hicieron lo demás para convertir la antigua Yugoslavia en un sangriento campo de batalla en los años noventa.

Sin ninguna voluntad de establecer paralelismos simplistas, sí que es posible enmarcar la adhesión a luchas de carácter nacional por parte de fuerzas comunistas en esta tendencia global declinante de los planteamientos igualitarios, que facilita la sustitución de estos por la defensa de una comunidad nacional previamente designada como oprimida y portadora de valores positivos (Águila, 2008: 59). Es posible afirmar que este factor ha intervenido de manera importante en el País Vasco, tanto antes como después del desplome del bloque soviético. En el caso vasco, el origen de la combinación de lucha de liberación nacional y lucha de liberación social (presente en ETA desde sus primeros pasos) tuvo su razón de ser en la opresión de los rasgos diferenciadores de la cultura y la lengua vascas, que el franquismo reprimió con dureza. La necesidad de dotar a la lucha de un componente ideológico que ya difícilmente podía ser el catolicismo tradicional de estirpe sabiniana (en una sociedad mucho más laica, y en la que el propio régimen había extendido su identificación con el integrismo católico) llevó a los primeros miembros de ETA a buscar legitimidad en las luchas contemporáneas de liberación nacional, en importante auge durante los años sesenta en diversas zonas del mundo. La mezcla de nacionalismo «clásico» (con ciertos ribetes aún plenamente sabinianos), revuelta de tipo anticolonial (certificada por Sartre en el conocido prólogo al libro de Halimi sobre el proceso de Burgos) y marxismo, casi omnipresente en los movimientos de oposición de la época, consiguió algún éxito en los albores de ETA, propiciado por la aureola heroica que rodeó a quienes decidieron hacer frente al franquismo con la épica de las armas, pero no cuajó de forma decisiva en un movimiento social de extensa implantación en la socie-

dad vasca hasta que, una vez acabada la dictadura y establecida la democracia (sin duda perfectible, pero equiparable desde cualquier parámetro a las vigentes en la Europa occidental), se convirtió en un movimiento populista de identidad cada vez menos socialista y más identificado con el nacionalismo radical. Pese a esta deriva, la extrema izquierda convino en el apoyo a este movimiento debido a su carácter de conglomerado antisistema, no muy diferente de otros de raíz nacionalista y populista que habían prefigurado la naturaleza de este tipo de movimientos, pero (y esto fue lo decisivo) claramente enfrentado a un régimen que había superado las incertidumbres del paso del franquismo a la democracia, defraudando, por cierto, las expectativas de la izquierda revolucionaria. La catalogación del movimiento nacionalista radical vasco, encabezado por ETA, como antisistema y revolucionario facilitó su ubicación en el lado bueno de la visión dicotómica de la sociedad heredada del marxismo de manual; la división, una vez consolidada la democracia, se establecía entre quienes aceptaban el régimen representado en la Constitución (y en el País Vasco en el Estatuto de Autonomía) y quienes lo impugnaban sobre todo por centralista y, en menor medida, por capitalista. Esta toma de posición, contradictoria con la adoptada en los últimos años de la dictadura y en la primera transición, fue apuntalada con algunos trazos teóricos, generalmente de un carácter bastante grueso, que pretendían fundamentar el componente revolucionario de un nacionalismo que luchaba contra la opresión de un régimen centralista. Ciertamente, resultaba complicado atribuir a un territorio como el vasco, con un desarrollo económico notable y una renta per cápita considerablemente superior a la media española, características de nación oprimida, pero el problema se intentó solventar mediante el expediente de endosar el carácter progresista a los protagonistas del movimiento, lo que cerraba la tautología y permitía sostener que el apoyo a un movimiento nacionalista acercaba el horizonte de la revolución en la medida en que el triunfo de la contestación facilitaría la implantación del socialismo. Esta es la ardua tarea a la que se entregan algunos de los dirigentes de la izquierda revolucionaria española en los años ochenta, con la pretensión de que el cambio de escala (de España al ámbito vasco) facilitaría la tarea de los revolucionarios.⁹

9. Tal es el sentido fundamental de la argumentación del dirigente de la LKI en Iriarte (1991: 102-103), donde se cuestiona la querencia del marxismo clásico por los grandes Estados como el escenario más adecuado para el avance hacia el socialismo.

La realidad era que se trataba de una aproximación oportunista al problema; mientras que la consolidación de la democracia en el conjunto de España alejaba cualquier perspectiva revolucionaria que se pudiera abrigar, la persistencia de un movimiento rupturista capaz de movilizar importantes contingentes ciudadanos aconsejaba romper amarras con los demás territorios del «Estado» y centrarse en formar parte del movimiento radical vasco, aunque fuera en un lugar secundario y siempre de forma subordinada a quien realmente lo dirigía: ETA.

LA IZQUIERDA Y EL NACIONALISMO EN ESPAÑA

Las particularidades de la historia de España han facilitado una cierta cercanía de la izquierda española a los nacionalismos periféricos, aunque con matices importantes. Se puede afirmar que, en líneas generales, ha existido una tendencia que se prolonga hasta la actualidad a identificar el nacionalismo español con la derecha y el de las comunidades periféricas con la izquierda. La acusada decantación de este posicionamiento a lo largo de la dictadura franquista culmina una evolución iniciada ya a lo largo del siglo XIX, y acentuada sustancialmente durante la Segunda República y la guerra civil.

La construcción del Estado español a lo largo del siglo XIX se realiza desde un modelo centralista, aplicado por los moderados durante el reinado de Isabel II y —tras el paréntesis del Sexenio Democrático— por el régimen conservador de la Restauración. La hegemonía del liberalismo conservador en ambos periodos implica la identificación entre dicha corriente política y la centralización, invirtiendo la correlación predominante en Francia (donde el jacobinismo fue sinónimo de concentración del poder en la capital). Frente a ella, los progresistas primero y los republicanos federales después optarán por un ideario descentralizador, partidario de conceder ciertas dosis de autonomía a municipios, provincias y regiones.¹⁰ No hay, pese a todo, vestigios de reivindicación identitaria ni planteamientos susceptibles de ser incluidos en propuestas

10. «A diferencia de los moderados, los liberales progresistas abogaban por la construcción de un estado descentralizado. Pero al igual que ellos justificaban su elección en la historia, en este caso a través de la idealización de los municipios y los estatutos locales medievales a los que consideraban los “guardianes históricos” de las denominadas “libertades regionales”» (Balfour y Quiroga, 2007: 44).

precursoras del nacionalismo. Se trata de un diseño sustentado en la idea de ampliar la base social del liberalismo, y, en consecuencia, de permitir una mayor democratización del sistema político, a lo que igualmente habría de contribuir el acercamiento espacial entre gobernantes y gobernados, como queda de manifiesto en la teoría federal de Pi i Margall (Fradera, 2002). Un componente importante de esta posición viene representado por el juntismo, movimiento recurrente en la España del siglo XIX que reaparece en los movimientos insurreccionales que jalonan el siglo, al menos hasta el Sexenio Democrático. Con origen en la lucha contra el invasor francés en la Guerra de la Independencia, las Juntas de carácter local o provincial florecen en 1835, 1840, 1854 y 1868 como expresión de movimientos populares que rechazan la concepción conservadora y centralista del liberalismo defendido por los moderados, si bien las Juntas tienen vida efímera en todos estos momentos, ya que dejan paso a órganos centrales que asumen el poder y, con él, el control del orden público, lo que implica la propia disolución de unos centros de poder concebidos como instancias coyunturales, destinados únicamente a una misión de destrucción del gobierno anterior. No obstante, su repetición es síntoma, y a la vez consecuencia, de un sustrato teórico que propone la legitimación del poder desde abajo y a partir de los espacios territoriales más próximos a la ciudadanía (municipios y provincias). La culminación de estos planteamientos en el republicanismo federal, y, sobre todo, en el movimiento cantonal de 1873, demostrará su escasa viabilidad práctica, por un lado, al tiempo que facilitará su evolución hacia los primeros planteamientos propiamente nacionalistas, que surgen con Valentí Almirall y el primer nacionalismo catalán.¹¹

Muy diferentes son las propuestas descentralizadoras de carácter tradicionalista, que tienen su máxima, pero no única, expresión en el carlismo. Se basaban en la pervivencia de normas e instituciones propias del Antiguo Régimen, como los fueros vascos, pero hunden sus raíces en la concepción de la monarquía previa a los Decretos de Nueva Planta y, por consiguiente, respetuosa con las leyes y órganos de gobierno de los reinos que componían la monarquía española tradicional. Estas formulaciones descentralizadoras tienen una incidencia indudable en el origen

11. Para una síntesis de la historia del nacionalismo catalán, véase Balcells (2004); para un enfoque del nacionalismo catalán desde una visión progresista, Ridao (2006).

de los nacionalismos periféricos más importantes (el vasco y el catalán, sin olvidar el gallego), y apuntan tímidamente a propuestas regionalistas de carácter conservador que tendrán un cierto recorrido en el siglo XX, si bien permanecen habitualmente subsumidas en el nacionalismo español, claramente mayoritario en los ámbitos conservadores y tradicionalistas (Granja, Beramendi y Anguera, 2003).

El nacimiento y posterior expansión de los nacionalismos vasco y catalán a finales del siglo XIX introduce un nuevo factor, que influye de manera decisiva en la política española a lo largo de todo el siglo XX. Aunque de naturaleza y características diferentes, ambos nacionalismos están representados en primera instancia por partidos conservadores, lo que redundará en un alejamiento notable, cuando no una abierta hostilidad, con respecto a las organizaciones más representativas del movimiento obrero. Buen ejemplo de ello son las relaciones entre el PNV y el PSOE en el País Vasco, o la evolución de la Lliga Regionalista en Cataluña, dispuesta antes a aceptar la alianza con los poderes centrales que a permitir la puesta en entredicho del orden social (aunque ello implique el apoyo inicial a una dictadura como la de Primo de Rivera). El PSOE se mantendrá hasta los años de la Segunda República en las posiciones clásicas del marxismo: unidad de los trabajadores por encima de las fronteras, rechazo de los nacionalismos al caracterizarlos como un movimiento burgués que estaría al servicio de los intereses de esa clase social. No obstante, en esta cuestión se aprecia en el socialismo español la misma endeblez teórica que afecta al conjunto del movimiento. De hecho, tardará en formularse un discurso en torno a la concepción socialista de la nación española y la organización territorial del Estado (Forcadell, 2009). La Dictadura de Primo de Rivera va a suponer un cambio en lo que respecta fundamentalmente al nacionalismo catalán. La represión de este, en todas sus manifestaciones, no solo defraudará las expectativas depositadas (como se señalaba respecto a la Lliga), sino que introducirá una radicalización considerable en su seno. El progresivo crecimiento, asimismo, de fuerzas nacionalistas de izquierda implicará un acercamiento de las mismas a los partidos de la izquierda obrera, con los que coincidirán en sus reivindicaciones más inmediatas (libertades democráticas, incluidas las relacionadas con la cultura y la lengua autóctonas).

Por otro lado, el carácter profundamente conservador en sus inicios de los nacionalismos vasco y catalán no impedirá que sean percibidos con sumo recelo por sectores que vinculan la defensa de

los valores tradicionales con un nacionalismo español herido por la derrota en la guerra de Cuba y el final del imperio colonial, y que busca el desquite en la aventura marroquí. La configuración de una derecha radical en España en el periodo de entreguerras, en conexión con la emergencia de movimientos totalitarios en la Europa de la época, contó con el apoyo de sectores militares forjados en las guerras de Marruecos, y responsables en última instancia de la sublevación militar de julio de 1936. La defensa de un catolicismo integrista y de un exacerbado nacionalismo español constituyeron las señas de identidad que caracterizaron el régimen franquista, relegando las veleidades estrictamente fascistas representadas por la Falange a un papel secundario desde el viraje de la Segunda Guerra Mundial a favor del bando aliado.

Durante la Segunda República, la radical oposición de la derecha a las autonomías planteadas por los gobiernos republicanos de la izquierda empujó a los nacionalistas periféricos a la alianza con la izquierda, en una deriva que se acelera en los pocos años de vida del régimen republicano. Quizá la mejor expresión de esta evolución se aprecia en el viraje del PNV, que desde posiciones abiertamente integristas recogidas en el fallido Estatuto de Estella (pactado con los carlistas) acabó por aprobar el Estatuto de Autonomía finalmente vigente con republicanos y socialistas, coalición que integró el primer Gobierno vasco, formado ya en plena guerra civil (Fusi, 1979; Granja, 2007). El nacimiento de ANV (Acción Nacionalista Vasca), escisión del PNV de carácter laico y republicano, es un primer ejemplo de nacionalismo vasco susceptible de enlazar con el ideario de la izquierda convencional. Se explica así la evolución desde unas propuestas que, basadas en las teorías aún vigentes de Sabino Arana, eran combatidas con enorme y justificada dureza por la izquierda desde principios de siglo,¹² hacia una colaboración que no excluye, sin embargo, comportamientos como el Pacto de Santoña, o el establecimiento de distancias con un partido que se va desprendiendo de las adherencias más inasimilables del pensamiento sabiniano, pero que no deja de presentar un ideario marcadamente conservador.

12. La excepción la constituye la posición de los comunistas vascos, partidarios de un acercamiento al nacionalismo a partir de la aplicación de las tesis de Lenin sobre la autodeterminación y del intento de fusionar la lucha social y la nacional (Rivera, 2009). Javier Villanueva (1985) incorpora a los hermanos Arenillas, del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), entre los que exigieron la autodeterminación para Euskadi.

Aun siendo diferente, el caso catalán mantiene alguna similitud con el vasco. La hegemonía de la Lliga decae durante la República, para tomar el testigo Esquerra Republicana de Catalunya. La colaboración entre la izquierda y los nacionalistas permite el establecimiento de la Generalitat y la rápida aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932. Se tejen de esta manera complicidades y afinidades que el largo exilio y la clandestinidad en el interior no hacen sino reforzar. La defensa democrática del derecho de los nacionalistas a defender sus ideas y el respeto a determinados rasgos culturales perseguidos por la dictadura fueron asumidos de forma casi natural por las organizaciones de izquierda, en lo que no representa sino un reforzamiento de la evolución descrita para los años de la Dictadura de Primo de Rivera, y con un origen similar: la radicalización de la reivindicación nacionalista ante la represión, y el justificado apoyo de la izquierda a derechos democráticos básicos.

En la Segunda República se pronuncian las primeras propuestas desde el espacio de la izquierda radical a favor de las nacionalidades del Estado español: el PCE se decantó por la defensa del derecho de autodeterminación, en la estela de las tesis leninistas (Granja, Beramendi y Anguera, 2003: 117). Andreu Nin, dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), defiende el derecho a la autodeterminación, mientras que Maurín y el Bloque Obrero y Campesino (BOC) apuestan ya de manera clara a favor de la independencia de Cataluña, como una forma de debilitar el Estado español.¹³

Durante el franquismo, en una actitud que tuvo su prolongación en los primeros momentos de la transición, la respuesta a la represión de las lenguas y las culturas propias de las nacionalidades históricas vino acompañada de la asunción de las reivindicaciones nacionalistas, desde la enunciación de un derecho de autodeterminación, tan poco articulado en cuanto a sus fundamentos como en relación con su concreción, hasta la reivindicación permanente de las

13. Como señala Pelai Pagès en su prólogo a Nin, este defiende «la imperiosa necesidad de que la clase obrera asuma, como única clase revolucionaria, las reivindicaciones nacionalitarias y encamine a las nacionalidades oprimidas hacia su liberación, puesto que solo la clase obrera podía acometer una tarea que había sido traicionada por la gran burguesía y que estaba siendo traicionada también por la pequeña burguesía radical, a medida que los antagonismos sociales se iban agudizando. Para el BOC, la lucha contra el estado centralista pasa por una defensa del separatismo como factor de descomposición del estado español» (Nin, 1979).

mayores cotas de autogobierno posible.¹⁴ En la mayor parte de los casos estas propuestas se enmarcaban en planteamientos teóricos federalistas o incluso de carácter confederal que en la práctica no tenían, como el transcurso del tiempo ha venido a confirmar, un desarrollo excesivamente coherente e igualitario para el conjunto del territorio español. La izquierda ha tendido a propugnar una articulación federal del Estado español, si bien no ha habido un desarrollo coherente de los planteamientos propios del federalismo, tanto en lo que respecta a la organización interna de los partidos como a la aplicación del mismo a la estructuración territorial española (Balfour y Quiroga, 2007: 136 y ss.). Si el federalismo implica una concepción de la organización territorial del Estado caracterizada por la descentralización y la asunción de manera homogénea por las regiones de un conjunto de competencias, no encaja desde el punto de vista teórico con las demandas de las fuerzas nacionalistas, proclives siempre a la reivindicación desde y para el propio territorio y la profundización en las relaciones bilaterales con el Gobierno central. Esta contradicción ha estado presente en buena parte de las formulaciones respecto a la organización territorial de la izquierda española, y lo sigue estando de forma marcada en la época más reciente. De hecho, en la última etapa de la dictadura franquista y durante la transición, se combinó en general la defensa del derecho de autodeterminación con la apuesta por una solución federal para la articulación territorial del Estado español. Tanto el PCE como la extrema izquierda cuestionaron el nacionalismo también proclamado desde la periferia, y se tendió a defender la unidad de los pueblos de España en el sentido que había sido predominante en los textos de Lenin (la necesidad de unir las luchas de los distintos pueblos de España, desde la perspectiva de la unión del proletariado para facilitar la acumulación de fuerzas del sujeto destinado a transformar la sociedad). Sin embargo, en la medida en que la reivindicación nacionalista cobró fuerza e incluso incrementó su arraigo social tras consolidarse el sistema parlamentario, y una vez reducidas las organizaciones de izquierda a dimensiones modestas en el panorama político, la identificación con los postulados nacionalistas en aquellos territorios con mayor implantación de los mismos se fue incrementando hasta llegar a asumir sus posiciones, en algún caso incluso defendiendo la independencia como mejor alternativa para la difusión de los plan-

14. Granja, Beramendi y Anguera (2003: 167) lo explican en función de la recuperación programática de las tesis leninistas sobre la autodeterminación y del concepto estalinista de nación.

teamientos revolucionarios. Una vez más, primó el oportunismo en la adhesión a un movimiento capaz de organizar un importante movimiento social por encima de la coherencia en la defensa de los postulados emancipadores e igualitarios propios de la izquierda. Como ha puesto de relieve Patxo Unzueta (1987: 139-140),¹⁵

La oposición antifranquista española creyó ver en la Euskadi posterior al juicio de Burgos el paradigma del pueblo en lucha que aspiraba a encabezar. Democristianos, socialistas, eurocomunistas, guevaristas o maoístas podían seleccionar, en el variado panorama del muy activo antifranquismo vasco, aquel fragmento del espejo en que reconocerse satisfactoriamente. Así, el País Vasco, que desde mediados del siglo XIX había desarrollado el papel de encarnación en la tierra del modelo social anhelado por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, pasó a convertirse, 100 años después, en espejo de las ensoñaciones del nuevo progresismo hispano.

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA, LA LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA Y EL PCE-IU

La Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC) forman parte del conjunto de grupos de la izquierda radical que proliferaron en los últimos años del franquismo, en la coyuntura política dominada por el declive de la dictadura y los ecos del mayo del 68 francés, culminando una década de cambios decisivos en la izquierda internacional: la recepción en Occidente del comunismo chino como alternativa al desprestigiado sistema soviético, las luchas de liberación colonial del Tercer Mundo, las movilizaciones pacifistas contra la guerra del Vietnam, y el aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques soviéticos, entre otros acontecimientos de relieve, favorecieron la aparición de nuevos movimientos y partidos en la izquierda que pretendían retomar la bandera de la revolución, a su entender abandonada por unos partidos comunistas cada día más integrados y menos dispuestos a cuestionar el sistema capitalista. Es este contexto el que explica la aparición de numerosos partidos comunistas en España desde finales de los años sesenta, entre los que se cuentan el MC y

15. Sobre la imagen del País Vasco como espejo de las tradiciones y valores hispanos desde el punto de vista conservador, véase Molina (2005). No deja de resultar curiosa la comparación entre esta imagen y la que se acabó generando en el ámbito de la izquierda.

la LCR, que tendrán un papel destacado en este trabajo. Ambas organizaciones cuentan con un elemento común, su origen en una escisión de ETA, que da lugar a la aparición de ETA-Berri, por un lado, y de ETA-VI, por otro. En el primer caso, la confluencia con otros núcleos de militantes comunistas en varios puntos de España propiciará la consolidación de un partido (Laiz, 1995: 131-143), el Movimiento Comunista de España, que adopta los postulados maoístas en primera instancia, aunque evolucionará hacia posiciones más eclécticas, incorporando un fuerte componente nacionalista en las diferentes comunidades autónomas españolas, lo que se refleja en la desaparición de España del nombre del partido, que pasa a denominarse simplemente Movimiento Comunista. El MC se fusiona con la Organización de Izquierda Comunista (OIC), otro pequeño grupo, en 1978, año en que propugna la abstención en el referéndum constitucional. Con posterioridad, obtiene unos resultados mediocres en las convocatorias electorales a las que se presenta, optando ya en los años ochenta por orientar su actividad hacia los movimientos sociales, destacando en este sentido su participación en la movilización contra la OTAN, en el movimiento a favor de la insumisión al servicio militar, en los organismos de solidaridad con movimientos revolucionarios del Tercer Mundo y en el mundo ecologista.

La LCR, por su parte, surge de la confluencia del grupo Comunismo, con origen en el Frente de Liberación Popular (García Alcalá, 2001: 260), y ETA-VI (Laiz, 1995: 143-155). La LCR se incorpora a la IV Internacional, de adscripción trotskista, aunque existen otros grupos que se declaran de la misma tendencia. Se diferencia del resto de los partidos comunistas por su énfasis en la democracia interna, rechazando las prácticas estalinistas, al tiempo que, pese a sus duras críticas al «reformismo» de los partidos mayoritarios de la izquierda, el PSOE y el PCE, reconocen su componente obrero, y son partidarios de buscar la colaboración con ellos para forzar la adopción por su parte de políticas verdaderamente revolucionarias. La LCR también obtiene poco éxito en las convocatorias electorales, y sigue una trayectoria en cierto modo paralela a la del MC en los años ochenta. La progresiva confluencia de ambas organizaciones desemboca en su fusión en 1991, de la que surge Izquierda Alternativa, con organizaciones soberanas en cada una de las comunidades autónomas españolas, que no alcanzaron un recorrido temporal demasiado grande, salvo algún caso, como el de Zutik en Euskadi. Un sector con peso específico importante en la antigua LCR se integró en IU y constituyó la corriente organiza-

da en su seno Espacio Alternativo, lo que contribuyó a romper con los miembros procedentes del MC. Estos se han mantenido en alguna medida unidos en torno a la publicación de la revista mensual *Página Abierta*, así como en algunos proyectos editoriales. En el 2008 nace Izquierda Anticapitalista, que se presenta con candidatura propia a las elecciones europeas del 2009, tomando de alguna manera el testigo de Espacio Alternativo, desgajado previamente de IU.

La izquierda radical en España no ha contado con excesiva atención bibliográfica. Los dos estudios más completos sobre la misma son la tesis doctoral de Consuelo Laiz (1995) y el libro editado por José Manuel Roca (1994), que analizan la evolución de los partidos integrantes de esta corriente política en los últimos años del franquismo y primeros de la transición. Se trata de trabajos que incluyen a los partidos considerados en el presente escrito (el MC y la LCR), junto con el Partido del Trabajo de España (PTE) y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que se unificarían en 1979 para conformar el Partido de los Trabajadores de España, y a los grupos que optaron por la lucha armada, abriendo una trayectoria de corta duración en el caso del FRAP y algo más prolongada, pero siempre en un contexto de aislamiento social y relativa capacidad operativa, en el caso de los GRAPO. El libro de Consuelo Laiz también integra a ETA entre los grupos de la extrema izquierda, por entender que su apuesta por el terrorismo responde a las influencias de las corrientes de la izquierda revolucionaria pujantes en Europa en los años sesenta. También se cuenta con algunas obras relativas al grupo que se considera precursor de una buena parte de las organizaciones de la extrema izquierda, el Frente de Liberación Popular, que desempeñó un papel destacado en la lucha antifranquista entre 1956 y 1969 (García Alcalá, 2001). Los artículos de Josepa Cucó (2008) y Alejandro Quiroga (2008 y 2009) completan el panorama.

La trayectoria del PCE es mucho mejor conocida y cuenta con referencias bibliográficas más amplias. El Partido Comunista de España, fundado en 1921 a partir de una escisión del PSOE (al igual que la mayoría de los partidos comunistas que aparecen en esos años, en la onda expansiva de la Revolución bolchevique), es una organización muy pequeña, con un nivel de implantación muy exiguo durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República (Tuñón de Lara, 1980; Estruch, 1978; Cruz, 1987); las circunstancias de la guerra civil favorecen un crecimiento significativo del PCE en el seno del bando republicano, favorecido por las divisiones

en el PSOE y por el abandono de las potencias democráticas y la constatación de que únicamente la URSS prestaba su apoyo a los que luchaban contra Franco y las potencias totalitarias. En la posguerra, la represión golpea duramente la organización del interior; la lucha guerrillera se salda con un rotundo fracaso, lo que provoca el cambio de estrategia a partir de la década de los cincuenta (Estruch, 1982). En 1956, coincidiendo con la desestalinización en la URSS, se aprueba la política de reconciliación nacional, que renuncia a la prolongación de la división de España en los bandos de la guerra civil para propiciar una amplia unidad de las fuerzas democráticas. No obstante, la debilidad de las formaciones de la oposición impide amenazar de manera real la persistencia de la dictadura; la política voluntarista del PCE, que reitera los llamamientos a la movilización pacífica en forma de huelga general como medio de propiciar el fin del franquismo, se salda con reiterados fracasos, que no hacen mella en su cúpula dirigente. No obstante sus debilidades, la falta de democracia interna (favorecida por la clandestinidad) y la escasa capacidad de sus dirigentes para analizar con rigor la realidad española, el PCE se consolida como el principal partido de la oposición, y como tal ejerce en las crecientes movilizaciones que jalonan los últimos años del franquismo, protagonizadas sobre todo por el movimiento obrero y por el estudiantil (Morán, 1986; Hermet, 1972). Con la llegada de la democracia, el PCE es legalizado a cambio de una serie de concesiones (aceptación de la monarquía y de la bandera rojigualda en lugar de la republicana) que tenían el objetivo inmediato de aplacar la oposición de importantes sectores del ejército a tal decisión del presidente Adolfo Suárez. El objetivo de Santiago Carrillo y el núcleo dirigente es convertir al PCE en el partido hegemónico de la izquierda, para lo que cuenta con la debilidad del PSOE durante el franquismo, en un diseño que pretende reproducir las características del sistema político italiano, con un partido de centro derecha por un lado (la Democracia Cristiana en Italia, la UCD en España) y el Partido Comunista por otro, ocupando el Partido Socialista un papel secundario. La frustración de tales expectativas, puesta de manifiesto en las elecciones del 15 de junio de 1977 y ratificada en las generales de marzo de 1979, abre una profunda crisis en el seno del PCE, que conducirá a sucesivas escisiones y al abandono de numerosos dirigentes y militantes de base; la imparable curva descendente culmina en las elecciones de octubre de 1982, en las que el PCE tan solo obtiene 4 diputados en el Congreso, frente a los 23 con que contaba hasta entonces. La nueva fase, con el PCE convertido ya en un partido menor, obligado a

representar un papel muy secundario respecto al PSOE, no solo supone la sustitución de Santiago Carrillo por Gerardo Iglesias en la secretaría general, sino también una reformulación de las posiciones, lo cual se va haciendo perceptible de forma gradual, y que tendrá su manifestación más sobresaliente en la formación de Izquierda Unida (Ramiro Fernández, 2004), coalición que aparece en 1986, tras el referéndum de la OTAN, y en la que se integran el PCE como fuerza hegemónica y los partidos Izquierda Republicana, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido de Acción Socialista, Federación Progresista, Partido Carlista, Partido Humanista y el Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas. Izquierda Unida se abre paso poco a poco, aprovechando el flanco dejado por los Gobiernos del PSOE a su izquierda, y obtiene buenos resultados electorales en la primera mitad de la década de los noventa, aprovechando el desgaste del PSOE y el carisma de su dirigente Julio Anguita. El mejor resultado en las urnas lo obtiene en las elecciones de marzo de 1996, que dan el triunfo al Partido Popular. No obstante, a partir de ese momento estalla la crisis interna, con el boicot a la organización por parte de la corriente denominada Nueva Izquierda, en sintonía con el PSOE, lo que, unido a la dificultad de encontrar un discurso diferenciado una vez que el PSOE ha pasado a la oposición, y a posiciones muy discutibles en relación con cuestiones importantes como la problemática vasca (actitud ante ETA y acercamiento de IU/EB al nacionalismo) y los conflictos en la antigua Yugoslavia, provoca un pronunciado declive electoral, que tiene su primera manifestación importante en las elecciones municipales y autonómicas de 1999, continúa en las generales del año 2000 y se prolonga a lo largo de los primeros años del siglo XXI.

EL CONTEXTO POLÍTICO VASCO

El País Vasco es probablemente el territorio de España con mayor nivel de conflictividad política desde los últimos años del franquismo hasta prácticamente la actualidad. Dicha conflictividad tiene su máxima expresión en la existencia de un grupo terrorista, ETA, desde finales de los años cincuenta, y se manifiesta también en la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales sobre el encaje territorial de Euskadi (o su separación) en el conjunto de España.

Desde finales del siglo XIX, el nacionalismo representa una fuerza importante en la política y la sociedad vascas. Con un fuerte

componente integrista y situando la raza como eje central de la nacionalidad, Sabino Arana funda las bases de un nacionalismo profundamente conservador y antisocialista, por entender esta última como una ideología «extraña» al ser vasco e introducida por los inmigrantes, a quienes se acusa de contribuir a la eliminación de las peculiaridades del pueblo vasco.¹⁶ Con estas premisas, el nacionalismo vasco, encarnado en el PNV, se comporta como una fuerza conservadora, próxima al tradicionalismo, corriente política muy arraigada en el País Vasco, con la que articulará coaliciones electorales y con cuyo concurso aprobará el Estatuto de Estella durante el primer bienio republicano, rechazado por el Gobierno por su carácter clerical. La férrea oposición de la derecha, en el Gobierno desde noviembre de 1933, a las autonomías regionales originará la inclinación del PNV hacia el acuerdo con el Frente Popular para la aprobación del primer Estatuto de Autonomía vasco, que verá la luz una vez iniciada la guerra civil (Fusi, 1979; Granja, 2007). La participación en la guerra en el bando republicano inclina definitivamente al PNV hacia la alianza con las fuerzas de izquierda, como se comprueba en la formación del Gobierno vasco, presidido por José Antonio Aguirre, y con presencia de republicanos, socialistas y comunistas. Ello indica una moderación en los planteamientos del PNV desde su doctrina inicial, lo que no implica un cambio radical en sus posiciones, que siguen siendo conservadoras desde el punto de vista social, como se refleja en la reluctancia a implicarse de manera más firme en la defensa de la República española, manifestada en el pacto de Santoña (acuerdo alcanzado entre representantes nacionalistas y los militares italianos para poner fin a la guerra en el País Vasco al margen de las autoridades republicanas). En la posguerra, el PNV confiará en la ayuda de los países democráticos, básicamente los Estados Unidos, para facilitar el fin del franquismo. La defraudación de tales expectativas, ya perceptible en 1947 y de forma irreversible en 1953, sumirá al partido en la parálisis, con un Gobierno vasco en el exilio con pocas posibilidades de intervención, y una organización en el interior muy poco activa (Mees, Pablo y Rodríguez, 1999). Este será el contexto en el que un grupo de jóvenes inquietos por la inacción de sus mayores y por la represión a que es sometida la cultura vasca darán los primeros pasos para acabar con tal estado de postración. El grupo, significativamente denominado Ekin —«hacer»—, junto con un sector de las

16. Para los primeros pasos del nacionalismo vasco, los estudios más completos son los de Solozábal (1975) y Corcuera (2001).

juventudes del PNV, conformará ETA en 1959. Tras un periodo de asentamiento de las bases de la organización, jalonado por arduos debates y acciones aisladas de difusión y propaganda, 1968 será el año a partir del cual la lucha armada marcará la evolución futura de la organización. Dando en parte la razón a la estrategia de acción-represión-acción, las primeras acciones de ETA son respondidas con una represión del franquismo que no se limita a los activistas de ETA, sino que alcanza a sectores significativos de la población vasca. El proceso de Burgos, en diciembre de 1970, marca el punto de inflexión desde el punto de vista de la movilización desencadenada en España y fuera de ella en contra de las condenas a muerte decretadas por el tribunal militar (Halimi, 1971). Dicho proceso llega en un momento crítico para ETA, cuando se acaba de producir la escisión que separa a ETA V Asamblea de ETA VI-LKI, cuyo desarrollo posterior dará lugar a la organización de ámbito español denominada LCR, ya citada. Con anterioridad, una escisión originada por debates mantenidos en términos similares (españolistas frente a nacionalistas) había dado lugar a la aparición de ETA-Berri, posteriormente convertida en el MC. Ambas escisiones, así como los debates producidos en el seno de ETA, respondían a la dicotomía nacionalismo-socialismo que se mantenía dentro de la organización. En ambos casos, el nacionalismo se impuso sobre la vertiente obrerista, marcando de alguna manera la evolución futura de ETA (Garmendia, 1995; Jáuregui, 1981).

Con la muerte de Franco, el País Vasco vive una accidentada transición, jalonada por los atentados de las varias ramas de ETA, por los excesos policiales en forma de represión sobre manifestaciones y movilizaciones populares y por la actuación de bandas de extrema derecha, probablemente con apoyos policiales. La pugna por la hegemonía en el ámbito nacionalista se salda con el buen resultado del PNV en las primeras elecciones democráticas (junio de 1977), y sobre todo con su éxito en las elecciones autonómicas de 1980, que lo convierte en el partido gubernamental en la comunidad autónoma, posición que mantendrá (desde 1986 en coalición con otros partidos) hasta el 2009. Previamente, el referéndum constitucional ha reflejado el fuerte rechazo subsistente en Euskadi al nuevo régimen; sin embargo, el Estatuto de Autonomía recibe un mayor respaldo, sin duda influido por la propuesta positiva del PNV y Euskadiko Ezkerra (EE). Los meses previos a las primeras elecciones democráticas son claves en la articulación de las fuerzas políticas nacionalistas. La propuesta, siempre presente y pocas veces llevada a la práctica, de un frente nacional, es plan-

teada en las conversaciones de Chiberta, que se saldan con un fracaso por la negativa del PNV a secundarlo, pese a los buenos oficios de Telesforo Monzón. Ahí se pone igualmente de manifiesto la negativa de ETA militar y sus apoyos a legitimar la salida reformista del franquismo con su no participación en las elecciones; no es esta la actitud de EE, vinculada a la rama político-militar de la organización. Se bifurcan así los caminos de las dos ramas de ETA. Pese a la pérdida de Pertur (dirigente de ETA político-militar, desaparecido en circunstancias nunca aclaradas), su propuesta de formación de un partido cuya misión sería el liderazgo de la revolución vasca, dejando a ETA el papel de garante de sus logros, se aplicará de alguna manera a través del EIA y su posterior conversión en EE. En las elecciones de junio de 1977 con este nombre acude una coalición integrada por el EMK y el EIA, que logra un resultado apreciable. La abstención propugnada por ETA militar obtiene un escaso eco. Sin duda, contrasta el panorama de 1977 con el que se dibuja tres años después, cuando la fuerza política que apoya a ETA militar (HB) se convierte en la segunda fuerza nacionalista, e irrumpe con una suma de votos más que notable. Con oscilaciones, y una cierta tendencia a la baja en los años noventa, HB obtiene un sólido apoyo electoral, a la vez que mantiene un apoyo incondicional a ETA, lo que conducirá a su ilegalización en el 2002.

Con el Estatuto de Autonomía en vigor desde finales de 1979, se pone en marcha la institucionalización de la Comunidad Autónoma, integrada por las tres provincias (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) que ya constituyeron la comunidad en el Estatuto de 1936. La no integración de Navarra (cuna histórica del pueblo vasco en la visión de los nacionalistas) es una de las razones de su impugnación por el nacionalismo radical, mientras que el PNV, pese a su apoyo al Estatuto y a ser el partido que sienta las bases del entramado institucional, mantiene un discurso ambiguo que nunca cierra las puertas a cotas mayores de autogobierno, o incluso a la independencia. De hecho, el PNV, ya con Ibarretxe como lehendakari, cuestiona de manera abierta las instituciones y el ordenamiento jurídico vigente, planteándose su superación en una dinámica que se plasma de forma abierta con el Pacto de Estella (1998) y con el llamado Plan Ibarretxe (2002). En los años ochenta, la no consolidación de la reforma política en Euskadi da lugar a una intensificación de la violencia, con un recrudecimiento de las acciones de ETA, que tiene su mayor intensidad entre 1978 y 1980. El apoyo de HB, así como la actitud descrita del

nacionalismo moderado y la defensa de esa actitud «insumisa» por parte de organizaciones de la izquierda radical, explican la persistencia de ETA, junto con el refuerzo que reciben las tesis sobre la continuidad del nuevo régimen respecto al franquismo con la organización desde sectores próximos al Gobierno de grupos terroristas responsables del asesinato de personas vinculadas a ETA y HB (así como personas ajenas al «conflicto», eliminadas por «error»), entre los que destaca la actividad de los GAL, activos entre 1983 y 1987. Desde los años finales de esta década, la persecución policial consigue asestar golpes importantes a la infraestructura etarra, de manera que la mortalidad de la organización va disminuyendo gradualmente. Esta evolución es contrarrestada por ETA con el creciente recurso al atentado indiscriminado, en forma de coches bomba que consiguen mantener la presión sobre el poder político, pero también contribuyen a la erosión de sus apoyos. La firma de los pactos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona, en los que todos los partidos democráticos acuerdan combatir de manera conjunta el terrorismo, también contribuye a la lenta pero paulatina pérdida de apoyos políticos por parte de este. Igualmente, ayuda en esta dirección la ruptura de las conversaciones de Argel, desarrolladas en 1989, con una preparación previa en los años anteriores, que es percibida por la opinión pública como la demostración de la falta de voluntad por parte de ETA de abandonar la violencia.

En los años noventa, aparece la *kale borroka* (lucha callejera) como nueva forma de lucha por parte del nacionalismo radical. Grupos de jóvenes siembran de violencia las calles de Euskadi mediante ataques a sedes de partidos, medios de transporte, instalaciones comerciales o bancarias... ETA opta también a partir de 1995 por los asesinatos de líderes políticos de los dos partidos mayoritarios de ámbito español (PP y PSOE). Un punto de inflexión lo constituye el asesinato de Miguel Ángel Blanco, joven concejal del PP en Ermua, tras un secuestro de 48 horas en el que se conminaba al Gobierno a liberar a presos de ETA a cambio de la libertad del secuestrado. La movilización previa y posterior al asesinato constituye un hito desde el punto de vista de su magnitud y de la voluntad de millones de personas, en el País Vasco y en toda España, de mostrar su radical oposición a la banda terrorista. Culminaba así, desde la perspectiva de la manifestación callejera, la labor de grupos pacifistas que desde finales de los años ochenta habían comenzado a manifestarse en los pueblos y ciudades vascos en contra de la violencia. Sin embargo, la percepción de la movili-

zación como una amenaza para el nacionalismo en su conjunto aceleró un acercamiento entre las distintas tendencias del mundo nacionalista que ya se había venido pergeñando en los años anteriores. Tal confluencia cuajó en septiembre de 1998 en el Pacto de Estella, que venía a servir de «pista de aterrizaje» para la tregua de ETA, declarada pocos días después de la presentación pública del acuerdo. En este se planteaba la necesidad de abordar la resolución del «conflicto vasco» mediante la apertura de un proceso que permitiera «dar la palabra al pueblo vasco», recogiendo la percepción de la situación habitual en el mundo nacionalista. El PP y el PSOE quedaron excluidos y se opusieron al acuerdo. De todos los partidos, sindicatos y organizaciones que sellaron el pacto, solo IU respondía a una organización de ámbito español. La negativa del PNV y EA a seguir la «hoja de ruta» trazada por ETA, que incluía la convocatoria de elecciones en el conjunto de la supuesta Euskal Herria, junto con el rechazo del PP a negociar nada que supusiera contrapartidas políticas al final de la violencia, precipitaron la ruptura de la tregua y la vuelta de ETA a los atentados desde enero del 2000. Una fuerte ofensiva, favorecida por el rearme producido en los meses de la tregua, dio paso a una nueva fase descendente en la incidencia de la actividad de ETA, de nuevo golpeada por la acción policial y judicial (en este periodo se produce la ilegalización de Batasuna y organizaciones afines), en medio del estrechamiento de su base social y la incidencia movilizadora de la misma. Entretanto, los prolegómenos del Pacto de Estella vinieron acompañados por la ruptura del Gobierno de coalición PNV-PSOE, que había funcionado entre 1986 y 1998, y que fue sustituido por el tripartito integrado por el PNV, EA y EB/IU, con una orientación más fuertemente nacionalista, y del que surgiría el denominado Plan Ibarretxe, ya reseñado, y finalmente derrotado por la votación del Parlamento español y, sobre todo, por la llegada al Gobierno vasco del PSE, apoyado por el PP, por primera vez desde la restauración de la autonomía.

En marzo del 2006, ETA declara una nueva tregua, tras un proceso de conversaciones secretas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La propuesta de negociación se articulaba a través de la formación de dos mesas: en una, el Gobierno español y ETA tratarían del futuro de los presos de la organización terrorista; en la otra, los partidos políticos vascos intentarían consensuar un acuerdo para el autogobierno. Las dificultades para encontrar puntos de acuerdo, manifestada en las discrepancias surgidas en las llamadas «conversaciones de Loyola» entre el PSOE, el PNV y Batasuna,

pusieron de relieve la falta de voluntad por parte de ETA para poner fin a su actividad terrorista. La explosión de una potente bomba en la recién inaugurada T-4 del aeropuerto de Barajas puso fin a la tregua, aunque aún se mantendrían contactos para tratar de salvarla. El 6 de junio del 2007, ETA anuncia oficialmente el final de la tregua. Aunque cometió varios asesinatos desde entonces, su actividad fue ya de «baja intensidad», sobre todo por los duros golpes policiales recibidos. La debilidad organizativa de ETA, junto con los efectos de la ilegalización de Batasuna y demás organizaciones del MLNV, propiciaron una presión creciente del entorno etarra para el cese de la violencia. Fruto de esta evolución ha sido la nueva tregua declarada en septiembre del 2010, cuya evolución está abierta en el momento de redactar estas páginas.

Para la historia de ETA en sus primeros años disponemos de buenos trabajos ya casi clásicos, como los de Jáuregui (1981) y Garmendia (1995), que indagan, a partir de los textos emanados de la organización, en su ideología y estrategia, incluyendo las escisiones que jalonan su recorrido durante los años sesenta. Con un frente temporal algo más amplio (hasta 1987), Pedro Ibarra (1987) también analiza la evolución estratégica de ETA. Luigi Bruni (1987) y Francisco Letamendía (1994) se centran igualmente en los primeros años de la organización, mientras que Florencio Domínguez completa los estudios sobre la historia y el análisis de los objetivos de ETA con la biografía de uno de sus dirigentes más importantes (Josu Ternera) o con el seguimiento de la vida cotidiana de los miembros de la organización (Domínguez, 1998 y 2002); Sánchez Cuenca (2001) realiza una aproximación original, basada en la teoría de juegos, siguiendo la estela trazada por Colomer (1990). Juan Aranzadi (1981), Joseba Zulaika (2007) o Mikel Azurmendi (1998), desde ópticas distintas, han apostado por hundir las raíces de la violencia etarra en rastros ancestrales del imaginario colectivo vasco. Elorza (2000) ha coordinado la que es probablemente la puesta al día más completa y global del fenómeno terrorista en un libro colectivo. Los trabajos de Patxo Unzueta, con estilo periodístico, suministran perspectivas muy valiosas para la comprensión del universo del nacionalismo radical. También son dignas de reseñar las aportaciones de autores extranjeros, como Clark (1980), Sullivan (1988), Waldmann (1997) y Silver (1988). Mata (1993) y Aulestia (1998) han indagado en el mundo de HB, de una forma quizá más impresionista el segundo, y con un rigor notable sobre aspectos sociológicos y políticos de la organización el primero. Desde el lado abertzale, Iker Casanova (2007) ha escri-

to la historia más reciente según esquemas próximos al pensamiento que anima al MLNV.

EL DISCURSO DE LA IZQUIERDA RADICAL

La parte sustancial del trabajo que sigue está basada en fuentes de carácter hemerográfico, de manera que la información extraída hace referencia al discurso¹⁷ que las organizaciones estudiadas han elaborado en relación con el tema tratado. En las últimas décadas, se han suscitado amplios debates en la historiografía en torno a la importancia del lenguaje y a su función como mediador decisivo en la producción del conocimiento. En la estela de la pérdida de vigencia de los paradigmas que sustentaron la modernidad en el ámbito del pensamiento, en la medida en que su capacidad explicativa dejó al descubierto carencias significativas, se abrieron paso nuevos planteamientos que cuestionaron desde la raíz los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales, y en lugar destacado los de la historia.¹⁸ Así, la misma naturaleza y la distinción entre objeto y sujeto fue puesta en entredicho, concibiendo la percepción de la realidad como una construcción producto de la mediación introducida por el agente del producto cultural. De esta manera, desaparecía el perfil diáfano de la realidad como el objeto destinado a ser aprehendido por el estudioso; la realidad no existía como tal, sino

17. «En el plano puramente descriptivo, lo que el término discurso designa es el cuerpo coherente de categorías mediante el cual, en una situación histórica dada, los individuos aprehenden y conceptualizan la realidad (y, en particular, la realidad social) y en función del cual desarrollan su práctica. Dicho de otro modo, un discurso es una rejilla conceptual de visibilidad, especificación y clasificación mediante la cual los individuos dotan de significado al contexto social y confieren sentido a su relación con él, mediante el cual se conciben y conforman a sí mismos como sujetos y agentes y mediante el cual, en consecuencia, regulan su práctica social [...] el discurso [...] no es un medio de transmisión de los significados de la realidad, sino, por el contrario, un componente activo del proceso de constitución de dichos significados» (Cabrera, 2001: 51).

18. «Lo que marca el tránsito a nuestra era postsecular es el hecho de que hoy van a verse minadas también aquellas proyecciones de horizontes de sentido ligadas a una afirmación subjetiva de los valores. [...] El fin del siglo xx marcará, finalmente, el momento de la quiebra, no solo de la objetividad del Sentido, sino del Sentido mismo. [...] La diferencia fundamental que distingue nuestra época postsecular respecto de la anterior era secular es, en fin, que el Sentido, a diferencia de Dios, no es una hipótesis de la que podamos prescindir» (Palti, 2008: 35-36).

que era construida a partir de la labor del historiador. Lógicamente, estos planteamientos tropezaron con serias resistencias entre los historiadores, pues suponían una revisión radical de las formas de hacer historia, incluyendo en estas tanto la historia más tradicional (evenemencial y fundamentalmente política) como la hegemónica en los años sesenta y setenta historia social, en la que coincidían escuelas como la de Annales y el marxismo. Sin llegar a ser adoptada de forma decidida por la mayoría de los historiadores, sí que se puede afirmar sin embargo que estos planteamientos influyeron de forma importante en el conjunto de la historiografía, incidiendo no solo en la forma de hacer historia sino también en la variedad de temas y enfoques, que se han ensanchado de forma considerable en las últimas décadas, abriendo campos hasta hace poco insospechados como objetos de la atención de los historiadores.¹⁹

La evolución descrita no es sino una de las consecuencias del fin de las grandes construcciones ideológicas y de los discursos omnicomprendivos y totalizadores, capaces de elaborar teorías explicativas del pasado, el presente y hasta el futuro de la sociedad, y que tuvieron en el marxismo uno de sus exponentes más característicos. La constatación de la incapacidad de construir elaboraciones teóricas capaces de dar cuenta del conjunto de la complejidad social abrió el camino a la parcelación de los enfoques, a la relativización de las conclusiones y, en otro orden de cosas, al abandono de los proyectos globales de transformación social, alentados sobre todo por los partidos de la izquierda comunista en Europa desde 1945. En este punto, es posible establecer una vinculación entre los procesos descritos y la evolución de la izquierda revolucionaria en nuestro país. El discurso que subyace en la prensa de estas organizaciones políticas participa de las características de ese paradigma «moderno» que, dicho en pocas palabras, considera la sociedad como una formación atravesada por los conflictos de clase, en la que los agentes sociales actúan en función de unos intereses vinculados a su pertenencia a una de ellas, y cuya única salida a la vez justa y capaz de eliminar las contradicciones del capitalismo pasa por una revolución socialista dirigida por el proletariado, con el partido a la cabeza, que establezca una sociedad igualitaria. Ese es el planteamiento de los partidos de la izquierda revolucionaria, hasta que la realidad acaba por demostrar lo ilusorio del mismo. Es

19. Hay que reseñar asimismo que el excesivo énfasis en la importancia del lenguaje ha propiciado una reacción concretada en el denominado «giro material» (en oposición al «giro lingüístico») (Joyce, 2006).

el desmentido de las certezas en que se basa la actuación política de estos grupos el punto de origen de la decadencia de los partidos de la izquierda revolucionaria, unido a la consolidación de la democracia en España y al impacto causado por el desplome de los países del «socialismo real», simbolizado en la caída del Muro de Berlín. Antes de ello, la permanencia de las categorías derivadas de una aplicación mecánica de lo que se pretendía por marxismo y de las teorías de los líderes históricos del movimiento comunista (Lenin, Mao, Trotski, según los casos) es la que impera en los análisis políticos de estos partidos, y también, lógicamente, en su valoración de las prácticas de ETA. En este sentido, desde el punto de vista de la LCR y el MC, es la visión dicotómica de la sociedad, previamente dividida entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, la que condiciona el análisis sobre el fenómeno terrorista. Se trata de una visión que parte de las categorías previamente establecidas, y en la que se hacen encajar los fenómenos ajustándolos a las plantillas teóricas que rigen la actuación de estos partidos. Con respecto al PCE, como se verá, los cambios en el discurso con respecto al fenómeno terrorista permiten introducir otras consideraciones que matizan un análisis también de origen marxista, pero en el que se introducen otros elementos en relación con las expectativas del partido en la coyuntura política concreta.

II. La posición ante ETA de la izquierda radical a través — de sus órganos de prensa

LA EVOLUCIÓN DEL PCE E IZQUIERDA UNIDA

A lo largo de su historia, el PCE no ha mantenido una trayectoria uniforme en su análisis del nacionalismo vasco. Ya en la Segunda República se abrió paso un discurso cercano al nacionalismo que condujo a la defensa del derecho de autodeterminación (véase la nota 12), hasta que la entrada en el Gobierno republicano y en el Gobierno vasco, en ambos casos ya durante la guerra, incidió en la modulación de la reivindicación hacia el autonomismo. En los últimos años del franquismo, el PCE también incluyó en sus programas la autodeterminación de las nacionalidades históricas, y participó activamente en la lucha antirrepresiva, particularmente con ocasión del proceso de Burgos (1970). Incluso hubo algún intento de aproximación entre ETA y el PCE, que no llegó a cuajar por la marcha atrás de la dirección de ETA en un contexto de fuertes críticas a los partidos comunistas por parte de los movimientos radicales europeos surgidos en torno a mayo del 68.²⁰ Sin embargo, las críticas al terrorismo individual como método de acción política estuvieron siempre presentes en esos años finales del franquismo,

20. ETA y el PCE firmaron un llamamiento conjunto contra la represión y por la amnistía en noviembre de 1970, siguiendo una iniciativa de Comisiones Obreras (Garmendia, 1995: 447).

desde la presunción de que la lucha contra la dictadura y por el socialismo había de ser protagonizada por las masas y no por una vanguardia desligada de estas.

La lucha frontal contra ETA

Ya en los años de la transición, el PCE mantiene un discurso inequívocamente contrario al terrorismo de ETA, participando en las movilizaciones contra el mismo e incluso impulsándolas. En coherencia con la política del PCE durante esos años, cuyo objetivo fundamental era la consolidación del sistema democrático en España (Sánchez Rodríguez, 2004), el partido dirigido por Santiago Carrillo apuesta por la aprobación de una Constitución democrática y por un Estatuto de Autonomía que debería propiciar el autogobierno de Euskadi y reducir la base de apoyo del nacionalismo radical. Junto con esta política, la persecución policial, respetando los derechos democráticos, es el otro pilar que debe activar el Estado para acabar con ETA. Incluso las posiciones manifestadas reiteradamente por sus dirigentes rechazan terminantemente la negociación con la banda armada; se estima que no se puede decidir el futuro de Euskadi con una minoría que utiliza la violencia en un Estado democrático (y se da por hecho que, tras las elecciones del 15 de junio de 1977 y la aprobación de la Constitución, España puede definirse como tal). Por el contrario, debe ser el conjunto de las fuerzas políticas el que decida el futuro del territorio. La puesta en marcha del Consejo General Vasco (órgano preautonómico), el 1 de enero de 1978, y sobre todo la aprobación del Estatuto de Autonomía el 25 de octubre de 1979, son hitos que debían contribuir a erosionar la base de apoyo a ETA. Roberto Lertxundi, secretario general del EPK entre 1977 y 1981, llega a calificar la formación del Consejo General Vasco como el «cierre del ciclo histórico comenzado con la ocupación de Euskadi en julio del 37, que vendría a premiar los 40 años de anhelos de todo un pueblo por recuperar su identidad nacional» (*Mundo Obrero*, 5-11 enero 1978). Se considera innegable la existencia de una conciencia nacional de pertenencia a un mismo pueblo, y también de solidaridad con todos los pueblos de España, que se plasma en la democracia y en la necesidad de reducir a la mínima expresión la imposición separatista o independentista. La prueba de que la gran mayoría del pueblo vasco se identifica con el Consejo General Vasco es la unidad de todas las fuerzas políticas, lo que incluye a Alianza Popular y alguna organización de carácter independentista.

Del análisis de la prensa del PCE destacamos los siguientes elementos en relación con ETA a lo largo de un primer periodo que podemos fijar hasta 1984:

- El profundo rechazo a ETA se traduce en fuertes descalificaciones de su actividad armada, no siempre totalmente coherentes entre ellas: se precisa la diferenciación entre ETA y el pueblo vasco, que aspira a la libertad, la autonomía y la prosperidad, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia; se achaca a ETA la ignorancia de los cambios producidos en España tras la muerte de Franco, y se acusa a dicha organización de haber quedado atrapada en la malla de la acción por la acción, así como de haber congelado la realidad en un tiempo ya pasado y cuyo retorno parece querer propiciar; la abdicación de toda racionalidad y el primitivismo político (*Mundo Obrero*, 9-15 marzo 1978) son otras caracterizaciones de la actividad etarra, puestas de manifiesto con su ejecutoria terrorista desde el 15 junio (fecha de las primeras elecciones democráticas, en las que el entorno de ETA militar propugnó la abstención) y con las declaraciones que la acompañan.
- Según el análisis del PCE, el terrorismo favorece a la derecha, pues retroalimenta su discurso sobre la represión y el peligro separatista; coincide este análisis con la posición expresada en esos años por Comisiones Obreras, que considera los métodos de ETA contrarios por completo a las mejores tradiciones revolucionarias y ajenos totalmente a la clase obrera.
- Se llega a hablar de las turbias conexiones de ETA, estableciendo un paralelismo con las, según el PCE, demostradas conexiones de las Brigadas Rojas italianas con los servicios secretos (tanto el secuestro de Aldo Moro como las acciones de ETA solo sirven a los fascistas, según esta interpretación). En este sentido, se presenta como sospechoso que ETA atente de manera tan evidente contra la paz civil y la democracia, e incluso hay alusiones a posibles colaboraciones en determinados casos con los GRAPO, casi siempre identificando sus objetivos con los de la extrema derecha.
- No obstante la comparación anterior, también se subraya la necesidad de no asociar la acción de ETA con el «azote terrorista» que vive Occidente. ETA es la expresión más radicalizada y extrapolada del nacionalismo vasco y, por tanto, un fenómeno específico de Euskadi. La crítica profunda

y decidida a la acción de ETA implica también una crítica al nacionalismo burgués, que enfrenta el problema de ETA con ambigüedad. Frente a la necesidad de aislar a los violentos, el mejor caldo de cultivo para ETA viene dado por la ambigüedad y el desapego del PNV respecto del proceso democrático español, porque supone alentar la ficción sostenida por el nacionalismo radical de que en España no ha cambiado nada, de que se sigue bajo la bota dictatorial de un Estado centralista. De hecho, se considera que el PNV hace esfuerzos para recuperar el voto nacionalista más radical y nunca ha roto sus lazos con sectores próximos a este, lo que lo ata a la hora de enfrentarse con profundidad y claridad a la acción violenta de ETA.²¹

- ETA demuestra un reflejo chovinista, que tiene su espejo en un nacionalismo de signo contrario (el nacionalismo español, que se ve espoleado por las acciones terroristas). Ello sería la consecuencia de una ideología aún repleta de elementos heredados del nacionalismo tradicional y conservador fundado por Sabino Arana.
- Se critican los excesos de las acciones policiales: se considera que las actuaciones de la policía que se extralimitan en sus funciones no solo contradicen el Estado democrático que se está forjando en España, sino que favorecen a los violentos, precisamente porque reafirman un discurso basado en la inexistencia de un cambio real y, por consiguiente, en la continuidad del régimen monárquico con el franquismo.
- El terrorismo provoca un impacto muy negativo en la sociedad: genera sentimientos de frustración, miedo y exasperación, alimentados tanto por la persistencia de los atentados de ETA como por la contumacia del Gobierno en erradicar la lucha armada por la vía policial. Produce el alejamiento de las masas, la desestabilización de la democracia y un choque frontal con el aparato del Estado. En consecuencia, terminar con el terrorismo es en sí mismo un interés revolucionario.
- La violencia terrorista es responsable asimismo de la destrucción de puestos de trabajo y de perjudicar la economía

21. Hay que recordar, en este sentido, que el PNV optó por la abstención en el referéndum constitucional, aunque apoyó el Estatuto de Autonomía, que de hecho fue fundamentalmente fruto del acuerdo alcanzado entre Carlos Garaikoetxea y Adolfo Suárez.

en general; en relación con ello, se critican duramente las «campañas de verano» que pretenden boicotear el turismo en la zona mediterránea (*Mundo Obrero*, enero 1980).

- Se atribuyen responsabilidades al Parlamento y los partidos mayoritarios por no impulsar decididamente las instituciones autónomas (primero el organismo preautonómico —Consejo General Vasco— y posteriormente el desarrollo pleno del Estatuto de Guernica). Hay bastante acuerdo en estimar que el PNV no estuvo nunca interesado en dotar de amplia legitimidad y de competencias al Consejo General Vasco, fundamentalmente por sus vacilaciones en apoyar plenamente el proceso autonómico, y por el hecho de que la presidencia estuvo en manos del socialista Ramón Rubial (Onaindía, 2004: 226-227).
- La solución al terrorismo de ETA no puede provenir exclusivamente de medidas policiales: es imprescindible la acción de la ciudadanía por medios masivos y pacíficos, la actitud responsable de los partidos políticos y sindicatos (se valora positivamente el progresivo desmarque de Euskadiko Ezkerra respecto a la violencia [*Mundo Obrero*, 20-26 julio 1978]), y la actuación de las instituciones democráticas. Se proponen medidas políticas que debe adoptar el Gobierno, con un carácter de profundización de la democracia y el autogobierno (*Mundo Obrero*, 18-24 mayo 1978): crear fuerzas de seguridad dependientes de organismos autónomos, legalizar los partidos independentistas, poner término a bandas incontroladas de extrema derecha que actúan en el País Vasco con absoluta impunidad; igualmente, es preciso adoptar medidas de carácter económico, que contribuyan a reducir el paro y la precariedad en Euskadi. El EPK apuesta desde fechas tempranas por la formación de frentes amplios contra el terrorismo, si bien los acompaña de propuestas sobre la profundización del autogobierno que incluyen en algún caso críticas al Gobierno central por su negativa a traspasar competencias al poder autonómico (ello hace que la UCD no pueda incorporarse a un acuerdo antiterrorista, por ejemplo, en febrero de 1980, lo que el EPK no lamenta, ya que solo dice echar de menos a EE).
- Hay una oposición frontal a la negociación con ETA: «La libertad no se puede negociar con pistoleros». Negociar supone una prima al terrorismo, además de generar falsas esperanzas en la población: «Cada vez que a lo largo de sus

20 años de historia ha habido gentes de ETA que por convencimiento, por negociación o conveniencia han dejado las armas, inmediatamente ha surgido otra parte de la misma organización que se hace con las siglas y con la tradición de acciones armadas» (*Mundo Obrero*, 25-31 mayo 1978).

- Se constata el final del halo romántico que envolvía la imagen de ETA durante el franquismo, cuando la organización era apoyada muy mayoritariamente por la población. Mientras ETA fue una organización antifascista que combatió la dictadura, supuso un estímulo para la lucha de masas. Una vez restablecida la democracia, por el contrario, se estima que sus acciones fomentan el desconcierto y el miedo, coartando la iniciativa democrática de la clase obrera y la intervención de los ciudadanos en la vida política. Aunque la evaluación de los apoyos a ETA varía en función de las circunstancias, al menos hasta 1983 se repiten las estimaciones optimistas, que constatan una reducción de los mismos. Es señalado, en este sentido y para subrayar el cambio en la naturaleza de ETA y la valoración moral que se desprende de este, el caso Pertur, que lleva a acusar a ETA incluso de llevar la sangre hasta el interior de sus propias filas. En algún momento se emplea el calificativo de «organización mafiosa», en relación con algún atentado que dice recordar los métodos gangsteriles (alusión a un tiroteo en un bar); el carácter «dudoso» de ETA viene resaltado por alguno de sus atentados: el recuerdo de Pertur se hace más vivo con el asesinato de Tomás Sulibarria (junio de 1980), antiguo miembro de la banda, a quien esta acusa de infiltrado sin mucha verosimilitud, a juicio de *Mundo Obrero* (11-17 junio 1980), que cita a sus vecinos y amigos. También se la califica de fascistizante y asesina, e incluso se llega a utilizar el término «escuadrón de la muerte» (*Mundo Obrero*, 22-28 mayo 1980). De manera significativa, por tratarse de un tema que dio lugar a grandes movilizaciones en el País Vasco, se traza una línea clara entre los refugiados de la época franquista y los etarras; estos han cometido delitos, de manera que las posibles extradiciones son justas.
- Se considera necesario romper con la dicotomía entre abertzales y «sucursalistas»; a medida que el nacionalismo va consiguiendo una hegemonía tanto en términos electorales como sociales, el PCE intenta romper con la imagen de partido sucursalista o españolista que se le asigna. Este será

otro de los temas centrales para los partidos de la izquierda revolucionaria de ámbito español; en esos años, la acusación de partido «españolista» o «sucursalista» tendía a ser recibida como un estigma y, en consecuencia, era rotundamente rechazada.

- Se constata que es la izquierda la que a finales de los años setenta plantea la batalla más dura contra la lucha armada de ETA, que precisamente por eso acusa a los comunistas de ser enemigos de Euskadi. Se alienta, en esa línea, a los colectivos que se movilizan contra los atentados terroristas: taxistas, guardias municipales, trabajadores de los medios de comunicación... (como en la respuesta al asesinato del periodista José María Portell, en julio de 1978, liderada por sus compañeros de profesión y por la organización del PCE de Portugaleta); se insiste en el papel decisivo de la intervención pública de los ciudadanos para la consecución de la autonomía y de la paz. El EPK es puesto como ejemplo de respuesta a los atentados: «Si otras fuerzas con mayor número de militantes estuvieran en esa línea de valentía y compromiso en las calles, los crímenes terroristas tendrían ante sí una muralla popular y social que podría ser un freno más eficaz que algunas de las medidas especiales que parecen medir bastante poco la realidad del problema» (*Mundo Obrero*, 22-28 mayo 1980). Se asegura que es la izquierda la que se ve agredida de forma permanente por la acción terrorista, que actúa como un potente elemento de freno al proceso democrático, fortalece los aspectos más represivos del aparato del Estado, distorsiona la organización y la acción de la clase obrera y se convierte en obstáculo de primer orden para la acción política colectiva de la izquierda.
- Es significativo también el apoyo que presta el PCE al decreto ley antiterrorista (julio de 1978): considera que puede contribuir a garantizar la paz ciudadana, siempre que en su aplicación no se lesionen en lo más mínimo los derechos humanos del conjunto de la población y que se respeten los derechos de los detenidos y los presuntos implicados; rechaza tajantemente su equiparación a los estados de excepción del franquismo; se repite, no obstante, que las medidas exclusivamente policiales no van a erradicar el terrorismo.
- El PCE concede gran importancia tanto a la aprobación de la Constitución española (6 de diciembre de 1978) como a la del

Estatuto de Guernica (25 de octubre de 1979). Se valora muy positivamente el nivel de respaldo alcanzado por este, mientras que tiende a obviarse el alto grado de abstención registrado en el referéndum constitucional.²²

De forma coherente con los planteamientos expuestos, el PCE contempla con preocupación la irrupción de Herri Batasuna en el escenario político vasco; el importante respaldo electoral que obtiene la coalición desde su aparición y la indudable capacidad de movilización que muestra contrastan con el estancamiento del PCE y del EPK. No obstante, estos van a mantener su línea de enfrentamiento con el nacionalismo radical, confiando en que la consolidación de la democracia y la profundización en el autogobierno propiciarán la disminución de sus apoyos. Los análisis de José Luis López de Lacalle²³ son muy lúcidos en la captación de la situación. Ya en julio de 1980, López de Lacalle considera que el Movimiento Comunista, el Partido del Trabajo de España y otros partidos de la extrema izquierda «españolista» se han colocado en la órbita de ETA, debido a su temor a ser barridos de la arena política. Como se expone con posterioridad, López de Lacalle es de los primeros analistas en denunciar una deriva que estima inadmisibles desde el punto de vista de unas organizaciones de izquierda. Según este autor, con ETA los pronósticos se han revelado siempre erróneos: se creía que al acabar el franquismo, y con apoyos escasos, abandonarían el terrorismo; sin embargo, demostró una capacidad notable de movilizar a las masas, a la vez que se consideraba que no sería capaz de trasladar esta fuerza al ámbito electoral. En ese momento (1980), opina que la combatividad de la gente que los apoya se ha reducido enormemente (sin duda, se trata de una impresión pronto desmentida por los hechos), pero también que su impacto electoral podía seguir siendo amplio. ETA, a su modo de ver, conectaba con un amplio sector ideológico independentista, que ejercía como tal principalmente a la hora de votar. Contrariamente a un juicio extendido que vendría a defender lo contrario, López de Lacalle sostiene que si ETA desapareciera, el independentismo se diluiría; concibe a ETA como el soporte místico de esta concepción. Para acabar con ETA, sería preciso intensifi-

22. La abstención se elevó hasta un 55,35% del censo, con un 22,4% de noes en el referéndum constitucional, mientras que en el referéndum del Estatuto la abstención alcanzó el 41,14%, con un 5,2% de noes (Botti, 2003: 203-204).

23. López de Lacalle fue asesinado por ETA el 7 de mayo del 2000.

car el traspaso de competencias al Gobierno vasco (julio de 1980), lo que facilitaría la exigencia de que se implique de forma decidida en la lucha contra el terrorismo.

López de Lacalle también afirma —en coherencia con la línea mantenida por el PCE hasta entonces— que, en cualquier caso, negociar con ETA sería un gran error. Cualquier mención de esta posibilidad implica estimular el terrorismo; no solo se trata de que los puntos de la alternativa KAS son inasumibles por la Constitución y el Estatuto, sino que la negociación supondría otorgar estatus político al terrorismo. Es digna de mención, en este sentido, la diferencia que plantea Roberto Lertxundi en relación con ciertas propuestas socialistas para el fin de la violencia: mientras que el PSE aceptaría medidas de gracia ante el cese de toda acción terrorista, los comunistas se muestran contrarios a la mención siquiera de estas medidas. A los análisis y voluntad de combatir a ETA se añade Ignacio Latierro (*Mundo Obrero*, 1-7 agosto 1980), quien sostiene que han sido ciertas actitudes de debilidad las que en otras ocasiones han llevado a las autoridades a establecer un cierto nivel de negociación con ETA político-militar, lo que ha alentado su «nueva y demencial campaña» (contra intereses turísticos en la costa mediterránea). Considera que demasiados intereses se han querido aprovechar del prestigio de ETA en el franquismo, y que ha gozado posteriormente de demasiadas complacencias en su agresión a la democracia; «por eso hoy el único camino de salida pasa por una confrontación política, que se hará difícil, pero que deberá ser neta y sin ambages entre los defensores de la autonomía y la democracia, por un lado, y los terroristas, por otro».

Un ejemplo de la interferencia de ETA en la problemática socio-política vasca se muestra de manera diáfana en la fábrica Michelin de Vitoria. En este caso, el asesinato por ETA político-militar de un jefe de las oficinas técnicas de Michelin en junio de 1980, además de otras acciones terroristas, irrumpe en plena huelga prolongada de los trabajadores. Las acciones de ETA dividen a la Asamblea y al Comité de Empresa: Comisiones Obreras abandona este al no conseguir que se condenara el atentado. En una práctica que había tenido notables ejemplos en los últimos años del franquismo, ETA intervenía en empresas con conflictos laborales para remarcar su carácter de defensor de las clases oprimidas. Lo significativo de este episodio es que tanto por parte de Comisiones Obreras como del PCE sigue existiendo una deslegitimación permanente de las prácticas de ETA, aunque se hagan de una forma tan evidente para obtener el apoyo de los trabajadores al presentarse como una orga-

nización capaz de defender a estos frente a las agresiones de la patronal.

Si la implicación del PNV en el combate contra el terrorismo ha dado lugar a controversias que se prolongan hasta la actualidad, ya en 1980 el PCE criticaba la falta de determinación del partido nacionalista mayoritario en la lucha contra ETA. El mismo López de Lacalle no ve voluntad firme en el PNV de combatir con determinación a ETA, lo cual se plasma en la ausencia de un plan sistemático para luchar contra ella (*Mundo Obrero*, 25-31 julio 1980). Según el autor, dicho plan debería simultanear el desarrollo de la autonomía, el impulso de la responsabilidad política de las masas, y las inevitables acciones policiales. De acuerdo con esta percepción, mientras socialistas y comunistas venían sosteniendo una dura confrontación desde hacía tiempo, el PNV, hasta entonces, no solo no la había apoyado, sino que la había utilizado como instrumento arrojadizo contra la izquierda. El PNV seguía colocando en el centro de la problemática política el enfrentamiento entre Euskadi y Madrid, la confrontación con el Gobierno central; si bien es verdad que era legítimo y hasta razonable reclamar una mayor celeridad del Gobierno central en el traspaso de competencias, no lo es menos que correspondía una responsabilidad fundamental al Gobierno vasco y al partido mayoritario en Euskadi en el combate contra el terrorismo, sobre todo desde el punto de vista de la deslegitimación de sus presupuestos políticos.

En los años siguientes se repiten las críticas al PNV; cuando se propone una negociación a tres bandas (PSOE, PNV y HB), en enero de 1983, se insiste en que la propuesta nace cuando la movilización popular contra el terrorismo es cada vez más importante. Es decir, se acusa al PNV de actuar para evitar el incremento del desprestigio de la organización terrorista. Para el PCE, cualquier posible negociación debe exigir primero un alto el fuego y nacer a partir de una posición común de las fuerzas democráticas, apoyándose siempre en la movilización popular. En un análisis más amplio de los problemas que impiden la estabilización del escenario político vasco, Latierro sostiene la necesidad de una política de colaboración entre el PSOE y el PNV (*Mundo Obrero*, 22-28 julio 1983), que no había sido posible hasta la fecha por la patrimonialización del Gobierno y el exclusivismo nacionalista practicado por el PNV, y también por la ausencia de una política del PSOE para el País Vasco; desde su llegada al Gobierno central el Partido Socialista no había mostrado ninguna voluntad de desarrollar la autonomía vasca. Las dificultades se plasman en la «guerra de las ban-

deras» (se denomina así a los incidentes que se repitieron en numerosas poblaciones vascas debido a las polémicas derivadas de las banderas que debían ondear en la fachada de los ayuntamientos con motivo de las fiestas patronales) del verano de 1983, en la que los excesos policiales muestran la imposibilidad de imponer unos símbolos que solo «pueden arraigar mediante la educación política y el convencimiento». La crisis económica, con el incremento del paro y la necesidad de dotar de alternativas a unos sectores industriales obsoletos, se cita entre los factores que contribuyen a la dificultad para restar apoyos sociales al terrorismo, el cual se beneficia igualmente de episodios como la aprobación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y la sentencia contra la misma del Tribunal Constitucional. También pesan, a juicio de los analistas del PCE, los errores cometidos en la transición: se afirma que la consigna de la amnistía total habría sido anulada si la amnistía del 76 hubiera comprendido a militantes de ETA (hay una cierta contradicción entre esta afirmación y las realizadas en otras ocasiones, como veremos inmediatamente).

Efectivamente, ante las movilizaciones por la amnistía, que dieron lugar a demostraciones masivas durante los primeros años de la democracia, en *Mundo Obrero* (5-11 septiembre 1980) se recuerda la amnistía del 77, que vació las cárceles de presos de ETA y dejó sin sentido la violencia terrorista y todas las movilizaciones de la izquierda abertzale en torno a esa reivindicación. Como veremos, la izquierda revolucionaria asumirá como propio el discurso del nacionalismo radical sobre los presos y refugiados; el PCE, en estos años, no tiene dudas sobre la legitimidad de un Estado que, efectivamente, pretendió de alguna manera el «borrón y cuenta nueva» mediante un conjunto de disposiciones que han dejado un rastro polémico, pues fueron esas medidas las que supusieron también la condonación desde el punto de vista penal de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen franquista. Lo cierto es que, en la perspectiva de la época, la amnistía era una conquista arrancada a los gobiernos de la UCD para sacar de las cárceles a todos los presos políticos de España (incluidos los que habían ejercido la lucha armada), mientras que el horizonte penal de la persecución a los gobernantes franquistas por las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura no era contemplado apenas ni siquiera por los grupos de la oposición.

En lo que la realidad posterior confirmó más bien como un espejismo, en 1980 diversos sectores del EPK aprecian un grito de

¡Basta ya! en el seno de la sociedad vasca. El cambio en la posición se asigna a la actitud firme y constante de los partidos obreros (PSE y PCE), así como a una actitud cada vez más comprometida del PNV y de EE. Mientras el PCE apoya la ley antiterrorista (aunque el EPK se opone), con la introducción de determinadas garantías, se sigue apostando por crear cauces adecuados para la movilización popular, para la articulación de una respuesta sostenida y constante frente a la violencia. Como garantía de que esta movilización no es un apoyo incondicional a la represión indiscriminada, López de Lacalle afirma que Alianza Popular no cabe en la concertación de fuerzas por la paz: su objetivo es el estado de sitio, su apuesta es por la guerra (*Mundo Obrero*, 14-20 noviembre 1980). El PCE rechaza la intervención del ejército en Euskadi y la LOAPA,²⁴ en lo que representa una línea coherente de mantenimiento de la legalidad democrática y de respeto del Estado de derecho en la persecución del terrorismo.

Los meses finales de 1983 marcan un periodo clave en la lucha contra ETA. El asesinato del capitán de Farmacia Martín Barrios (el 19 de octubre de dicho año), tras dos semanas de secuestro, es interpretado como una provocación al ejército, y da lugar a movilizaciones masivas de protesta, tanto en Madrid como en el País Vasco, donde no faltan discrepancias entre los partidos en torno al texto del comunicado conjunto y al lema de la manifestación. En esos días se producen los primeros episodios de guerra sucia vinculados a los GAL. El PCE se expresa con rotundidad y con rapidez contra estos hechos, que considera negativos por dos razones fundamentales: vulneran la legalidad democrática y pueden tener un efecto *boomerang*, al revertir en un aumento de los apoyos de ETA y sus partidarios. Igualmente, se siguen rechazando medidas excepcionales para hacer frente a la violencia (es la opinión de

24. El Gobierno español, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, decidió la intervención del ejército para impermeabilizar la frontera franco-española en 1981, en el marco de las medidas tomadas después del golpe de Estado del 23 de febrero para intensificar la lucha contra el terrorismo. La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue una ley aprobada por las Cortes Españolas el 30 de junio de 1982 merced a un pacto suscrito entre el PSOE y la UCD. Fue duramente rechazada por los nacionalistas. Entre otras disposiciones, preveía que la transferencia de competencias se realizaría progresivamente según la capacidad de cada comunidad autónoma hasta llegar a equiparar a unas y otras. El 13 de agosto de 1983 el Tribunal Constitucional negó el carácter orgánico y armonizador de la ley, declarando inconstitucionales 14 de sus 38 artículos.

Ignacio Latierro, *Mundo Obrero*, 4-10 noviembre 1983). La continuidad de las acciones de los GAL en los años posteriores no hizo sino refrendar estas valoraciones, si bien el PCE evolucionó precisamente en esos años hacia posiciones políticas diferentes, particularmente en relación con el terrorismo de ETA.

La dificultad de ETA para abandonar la actividad armada se expresa también en términos sociológicos (*Mundo Obrero*, 30 julio-5 agosto 1982): la importancia de segar la base social de apoyo al terrorismo se hace evidente por el carácter de héroes que adquieren en el entorno familiar y social quienes militan en la organización. Hay una comparación entre la ETA actual y las anteriores: «los militantes de ETA actúan muy alocadamente, en comparación con los que les precedieron». La degeneración de la organización, desde este punto de vista, se hace evidente para el PCE. Es sintomático que esta valoración se haya repetido con frecuencia posteriormente para explicar la trayectoria descendente de ETA en las décadas posteriores, pero sin duda el hecho de que no fuera ampliamente compartida (y de hecho que, por ejemplo, el PCE dejara de sostenerla poco después con el mismo énfasis) contribuyó a la pervivencia de ETA durante mucho más tiempo.

El PCE y el nacionalismo

En la relación del PCE con el nacionalismo vasco, también hay una evolución en las posiciones del PCE a lo largo del tiempo considerado. En esta primera etapa, el PCE reconoce la especificidad vasca, pero considera que puede tener un desarrollo adecuado en el marco de la Constitución y del Estado de las autonomías que se está construyendo a partir de ella: «Euskadi es obra de los trabajadores vascos y también de los “maketos” que han forjado un país que no es obra de gobiernos centralistas ni de los señoritos de la ría» (*Mundo Obrero*, 22-28 septiembre 1980). Desde esa perspectiva, no hay contradicción, al contrario, entre unidad de España y verdadera autonomía. Se pone de relieve la larga historia común que comparten Euskadi y los demás pueblos de España. Se reconoce la existencia de una conciencia nacional vasca; pero se afirma que es la izquierda la única opción política capaz de realizar un proyecto nacional en el que se integren autóctonos e inmigrantes, con el fin de reforzar una relación de Euskadi con los restantes pueblos de España basada en la estrecha colaboración y en la consolidación de la democracia, al tiempo que se avanza hacia la implantación del socialismo en España. Se apuesta por el recono-

cimiento del término *nacionalidad* para Euskadi, dada esa conciencia nacional existente de forma mayoritaria, y este reconocimiento, con sus correspondientes órganos institucionales de autogobierno, es lo que debe hacer posible la integración de Euskadi en la España democrática. Es la negación de esta articulación lo que, en definitiva, favorece el ensanchamiento de la base independentista; de ahí que se hable de separatistas y separadores. Por otro lado, la reivindicación de la autodeterminación, presente en los últimos años del franquismo, ha ido desapareciendo del repertorio del PCE, en coherencia con el apoyo a la Constitución de 1978 y con la demanda y, posteriormente, la defensa del Estatuto de Autonomía. No obstante, aún en el Aberri Eguna de 1978, antes de aprobarse la Constitución, se puede leer en el manifiesto unitario (del que solo se excluyen la UCD y Alianza Popular) lo siguiente: «La democracia no será plena en nuestro pueblo, en tanto no se le reconozca su soberanía y el derecho de autogobierno que posibilite su autodeterminación» (*Mundo Obrero*, 30 marzo-5 abril 1978). Se trata del mantenimiento de una cierta ambigüedad en relación con las políticas de alianzas coyunturales ante determinados eventos (de movilización en este caso), que apenas rebaja la implicación del PCE en esos años con el régimen constitucional. Por otra parte, el PCE de Navarra se integra en el PCE de Euskadi, lo que refleja la posición del partido sobre la cuestión: opción por la integración en Euskadi, en la línea de las demandas nacionalistas, aunque se precisa que habrían de ser los propios navarros quienes decidiesen el futuro del territorio.

La fusión con Euskadiko Ezkerra. La escisión

A principios de los ochenta, la decepción por los resultados electorales y la hegemonía que va adquiriendo el nacionalismo²⁵ llevan al EPK a buscar una política de unidad de la izquierda, que culminará un año más tarde en la fusión con Euskadiko Ezkerra, y en la ruptura del propio EPK. Es su secretario general, Roberto Lertxundi, quien sienta las bases teóricas que darán lugar a la fusión. Lamenta la falta de un proyecto político propio por parte de la izquierda vasca (*Mundo Obrero*, 7-13 marzo 1980), lo que implícitamente supone dos cosas: el reconocimiento de la debili-

25. En las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1980, los partidos nacionalistas obtienen el 65,2% de los votos (Granja, Beramendi y Anguera, 2003: 250).

dad del EPK, subrayado por los magros resultados electorales, y la constatación de que las particularidades de la realidad vasca, «la conciencia nacional vasca», aconsejan la articulación de estrategias diferenciadas en la Comunidad Autónoma. La demanda de unidad se extiende (con poco éxito, como cabía esperar) al PSOE, al que se incluye entre los damnificados por el notable predominio electoral adquirido por el nacionalismo. El movimiento está condicionado indudablemente por la irrupción de Herri Batasuna, coalición a la que se califica de heterogénea, social y políticamente, pero a la que se considera indudablemente conectada a sectores y expresiones de izquierda; sin embargo, Lertxundi entiende que sus prácticas, de apoyo al terrorismo de ETA, introducen fragmentación y descrédito del concepto mismo de izquierda. La dificultad de la izquierda para abrirse paso en el País Vasco está igualmente condicionada por las peculiaridades del marco autonómico y de los conflictos vinculados a la cuestión nacional, que enmascaran los problemas propiamente de clase. La división de la izquierda entre españolistas y abertzales debe ser superada haciendo prevalecer las dinámicas de clase; por ello, la izquierda debe tanto colocarse a la cabeza de la resolución del problema nacional como fortalecer la unidad de clase, que se tiene que plasmar en una acción política común con los trabajadores del resto de España. Euskadi como proyecto nacional se plantea como algo inseparable de la democracia y el socialismo. Se acusa al PSOE de buscar sobre todo el voto inmigrante (particularmente tras el acceso a la secretaría general de Vizcaya de Ricardo García Damborenea), lo que puede fomentar la división en dos comunidades; se aprecia tensión entre esa orientación y una tendencia más vasquista liderada por Txiki Benegas.

Se postula la existencia de un carácter específico del marco de la lucha de clases en Euskadi. La unión con Euskadiko Ezkerra es defendida por Roberto Lertxundi no solo como una vía para superar la dicotomía nacionalismo/no nacionalismo, sino incluso para superar la escisión del movimiento obrero que data de los años veinte, entre socialistas y comunistas. Para ello, propone superar la estrategia independentista por parte de EE y profundizar en medidas para la solución real del problema terrorista. Para intentar salvar las reticencias del PCE y de un sector importante del propio EPK, Lertxundi afirma que no se pretende la modificación de las relaciones en el seno del PCE, pero sí la apertura de canales de autonomía, en la dirección de una estructura de rasgos federales. Sin embargo, esta interpretación contrastaba con los propios

textos acordados entre los partidos fusionados. En la fusión con EE se dirimen algunas de las cuestiones fundamentales que afectan al PCE y a la izquierda vasca en esos años (Quiroga, 2009: 30-31), desde la superación de la división entre socialistas y comunistas (ya referida), que se saldó de forma bastante más liviana con una orientación básicamente socialdemócrata de la nueva formación, hasta la conformación de un nacionalismo que habría de desprenderse de sus nexos históricos con la violencia para avanzar hacia un nacionalismo cívico y defensor de la pluralidad de la sociedad vasca, lo que constituyó las señas de identidad de Euskadiko Ezkerra en su trayectoria hasta su integración en el PSE-PSOE en 1993.

La fusión conlleva la ruptura de las relaciones orgánicas con el PCE, lo que provocará la reacción de la dirección a través del Comité Central. Este no solo no puede aceptar la desvinculación orgánica del partido en Euskadi, sino que rechaza con rotundidad algunos de los planteamientos expresados en el documento que sirve de base para la fusión, como el de la transformación hacia un Estado federal en España como paso hacia la independencia como objetivo final en el marco de una Europa socialista y de los pueblos. Jaime Ballesteros, por el Comité Central del PCE, hace valer el papel desempeñado por el EPK contra el terrorismo, que sin duda ha influido en la evolución positiva de EE, pero echa de menos una alusión expresa de rechazo del mismo en el documento. Lertxundi, por su parte, considera que hay que valorar la evolución de EE, algunos de cuyos dirigentes proceden del proceso de Burgos, y que de una manera rápida han asumido la vía democrática, a través de la política de masas, y la necesidad de organizar un partido de la clase obrera para la consecución del socialismo; ello representa una apuesta que en el fondo significa la derrota de ETA (*Mundo Obrero*, noviembre 1981).

La fusión del EPK con el EIA constituye, sin duda, un episodio de gran trascendencia, tanto por las repercusiones organizativas que conlleva como por las consecuencias políticas que introdujo desde el punto de vista de la recomposición de la izquierda en Euskadi. Por un lado, y desde la perspectiva del EPK, implicó la reducción de este partido a límites prácticamente testimoniales, sin duda en relación también con la profunda crisis experimentada por el partido comunista español en su conjunto. Se puede estimar que hay un componente oportunista en los objetivos de los autores de la fusión; si el sector de Roberto Lertxundi buscaba escapar del agujero electoral en que parecía sumido el EPK, con pocas probabilidad-

des de salvación más allá del apoyo de los entonces hegemónicos partidos nacionalistas, desde el punto de vista de EIA se trataba de dotar a la organización de una consistencia que fuera pareja a unas mayores dosis de estabilidad. El EPK podía ser funcional a ambos efectos, en la medida en que, aun en su modestia, aportaba significativos sectores obreros y una tradición irreprochable de izquierdas, a la vez que podía ser garantía de moderación en la tendencia hacia la integración en el régimen constitucional por el que había ya apostado con claridad la dirección de EIA, operación en la que se inscribía, sin duda, la negociación para poner punto final a la actividad armada de ETA (pm).

Desde la izquierda revolucionaria, lógicamente, la valoración de la fusión es crítica; se analiza que la posibilidad de la convergencia tiene sus bases, por un lado, en la crisis del eurocomunismo (y del PCE en general y en el País Vasco), y por otro, en un desplazamiento a la derecha de EIA. La crisis del EPK se define como una crisis de espacio político, acentuada por la dependencia orgánica de un PCE cuya política eurocomunista busca la credibilidad de la burguesía centralista y la penetración en un aparato de Estado también centralista. No se trata, según esta percepción, de una crisis producida por una radicalización hacia la izquierda como ocurre en el PSUC;²⁶ la crisis del EPK no ha cuestionado ni la línea política de este partido ni a su dirección en Euskadi.²⁷

El giro: de la movilización a la negociación

Desde 1984, aproximadamente, se aprecia un significativo cambio de posición en el PCE sobre el tratamiento del terrorismo, y, en consecuencia, sobre sus propuestas en torno al encaje de Euskadi en España. Como hecho sintomático, en el *Mundo Obrero* del 6 al 12 de enero de ese año aparece una entrevista con Jon Idigoras; salvo error u omisión, es la primera vez que un miembro destacado de HB aparece en la prensa del PCE. Igualmente, la taxativa negativa a una salida negociada mantenida hasta entonces comienza a modularse. El significativo editorial del número del 30 de agosto al 5 de septiembre lleva por título «Negociar no es abdicar». Por primera vez, se considera la posibilidad de la negociación, con nume-

26. El PSUC atraviesa por las mismas fechas una fuerte crisis, que acabará reduciendo un partido con una gran implantación en la sociedad catalana a una presencia mínima (Molinero e Ysàs, 2010: 327 y ss.).

27. Actas del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria, p. 65.

rosas salvedades y siempre preservando la supremacía del Estado de derecho y la legitimidad exclusiva de los representantes populares para la toma de decisiones; sin embargo, la contemplación de una negociación que antes era criticada con suma dureza implica un giro que no puede pasar inadvertido. ¿Qué razones explicarían semejante cambio? Podemos apuntar, de entrada, alguna razón que tiene que ver con el papel del PCE en la democracia española en ese momento. La llegada del PSOE al Gobierno en octubre de 1982 ha cerrado un ciclo; desde luego para el conjunto de la sociedad española, pero también para el propio partido. Las posibilidades de convertirse en un partido de gobierno, hegemónico en la izquierda como el Partido Comunista Italiano (modelo imaginado por Carrillo y la dirigencia comunista en los años del tardofranquismo [Sánchez Rodríguez, 2004]), han quedado definitivamente arrumbadas después de octubre de 1982. Si ya las elecciones anteriores habían reducido extraordinariamente las expectativas del PCE, el desplome electoral, con la reducción a cuatro diputados de la representación comunista en el Congreso, junto con la extraordinaria mayoría lograda por el PSOE, dan paso a una nueva etapa en la que el PCE debe reorientar drásticamente su política. La dimisión de Santiago Carrillo y su sustitución por Gerardo Iglesias sella de alguna manera esta transformación. Naturalmente, no hay una traslación automática de estos cambios a la política antiterrorista, no al menos directamente ligada a las consideraciones anteriores. No obstante, sí que repercute desde un punto de vista: la frustración por el desequilibrio establecido entre los dos grandes partidos de la izquierda se acentúa por la implantación de políticas muy poco progresistas por parte del PSOE. Todo el proceso de permanencia de España en la OTAN, que desemboca en el referéndum de marzo de 1986 después de un cambio en las posiciones del PSOE plagado de ambigüedades y mensajes contradictorios a la ciudadanía, concentrará la actividad y la oposición del PCE en el periodo. Pero no será el único motivo de rechazo al Gobierno: la reconversión industrial, con fuerte impacto en el País Vasco, y la guerra sucia iniciada en octubre de 1983, promovida desde instancias gubernamentales, terminarán por convencer al PCE de que el PSOE no hace una política de izquierda.²⁸ La consecuencia es que a partir de entonces la ope-

28. «El cambio socialista no consistiría en la aplicación de un programa de izquierdas, sino en la “modernización” del país, lo que desde luego no era poco, aunque no suficiente para quienes aspiraban a mucho más» (Molinero e Ysàs, 2008: 41).

sición a los Gobiernos del PSOE primará sobre otras consideraciones en la política del PCE, lo que tendrá sus repercusiones en relación con la posición ante ETA. Así, la crítica a ETA se acompaña ya de referencias reiteradas al apoyo social de que goza la misma en la sociedad vasca y a la imperiosa necesidad de articular medidas políticas destinadas a socavar ese apoyo. Desaparecen en todos los análisis y propuestas sobre el terrorismo las llamadas a la movilización popular, así como la negativa rotunda a la apertura de negociaciones. Se insiste en la adopción de medidas jurídicas, políticas y diplomáticas por parte del Estado, además de una mayor implicación del Gobierno vasco. Así, en relación con la concesión de las primeras extradiciones por el Gobierno francés (septiembre de 1984), el EPK manifiesta que, sin oponerse a ellas, su opinión es que la solución al problema de ETA y la pacificación de Euskadi no podía buscarse exclusiva, ni siquiera fundamentalmente, por esa vía, sino sobre la base del necesario acuerdo entre las fuerzas democráticas vascas en primer término y entre las administraciones central y vasca después. También se reitera la necesidad de un acuerdo entre el PSOE y el PNV (Gobierno central y autonómico) en la lucha contra ETA. Respecto a las posibles medidas tendentes a la ilegalización de HB, Latierro se pronuncia en contra, ya que eso supondría su consolidación desde el punto de vista político. Se trata, en su opinión, de derrotarla políticamente.

En 1984, en consecuencia, se perfila un nuevo diseño de la política anti-ETA. Aunque se sigue manteniendo la negativa a la negociación formal, dado que no se puede atribuir a ETA ninguna representatividad, se debe buscar una salida que constituya un «puente de plata» para el abandono de las armas, que puede venir dado por el diálogo entre el Gobierno central y las fuerzas políticas vascas: tan presentes en la prensa comunista están ya la oposición al terrorismo como las críticas al Gobierno central, particularmente al ministro del Interior, José Barrionuevo. La muerte en extrañas circunstancias durante su detención de Mikel Zabazza, en diciembre de 1985, exige, para el PCE, la dimisión de Barrionuevo; igualmente, se participa en las movilizaciones contra la ley antiterrorista, que «ha demostrado que no sirve como instrumento democrático para combatir el terrorismo, y que ofrece posibilidades de que se violen los derechos humanos y se extienda la represión a un sector de la población no implicada en actividades terroristas, pero que simpatiza con las ideas independentistas» (*Mundo Obrero*, 9-15 enero 1986). El ministro del Interior había acreditado su total incapacidad

para desarrollar su tarea con talante democrático: promoción de policías que fueron torturadores, carácter militar de la Guardia Civil, no desaparición de los malos tratos y las intimidaciones a los detenidos, burla de las garantías legales de asistencia letrada, espionaje a los partidos políticos... Por otra parte, la salida de Ignacio Latierro y sus afines, que siguen a Carrillo en su escisión del partido en 1985,²⁹ favorece esta evolución de las posiciones del EPK. El dirigente citado, junto a José Luis López de Lacalle y otros militantes del partido, habían destacado hasta entonces, y lo siguieron haciendo tanto desde los grupos en los que militaron después como desde su posición personal y profesional en el combate sin concesiones contra ETA y su entorno.

Por el contrario, el nuevo secretario general del EPK, Felipe Robledo, entiende la recuperación de la influencia del EPK en la sociedad vasca a partir de la apertura hacia sectores progresistas, entre los que incluye a EE y HB. La consideración que esta última organización merece a los comunistas ha experimentado una gran mutación, sin que aparezca una explicación clara que la justifique. Robledo insiste en la adopción de medidas políticas para hacer frente al terrorismo y en la derogación de la ley antiterrorista, aunque estima que la alternativa KAS no cuenta con apoyo suficiente en la población vasca («si se hiciera una consulta saldría totalmente derrotada» [*Mundo Obrero*, 13-19 febrero 1986]). Se apuesta por una acción sostenida, unitaria y enérgica contra el terrorismo, pero la palabra *movilización* no aparece ya en el discurso del PCE.

En un editorial publicado en *Mundo Obrero* (14-20 agosto 1986) se insta a un supuestamente reticente Felipe González a abordar la negociación. Se parte de la constatación de la indiscutible base social y apoyo político que recibe el terrorismo (constatación que responde en parte al ascenso experimentado por HB en las últimas elecciones generales, de junio de ese año). La alternativa sería ir al fondo del problema, lo que habría de conllevar la combinación de medidas policiales y medidas políticas negociadas. No se trata, en opinión del PCE, de negociar con ETA, sino «de negociar todos, los interesados en erradicar el terrorismo y los interlocutores que hagan posible la eficacia de la negociación; se trata de sentarse a

29. Santiago Carrillo, una vez abandonada la secretaría general del PCE, manifestó pronto sus discrepancias con Gerardo Iglesias. En 1985 abandonó el partido, formando la Mesa por la Unidad de los Comunistas, que posteriormente se convertiría en el Partido de los Trabajadores de España, la mayor parte de cuyos integrantes acabaron por integrarse en el PSOE.

discutir las fuerzas políticas vascas, incluso aquellas que directa o indirectamente tienen más relación con el fenómeno terrorista, como HB...». Evidentemente, se establece como condición que cualquier inicio de discusión debería contar con el compromiso de ETA de renunciar a la violencia. Se critica a Felipe González, quien, «de forma demagógica e irresponsable», pregunta qué concesiones habría que hacer a ETA en una negociación:

La pregunta es falsa: no se trata de hacer concesiones a nadie, se trata de que, con la Constitución en la mano y sin salirse de ella, es posible dar respuesta y satisfacción a muchas demandas que hoy solicita un gran sector del pueblo vasco: desarrollar al máximo el Estatuto de Guernica, democratizar las FOP [fuerzas de orden público], eliminar los GAL, ajustar la práctica policial al cumplimiento de la Constitución, derogación de la ley antiterrorista.

Se advierte una seria inconsistencia en estas propuestas; parece obvio que tales medidas no bastarían para que ETA replanteara su actividad armada, de la misma manera que una negociación planteada en términos tan confusos como los expuestos anteriormente habría de ser tan improbable como inútil. El crescendo de las críticas del PCE llega a acusar al Gobierno de jugar con la estrategia en relación con el terrorismo para frenar, entre otras cosas, el proceso de transferencias al Gobierno Autónomo en aplicación del Estatuto de Guernica.

La deriva del EPK y su entorno se aprecia con toda claridad en la campaña electoral de Izquierda Unida³⁰ de 1986, como queda reflejado en el propio lema de la campaña: «GORA Euskadi. Hace falta», con la ikurriña como fondo. Para IU, el marco político no puede nacer de otra cosa que del Estatuto de Guernica y el más amplio autogobierno. «Un proceso que tiene un nombre, estado federal, y un ritmo nacional, más o menos largo, que satisfaga el derecho de autodeterminación, con el objetivo de la reconstrucción económica y social de Euskadi.» Se considera que la autodeterminación es un derecho inalienable de todos los pueblos, aunque se matiza que el Estatuto de Guernica es «nuestra forma de autodeterminación» (*Mundo Obrero*, 6-12 noviembre 1986). De nuevo se observa una cierta inconsistencia en el planteamiento; la reivindicación de la autodeterminación, recuperada en esta fase, se combina con la defensa del Estatuto (otra cosa sería difícilmente enten-

30. Izquierda Unida nace en 1986, como una coalición de la que el PCE era el partido principal.

dible tras el apoyo firme otorgado a este por el EPK antes y después de su aprobación). El desarrollo de la identidad nacional vasca, marcado como un objetivo de Ezker Batua, señala una aproximación a los postulados nacionalistas, por más que sus dirigentes nieguen la evolución. La aproximación a HB se intensifica: Javier de Castro, candidato por Vizcaya, considera que podría plantearse un acercamiento a HB, si esta decidiese acudir a las instituciones. Se insiste en que en HB hay un componente importante de izquierdas. Francisco Romero Marín, dirigente nacional del PCE, proclama, en abril de 1987, la necesidad de contar con el amplísimo sector juvenil que apoya el terrorismo, lo que hace imposible erradicar este solamente con medidas policiales o con preponderancia de estos medios. Al tiempo que desarrollan estos planteamientos, el EPK toma la iniciativa de constituir una comisión contra el terrorismo en Euskadi, que cuenta con intelectuales, profesores y personalidades interesadas en erradicar el terrorismo desde la izquierda. Critican al Gobierno por el mantenimiento de una concepción exclusivamente policial, lo que ha ocasionado el fracaso de su política en estos años (*Mundo Obrero*, 30 julio-5 agosto 1987). La falta de noticias posteriores hace pensar que dicha comisión no tuvo demasiado alcance.

Por esas fechas, comienzan a hacerse públicos los contactos del Gobierno con ETA, que desembocaron en las negociaciones de Argel. En torno a la negociación, el PCE propone estas premisas: el límite ha de ser la Constitución, no conceder protagonismo a ETA, y aplicar una política de reinserción generosa y una solución razonable para los presos. La apertura de negociaciones directas entre el Gobierno y ETA es saludada favorablemente por el PCE e IU. Igualmente, la firma de los pactos antiterroristas de Madrid, Navarra y Ajuria Enea cuentan con el apoyo de IU, que en cualquier caso deja traslucir en sus pronunciamientos un llamamiento al Gobierno para que profundice en las demandas nacionalistas y en el avance del autogobierno. El problema vasco, se viene a afirmar, no concluye con el abandono de las armas por parte de ETA: exige una acción política en Euskadi y en el Estado que permita el desarrollo de la identidad vasca. Se defiende la federalización del Estado, en lo que supone una articulación territorial del conjunto de España que no acaba de ser definida de manera inequívoca. En este sentido, a partir de esos años Izquierda Unida optará fundamentalmente por la conformación de una propuesta de organización territorial que no estará exenta de serias contradicciones. Se afirma la validez del Estatuto de Guernica y de la Constitución, susceptibles asimismo de reforma, pero al tiempo se reconoce como elemental e «inaliena-

ble» el derecho de autodeterminación, en el marco de cuyo ejercicio IU rechaza la independencia, ya que su apuesta es la libre unión federal con el resto de los pueblos del Estado. La coherencia del conjunto se salva con la consideración de que la aprobación del Estatuto es una manera de ejercer la autodeterminación en un momento dado; la insistencia en la reivindicación vendría a señalar que la culminación del mismo supondría la puesta a consulta de la población vasca de otras opciones que en su momento no tuvieron cabida: la independencia o, unos años más tarde, propuestas como la del lehendakari Ibarretxe, que podríamos calificar de confederal. La evolución en los planteamientos deja lugar a pocas dudas sobre la voluntad de acercarse a las fuerzas nacionalistas, HB incluida: «para la pacificación de Euskadi hay que contar con HB, si no es imposible», proclama Pedro Santisteban, secretario general del EPK (*Mundo Obrero*, 23-29 junio 1988).

El rechazo a ETA se expresa cada vez en mayor medida con un lenguaje que ya no hace referencia a las víctimas ni al carácter fascista que se achacaba a la organización años antes. El problema, se señala en la Declaración de la Conferencia Provincial de Vizcaya del EPK, «es la distorsión de la vida política cotidiana en nuestra sociedad, relegando a un segundo plano la lucha de clases» (*Mundo Obrero*, 7-13 febrero 1990). También se añade que el rechazo debe manifestarse a través de argumentos políticos, con razonamientos basados en la propia ideología y sin caer en los tópicos ni en el lenguaje utilizado por la derecha y por el poder. El EPK trata de hacerse un hueco distanciándose del discurso antiterrorista del Gobierno y los partidos mayoritarios; en ese empeño también se marcan distancias con el Pacto de Ajuria Enea, que se considera impulsado por la derecha y que ha servido a esta para armarse ideológicamente y utilizarlo como freno de las reivindicaciones populares, tanto de carácter nacional como social (no deja de ser chocante que tal caracterización se aplique a un pacto firmado por IU). El EPK se considera el partido más capacitado para establecer nexos de unión entre las reivindicaciones sociales y nacionales del pueblo vasco y de la izquierda estatal. Sostiene que la búsqueda de la liberación social y nacional de Euskadi no convierte a una fuerza política en nacionalista. No se puede confundir el nacionalismo —se viene a afirmar— con el deber de todo comunista de luchar por la tierra en la que vive, trabaja y desarrolla su lucha política cotidiana. Esa combinación de lucha social y lucha nacional habría de permitir al EPK ocupar el lugar que por tradición, historia y principios políticos le correspondería y en el que había sido sustituido por otros.

Muy pronto se da por caduco el Pacto de Ajuria Enea (*Mundo Obrero*, 24-30 octubre 1990). Apenas dos años después de su nacimiento, se constata que no ha conseguido aislar a HB ni acabar con el terrorismo; es obvio que IU no se encuentra cómoda en ese acuerdo, aunque resulta difícil renunciar a él por el coste que supondría la ruptura de la unidad de las fuerzas democráticas.

Quizá Félix Martínez de la Cruz, responsable electoral de IU entre 1990 y 1997, exprese con absoluta claridad las motivaciones últimas de las posiciones adoptadas por Ezker Batua; en respuesta a las reticencias expresadas por anteriores dirigentes de la coalición en Euskadi, como Rafael Simón o Paco Doñate, que expresan serias discrepancias con la deriva adoptada, el dirigente federal razona los factores que la han propiciado (Flor, 2008: 182-188):

Yo entendí [...] que EB tendría que ser el proyecto de EE, porque ya para entonces EE estaba en vías de extinción, ya que lo había metabolizado el aparato del PSE. [...] Yo entendí que quien verdaderamente tenía un discurso de izquierdas sin excluir a los nacionalistas de izquierdas podía ser EB. Y algunos pensamos en las posibilidades que eso ofrecía. [...] Pero la identidad que defendía Andoni Pérez de Ayala es la de los 6.000 votos, o como mucho los 14.000.

No es posible una manifestación más diáfana del componente puramente electoralista de la evolución del EPK y de EB en la línea descrita. De cara al futuro, la prioridad no parece haber cambiado: «EB debe intentar atraer a Aralar y si se acaba ETA, estaría bien atraer a Batasuna, una vez que se decanten los nacionalistas y la gente de izquierdas» (Flor, 2008: 182-188). Andoni Pérez de Ayala, por su parte, explica también el cambio como producto de la presión del nacionalismo, ejercida sobre una fuerza política muy débil en cuanto a implantación social, apoyo electoral y también desde el punto de vista de la solidez ideológica (Flor, 2008: 215). En este último sentido, es relevante el análisis de Kati Gutiérrez, quien considera que la expansión del nacionalismo radical ha achicado el espacio de la izquierda en Euskadi, que ha llegado prácticamente a desaparecer debido a su política seguidista del nacionalismo progresista o radical; opina que se hace absolutamente necesario para la izquierda española revisar sus alternativas políticas en Euskadi (Gutiérrez Muñoz, 1987).

La construcción de la autovía de Leizarán, que debía unir Pamplona y San Sebastián, fue otro episodio en el que confluyeron las tensiones derivadas de la interferencia de la actividad armada y un

movimiento ecologista de oposición al impacto ambiental de la autovía. Tras un largo proceso salpicado de movilizaciones populares y atentados de ETA, el PNV decide acordar con la coordinadora Lurralde, surgida de sectores abertzales, un nuevo trazado (Fernández, 1989). La posición de IU sobre el conflicto es a veces confusa, pero impera el rechazo al acuerdo alcanzado con la coordinadora Lurralde. Tanto Andoni Pérez de Ayala (*Mundo Obrero*, abril 1992) como Javier Madrazo (*Mundo Obrero*, mayo 1992) subrayan la cesión de las autoridades a la presión terrorista y cuestionan la representatividad de la coordinadora ecologista para modificar un trazado decidido por las autoridades democráticas, que además habían convocado a la ciudadanía en su defensa. También critican al PNV por pactar con HB a espaldas del resto de los partidos democráticos, en lo que sin duda supone una ligera inflexión respecto a las posiciones referidas, proclives a la negociación en torno al problema de la violencia.

Si se ha destacado la evolución en la posición del PCE desde los primeros años de la transición, un cierto paralelismo cabe establecer con los cambios producidos en la posición de Javier Madrazo, coordinador de Ezker Batua desde 1994 hasta el 2009. En 1992, Madrazo (portavoz de Gesto por la Paz y ya miembro del Comité Central del EPK y del Consejo Político de EB) niega cualquier atisbo de justificación política del terrorismo, y proclama la necesidad de la movilización popular para acelerar su final (*Mundo Obrero*, mayo 1992):

[...] ganar la calle para la sociedad es decisivo. La violencia se mantiene entre otras razones por el apoyo social... Se debe lograr que sea profundamente antipopular y motivo de sonrojo el defender la violencia como modo de acción política. Ahora que se habla tanto de que algo se mueve en el mundo de ETA-HB, hay que recordar que estos movimientos son directamente proporcionales al movimiento de la propia sociedad.

Sin embargo, una vez alcanzada la dirección de la coalición, Madrazo orienta su discurso y la política de la dirección en un sentido bastante diferente. Obviamente, el rechazo a ETA se mantiene, pero vuelve al primer plano la petición de «medidas desde el Gobierno que faciliten el abandono de las armas por parte de los terroristas». Se considera que la política dirigida a aislar a HB favorece la cohesión en torno a los inmovilistas de ese mundo, por lo que deben abrirse vías de diálogo. De hecho, EB plantea políticas de diálogo con el mundo de los presos y familiares, personas y organizaciones del

entorno etarra. Aun desde un rechazo del terrorismo que se extiende a los puntos de vista ético, estratégico y político, EB desarrollará una política de acercamiento al nacionalismo que culminará con su entrada en el Gobierno del PNV desde el año 2001. Dicha política pasará por la defensa de una solución negociada de la violencia, en la línea propugnada por Elkarri,³¹ combinando el rechazo del terrorismo con las críticas al «inmovilismo» de los gobiernos centrales, particularmente al Gobierno del PP en los años del Pacto de Estella. Este acuerdo marca de forma intensa el cariz próximo a los nacionalistas del posicionamiento de EB en estos años; aunque se califica su política de «puente entre nacionalistas y no nacionalistas», lo cierto es que la práctica los vincula con los primeros y los separa de los segundos, a quienes rechazan de forma sistemática. EB se ha caracterizado desde entonces por una política cercana al PNV, y, en relación con ETA, por estimular la negociación para acabar con la violencia. Frente a la movilización propuesta con anterioridad, y también por Madrazo antes de ser coordinador, se prima la defensa del diálogo y la oferta de contrapartidas a ETA, como ejemplifica el Pacto de Estella. Desde el punto de vista de la articulación territorial del Estado, el «federalismo de libre adhesión» defendido por la coalición, tanto en el ámbito vasco como en toda España, implica una concepción de trazos difusos, en los que la voluntad de defender la autodeterminación (sin entrar nunca en excesivos detalles sobre la articulación de la misma, siempre compleja y conflictiva) se hace compatible con un modelo de Estado teóricamente federal, pero que en la práctica no responde estrictamente a esta caracterización. Fruto de este difícil equilibrio es el propio modelo adoptado en el interior de la coalición de izquierdas, en el que EB actúa de forma «soberana», disponiendo de una capacidad para la toma de decisiones de la que carecen otras federaciones territoriales.

Ezker Batua es la única fuerza política formalmente no nacionalista que firma el Pacto de Estella (o Lizarra). Planteado como un acuerdo para la pacificación, ratificado tres días después de su aprobación por la tregua de ETA, el Pacto de Estella viene a ser también, y así se presenta, una suerte de proyecto de construcción nacional, como pone de manifiesto no tanto su texto literal (aunque también) como sobre todo la parte no pública, y acordada en secreto entre ETA y el PNV, en la que se ponía como condición para el

31. Para una aproximación a los postulados de esta organización, véase Elkarri (2002). Una exposición en extenso de las bases teóricas y procedimentales para la intervención en conflictos puede encontrarse en Fernández (2006).

pacto el compromiso de no pactar con fuerzas de ámbito españolista (una referencia inequívoca al PSOE y al PP, evidentemente). Javier Madrazo (*hika*, 107, enero 2000) defiende su interpretación del acuerdo:

[...] la riqueza de Lizarra reside precisamente en constituir un acuerdo entre diferentes: entre fuerzas nacionalistas y no nacionalistas, entre fuerzas de izquierda y de centro o de centro-derecha...

Por otra parte, la continuación, e incluso intensificación, de la *kale borroka* durante los meses de vigencia de la tregua dio argumentos a sus detractores, pues ponía de manifiesto que, una vez más, la violencia era graduada en función de los intereses estratégicos de ETA, y no había una voluntad firme y real de acabar con ella. La ruptura de la tregua, en noviembre de 1999, dinamitó las expectativas depositadas, y supuso un coste para todos los firmantes del pacto, pero seguramente en mayor medida para IU/EB, que avaló con su presencia un acuerdo nacionalista que se reveló fallido. El análisis del fracaso del proceso abierto en Estella es significativo asimismo de las coordenadas en las que se mueve EB: el proceso de normalización se bloquea tanto por el inmovilismo del Gobierno como por la ruptura de la tregua de ETA. Según señala Madrazo en el número citado de la revista *hika*, la apuesta pasa por facilitar una salida airoso a ETA:

[...] la razón está de nuestra parte, lo que planteamos es una solución civilizada al conflicto. Y esta es una vía que la gente entiende mejor que la del aplastamiento, la de la victoria total de una parte sobre otra.

El rechazo de la violencia como motor de una dinámica que facilita la dialéctica de los extremos es otra de las formulaciones de Madrazo y de EB que pone de relieve el acercamiento que se hace a la misma; no solo hay en esta afirmación el establecimiento de una simetría difícilmente aceptable a la vista de la realidad de los hechos prolongados y contumaces, sino que se estima que una de las consecuencias negativas de la actividad de ETA reside no en los daños que causa a seres humanos de ese y otros partidos, sino en que permite «al otro extremo» (el PP) desplegar, al parecer, un discurso inaceptable:

Yo sí valoro que el PP solo ve una solución al problema que es la policial. Pero no tanto porque pretenda derrotar a ETA, sino porque rechaza abordar de frente los problemas políticos presentes hoy.

Entrar en estos problemas abre el debate sobre el modelo de Estado, y esto es algo a lo que, de siempre, le tiene muchísimo miedo, ya que temen que pueda escapárseles de las manos.

Las serias dudas suscitadas en el conjunto de IU federal, probablemente más por la perspectiva de su escasa popularidad en el resto de España (con el consiguiente riesgo de pérdida de votos, presagio que se reveló acertado) que por una discrepancia de fondo con una apuesta que encajaba con la política defendida por IU en el País Vasco y en el conjunto de España en los últimos años, alentaron tensiones entre Ezker Batua y otras federaciones de IU. La dirección federal apoyó la apuesta de Javier Madrazo, probablemente más por alineamientos de orden interno (Madrazo había sido uno de los apoyos de Gaspar Llamazares para su elección como coordinador general de IU) que por otras razones. No obstante, la ruptura de la tregua por parte de ETA provocó una mayor presión desde IU hacia su federación vasca, que esta trató de salvar mediante la convocatoria de un referéndum entre la militancia para decidir sobre la permanencia o no en el acuerdo; se decidió finalmente la salida del mismo, de forma poco menos que inevitable una vez que ETA había reanudado los atentados. Madrazo explicita los acuerdos sustanciales que unen la posición de EB con la de IU:

[...] en el conjunto de IU que ha conformado una base sólida para el acuerdo: una salida dialogada, una salida negociada, rechazo a una salida basada en la actuación policial, una visión determinada de la política penitenciaria, una visión de los derechos democráticos de los pueblos, el derecho a la autodeterminación...

Pero las discrepancias no se limitaban a las diferencias descritas mantenidas entre EB y la dirección federal de IU. En el seno de la propia EB se abrieron paso tendencias de opinión que cuestionaban la dirección conferida por Javier Madrazo a la organización. Además de la presencia de sectores que ponían en entredicho el acercamiento al nacionalismo propugnado por la dirección de Madrazo, también se consolidó desde finales de los años noventa una corriente —Ekaitza— que impulsaba una toma de posición muy próxima a la de los partidos nacionalistas, y que llegó a conformar mayorías dentro de la organización junto al sector de Madrazo, hasta su abandono de la misma, en diciembre del 2008, para dar lugar a una nueva formación política, Alternatiba. Ekaitza apostaba de modo inequívoco por la construcción nacional de

Euskadi y abogaba por la conformación de IU/EB como una fuerza de la izquierda nacional vasca. Según Óscar Matutes, el líder de esta corriente, el dilema de EB ante la ruptura de la tregua por parte de ETA no era la permanencia o no dentro de Lizarra, sino el afianzamiento de la soberanía de EB/IU con respecto a IU federal, ya que el debate sobre Lizarra había sido impuesto desde Madrid. Para Ekaitza, no había lugar a dudas (*hika*, 107, enero 2000):

Lizarra-Garazi sirve y así lo defenderemos en el próximo referéndum en las bases de EB/IU; es la herramienta, que no tótem, más eficaz para resolver el conflicto, pero también para dar la palabra y la decisión a nuestro pueblo. Y por si fuera poco, es una oportunidad importantísima para deslegitimar y atacar a un estado centralista y reaccionario. ¿Qué más podemos esperar las gentes de la izquierda plural de Euskal Herria?

No obstante, la apuesta de Javier Madrazo y el grupo dirigente de EB, apoyado por la dirección federal de IU, siguió siendo la de la alianza con los nacionalistas; aunque el discurso insistía en la vocación de EB de constituirse en un puente entre las dos orillas, en un mediador para evitar el «choque de trenes» (es decir, de los dos nacionalismos enfrentados, el vasco y el español), la práctica desmintió reiteradamente tal orientación, como se puso de manifiesto con toda claridad con la presencia de EB en el Gobierno vasco durante dos legislaturas, junto al PNV y EA. Por si la presencia en el Gobierno no fuera suficiente para acreditar la opción escogida por EB, su posición durante la tramitación de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, presentada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, situó de forma inequívoca a EB junto al nacionalismo vasco, pese a las protestas de no alineamiento esgrimidas; es cierto que EB presentó su propio plan, que defendía una propuesta de federación en el Estado español, pero no lo es menos que la aprobación de la propuesta del lehendakari en el Parlamento vasco fue posible gracias a los votos de EB. De hecho, se resalta que la virtud del Plan Ibarretxe consiste en que constituye una alternativa de solución al problema vasco; aunque se reconoce que quizá no sea el más adecuado, al menos es un punto de partida que puede en su desarrollo ampliar sus planteamientos y ganar más adhesiones. EB afirma asumir sin tapujos el hecho nacional vasco, así como la pluralidad identitaria consustancial a la sociología vasca; presenta su propuesta como la síntesis de la defensa del federalismo, la autodeterminación, la república, la justicia social y la colaboración entre movimientos

sociales y sindicales frente a la globalización del mercado, que no de derechos y libertades; es la izquierda del diálogo, de la no violencia y el respeto a las voluntades populares y a todos los derechos humanos sin excepción (*hika*, 107, enero 2000). Desde el punto de vista de la pacificación, las posiciones de EB pueden ser asimiladas sin apenas distinción a las del nacionalismo conservador, o a las propias del «tercer espacio» (representado fundamentalmente por Elkarrri), acusadas en ocasiones de equidistancia, y que han hecho siempre hincapié en la negociación y en resaltar la naturaleza política del conflicto, necesitado, en consecuencia, de medidas políticas para su resolución, y de un diálogo amplio para llegar a acuerdos con todos los sectores de la sociedad vasca, incluida la llamada izquierda abertzale. Este discurso perdió algo de su vigor tras la ruptura por parte de ETA del proceso de paz impulsado por Rodríguez Zapatero tras su llegada a la presidencia del Gobierno con el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, ruptura que debilitó notablemente las posibilidades de mantener un discurso favorable a la reapertura de negociaciones con una ETA que sistemáticamente había mostrado su rechazo a un final pactado de la violencia.

En las elecciones municipales del año 2007, EB acude en coalición con Aralar; se trata de un acuerdo entre una fuerza de la izquierda independentista y otra que «es la suma de diversas culturas de la izquierda, en su mayor parte de tipo federalista» (*hika*, 186, marzo 2007). Se trata de configurar un polo de izquierda plural, alternativa, que busca el apoyo de quienes no se identifican con el PSOE ni con Batasuna, y, más a medio y largo plazo, de abordar la reconstrucción de la izquierda vasca en el tiempo post-ETA. Junto con el rechazo a las vías armadas, la coalición se plantea el reconocimiento de Euskal Herria como sociedad con identidad propia y con derecho a decidir su futuro:

Una Euskal Herria basada en la libre decisión de todas y todos sus ciudadanos. Una Euskal Herria que respete y asuma las distintas identidades nacionales que conviven en ella. Que no impone ninguna y que apuesta por el acuerdo entre ellas. Una Euskal Herria plural que respeta escrupulosamente los deseos de las distintas partes que la componen.

Zutik, por su parte, está dispuesta a unirse a la coalición en aquellas localidades donde se considere de interés, en función de criterios tales como el que la participación de Zutik responda a la realidad y a la implantación en los pueblos, y la consideración de si

se han apreciado contradicciones insuperables en las experiencias habidas de participación y gestión en los gobiernos municipales (*hika*, 186, marzo 2007).

Por otra parte, es significativo desde el punto de vista de la postura de EB que prácticamente todas las iniciativas adoptadas por las fuerzas políticas democráticas y por el Gobierno de Madrid para perseguir al entorno radical de ETA han contado con la oposición de EB y de IU, casi siempre con el argumento de su ineficacia y de la utilidad que el propio MLNV iba a obtener al reafirmar su discurso victimista, reforzando asimismo su tesis sobre las deficiencias de la democracia vigente en España. Aunque el tiempo no parece haber dado la razón a los pronósticos de EB, no hay cambios sustanciales en su discurso, que sigue apostando por el respeto de «todos los derechos humanos» y por la libre concurrencia de todos los proyectos políticos presentes en Euskadi, al tiempo que se exige a ETA —lo que no puede obviarse— el cese definitivo de la violencia. Como se apuntaba en las declaraciones de Félix Martínez, la alianza electoral con Aralar incide en la misma línea, sin duda alimentada por la esperanza de obtener réditos electorales del amplio sector social huérfano de su primera opción política por la ilegalización de las fuerzas nacionalistas vinculadas a ETA. También parece que en un previsible futuro no lejano sin ETA, Ezker Batua pretende tener mayores posibilidades en este entorno respecto al sector social que se mueven en el ámbito de los partidos llamados constitucionalistas (PSOE y PP), si bien la competencia no es pequeña, pues a Aralar se le debe añadir la escisión producida en la propia Ezker Batua con la aparición de Alternatiba, en diciembre del 2008.

LA EVOLUCIÓN DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

El tardofranquismo y la transición

Para el seguimiento de la posición de la izquierda revolucionaria se han analizado el órgano de la Liga Comunista Revolucionaria (*Combate*) entre 1978 y 1990, el del EMK (*Zer Egin?*) entre 1970 y 1983, y el de Zutik (*hika*) entre 1991 y el 2000. Aunque en este apartado hemos incluido a estas organizaciones bajo el epígrafe de *izquierda revolucionaria*, no se deben olvidar las diferencias existentes entre ellas, y particularmente entre la LCR y el MC, tanto por su origen como por sus planteamientos políticos, hasta el momento en que se fusionan (1991): insertada en la tradición trotskista y perte-

nciente a la IV Internacional la LCR, más cercana al maoísmo la segunda, si bien con el tiempo abandona esta adscripción para conformar una organización de la izquierda revolucionaria sin referente claro internacional, y con una tendencia manifiesta a asumir las reivindicaciones nacionalistas de los pueblos del Estado español, sobre todo tras la aprobación de la Constitución de 1978 y la consolidación de la monarquía parlamentaria. No obstante, ambas organizaciones confluyen en 1991, después de una evolución que las lleva a compartir buena parte de sus análisis y de sus posicionamientos políticos en la segunda mitad de la década de los ochenta. La confluencia se facilita por una práctica muy volcada en los movimientos sociales (pacifismo, ecologismo y feminismo, fundamentalmente), donde las coincidencias en la actividad militante entre los militantes de ambas organizaciones son notorias.

Es obligado referirse de forma previa al origen de la LCR y el MC, dado que comparten su característica de ser ramas separadas del común tronco etarra. En los dos casos, la escisión se produce en razón de la dicotomía nacionalismo/socialismo que atraviesa la historia de la organización desde la IV Asamblea. La salida de ETA, en ambos casos bajo la acusación de «españolismo», dará lugar a la constitución de formaciones comunistas de ámbito español: el Movimiento Comunista (EMK en Euskadi) a partir de ETA-Berri y Komunistak, y la LCR (LKI en Euskadi) a partir de ETA-VI (Garmendia, 1995; Jáuregui, 1981). Junto con una crítica de los planteamientos nacionalistas de los sectores que siguen vinculados a ETA (posteriormente escindidos en ETA militar y ETA político-militar), en estas escisiones izquierdistas subyace igualmente el rechazo de la lucha armada «individual» y la necesidad de incidir en la movilización de masas como motor de la lucha por el socialismo.³²

32. Curiosamente, años después algún miembro de la LKI lamenta la dirección escogida en aquella encrucijada, en una manifestación sintomática de la deriva de la izquierda revolucionaria en las décadas transcurridas: «Algunos nos preguntamos, veinticinco años después de que ETA-VI equivocara el camino rompiendo drásticamente con el nacionalismo por razones de pura especulación ideológica, si lo molesto del nacionalismo no son los propios nacionalismos, tal y como se han configurado históricamente —etnicistas, etnocéntricos, excluyentes, interclasistas, híbridos, simbolistas y defensivos—, y si no se perdió una oportunidad histórica de configurar una izquierda nacional —y, desde ese punto de vista, abertzale— que, realmente, fuera ambas cosas a la vez —izquierda y nacional— sin chirridos. Quizás fue el miedo a reinventar el marxismo práctico en aquellos tiempos de ortodoxias» (Ibarra y Zallo, 1995: 74).

En la mirada de la LCR/LKI y del MC/EMK hay una evolución desde los planteamientos del final del franquismo y los primeros años de la transición —que diferencian con cierta claridad lo que representa un partido de la izquierda revolucionaria respecto al nacionalismo radical y en los que no faltan críticas serias de carácter político a la actividad de ETA— hacia un progresivo acercamiento a las posiciones del nacionalismo radical, representado por Herri Batasuna desde 1978, que alcanza su punto culminante en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando la subordinación a la política de HB y el apoyo explícito a sus posiciones dejan poco margen a la discrepancia (la identificación nunca es total, no obstante, ya que, entre otras cosas, ello implicaría el reconocimiento de la inutilidad de la existencia de la propia organización). En los noventa se recorre de alguna manera el camino inverso, sucediéndose las muestras de un progresivo distanciamiento, lo que no excluye la continuidad de los llamamientos al voto, e incluso la participación en coaliciones encabezadas por HB, como fue el caso de Euskal Herritarrok, tras el Pacto de Estella (otro de los hitos fundamentales). Aunque se aprecian, como se tratará de mostrar a continuación, líneas de cambio significativas, no es menos cierto que algunos elementos permiten establecer posicionamientos que se mantienen a lo largo del tiempo, y que constituyen la base de las tomas de postura concretas en cada momento. Hay que señalar, de entrada, que la fidelidad a un marxismo estricto y ortodoxo acerca las posiciones iniciales de la LCR y el MC a los planteamientos formulados por los referentes clásicos del marxismo (Marx, Engels y Lenin) y analizados en la primera parte de este trabajo. Efectivamente, el reconocimiento de la opresión nacional no habría de impedir la expresión de críticas a los movimientos nacionalistas, ETA incluida; la alternativa es la formulación de reivindicaciones democráticas para poner fin a dicha opresión.

Desde el punto de vista de la valoración política del periodo posfranquista en España, el MC y la LCR comparten la voluntad de impugnar el sistema que se consolida tras los turbulentos años de la primera transición: ambos partidos, al igual que posteriormente Izquierda Alternativa o Zutik, consideran que, aun suponiendo un cambio que no permite equiparar el régimen surgido de la reforma con la dictadura franquista, sí que se trata de un sistema que no cumple los mínimos que según los parámetros de una fuerza revolucionaria se deben establecer para otorgar legitimidad a un régimen (otra cuestión no menor sería si algún sistema capitalista

podiera gozar de dicha legitimidad para fuerzas revolucionarias; la respuesta sería seguramente negativa, dados los planteamientos que subyacen en las posiciones de estos partidos). Lo que está detrás de esta consideración es, sin duda, el carácter burgués y capitalista del sistema vigente en España tras la muerte de Franco; además, se insiste en las argumentaciones de estos partidos en un conjunto de características añadidas que impide incluso homolagarlo como una democracia:³³ por ejemplo, la continuidad de los aparatos de seguridad del franquismo (el mantenimiento del ejército y la policía franquista, sin ningún cambio de personal y, por supuesto, sin ninguna depuración en su interior, se considera incompatible con un sistema democrático). A ello contribuyen, además, los problemas que acompañan a estas instituciones en los primeros años de la democracia: el peligro golpista, evidenciado sobre todo, pero no solo, el 23 de febrero, y las actuaciones policiales, que tardan bastantes años en responder a criterios claramente democráticos y respetuosos con las libertades. Así, los incidentes con heridos y muertos son relativamente frecuentes en la España de la segunda mitad de los setenta, particularmente en el País Vasco; además, actúan bandas fascistas, de las que se sospecha que cuentan con impunidad policial, cuando no están integradas y organizadas por miembros de las propias fuerzas de orden público. Si también hay actuaciones de estas en el conjunto de España, es igualmente en el País Vasco donde actúan con mayor frecuencia e intensidad, hasta el punto de ser responsables de numerosas muertes mediante la actuación de varias siglas, y entre 1983 y 1987 con los GAL.³⁴ A esa percibida carencia en el capítulo de libertades democráticas hay que añadir las limitaciones que, a juicio de estas organizaciones, quedan perpetuadas con la aprobación de la Constitución; dos son las cuestiones políticas que llevan a estos grupos a impugnarla de forma radical: la aprobación de la monarquía, considerada herencia del franquismo, y el no reconocimiento del derecho de los pueblos que forman España a decidir su futuro, es decir, el derecho de autodeterminación. Este es percibido como un prin-

33. Teniendo en cuenta las dificultades que tendrían países como Italia, Alemania o Gran Bretaña (por su tratamiento del terrorismo, por ejemplo) para ser considerados plenamente democráticos, se entiende la salvedad anterior, y se deduciría una ciertamente paradójica no excepcionalidad española.

34. Se calcula que hubo un total de 34 muertos y 31 heridos entre 1975 y 1980 en atentados cometidos por «incontrolados», o extrema derecha en Euskadi; 31 muertos y 33 heridos entre 1981 y 1989, la mayoría obra de los GAL entre 1983 y 1987 (Urkijo, 2009).

cipio democrático elemental, y se interpreta como la expresión de la voluntad de un pueblo en un momento determinado. Se parte también de forma implícita de la existencia de un conjunto de pueblos en España (a veces se diferencia entre nacionalidades y regiones) con una identidad definida, frente a los cuales España no sería más que un Estado forjado a partir de la dominación de los mismos, o al menos de aquellos que han mostrado más resistencia a la asimilación (sobre todo, el País Vasco, Cataluña y Galicia, pero a veces también se incorporan otros en la medida en que las movilizaciones por el autogobierno adquieren dimensiones importantes, como ocurrió en los años de la transición en las que luego serían comunidades autónomas).

No obstante, también en este apartado hay una evolución en los planteamientos de estos grupos. Durante los años setenta el discurso predominante en los órganos de los partidos de la izquierda revolucionaria es el de la defensa de la unidad de España. Efectivamente, en la última etapa del franquismo el programa de estos partidos comunistas incluye la defensa de las libertades nacionales oprimidas por el franquismo; en ese sentido, subrayan la necesidad de combatir el nacionalismo fomentado y practicado por el régimen, profundamente reaccionario y contra el que debe lucharse en defensa de los derechos nacionales de las nacionalidades oprimidas, entre los que figura el ya citado derecho de autodeterminación. Sin embargo, también incluyen en la crítica el nacionalismo de las nacionalidades minoritarias, cuyo contenido es bastante menos reaccionario que el anterior, y encierra en su interior elementos democráticos, pero un internacionalismo consecuente debe también oponerse a dichas corrientes. Por ello es fundamental que las masas obreras militen en organizaciones únicas; solo de esa manera irá perdiendo peso el nacionalismo entre los obreros y se abrirá paso el necesario internacionalismo (*Zer Egin?*, 22, diciembre 1971).³⁵

Las rencillas y discordias nacionales, surgidas al arrimo de la política despótica de la clase dominante en relación con las minorías catalana, gallega y vasca, irán perdiendo peso a medida que se fortalezcan los lazos que unen al pueblo de todas las nacionalidades de España. Si el obrero o el campesino castellano, andaluz o extremeño lucha unido a sus hermanos vascos, catalanes y gallegos, si entre ellos existen los

35. La numeración de *Zer Egin?* presenta algunas anomalías, que responden en algún caso a cambios en el órgano responsable de la publicación, y en otros probablemente a la discontinuidad que provoca la clandestinidad.

camaradiles lazos que se crean cuando se milita en organizaciones comunes, todos los prejuicios, todas las barreras ideológicas que pueden hoy separarlos tenderán a desmoronarse.

Las diferencias con el nacionalismo vasco se hacen aún más evidentes allí donde la izquierda radical encuentra reminiscencias del viejo nacionalismo sabiniano, vinculado a las más rancias tradiciones católicas. Tal ocurre, por ejemplo, con el movimiento de ikastolas, que comienza a extenderse en los primeros años setenta, según *Zer Egin?* (27, julio-agosto 1972) controlado por dicho sector sabiniano y por la jerarquía eclesiástica, lo que se tradujo en la acentuación del clericalismo en la enseñanza, en el empobrecimiento de los métodos pedagógicos utilizados en ellas, así como en la intención de «limpiar» todo elemento que diera muestras de estar animado por un espíritu democrático y progresivo.

El programa de la izquierda revolucionaria en las postrimerías del franquismo se atiene, en consecuencia, a la lucha común contra la opresión nacional sufrida por los pueblos de España con mayor conciencia identitaria, pero se mantiene distante de asumir las reivindicaciones nacionalistas; la propuesta se refleja, por ejemplo, en la defensa del programa que esboza el Movimiento Comunista en 1970: federalismo y derecho de autodeterminación. En consecuencia, el programa recoge la necesidad de reconocer las peculiaridades de cada nacionalidad, lo que implica el reconocimiento del gallego, el catalán y el euskera como lenguas oficiales en sus respectivas comunidades, así como el fomento del desarrollo económico de las regiones más atrasadas, en el marco de una solidaridad y una colaboración fraternal entre las mismas. Esta solidaridad incluye un aspecto que luego desaparecerá totalmente en las consideraciones de esta izquierda (y también en buena medida de las otras, como se ha puesto de manifiesto en el caso del PCE y de IU/EB): el de la necesidad de afrontar el profundo desequilibrio existente entre unas regiones y otras en el conjunto de España; mientras que para Euskadi, Cataluña o Galicia el autogobierno es esencial para recuperar sus rasgos culturales y lingüísticos aplastados por el franquismo, para comunidades como Galicia, Andalucía, Aragón o Canarias, el autogobierno se revela fundamental para el aprovechamiento de sus recursos y la implantación de políticas económicas capaces de sacar a esos territorios del subdesarrollo en que se hallaban atrapados. La consideración de que Cataluña o el País Vasco forman parte de la España rica es muy significativa sobre todo si tenemos en cuenta que Jean-Paul Sartre, por esos mismos

años, teorizaba sobre el carácter colonial de Euskadi, sometido a una opresión por el Estado central equiparable a la sufrida por los pueblos no europeos a manos de los Estados ricos del planeta, en un esquema que la propia ETA hará suyo en su particular fusión de sabinianismo y marxismo.

Efectivamente, desde el EMK se denuncian las diferencias abismales que bajo la égida de un poder supercentralista como el franquismo se han abierto en el grado de avance económico-social de las diversas nacionalidades y regiones del Estado español. Mientras que unos pueblos, entre los que estaría Euskadi, han concentrado buena parte de la riqueza y han visto incrementar notablemente su nivel de vida así como su población, otros en cambio se han estancado en su crecimiento económico, viéndose obligada una parte sustancial de su ciudadanía a emigrar, en lo que constituiría el máximo exponente de la situación general de abandono en la que se encuentran. Pese a la diferenciación en la terminología entre nacionalidades y regiones, que hace referencia fundamentalmente al distinto nivel de conciencia nacional que puede haber en las distintas comunidades, junto con la existencia de rasgos diferenciados más acusados o consolidados —por razones de tipo histórico, político, lingüístico, geográfico...— se hace hincapié en la necesidad de igualar los derechos de todos los pueblos que componen España. En realidad, la utilización del término *nacionalidades* tiene como objetivo romper el mito de la unidad de España, que siempre ha camuflado una política uniformizadora y opresiva, centralista y hostil a las lenguas y culturas minoritarias (*Zer Egin?*, 31, marzo 1973):

Llegado el momento de hacer uso del derecho a la autodeterminación, los comunistas nos pronunciaremos por la fórmula concreta que mejor asegure la liberación de las naciones oprimidas y la completa solución de la opresión nacional, dentro del marco de la unidad libremente consentida de todas las nacionalidades hispanas, por entender que es la unidad y no la disgregación la que responde a los intereses del pueblo y al avance de la revolución proletaria mundial.

No muy diferentes son las opiniones de la LCR sobre la configuración territorial deseada para todo el territorio español (*Combate*, 48, 1 abril 1976):

Los marxistas revolucionarios somos partidarios de una forma federal de estructuración del estado. Y esto, porque pensamos que es

la fórmula que mejor combina la existencia de una amplia autonomía política de las nacionalidades con el mantenimiento de un único Estado —que nos parece más favorable para el avance hacia la revolución socialista que la existencia de varios estados separados—. Pero no consideramos indiferente la forma concreta como se llega a esa unión en el seno de un único estado federal. Pensamos que esa unión solo será una unión libre si resulta de un acuerdo en pie de igualdad entre las distintas nacionalidades. Y para ello es imprescindible que Cataluña, Galicia y Euskadi tengan la oportunidad previa de separarse si así lo desea la mayoría de la población. Si no existe ese derecho previo, no existe verdadera unión libre, es decir, unión en igualdad de condiciones. Por eso, no consideramos democrática toda «solución» que no parta del reconocimiento del derecho a la separación y del compromiso de respetar la opción tomada por la nacionalidad, sea esta cual sea.

Sobre la lucha armada, la posición en las postrimerías de la dictadura es la de considerar que no existían las condiciones para iniciarla; aun dando por sentado que la consecución del socialismo no podría venir más que como resultado de una insurrección armada, la izquierda revolucionaria sostiene que esta ha de ser obra del conjunto de la clase obrera y no de una vanguardia esclarecida que con la práctica de la misma no haría sino aislarse del conjunto de los trabajadores. Esta es la opinión que se sostiene en términos generales y que, por supuesto, es aplicable a ETA. Se rechaza la tesis de la espiral acción-represión-acción, en la medida en que se considera que dicha represión ya es ejercida de forma cruda e indiscriminada por parte del régimen, lo que anula el punto de partida de la argumentación.

No obstante estas diferencias, hay que constatar el reconocimiento por la labor desempeñada por la primera ETA, que se hace por ejemplo en *Combate* en fecha tan temprana como 1971, en lo que sin duda influye extraordinariamente el hecho de que la mayoría de los militantes del partido de la época proceden de la propia organización vasca (*Combate*, 2, abril 1971):

La vanguardia obrera organizada en Euskadi estaba controlada por el PCE, los restos del PSOE, los solidarios vascos y los sindicalistas católicos, grupos empeñados en encerrar en el reformismo más suicida al combativo proletariado vasco (lo cual no quita nada a la entrega y combatividad de los militantes de esas organizaciones, en particular, de todos es sabido cómo tuvo que luchar S. Carrillo durante años para hacer entrar en vereda a sus «izquierdistas»

camaradas de Vizcaya). En estas circunstancias, la irrupción de ETA cambió el panorama. Aun siendo una organización típicamente pequeño burguesa, ETA supo poner en primer término que lo hay que hacer es la revolución y que la revolución significa violencia. León Trotski había dicho que la «juventud no puede no ser revolucionaria»: ETA expresó y dio salida a la voluntad revolucionaria en Euskadi. Que el camino señalado fuese erróneo y desviase esas energías revolucionarias no quita nada a lo positivo de ese empuje. Cuando quienes (por el nombre que llevan) debieran impulsar al movimiento por el camino correcto lo frenan y desmoralizan, hay que aplaudir a los que se lanzan adelante aunque no den con el rumbo. No serán los comunistas quienes se limiten a «condenar» el «izquierdismo pequeño burgués» de quienes han luchado como han sabido por dar una salida revolucionaria a las masas oprimidas. Los bolcheviques, empezando por Lenin, aprendieron mucho de los terroristas pequeños burgueses, y todo proletario consciente, todo revolucionario, tiene una deuda contraída con los militantes de ETA.

Predomina en esos años, no obstante, la crítica al terrorismo individual basada en los textos de los clásicos del marxismo. Según esta visión, el activismo individual procede de la doble actitud mantenida por algunos sectores de la pequeña burguesía: por un lado, quieren librarse de la dominación de la reacción, pero por otro desconfían de las masas, cuando no las desprecian. Como ya señalara Lenin, el terrorismo individual no contribuye a desorganizar las fuerzas gubernamentales, sino las revolucionarias. Se acusa a quienes practican la violencia individual en el País Vasco de estar corroidos por la estrechez nacionalista y por el egoísmo nacional; tienden a considerar como enemigos a todos cuantos no compartan sus concepciones nacionalistas: consideran enemigos a los pueblos de habla castellana, a los comunistas, a la mayoría de las masas de Euskadi. Como ejemplo de esta actitud, se muestra el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián, en medio de las masivas movilizaciones contra el proceso de Burgos: se denuncia que el «ala más radicalizada y reaccionaria del movimiento aranista», como se le denomina desde la izquierda revolucionaria, pensó que las masas carecían de la fuerza suficiente para hacer retroceder a la dictadura y, en consecuencia, intentó sustituirlas tratando de solucionar mediante un procedimiento propio del arsenal del terrorismo individual lo que solo las masas podían resolver. De todas formas, la crítica a la lucha armada practicada por ETA se hace en cuanto vía falsa, no como consecuencia de un rechazo a la violencia en sí, de manera que se deja claro que la crítica no debe abrir la vía al «paci-

fismo revisionista». Queda claro que la izquierda comunista sigue considerando la violencia un recurso fundamental que será necesario emplear en el momento en que se den las condiciones adecuadas para ello (*Combate*, 2, abril 1971):

Las formas de lucha empleadas —las huelgas, las manifestaciones, etc.— no pueden, por sí mismas, acabar con la dictadura fascista. Le hacen daño, pero no la matan. Para lograrlo, es necesario que el pueblo tome con decisión el camino de la lucha armada. ¡Oponer a las armas reaccionarias —que ellos emplean cotidianamente— las armas populares! ¡Este es el único camino!: proseguir la lucha movilizand o a las amplias masas y prepararse activamente para pasar de una forma de lucha a otra, para iniciar un día la lucha armada, la única capaz de derrotar al fascismo, de expulsar a los imperialistas y de asegurar la libertad y el bienestar para el pueblo.

Incluso en los momentos de mayor crítica a ETA, queda claro que no se puede achacar a esta el origen de la violencia en Euskadi. ETA responde a la violencia institucional del Estado con violencia. Aunque los oprimidos yerren en su forma de actuar, no es justificable la actitud de los opresores en virtud de los errores de los oprimidos; errores que se sustancian en el hecho de que la violencia contribuye a apartar a las masas de la lucha política activa, de que tiende a reforzar la solidaridad entre las distintas fuerzas reformistas y conservadoras, de que favorece las maniobras de los sectores más reaccionarios de la sociedad española actual y, en definitiva, de que facilita el aislamiento político de las fuerzas revolucionarias.

La convicción que late en la izquierda revolucionaria es que el proletariado y el pueblo han de comprender, en fin, que sus objetivos no serán jamás alcanzados merced a las acciones, más o menos audaces, de un puñado de jóvenes activistas —como los que integran ETA—, más aún cuando son portadores de una ideología nacionalista exclusivista y discriminadora que ningún vasco revolucionario puede compartir.

La izquierda revolucionaria sostiene que el pueblo vasco, a medida que se van desarrollando sus luchas, va afirmándose en la idea de que la clase obrera, con los comunistas a su cabeza, es la única fuerza capaz de agrupar y dirigir a las masas populares en los combates que han de conducirle a la victoria. Igualmente, se proclama que cada día son más los que admiten que la libertad de Euskadi no podrá ser jamás el resultado de la lucha aislada de los vascos. Por el contrario, la libertad nacional ha de ser el logro de

la solidaridad combatiente de los pueblos hispanos contra su enemigo común. La liberación nacional y social del pueblo vasco habría de ser obra, según esta concepción, de las masas populares mismas dirigidas por la clase más nacional y revolucionaria: la clase obrera.

La consideración de ETA como una organización revolucionaria aparece explícitamente en los últimos años del franquismo; las diferencias que se mantienen con su forma de entender la lucha armada no impiden situarla en el campo de las organizaciones revolucionarias. En resumen, se establece la contraposición entre la violencia de los opresores y la de los oprimidos, formando parte de la primera la que ejerce el Estado por medio de las fuerzas del orden y el ejército, y, por supuesto, la que permite al capital explotar a los trabajadores. Esta violencia del opresor se hace particularmente visible en un territorio como Euskadi, donde la represión es evidente día tras día, en su opinión, mediante las tanquetas, las torturas, las muertes de luchadores vascos... Frente a ella, la violencia de los oprimidos, de los sectores del pueblo que la ejercitan de diversas maneras, es tan solo un medio para terminar precisamente con toda violencia armada, es un instrumento de liberación. Por eso, la violencia del Estado es rechazable, mientras que la violencia del pueblo es perfectamente legítima y, aún más, necesaria. No obstante estas consideraciones, las críticas a ETA son también importantes. Ya en los últimos años del franquismo se hacen patentes las diferencias con las formas de acción de ETA, y ello se expresa de forma recurrente en la medida en que las distintas ramas de ETA intensifican su actividad y multiplican la frecuencia de sus atentados. Debe advertirse, sin embargo, la ausencia de cualquier consideración de carácter humanitario en relación con las víctimas, como aquí se manifiesta de forma explícita (*Zer Egin?*, 4, 15 abril 1975):

No queremos pasar por alto, sin criticar, los efectos negativos y desmovilizadores que tuvieron acciones como las bombas colocadas en varios establecimientos de Gernika, o la ejecución del policía José Díaz Linares. Ninguna pena nos da lo que les ha ocurrido, cuando se trata de unos personajes, como ese policía miembro de la criminal BPS y que ya se había destacado como torturador, o de fascistas declarados y chivatos. Individuos como estos, al igual que todos los que se hayan distinguido en sus actividades contra el pueblo, habrán de pasar ante la justicia de los tribunales del pueblo y sufrirán el castigo que merezcan. Sin embargo, los comunistas criticamos este tipo de acciones de violencia individuales, que

pretenden sustituir a la acción de las masas, y que no contribuyen a organizarlas y movilizarlas, independientemente de los deseos de sus autores; máxime cuando los reaccionarios lo aprovechan como pretexto para desencadenar una acción represiva que, en estos momentos, como así sucedió en este Aberri Eguna, frena la movilización de las masas.

Pero el momento en que probablemente las críticas suben de tono en mayor medida es durante los primeros años de la transición. Efectivamente, se trata de un periodo en el que la movilización social crece de forma exponencial (en toda España, pero de manera más intensa en el País Vasco); de ahí que la contraposición entre la lucha armada individual y la lucha de masas se manifieste con más nitidez. En esta tesitura, los partidos de la izquierda revolucionaria no dudan sobre la primacía que debe tener la segunda ni sobre el carácter contraproducente que adquiere la actividad de las diferentes ramas de ETA (*Zer Egin?*, 1, febrero 1976):

Galdácano y Cizúrquil han sido testigos de dos nuevas acciones armadas protagonizadas por una de las corrientes de ETA. Víctor Legorburu, alcalde de la localidad vizcaína, conocido por sus posturas fascistas y antivascas, y Julián Galarza, mecánico, víctima al parecer de un error de identificación por parte del comando que efectuó el atentado, han muerto en ellas.

Nuestra postura ante este tipo de acciones es conocida. No creemos que es el momento de volver otra vez sobre las razones que nos llevan a rechazar, por ineficaz, el camino del terrorismo individual. Y esto al margen de que la víctima sea un fascista redomado o un hombre del pueblo muerto por error, por más que, claro está, lo segundo nos resulte particularmente doloroso. Sí quisiéramos, sin embargo, resaltar que, en las actuales circunstancias políticas, el peso que cobran estas razones es todavía mucho mayor.

En efecto, si en algún momento de la lucha antifascista esta necesita ser protagonizada por las masas, por las más amplias masas, es este. Si en algún momento se están reuniendo las condiciones para que realmente ocurra así, es realmente este. Ahí están, para demostrarlo, la campaña a favor de la amnistía y de las libertades democráticas, en las que centenares de miles de personas se están movilizando a lo largo y ancho de todo el estado. Si en algún momento, en fin, el régimen teme las movilizaciones masivas, teme enfrentarse frontalmente con el pueblo, es ahora. Todos sus planes de acercamiento gradual y controlado hacia una «democracia» superrecortada y superlimitada dependen justamente de eso, de que puedan, sin recurrir demasiado a la

represión tradicional, frenar, contener, desviar la lucha de las masas que exigen, esto es indudable, la libertad sin ningún tipo de cortapisas ni de tuteladas ridículas.

La similitud entre los propósitos de ETA y la extrema derecha, tema muy poco habitual en los textos de la izquierda revolucionaria, apunta en alguna ocasión en estos años. Se achaca a ETA (militar), independientemente de la voluntad de sus autores, un distanciamiento cada vez mayor del sentir popular. Los grandes cambios producidos en la situación política desde la muerte de Franco son ignorados por ETA (m), que se aferra a situaciones pasadas. En el lado opuesto, en la extrema derecha —aunque por otras ideas—, también hay grupos que pretenden frenar la marcha de los acontecimientos y volver para atrás. Tanto unos como otros aspiran a una situación caótica de inestabilidad, de desesperanza, en la que los protagonistas del quehacer político sean grupos minoritarios, fanáticos, que presentan hechos consumados y situaciones dadas ante las que luego se pide una toma de posición: «o conmigo, o contra mí», es el fondo de sus planteamientos. Es una lógica que también recuerda aquella de la «dialéctica de los puños y de las pistolas». Dado que se quiere que el pueblo sea agente activo de su liberación y no espectador pasivo, el EMK propugna el abandono de la actividad armada y la concentración en la potenciación de la lucha de masas.

Ni siquiera los atentados contra las fuerzas de orden público son aceptados por el EMK, por entender que a lo que puede conducir esa política es a una situación de enfrentamientos armados entre ETA y el aparato armado del Estado, conformando una situación de caos en la que el pueblo sería mero espectador pasivo de una guerra que no acepta y que no puede hacer suya.

En relación con las fuerzas de orden público, objetivo preferente de los atentados de ETA, el EMK defiende su democratización y su puesta bajo la autoridad de las instituciones autonómicas vascas; sin embargo, la línea de ETA no solo no permitiría el avance hacia ese objetivo, sino que facilita la labor de desestabilización de las corrientes fascistas presentes en los aparatos del Estado, por un lado, y la política de los reformistas, por otro, reforzando su discurso sobre la necesidad de combatir a los extremos interesados en abortar el camino hacia la democracia. El EMK considera que hablar de guerra, como hace ETA (m), en un momento en que el pueblo y el movimiento obrero están profundamente divididos y con la gran influencia entre la población obtenida por las fuerzas

democráticas moderadas, es de una gran irresponsabilidad. Esa línea solo conduce a un callejón sin salida, e imposibilita tanto la profundización en las conquistas democráticas como la acumulación de fuerzas de la izquierda revolucionaria.

Javier Villanueva, dirigente del EMK, también dará cuenta (de manera retrospectiva) del giro dado por ETA al abandonar su estrategia revolucionaria y guerrillera de derrotar al Estado español y sustituirla por la estrategia de presionar a los poderes fácticos estatales (es decir, la ejecución selectiva o aleatoria de algunos de sus miembros a fin de provocar el desistimiento del resto, cosa que después fue extendiendo a otros sectores de la sociedad) para poder llegar así a una negociación sobre el valor del cese de su lucha armada (*hika*, 175, marzo 2006). Se trata probablemente de uno de los elementos clave para el análisis de la trayectoria de ETA, y también para el de la actitud de la izquierda revolucionaria ante ella; la evolución desde una supuesta lucha guerrillera (muy difícil de identificar en un territorio como Euskadi, pero al menos proclamada como objetivo por parte de sus autores) hasta la práctica de una violencia puramente terrorista, en la que el objetivo del desistimiento por parte del Estado condicionó unas modalidades de la violencia progresivamente más indiscriminadas y de mayor crueldad (coches bomba, atentados contra dirigentes políticos...).

Pese a los indudables elementos de continuidad en la crítica de la izquierda revolucionaria a la actividad de ETA, una mirada retrospectiva tiende también a hacer borrosas las tomas de posición anteriores, al tiempo que se percibe una idealización del pasado. Tal ocurre con las opiniones vertidas por un destacado miembro del EMK navarro, Jesús Urra (*Zer Egin?*, 23, noviembre 1977), quien, tras manifestar que la Unión Navarra de Izquierdas (UNAI) expresa su rotunda condena y rechazo a la línea de actuación que sigue actualmente ETA (m), añade lo siguiente:

[...] esta organización no es la vieja ETA de la resistencia antifranquista, no es la ETA estrechamente unida con el conjunto del pueblo vasco. La misma ETA (pm) ha rechazado repetidas veces la actuación de ETA (m). La actuación de ETA (m) es políticamente más rechazable todavía en Navarra. Una escalada de atentados en Navarra es enormemente perjudicial para las fuerzas autonomistas y solo beneficia a los enemigos de Euskadi y de la libertad. Por esta vía podemos estar seguros de que Navarra, más que avanzar, retrocede en su andadura hacia su integración en el País Vasco. Navarra entrará por su propio pie y porque el pueblo navarro así lo decidirá.

En la misma línea, se plantea la peligrosa separación entre vascos e inmigrantes, que, traducida a términos de organizaciones políticas, se plasma en la dicotomía nacionalistas frente a estatelistas. Lógicamente, a las organizaciones con implantación en toda España no puede agradales en modo alguno tal separación, de manera que critican con fuerza una tendencia que arraiga en determinados sectores del nacionalismo radical, hasta el punto de que se producen enfrentamientos y agresiones verbales entre grupos vinculados a este y las organizaciones comunistas. Con motivo de una manifestación, la prensa del EMK recoge lo siguiente (*Zer Egin?*, 19, 1 octubre 1977):

Junto a gritos como «traidores» o «zuek fazistak zarete terroristak» («vosotros fascistas sois los terroristas») se profirieron otros como «españolistak kanpora» («fuera los españolistas») o «españoles a Madrid».

En el EMK se analizan estos comportamientos como la resultante de la presencia en el nacionalismo vasco radical de elementos continuadores de la tradición sabiniana (tradicionalista, católica, reaccionaria en definitiva), que, con un lenguaje supuestamente más moderno, intentan extender las mismas ideas del fundador del PNV: oposición irrenunciable entre Euskadi y España, con la consiguiente culpabilización a España de todos los males de Euskadi. La particularidad de este planteamiento reside en que por España se entiende no solo el Estado centralista y su aparato represivo al servicio del gran capital, sino también sus pueblos y, en consecuencia, los inmigrantes venidos al País Vasco en busca de pan y trabajo. La consecuencia de estas ideas es el desprecio a los partidos no nacionalistas que actúan en Euskadi, y su calificación como «social-imperialistas», es decir, partidos que, cubiertos con la palabra *socialismo* o *comunismo*, practican de hecho un política de opresión nacional sobre el pueblo vasco. Se establece así una división entre «abertzales» y «españolistas», según la cual los primeros serían los buenos vascos, mientras que los segundos serían los vascos renegados o, aún peor, los agentes de España (de la España de Franco en su día, y de la de Suárez en ese momento) para seguir sometiendo y oprimiendo a Euskadi. Lógicamente, esta percepción de la realidad conduce a la conclusión de que los verdaderos representantes del pueblo son los auténticos «abertzales», quienes en todo momento saben lo que conviene al pueblo, en lo que constituye un anticipo de la crítica que dirigirá posteriormente a ETA casi todo el espectro políti-

co, sin que la izquierda revolucionaria participe entonces de ella (*Zer Egin?*, 19, 1 octubre 1977):

Digámoslo abiertamente. Por más que pretenda justificarse desde posiciones de «socialismo vasco», de «revolución vasca», esa corriente es netamente reaccionaria. Su concepción del «Abertzalismo» no conduce más que a un enfrentamiento en el seno de la propia población de Euskadi, cuya gravedad sería insospechable. Y al mismo tiempo a un aislamiento de Euskadi, cuya causa de liberación nacional difícilmente encontraría el apoyo que necesita de los demás pueblos del estado español que se encuentran igualmente sometidos a la explotación y opresión del capitalismo centralista.

1978-1983: aliados equivocados

A partir de 1979-1980 en el caso del EMK y con posterioridad en el caso de la LKI, la evolución de la posición ante ETA va a ser evidente. A las críticas, en ocasiones severas, emitidas en el periodo anterior, reflejo de las serias diferencias políticas que alejaban a las organizaciones comunistas de ETA y su entorno, les van a suceder primero un conjunto de matizaciones que tienden a rebajar el grado de rechazo, para ir evolucionando hacia un apoyo si no absoluto sí en las grandes líneas de orientación política.

La posición en estos años viene marcada por la consideración de que ETA se sitúa en el «mismo lado» de la barricada; se trata por tanto de aliados, como ya quedaba apuntado en la etapa anterior, en la medida en que luchan contra el régimen surgido de la transición, pero a los que se sigue criticando por sus métodos de lucha, que no favorecen los intereses de los trabajadores y cuyas acciones en definitiva no se traducen sino en un incremento de la represión y un suministro de argumentos para los gobiernos y las fuerzas reaccionarias en contra de los intereses de la clase obrera. No obstante, tres elementos conviene resaltar, por la fuerte incidencia que cobran en esos años, y por el desarrollo que adquirirán en los posteriores: 1) en todo momento estas formaciones se muestran contrarias a las convocatorias de movilización anti-ETA (no suponen, a su juicio, más que apoyos para la represión); 2) manifiestan una solidaridad incondicional con los presos y refugiados de la organización armada, y 3) no otorgan visibilidad alguna a las víctimas de los atentados, salvo que se trate de trabajadores vinculados a organizaciones de izquierda.

Para entender estas actitudes, hay que partir de la situación política en los primeros años de la transición, en los que la referida magnitud de la movilización popular permite abrigar esperanzas a la izquierda revolucionaria de superar el marco institucional que, entre 1978 y 1979, quedará consagrado por la Constitución y, en Euskadi, por el Estatuto de Autonomía. Durante esos años, la unidad de buena parte de las movilizaciones no impide una cierta competencia entre las corrientes que las promueven y participan unidas en ellas, siguiendo la estela trazada en el tardofranquismo, y que aspiran a la hegemonía del movimiento obrero y popular.

En función de los rasgos apuntados, se pueden extraer las siguientes características comunes en las críticas a ETA en estos años, que suponen en buena medida una continuidad respecto a las posiciones del periodo anterior:

- La actividad de ETA se basa en atentados que solo consiguen aumentar la represión, facilitando la demagógica condena de la violencia «venga de donde venga».
- En los momentos de fuerte represión policial, y de numerosos atentados fascistas de las bandas de la extrema derecha, se extiende entre la población la idea de que se trata de una guerra particular entre dos bandas alejadas de los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía.
- ETA constituye un elemento de desmovilización y división, y, en consecuencia, provoca el debilitamiento del movimiento obrero y de la juventud.
- El activismo «desenfrenado» de ETA impide que los trabajadores y el pueblo sean protagonistas y rompan políticamente con el PNV, el PSOE y el PCE. Se trata, en consecuencia, de un obstáculo para la liberación nacional y el socialismo.

Sin embargo, se resaltan cada vez más coincidencias de amplio alcance:

- Evidente afinidad entre los objetivos de ETA y los de la izquierda revolucionaria, al menos en lo que respecta a la cuestión nacional y la problemática que la envuelve en Euskadi, y ello a partir de un cambio de posición de la izquierda revolucionaria por lo que se refiere a aspectos determinados (como el referido a las fuerzas de orden

público): ETA defiende el derecho de autodeterminación, la retirada de las FOP, la amnistía...

- Atribución de la principal responsabilidad de la conflictividad a los poderes públicos (gobiernos, ejército, policía...) y a los partidos obreros reformistas, que con el abandono de esas reivindicaciones se han aliado con los opresores del pueblo vasco o renunciado a luchar por sus derechos.
- Importancia concedida al apoyo popular que ETA recibe: si varios cientos de miles de vascos la respaldan, no es posible rechazar o deslegitimar una organización con semejante arraigo popular. Como es lógico, esta argumentación se refuerza en la medida en que ETA va aumentando sus apoyos, una vez que la pugna descrita entre el nacionalismo radical y la izquierda revolucionaria se salda con claridad abrumadora a favor del primero.
- Ausencia total de principios humanitarios o éticos en el tratamiento de la violencia. No hay apenas referencias a las víctimas, a las que, de manera significativa, casi nunca se les otorga individualidad (fotos, nombres...), lo que contrasta con quienes sufren los atentados fascistas o la represión gubernamental.
- Rechazo absoluto a participar en iniciativas contra ETA, pues suponen, en su opinión, un apoyo a la represión (identificada en esos años con el Grupo Especial de Operaciones, la Unidad de Acción Rural, las fuerzas de orden público, Sáenz de Santamaría...).³⁶ Frente a ello, la LKI propone, sin mucho éxito, un frente por la libertad de Euskadi, con los siguientes objetivos: retirada de las FOP, defensa incondicional de presos, refugiados y exiliados, amnistía, soberanía del Parlamento vasco y otras instituciones (Ayuntamientos, Juntas Generales...), integración de Navarra y autodeterminación (*Combate*, 2-8 julio 1980). Los partidos receptores de este deseado y no alcanzado acuerdo serían HB, EE, el EMK, el PTE y LAIA.

La justificación de esta posición hasta cierto punto ambivalente (crítica de una práctica política determinada, negativa a su con-

36. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) es un cuerpo de elite creado para hacer frente al terrorismo y la delincuencia organizada en 1977. La Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil fue creada también para combatir el terrorismo en 1982. José Antonio Sáenz de Santamaría, militar, fue nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco entre febrero y octubre de 1980.

dena para no caer en la confusión con fuerzas reaccionarias, o simplemente reformistas) se encuentra en la distinción entre radicalismo y nacionalismo. Se acepta, y se ensalza el carácter radical del movimiento nucleado en torno a ETA y su entorno; no se identifica en la misma medida con el carácter básicamente nacionalista del mismo, por lo que esta doctrina tiene de incompatible con postulados defendidos por la izquierda revolucionaria. La política de esta debería ir encaminada a potenciar los factores radicales y rebajar los nacionalistas en el entramado del MLNV. Como se verá con posterioridad, tal evolución no se produjo; más bien, fue la izquierda radical la que tendió a identificar cada vez en mayor medida nacionalismo con radicalismo y aparcó sus prejuicios anteriores (*Zer Egin?*, 38, primera quincena marzo 1979):

El radicalismo es considerado la cara de la moneda, porque revela la existencia de una fuerte corriente de masas que no acepta la reforma política, y que continúa exigiendo soluciones políticas de fondo para el «pueblo trabajador vasco». La cruz vendría representada por el nacionalismo, porque prueba la presencia de amplios sectores en Euskadi que continúan anclados en una ideología que prima la pertenencia por encima de la adscripción a la izquierda o a la derecha. Mientras que el radical es un voto de izquierdas, que manifiesta el rechazo a una situación económica en la que los trabajadores pagan el peso de la crisis, el rechazo a unas condiciones sociales en las que la clase obrera y las clases populares ven deteriorarse más y más sus condiciones de vida, el rechazo a una política antidemocrática represiva de los poderes del estado. El voto radical está por la transformación revolucionaria de la sociedad. Lo está objetivamente, aunque para muchos votantes el instinto de la libertad, la rabia, hayan sido las motivaciones más inmediatas. El nacionalista es un voto que lo mismo puede ser de derechas o de izquierdas. Si es de derechas, significa voto burgués, sabiniano. Si es de izquierdas, es un voto exclusivista, insolidario, ajeno a los intereses de la clase obrera, vinculado de algún modo en lo ideológico al nacionalismo de derechas por un cordón umbilical. El voto nacionalista de izquierdas tiene un aspecto positivo, el rechazo del centralismo, la reivindicación de la soberanía nacional sin falsas autonomías.

En coherencia con lo anterior, la voluntad expresa de no identificarse con quienes rechazan de principio a ETA se basa en el peligro de manipulación de cualquier condena que se haga de esta organización: esta actitud se expresa, por ejemplo, con motivo de una manifestación contra ETA celebrada en julio de 1980. La opinión de

la LCR es que los desacuerdos entre las organizaciones obreras y populares, incluso los relativos a la utilización de la lucha armada, deben resolverse con la discusión; la movilización es un método que debe reservarse para combatir a los enemigos de clase. Cuando el PSOE y el PCE llaman a manifestarse contra ETA —se afirma—, lo están haciendo contra el sector más combativo del pueblo vasco, en contra del nacionalismo radical. Manifestarse contra ETA, se señala, significa apoyo directo a la represión, al encarcelamiento de jóvenes vascos, a la intervención en Euskadi de las «fuerzas de seguridad». «Nuestra crítica a ETA es una crítica política que realizamos desde la más firme oposición a la farsa contrarrevolucionaria del frente por la paz» (*Combate*, noviembre 1980). La LCR sostiene que una pacificación como la que se busca desde el «frente contra el terrorismo y por la paz» daría a la burguesía una oportunidad de oro para asentar dicha paz sobre durísimas imposiciones al movimiento obrero y popular, y «a cuantos luchamos por que no triunfen las alternativas de la burguesía, sea la centralista o la nacionalista. Ante ello, la izquierda revolucionaria debe unirse» (Ramón Zallo, en *Combate*, 13-20 diciembre 1980). Esta idea de que la prioridad es no conceder ninguna baza al enemigo se convertirá, en el futuro, en uno de los argumentos más repetidos, hasta el punto de que probablemente sea el último de los recursos aducidos para seguir negando la deslegitimación de ETA una vez que el declive de la imagen de esta se extiende en la sociedad vasca.

Por otra parte, la reiterada constatación de que solo en Euskadi la reforma encuentra problemas importantes es la base de las posiciones de la izquierda revolucionaria. La necesaria unidad buscada pasa de manera perentoria por la colaboración de las organizaciones con base de masas (la referencia a HB es inequívoca), pero se subraya que la coalición nacionalista no muestra ninguna voluntad de formar frentes con fuerzas bastante menos representativas que la suya.

La crítica a los partidos mayoritarios de la izquierda (PSOE y PCE) es muy dura. La «superactividad» de los partidos obreros del Estado español contra el «terrorismo vasco» constituye uno de los hechos más graves, más preocupantes y más peligrosos de los últimos años, a juicio de la LCR. Se acusa a estos partidos de la división en el movimiento de masas, con un efecto en las filas de los sectores más combativos, si bien se reconoce que la polarización viene favorecida por el activismo armado. La obsesión antiterrorista del EPK no sería sino un reflejo de una estrategia de defensa del Estado burgués, lo que hace del EPK una fuerza impermeable a los

movimientos de opinión existentes en Euskadi. Se demuestra así una profunda ceguera a la hora de analizar el fenómeno de HB. La confrontación con la postura anti-ETA del EPK es tajante: su ceguera política en el enfoque del tema ETA lo neutraliza para ponerse decididamente contra la reacción. «Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre»: se recurre a la clásica frase de Marx para subrayar la necesidad del apoyo de los pueblos del Estado español a la lucha del pueblo vasco.

La posición del PNV es analizada en términos de clase, y la valoración de sus posiciones es menos crítica que la sostenida ante el PSOE y el PCE. El análisis de un significado representante de la LKI, José Iriarte, *Bikila* (*Combate*, 20-27 febrero 1981), subraya que la pequeña burguesía ha sido en Euskadi un elemento importante de radicalización política progresista y que muchas veces ha cumplido con la clase obrera en el terreno de la lucha nacional. Si bien el PNV había avanzado de manera notable en dirección a ese sector, seguía existiendo una parte muy radicalizada en torno a HB y EE. Dentro del propio PNV se mantenía una sensibilidad contra la represión y no pocas simpatías con ETA, además de un odio manifiesto a los pactos con el centralismo y la agresión policial. Esta vez (en relación con la respuesta al asesinato de Ryan) ha habido un grave deslizamiento de la mayoría de la pequeña burguesía hacia el campo conservador. Lo cual era un dato importante en la situación política de Euskadi: la existencia de una gran parte del movimiento que en todo momento distinguía entre la violencia de los grupos revolucionarios (estuviese a favor o en contra de los mismos) y la contra-violencia del Estado, estaba empezando a variar. Si esto se consumara o profundizara, sin duda generaría un aumento de la represión, no solo sobre la corriente que apoya a ETA, sino sobre toda la izquierda revolucionaria, sobre las luchas radicales, sobre los militantes feministas, antinucleares, sobre luchas obreras... Esta identificación será la que a la larga conducirá a la subordinación de las organizaciones de la izquierda revolucionaria a las del nacionalismo radical.

Así, las reacciones en algún caso mayoritarias de la sociedad vasca contra la violencia de ETA no se atribuyen a razones cívicas vinculadas al rechazo de la violencia o el militarismo (lo cual es implícitamente considerado un hecho positivo, en la medida en que la población no se deja engatusar por la propaganda «pacifista» de la burguesía), sino al temor al golpismo y al aumento de la represión que conlleva la actividad de ETA. El gran problema, a juicio de la LKI (*Combate*, 20-27 noviembre 1980), es que la legítima

aspiración de las masas a ser ellas las únicas protagonistas de la lucha contra el Gobierno y la opresión de las nacionalidades haya sido utilizada por los partidos mayoritarios para crear un frente por la paz, cuyo objetivo sería la justificación de las medidas represivas contra la clase obrera y la militancia revolucionaria. Sigue manifestándose este intento de extender un discurso propio, construido a partir del rechazo fundamental al Estado y de la crítica a una práctica considerada profundamente equivocada de los situados en el campo propio. Una de las argumentaciones más desarrolladas de este planteamiento aparece expresada en *Combate* (20-27 noviembre 1980), reproduciendo las palabras de un miembro de la dirección de la LKI en un acto público: en Euskadi habría que diferenciar entre la violencia del opresor y la violencia del oprimido.³⁷ Frente a esta violencia del opresor se daría en Euskadi una violencia de respuesta, con ocupación de empresas, con autodefensa. La violencia minoritaria de ETA también sería una contestación a esta violencia del poder: no es la respuesta adecuada, se afirma, porque no ayuda a aclarar la situación, a organizar a los trabajadores o a despertar la solidaridad de los demás pueblos del Estado español, pero es una forma de violencia del oprimido. Condenar por igual una violencia y otra «solo lo pueden hacer los hipócritas y los fariseos, los que se han convertido en lacayos del poder, los que ponen a la misma altura efectos y causas, o sea, denuncian los efectos para justificar las causas». Sin embargo, la argumentación recogida pierde eficacia en la medida en que la violencia «de respuesta» que se da en Euskadi es obra casi exclusivamente de ETA, siendo los demás ejemplos que se aducen expresiones esporádicas y poco significativas,³⁸ al menos en comparación con lo que representa la violencia de ETA. En ocasiones, se recurre a la identificación entre izquierda nacionalista e izquierda obrera para hacer

37. Como ejemplos de la primera se citan «la humillación histórica del pueblo vasco, todavía vigente, la ocupación policial, las torturas, las cárceles, la represión sobre los trabajadores de Nervacero, Michelin, Olarra o Lemóniz, el desmantelamiento de la industria y el paro forzoso, los accidentes en escuelas públicas, las incursiones fascistas...». Las tres primeras son empresas protagonistas de largos conflictos laborales. Lemóniz hace referencia a la central nuclear que no llegó a construirse.

38. Hay algunos intentos de organizar una «autodefensa ciudadana» ante las bandas fascistas o la represión policial, pero no tienen apenas incidencia. La violencia vinculada a las luchas obreras, por otra parte, es esporádica y, aunque ciertamente considerable en algún conflicto (como el de los astilleros Euskalduna), es difícil establecer conexiones con la violencia ligada al nacionalismo.

frente a la represión, lo que indudablemente contribuye a la colaboración entre estas dos corrientes políticas.

La posición ante ETA se pone a prueba en una de las cuestiones más polémicas de aquellos años en el País Vasco: la construcción de la central nuclear de Lemóniz. El proyecto fue duramente rechazado por organizaciones de izquierda y del incipiente movimiento ecologista; las movilizaciones, que fueron masivas desde 1977, tuvieron el acompañamiento de las acciones de ETA, que atentó de forma reiterada contra la central. La combinación de lucha popular y acción armada puso a prueba a los distintos agentes en acción. La LCR se posicionó de forma poco dudosa ante los atentados de ETA, sobre todo ante el que costó la vida a dos trabajadores de la central, en 1978. La LCR es dura con ETA, en la medida en que considera que sus acciones interfieren en la dinámica movilizadora, a la que perjudican, y además entiende que el Gobierno e Iberduero temen en mucha mayor medida la acción popular que una lucha armada que en última instancia no implica costes excesivamente gravosos para ellos. Lógicamente, la crítica se hace mucho más intensa ante la muerte de dos trabajadores de la central: pese a que la opinión mayoritaria en los comités antinucleares es no condenar los atentados, la LCR se pronuncia inequívoca y radicalmente en contra de estos. La política de bombas se define como una línea aventurera que en nada ayuda a los objetivos de los trabajadores vascos. Aducir «errores técnicos» no se admite como argumento; siempre que se ponen bombas puede haber esos errores. Y los haya o no, las acciones armadas de ETA no son ni ayuda ni complemento alguno para la organización de los trabajadores, sino un obstáculo, un elemento que en sectores de esos trabajadores tiende a favorecer la desconfianza en sus propias fuerzas. La condena del atentado de forma indiferenciada respecto al Gobierno o a Iberduero supone —en opinión de la LKI— que el PSOE, el PCE, UGT y Comisiones Obreras avalan los planes pronucleares, lo que sitúa a estas organizaciones al margen del amplio movimiento popular que lucha contra la central de Lemóniz.

Se puede constatar que la LCR/LKI no solo enfrenta su estrategia a la de ETA, sino también a los comités antinucleares, que parecen inclinarse por el apoyo a las acciones terroristas. Esta será quizá la dinámica central de esos años en lo que se refiere a la relación de los grupos de la izquierda revolucionaria con el mundo de ETA: la competencia por recabar el apoyo de los movimientos populares en plena efervescencia movilizadora. En estos años la hegemonía del nacionalismo radical que representará HB aún no está asentada

(hay que recordar que en las elecciones de junio de 1977 es la coalición Euskadiko Ezkerra —integrada por el EIA y el EMK— la que obtiene un diputado, mientras que el llamamiento a la abstención realizado por el sector vinculado a ETA militar fracasa), y no se percibe como imposible una penetración amplia en los movimientos sociales de la izquierda revolucionaria.

La mayor tensión en el largo contencioso de la central nuclear de Lemóniz se produce en febrero de 1981, con el asesinato del ingeniero Ryan. Los análisis de la LCR/LKI vienen a suponer una confirmación de los planteamientos anteriores. Hay un rechazo a la convocatoria de huelga general como respuesta al asesinato. La huelga general, en su opinión, solo favorece a la derecha. La huelga habría favorecido ante todo al PNV y su política de pacificación sobre la base del fortalecimiento institucional y el arrinconamiento de ETA, y por extensión de la izquierda revolucionaria, la vanguardia obrera radical y los movimientos sociales. Es ya significativa la identificación entre el destino de estos tres sectores, que obviamente aparecen ya como aliados, pese a las diferencias señaladas y a la pugna que se establece por el control de los movimientos.

Por otro lado, y remachando la adscripción ya apuntada con anterioridad y ahora plenamente consolidada, un comunicado de la Comisión de Defensa de una costa vasca no nuclear justifica la intervención de ETA ante la negativa de Iberduero y el Gobierno de paralizar las obras y convocar un referéndum: la LCR constata que los comités de base que han dinamizado la campaña antinuclear están sometidos a una influencia mayoritaria de la corriente nacionalista radical, abertzale. Desde el primer momento, la tesis fundamental de esta corriente viene a ser que si las masas no consiguen parar la construcción de la obra, que la pare ETA con acciones armadas. De ahí que la consigna «Goma 2» haya sido muy masivamente coreada en las movilizaciones contra la central.

Si en la LKI y la LCR la modulación en las tomas de posición ante ETA respecto a los años anteriores es ligeramente perceptible, por parte del EMK las diferencias entre las críticas emitidas hacia la violencia de ETA en el franquismo y durante los primeros años de la transición y las crecientes matizaciones y elementos justificatorios que van apareciendo en el discurso son notables. Ya en los primeros años ochenta, las condenas a la violencia se enmarcan en el contexto de la necesidad de analizar la política a la que sirve la misma. Naturalmente, no con una pretensión meramente analítica o clasificatoria, sino para fijar una posición concreta ante los distintos tipos de violencia, para apoyar unos y

condenar otros. Precisamente se quiere así diferenciar el marxismo revolucionario del idealismo pacifista, que pretende la desaparición de la violencia sin analizar el contexto y las circunstancias que la originan. Un análisis marxista concluiría que solo desapareciendo las raíces económicas, sociales y políticas que engendran la violencia puede construirse una sociedad «no violenta». Y esa construcción pasa inevitablemente por la supresión de la sociedad capitalista con el recurso también de la violencia revolucionaria. La fuerza de la argumentación reside en la imputación al Estado y al sistema socioeconómico vigente de toda responsabilidad en los conflictos que surgen en el seno de esta sociedad; a partir de esta premisa, cualquier violencia a la que se otorga el sello de respuesta a la primera y principal (la del Estado) se legitima, y no cabrá imputarle sino en el peor de los casos una responsabilidad secundaria, pues sin el cese de la violencia principal no será posible pretender el ideal de una sociedad pacificada (*Zer Egin?*, 125, diciembre 1981):

Si se quiere lograr de verdad eso que se ha dado en llamar «normalización de Euskadi» debe cesar la violencia política de los que oprimen a Euskadi, la violencia policial de los que reprimen al movimiento popular vasco, y la violencia económica y social de los que superexplotan al pueblo trabajador. Ese es el primer paso. El imprescindible. El fundamental. Lo demás, el pedir que cese la violencia revolucionaria, es tanto como pedir a quien se cubre la cara con las manos las baje para que pueda ser golpeado mejor.

Aplicado a la actualidad vasca, el esquema se amplifica con la equiparación del régimen parlamentario con el franquista; no olvidemos los equilibrios que los partidos revolucionarios se ven obligados a efectuar para identificar los dos sistemas, cuando precisamente el 23 de febrero puso de manifiesto las contradicciones que encerraba la equiparación de ambos. Sin embargo, la justificación del conflicto que se vive en Euskadi sigue incluyendo una interpretación del régimen como una continuación del franquismo ligeramente transformado; según esta visión, la lucha entre un sector del pueblo y el poder no sería sino una versión actualizada de la lucha contra Franco. En estas condiciones, no se estima correcto pedir a quienes practican la violencia revolucionaria que cesen en su acción, pues eso supondría caer en la sospecha de estar al servicio del poder, o cuando menos de sus postulados supuestamente democráticos. De la misma manera que en el franquismo se llamaba traidores a quienes planteaban propuestas de ese tipo, no habría

razones para no hacer lo mismo en la coyuntura de principios de los años ochenta.

Parecida argumentación se vierte en relación con el término *terrorismo*. Según la versión de la izquierda revolucionaria, el poder designaría con tal denominación a quienes emplean la violencia contra él desde una perspectiva de lucha antisistema, no significando otra cosa que quien la ejerce carece de poder. Según el esquema de pensamiento aplicado, si la violencia es ejercida desde el poder o desde instancias próximas a él, el término varía y ya no se califica de terroristas a los practicantes de la violencia. Tal ocurre, por ejemplo, con aquellos grupos armados que han conseguido sus objetivos mediante la violencia. De terroristas han pasado a ser considerados interlocutores respetables, no porque hayan variado sus métodos, sino porque han obtenido el poder. Es decir, *terrorismo* es el nombre utilizado por los que tienen el poder para calificar la actividad de quienes se oponen a ellos, lo cual implica que desde ese punto de vista lo esencial para no ser terrorista es triunfar en la lucha emprendida. Los castristas y el Frente Sandinista, por ejemplo, habrían sido calificados de *terroristas* hasta que triunfaron, como los *terroristas* del VietCong. Lo mismo podría pasar en el futuro con los que hoy llaman *terroristas* del IRA o de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) o de otros movimientos. La historia solo es severa con los que pierden, porque la escriben los que ganan.

La LCR considera que, en la práctica concreta, las cosas ocurren de modo muy distinto a como lo teoriza ETA. La relación entre la lucha armada y la lucha de masas aparece planteada por esta justo en los términos inversos a como se supone en los cánones teóricos de todo movimiento guerrillero. La acción de masas aparece siempre subordinada al apoyo político y logístico de la vanguardia armada. El resultado de esta combinación es justamente el contrario al deseado, pues la gran mayoría del movimiento obrero, lejos de organizarse en ETA —embrión de un futuro ejército popular—, considera que las formas de lucha deben ser expresión de la lucha de masas. Esta reacción no es casual. En realidad, indica algo conocido en la historia, pues no en vano el protagonista de todas las revoluciones ha sido siempre el movimiento de masas. Los ejemplos de Cuba y Nicaragua son aleccionadores al respecto: su vanguardia política practicaba, ciertamente, la guerrilla como método, pero esta forma de acción estaba en consonancia con la conciencia del movimiento y era una forma de lucha obligada por la circunstancia de una feroz represión y de un

movimiento obrero sin tradiciones políticas. En abril de 1981 se acusa a ETA de alcanzar cotas insospechadas de aventurerismo e insensibilidad ante una situación de extraordinaria gravedad, frente a la cual el pueblo vasco y los trabajadores no se encuentran en las mejores condiciones para responder. Sus acciones están dando excusas a la represión sobre la propia izquierda abertzale y a medios de comunicación como *Egin* y *Punto y Hora*. Y también están abriendo un peligroso foso entre los pueblos del Estado español, y creando graves dificultades para posibilitar la salida que el pueblo vasco necesita en momentos en los que las medidas excepcionales de represión se abaten sobre él. Con todo, la conclusión sigue siendo que el enemigo principal está en otra parte (*Combate*, 2-9 abril 1981):

El enemigo de la democracia no es aquel que lucha contra la opresión (por muy equivocado que esté en sus métodos de acción), sino aquellos que utilizando a ETA como pretexto lanzan contra los pueblos del estado español todo el arsenal represivo que concentran en su poder.

A la altura de 1981 la posición del EMK difiere ya de forma considerable respecto a la de la LKI, y su acercamiento a lo que ETA implica es bastante evidente. Ante unas declaraciones de Teo Uriarte (antiguo miembro de ETA, posteriormente militante de EE y del PSE, y muy crítico con la organización terrorista y su entorno), Patxi Iturrioz (*Zer Egin?*, 121, s. f.) no duda en asumir la defensa de ETA y resaltar sus aspectos positivos:

Diga lo que diga Teo Uriarte, ahí está el papel positivo que objetivamente ETA ha desempeñado y ello al margen de sus insuficiencias, de sus errores, de las diferencias que nos puedan separar, de las angustias existenciales que los amanuenses de la intelectualidad en saldo manifiesten. Al margen, incluso, de la voluntad de sus propios militantes y activistas.

Sorprendentemente, incluso desde los parámetros políticos de la extrema izquierda en la época, Patxi Iturrioz considera que ETA puede tener, también, un componente disuasorio frente a posibles aventuras militaristas de la derecha centralista más cerril.

No obstante, las divergencias entre el EMK y la LKI se expresan más en términos de crítica pública que de posición real de fondo ante la violencia de ETA, según la percepción de la LCR. Tal conclusión se desprende de planteamientos como los proclamados por el

discurso de Eugenio del Río en el congreso de unificación del MC y la OIC (Organización de Izquierda Comunista), en el que se denuncian graves defectos en la teoría y la práctica de ETA:

[...] su ideología nacionalista exclusivista y el hecho de haber actuado como factor decisivo en el interior del pueblo vasco y como factor de división entre los diversos pueblos del estado español [...] perspectivas políticas cortas y unilaterales en que se ha situado ETA [...] su desconexión con el movimiento obrero vasco y con las luchas de la clase obrera.

Sin embargo, a pesar de esas críticas, «ETA es un fenómeno político que refleja hoy los sentimientos de un sector del pueblo vasco» y «por ello no hay que apoyar las acciones “antiterroristas”, los frentes anti-ETA, etc.».

No obstante, y como se viene apuntando, el MC —o, mejor dicho, el EMK— no exterioriza esta crítica a ETA. La razón hay que buscarla en la actitud del EMK hacia HB, con la que ha evitado cualquier tipo de conflicto, aun al precio de silenciar sus críticas y divergencias. Esta actitud implica una divergencia política entre las posiciones del EMK y las de la LKI, que es resaltada en documentos internos de la LCR.³⁹

La relación entre la opinión que ETA merece al EMK y la oportunidad de las críticas públicas se explicita claramente en el Congreso del EMK de 1983. El texto de este deja poco lugar a dudas:

Estas razones nos han llevado, ya hace bastante tiempo, a adoptar una actitud bastante prudente en nuestras críticas a ETA, abandonando las posturas hipercríticas que mantuvimos erróneamente en el pasado y poniendo de manera inequívoca por delante la solidaridad con ETA a la actividad crítica.⁴⁰

39. Actas del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria, p. 74, también para las citas anteriores.

40. *Ibidem*: 28. Entre las razones que se citan destacan las siguientes:
«—ETA es una fuerza que actúa en un campo en el que nosotros no actuamos: el armado. Nuestras críticas a sus acciones armadas pueden ser, en consecuencia, fácilmente interpretadas como una crítica global a la lucha armada como método de lucha.
—Nuestra inexperiencia en este campo, nuestro conocimiento básicamente teórico de los problemas que se plantean en la lucha armada, y también nos empujan hacia la prudencia a la hora de emitir juicios...
—A ETA, por razones diversas (legales, políticas, etc.), rara vez le hacemos elogios públicos. Solemos, por lo general, destacar, matizada pero con cierta

Las contradicciones que implica una posición de crítica «moderada» ante actuaciones que no se comparten afloran ante episodios concretos que ponen de relieve la falta de consistencia política y moral de los juicios emitidos. Por ejemplo, ante un dudoso atentado cometido en Tolosa, con dos muertos que eran militantes del EPK y el PNV, *Combate* (1-7 julio 1980) se expresa en términos poco habituales, pero que implican unas conclusiones que luego no serán desarrolladas: se denuncia la confusión y la desmoralización, que corren parejas con «una especie de desinterés humano, de insolidaridad social ante asesinatos puros y duros en momentos de las importantes conquistas populares que representan las fiestas patronales». La conclusión es muy significativa:

Cuando la mayor parte de la población puede confundir sin pestañear las formas y métodos de actuación de las bandas fascistas con la actividad de sectores populares que se juegan la vida por una Euskadi más libre, se impone una seria reflexión sobre la validez o no de esa actividad.

Es difícil encontrar una expresión mejor de las dificultades en que se mueve el discurso de la izquierda revolucionaria en torno a la violencia: la calificación de asesinatos puros y duros, así como la insolidaridad social ante los mismos, revelan la naturaleza de la actividad de ETA y la «enfermedad social» que se está generando. Sin embargo, la izquierda revolucionaria solo reacciona cuando la autoría es dudosa o cuando se trata de una organización distinta a ETA militar. También hay una explicación para ello: se califica de demagógica la actitud de afirmar que todos los terrorismos son iguales. Se hace un llamamiento a la actividad y la autodefensa si se confirma que es obra de bandas fascistas; si es de ETA, corresponde abrir una reflexión en profundidad sobre el papel de esta

unilateralidad, lo negativo, lo erróneo, lo desenfocado. Esto también nos ha empujado hacia la parquedad...

—Es una fuerza muy acosada desde el poder, desde la derecha y desde el reformismo. Y sus gentes, como es lógico, viven una situación difícil, de cerco, de persecución. Toda crítica sumaria, poco fundada, genérica o cliché, tiende a echar agua al molino del cerco ideológico y político montado por la derecha.

—Es una fuerza con la que queremos mantener lazos de amistad hasta donde sea posible y sobre la que aspiramos a influir (sin que ello signifique que nosotros no debemos también tratar de aprender en esa relación). Todo ello exige, como es lógico, cuidar especialmente el tono, las maneras y los momentos de nuestras críticas. O, lo que es lo mismo, pensar las críticas en función de las repercusiones que las críticas puedan causar sobre ellos.»

organización. Ante el asesinato de un *camello* en Hernani, reivindicado por un grupo desconocido (Grupo Autónomo de Autodefensa de Euskadi), la LKI se pronuncia con dureza: manifiesta la preocupación por el clima de intolerancia y fanatismo que ha reflejado el atentado y por el ambiente insolidario y desmovilizador con que se ha saldado un hecho tan grave que concernía a todo el pueblo. Se considera una muerte injusta (es imposible no advertir el contraste con la indiferencia ante otras muchas muertes), y el comportamiento de una parte amplia del pueblo, inadmisibles. Se califica a la víctima (a la que en esta ocasión sí se le llama por el nombre, Antonio) como un hijo del pueblo, no un enemigo social. Y se concluye que es un sinsentido pensar que un tema tan complejo como el de la droga se vaya a saldar con tiros y amenazas, y mucho menos si van dirigidos al «pasota», al pequeño traficante.

Por otra parte, en esos años, el terrorismo es un fenómeno notablemente activo en otros países europeos, como Alemania e Italia. La crítica de organizaciones como las Brigadas Rojas reproduce algunas de las consideraciones aplicadas a ETA. Se hace responsables a los partidos obreros mayoritarios de la falta de alternativas en que se encuentra el movimiento obrero, pero se rechazan las acciones de estos grupos armados en cuanto contrarias a los intereses de los trabajadores: de ellas tan solo se deriva un incremento de la represión y una pérdida de confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas para la transformación social.

La caracterización de Herri Batasuna

Herri Batasuna es una coalición (Acción Nacionalista Vasca [ANV], Euskal Sozialista Biltzarrea [ESB], Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea [HASI], Langile Abertzaleen Iraultzarako Alderdia [LAIA]) que nace en 1978 y que integra los sectores del nacionalismo radical más cercanos a las tesis y a las prácticas de ETA militar. La LCR caracteriza a HB como «nacionalismo revolucionario»: es una calificación que se vincula en términos históricos a los movimientos nacionalistas anticoloniales, desarrollados sobre todo en los años sesenta como frentes amplios para la liberación de las colonias del dominio de los países occidentales. En el caso de ETA, el nacionalismo revolucionario respondía históricamente a las tesis de Federico Krutwig, quien en su libro *Vasconia*, el más influyente en los primeros años de ETA, teorizó la colonización de Euskadi por España, equiparando la lucha por la independencia con los movi-

mientos anticoloniales.⁴¹ Calificar a finales de los años setenta y principios de los ochenta a HB como un movimiento nacionalista revolucionario no deja de ser una definición que pretende ante todo salvar las dificultades teóricas que conlleva la cercanía, primero, y el apoyo, después, a un movimiento nacionalista radical cuyas propuestas estrictamente revolucionarias o simplemente socialistas brillan cada vez más por su ausencia. Para ahondar en esa línea, se aprecian varias corrientes políticas que conviven en su seno (*Combate*, 16-22 enero 1980), diferenciando la izquierda abertzale, representada por KAS, de un ala más derechista de la que forman parte Txillardegi o Telesforo Monzón (calificados como nacionalistas recalcitrantes). Se acusa a estos de empujar al pantano del nacionalismo interclasista las aguas del nacionalismo revolucionario, en un salto dialéctico que hace abstracción del carácter igualmente interclasista de este último. Se concluye, en relación con la frustrada coalición intentada para las elecciones de 1980, que si se coincide en la voluntad de romper las cadenas centralistas, no sucede lo mismo con la lucha anticapitalista: se acusa a HB de abandonar este objetivo. En espera de que los partidos del KAS lo asuman, la LKI proclama su pretensión de alcanzar la plena soberanía nacional y la unidad anticapitalista de la clase obrera de Euskadi. No deja de resultar curioso que dos años después, sin que haya habido ningún movimiento en ese sentido de KAS y HB, la LKI llame a votar por esta última (*Combate*, 16-22 julio 1982): la LKI, en un análisis revelador, sostiene que el acercamiento del EMK a la izquierda abertzale puede ser la consecuencia de un cierto reflujo de las movilizaciones de masas, que deja más espacio al «vanguardismo». No es demasiado arriesgado aventurar que el acercamiento posterior de la LKI responde a los mismos impulsos.

Desde la izquierda revolucionaria no faltan proclamas que dejan claro el riesgo de pérdida de identidad y de protagonismo al situarse en la órbita de una organización y un entramado mucho más fuertes y representativos. La decisión, sin embargo, no se toma por ignorancia de los mismos, sino sin duda por el cálculo de que las ventajas serán superiores a los inconvenientes. En definitiva, tal y como se expresa literalmente en un editorial de *Zer Egin?* (45, segunda quincena septiembre 1979),

41. «El nacionalismo revolucionario es, en la actual época del capitalismo decadente, en la era del imperialismo, que ya Lenin lo calificó de fase superior del capitalismo, la justa forma de lucha contra la opresión» (Krutwig, citado en Garmendia, 1995: 294).

A nosotros, puestos a tener que escoger, nos parece más digno hacer el caldo gordo a Herri Batasuna (en la medida en que sea inevitable, naturalmente) que hacérselo a las fuerzas de orden público, al Ejército, al Gobierno, a la UCD... A todos aquellos que defienden con uñas y dientes la sacrosanta herencia que los 40 años de fascismo nos ha dejado.

De hecho, las primeras referencias a HB se plantean por la necesidad de la unidad popular, es decir, de la unidad de todas las fuerzas rupturistas, que no aceptan la Constitución y el Estatuto, y para ello nada mejor que unir las fuerzas en la común batalla frente al régimen reformista y las fuerzas supuestamente de izquierdas que lo defienden.

No han faltado los llamamientos de la LKI a HB para que esta buscara ampliar sus apoyos, objetivo imprescindible para no llevar la lucha a un callejón sin salida. Así, se critica la entrada de LAB en KAS, o el cariz acusadamente proetarra de las movilizaciones (el grito más habitual era «Gora ETA militar»). En definitiva, se califica la política de HB de sectaria e izquierdista (en lo que hay una evidente referencia al trato recibido por los partidos de la izquierda revolucionaria, no una descalificación global de su actividad, y, por supuesto, no de su apoyo a la acción armada), pero siempre son tratados como defectos menores a los denunciados en el PSOE y el PCE (principales responsables de la división del movimiento obrero). Esta posición inestable, en la que se apoya un movimiento, pese a las carencias que se advierten en él con suma claridad, se expresa fehacientemente en la siguiente propuesta, que más bien es un deseo (*Combate*, 8-14 octubre 1980):

[...] la izquierda revolucionaria es la que hoy mejor podría tomar iniciativas de coordinación de la acción de las organizaciones revolucionarias de todo el Estado contra la política patronal y del Gobierno. Tomar esas iniciativas es imprescindible hoy para resistir a la derecha; es imprescindible, también, para estimular la solidaridad con Euskadi.

El problema para llevar a la práctica esta política es la debilidad de dicha izquierda revolucionaria, lo que obliga a la subordinación a un movimiento que tiene otras prioridades. Se culpa a HB y a ETA igualmente del desgaste del apoyo popular, ocasionado por los atentados y por una política que parece dirigida a mantener la base social ya existente, pero que no es capaz de suscitar nuevos apoyos.

Febrero de 1981 es un mes clave en la evolución política española, por el encadenamiento de episodios convulsos, que tienen su punto culminante en el golpe de Estado del 23 de febrero. Pero antes de esta fecha se han producido acontecimientos de relieve: el asesinato del ingeniero Ryan, de la central nuclear de Lemóniz, ha sido contestado con una huelga general masivamente secundada, como ya se ha señalado. Es la primera vez que tal circunstancia se produce, lo que suscita preocupación en la LCR, que no convocó la movilización. Sin embargo, a los pocos días el presunto miembro de ETA Joseba Arregi muere en la Puerta del Sol de Madrid a causa de las torturas recibidas. De nuevo la huelga general paraliza el País Vasco, esta vez con el apoyo de HB y la LKI. Pero esta última quiere hacer balance, tomando nota de las convulsiones de las últimas semanas. Se considera que la izquierda revolucionaria ha experimentado un retroceso en los meses precedentes, debido a los efectos de la escalada de ETA: el fortalecimiento del Frente por la Paz ha introducido en la clase obrera un pacifismo que ahoga su capacidad de autodefensa política e ideológica contra las agresiones de la burguesía. Se establece una correlación negativa entre estas movilizaciones por la paz y la respuesta a la represión. Se manifiesta la necesidad de que la izquierda revolucionaria busque la convergencia con la clase obrera. Sin embargo, el acontecimiento fundamental de dicho mes es, sin duda, el intento de golpe de Estado. En relación con las organizaciones vascas, quizá lo más reseñable sea la pasividad de HB ante el llamamiento a la huelga general de la LKI, el EMK y el EPK. La actitud de la izquierda abertzale, criticada por la LCR, responde a su análisis de la situación: «HB afirma que los increíbles hechos del lunes no suponen un deterioro fundamental de las condiciones democráticas, sino que, por desgracia, los mismos definen con exactitud las condiciones democráticas existentes». La reacción de las Gestoras Proamnistía abunda en la misma dirección: «Todo lo ocurrido no ha sido más que un golpe de Estado maestro, sin derramamiento de sangre, quedando totalmente consolidada la Constitución fascista y oligárquica» (*Combate*, 5-12 marzo 1981). La LCR critica muy duramente estas posiciones: se considera un grave error izquierdista no distinguir una democracia parlamentaria, por recortadas que estén numerosas libertades, de una dictadura militar. La LCR saca varias conclusiones de estos hechos, que refuerzan sus análisis previos: estamos ante una concepción política global de subordinación de la lucha de masas a la actividad de ETA militar. Por ello, HB no ha sabido reaccionar desde el punto de vista de la acción de masas, producto de la parti-

cular educación política en la que se ha forjado. Igualmente, resalta el peso del nacionalismo «en el sentido más negativo del término», según el cual el único punto de vista para enfocar la movilización es el de la nación. Ello conduce a que el enfrentamiento con las fuerzas represivas se plantee solo desde el ámbito vasco. De esta forma, todo su potencial revolucionario, toda su capacidad de resistencia y confrontación contra la represión en Euskadi, no encuentra ante el golpe terreno de acción. Subyace también en la actitud de HB una concepción izquierdista según la cual el levantamiento popular contra el golpe pudiera capitalizarse para consolidar la Reforma, la Constitución y las instituciones. La LCR insta a «estos compañeros» a reflexionar sobre las razones que han movido al Gobierno a tratar de impedir sobre todo la movilización popular; porque, se sostiene, si esta se hubiera producido en su dimensión necesaria, las condiciones serían mil veces mejores para avanzar en la libertad; porque la débil respuesta de la huelga general y la movilización es lo que más ha consolidado la Constitución, es lo que ha permitido el protagonismo del rey... Que las prioridades son otras queda claro en las decisiones del Comité Nacional de la LKI después del golpe de Estado: 1) animar un movimiento contra el fascismo y la reacción; 2) apoyar un frente amplio contra Lemóniz (paralización y referéndum); 3) ampliar la actividad unitaria contra la segregación de Navarra; y 4) convocar de forma unitaria el Aberri Eguna.

También se aprecian algunas diferencias en la valoración que HB merece para el EMK respecto a la de la LKI; según esta, el EMK-MC trata a HB como la expresión de un movimiento popular radical, como un movimiento autónomo, con sus propios intereses y dinámica, sin tener en cuenta que es solo una parte de un movimiento más amplio. A ello hay que añadir las diferencias sobre la naturaleza y la función política del PNV, partido burgués de una nacionalidad oprimida (el EMK subvalora la contradicción entre este nacionalismo burgués y el centralismo); y el desenfoco hacia Euskadiko Ezkerra, al que el EMK trata como si fuera un partido reformista y no parte (moderada) del nacionalismo radical.

La LCR sostiene que el EMK ha asumido la teoría del «bloque rupturista» enfrentado al bloque reformista, lo que lo conduce a una política sectaria hacia el conjunto del movimiento nacionalista y a errores de tipo izquierdista. Y critica las posiciones que se derivan de ello:

- 1) No ha sabido distinguir el carácter progresivo o reaccionario de determinadas movilizaciones, por ejemplo la última manifestación

del PNV y EE contra la LOAPA; 2) ha apoyado convocatorias de movilización precipitadas cuando no aventureras (contramanifestaciones, llamamientos ultimatas a la Huelga General, métodos de lucha minoritarios y contraproducentes como la salida de la vanguardia de la fábrica mientras la plantilla seguía trabajando, rehuir asambleas, etc.) sin tener en cuenta las condiciones del conjunto de los trabajadores; más aún han llegado en ocasiones (junio del 80) a ser los promotores de esta forma de movilización; 3) lleva una línea sectaria con unidades de acción, condicionada al acuerdo con HB (ejemplo: la campaña OTAN); 4) sectarismo hacia la otra corriente del nacionalismo radical: EE; 5) eludir las críticas hacia la dirección de HB. Todos estos errores los hemos criticado en su momento: basta con seguir las páginas de *Combate*. Pero hay que insistir en que estos errores concretos tienen su origen en una caracterización errónea del nacionalismo radical y una relación sectaria con el conjunto del movimiento de emancipación nacional vasco. Esta divergencia ha estado en la base de las dificultades y conflictos entre HB y LKI en los últimos años.⁴²

El EMK, pese a las divergencias apuntadas, se decanta desde fechas tempranas y anteriores a la LKI por el apoyo a HB, de forma evidente en las confrontaciones electorales, pero también como referencia de la acción política. La razón estriba una vez más en la consideración de que se trata de reforzar las corrientes de masa que rechazan de forma activa la situación que se ha creado con la reforma política. La cuestión clave, de cara a las elecciones de 1982 por ejemplo, es que un mal resultado de HB sería interpretado desde el poder como la certificación de la eficacia de la política gubernamental, lo cual afectaría indudablemente no solo a HB, sino al conjunto de la izquierda revolucionaria.

Para la petición de voto a HB en la campaña de 1982, efectivamente, se alude a la necesidad de asegurar un alto número de voluntades revolucionarias en las urnas, que evidencien el fracaso de la política del poder, lo que conviene a todos los hombres y mujeres que se sitúan en el campo de la resistencia. El apoyo electoral a HB es, lógicamente, consecuencia de una caracterización de la coalición que aprecia en ella algo más que nacionalismo radical:

Aunque es cierto que [...] HB se va a conformar gracias al influjo fundamental de ETA (m), sin la cual no habría ni imaginar su existencia, la coalición electoral se va a extender mucho más allá de los sectores más o menos próximos a la organización armada. Esto va

42. Actas del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria, p. 73.

a producir un fenómeno doble: por un lado se van a difundir más allá de los sectores indicados las posturas más significativas de ETA (m) como el independentismo, por ejemplo. Por otro, va a acercarse hacia el nacionalismo radical, de la mano de esos nuevos sectores de masas que se acercan a HB, unos problemas y unas preocupaciones que, tradicionalmente, han tenido un peso relativamente pequeño en esas corrientes. Ha nacido así un movimiento mucho más amplio y diverso que lo que han solido ser las corrientes nacionalistas radicales rompiendo bastante con la tradicional «especialización». La cuestión nacional, la lucha contra la represión y el apoyo a la lucha armada, aunque siguen teniendo un peso determinante en su configuración política, no eliminan otras líneas de trabajo más diversificadas relacionadas con la organización popular, con la vida municipal, con problemas ecológicos generacionales o feministas, o con cuestiones sindicales, por poner algunos ejemplos concretos.⁴³

No obstante, junto a estos elementos juzgados de manera positiva, se aprecian zonas de sombra que también son apuntadas en el análisis. Fundamentalmente son tres los aspectos criticados en la línea política de HB: una marcada ambigüedad en el plano ideológico-político, en el que las perspectivas revolucionarias quedan muy desdibujadas e imprecisas; la tendencia hacia el militarismo, y el peso que sigue teniendo la tendencia nacionalista de signo más o menos exclusivista.

En 1984, la combinación de una cierta disminución temporal de las expectativas y la escasa receptividad de HB a las sugerencias de la LKI va a contribuir al nacimiento de una nueva formación política (Auzolan), que reúne a la LKI y a un sector escindido de Euskadiko Ezkerra (Nueva Izquierda): Auzolan se presenta como una nueva plataforma de la izquierda vasca, que trata de paliar la «crisis» de la izquierda revolucionaria y abertzale:

A pesar de que HB sigue siendo la fuerza revolucionaria mayoritaria y que mantiene un alto potencial de lucha, la dirección de HB y la alternativa KAS han demostrado sus límites para reconducir la situación y exigen de la izquierda comunista asumir sus responsabilidades en el plano de las alternativas para evitar mayores deterioros y recuperar en lo posible el caudal de combate que se está despilfarrando y frustrando, haciendo generar una nueva alternativa a nivel de vanguardia y masas radicales, tanto obreras como populares, tanto en el espacio de HB como en otros espacios de la izquierda.⁴⁴

43. Congreso del EMK, marzo 1983, pp. 24-25.

44. Actas del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria, p. 9.

Esa opción no estaría en un campo distinto de HB pero sí como una variante de ese campo que busca crear una vía distinta (al interclasismo, al militarismo, al bloque...) y que, para hacerlo, juega con la unidad de acción y las propuestas unitarias (incluso electorales).

Sobre la violencia, no deja de ser curioso el acuerdo alcanzado:

Existe un compromiso interno de no posicionamiento ante las acciones armadas (excepto los de gran trascendencia política y social) como criterio general. Este tema es una concesión impuesta por NI [Nueva Izquierda] y el colectivo ex-LAIA aunque queda paliada porque Auzolan desde su propio nacimiento va a quedar perfectamente desmarcada de la vía de la acción armada, sobre todo por el enfrentamiento y el debate que se va a reproducir desde el principio con HB, sobre la validez de la lucha armada en la situación política actual.⁴⁵

Va a ser el último intento de la LKI de presentar un perfil diferenciado del de HB. Serrano Izko (NI) enumera los objetivos de la nueva formación: impulsar la autonomía de los movimientos sociales, recomponer la capacidad de lucha sindical entre los trabajadores, unir la acción social con la institucional y avanzar en un nuevo modelo de sociedad implicando a los movimientos progresistas o alternativos de masas de reciente aparición con la lucha tradicional por la liberación nacional vasca. La actividad no unitaria de HB obligaba a crear la nueva plataforma, que sí nacía con voluntad de unir todo aquello que contestase al centralismo y a las fuerzas de la derecha. Sus planteamientos sobre la violencia no se diferencian mucho de los del nacionalismo radical: se define el origen de la violencia política como efecto de la situación de opresión nacional, de opresión social y de lucha entre clases sociales enfrentadas, agravado por la herencia represiva de cuarenta años de dictadura. Auzolan cree que, en contra de «hipócritas frentes por la paz», la única pacificación posible vendrá cuando se resuelvan en positivo problemas como la amnistía, el regreso de los exiliados, el fin de la represión policial y las torturas. No obstante, Auzolan reivindica su completa autonomía respecto a organizaciones armadas que son «organizaciones revolucionarias con estrategias diferentes a las de Auzolan. La coalición no participará jamás en formas de aislamiento y enfrentamiento con esas organizaciones. Lo importante respecto al uso de la vía armada para fines políticos es valorar su utilidad» (*Combate*, 13 octubre 1984). El objetivo es recoger votos de aquellos

45. Ídem.

sectores desencantados con la política de HB. Pedro Ibarra, cabeza de lista por Vizcaya de Auzolan, subraya que «la diferencia fundamental con HB es la lucha armada. La política de HB está hoy centrada en la defensa y apoyo de una organización armada. Nosotros no, y eso significa un cambio radical» (*Combate*, 23 febrero 1985). No obstante, añade que Auzolan no puede ser un gran polo de referencia en la izquierda sobre la lucha antirrepresiva o sobre la lucha por la liberación nacional. Aunque deberá trabajar en ese campo, no es posible que se vea a Auzolan como una referencia central en ese terreno.

Sin embargo, el recorrido de Auzolan es bien corto. Los resultados electorales son decepcionantes,⁴⁶ y la articulación de movimientos sociales al margen de HB se revela muy complicada (la lucha contra la OTAN y el inicio del movimiento antimili pretenden desempeñar un papel en este sentido, y de hecho absorberán buena parte de las energías del EMK y la LKI, pero no consiguen hacer sombra a la capacidad de movilización del MLNV). Al año siguiente de su aparición, el balance de Auzolan no es muy alentador (*Combate*, 14 junio 1985):

No se vislumbra desencanto creciente dentro de la Unidad Popular sino lo contrario y no parece tener consistencia creciente en sectores de los movimientos la necesidad de una organización alternativa a HB. Es cierto que hay sectores críticos dentro de HB y en los movimientos con aspectos de la política actual de la Unidad Popular, pero dan por bueno este instrumento. Y tras estos años de acoso represivo, de GAL, de buenas iniciativas como la Carta y mejores resultados en la movilización, ese sentimiento se ha reforzado... La razón de ser de Auzolan no está, en realidad, en que se considere necesaria una política práctica diferente de la de HB o EMK —la nuestra no lo ha sido en lo fundamental— sino en que no ven que haya que compartir filas sin compartir programas, es decir, ideas, objetivos, estrategias...; cabe, entre tanto, acción común, experiencias conjuntas y convencimiento mutuo... La reivindicación de independencia no está moviendo a las fuerzas sociales que la reclaman a ningún tipo de separatismo trasnochado o insolidario; expresa la exigencia de plena soberanía, de independencia total para decidir su destino como nación. La lucha armada no debería valorarse en tanto «educa» bien o mal, sustituye a este o ese movimiento, sino en tanto impulsa o debilita las fuerzas sociales en marcha. Bastaría decir que hay que reforzar la Izquierda Abertzale,

46. Auzolan obtiene 10.714 votos (un 1,0%) en las elecciones al Parlamento Vasco de 1984.

que hay que ensanchar la unidad popular y que estamos dispuestos a formar parte de este ensanchamiento. Auzolan ni debe ser una opción alternativa a HB; quizá deba ser diferente y convendría decir, en este caso, hasta qué punto y para hacer qué; en todo caso habría que sacar conclusiones de lo que significa no ser opción alternativa. Aquí el nacionalismo radical es la fuerza revolucionaria. Dejémonos de banderas. No se trata de que en la movida se vea la nuestra sino de ser parte de la movida, aunque sea sin bandera. Ya hay suficientes.

La LKI, el EMK y el nacionalismo

Las posiciones mencionadas en los últimos años del franquismo y primeros de la transición también sufren una evolución que conduce, en la misma dirección de lo planteado hasta aquí, hacia una identificación cada vez mayor con el nacionalismo. De esta manera, y en el caso de Euskadi, se da por supuesta la existencia de un pueblo vasco que incluye a Navarra y que tiene derecho a elegir su futuro libremente, por lo que la obligatoriedad de la unidad de España formalizada en la Constitución se convertirá en uno de los argumentos más repetidos para restar legitimidad al Estado y para justificar el terrorismo de ETA. La confluencia de la reivindicación de estos grupos comunistas con las de los nacionalistas radicales, particularmente en el País Vasco, será el primer elemento de convergencia. Este es el planteamiento que se esgrime fundamentalmente desde la LCR en los primeros años de la transición, en lo que constituye una continuación de las razones que supusieron la ruptura de ETA a partir de su VI Asamblea, a lo que se añade, aunque de forma más secundaria, la voluntad de implicar a todos los pueblos del Estado español en la lucha revolucionaria, buscando la combinación de la lucha de los trabajadores vascos con los del resto de España.

La inserción de la LKI y del EMK en estos años en la política vasca se hace desde una toma de partido que se puede calificar como de adhesión al nacionalismo. Aunque no se explicita de tal forma, sobre todo en los primeros años, cuando la propuesta formal de ambos partidos es la constitución de un Estado federal, la consideración de Euskadi como una nación oprimida lleva a la defensa de todo lo que implique una lucha contra el Estado central. Es cierto que las manifestaciones principales y más frecuentes se refieren a la crítica de la represión y a la reivindicación del derecho de autodeterminación, pero en su discurso subyace una identificación con la nación vasca, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las críticas a las posiciones del PSOE y el PCE. Así, se llega a identificar la

posición del PSOE con la de ese mismo partido en los años treinta, cuando se utilizó a una parte importante de los trabajadores inmigrantes contra el nacionalismo burgués; igualmente, se considera la posición del PSOE y del PCE como nacionalismo chovinista y gran español. La LKI sostiene que no es posible hablar de solidaridad más que desde posiciones de igualdad, lo que lleva a la exigencia de soberanía plena. No hay, más allá de esa identificación de entrada de Euskadi como nación oprimida y de la consecuente demanda de autodeterminación y del rechazo de la represión, una teorización sobre el papel real de Euskadi como nación oprimida. La actitud del PSOE y el PCE es calificada de prietista o lerrouxista (*Combate*, 16-22 julio 1980). Dada esta posición de principio, se niega cualquier posibilidad de profundización en el autogobierno que provenga de «acuerdos» con Madrid. Esta es la razón última del rechazo al Estatuto de Autonomía y de todas las competencias traspasadas al Ejecutivo vasco derivadas de aquel. Se critica, por ejemplo, a la Ertzaintza, desde un punto de vista tanto revolucionario (policía al servicio del orden establecido) como nacionalista (policía al servicio de un poder subordinado a Madrid). Hay una diferencia, en este aspecto, con la posición de HB, que, si bien también condenó la creación de la Ertzaintza, sí que mantenía una posición de principio favorable a una policía vasca. Esta frase resume la posición territorial de la LKI: «Intervenimos en la práctica a favor de todo lo que debilita el estado central» (*Combate*, 5-12 diciembre 1980).

La identidad con el nacionalismo revolucionario es explicitada en algunas ocasiones de forma inequívoca: «Hay momentos en que las banderas del nacionalismo revolucionario y del internacionalismo se confunden. Nos ha tocado ser internacionalistas y a la vez miembros de un pueblo oprimido». Se asumen en esta categorización de la nación oprimida las categorías del imaginario nacionalista: se exalta el orgullo de pertenecer a un pueblo que no acepta su sometimiento (*Combate*, 19-26 marzo 1981):

Las naciones tienen profundas raíces históricas, alimentadas por la lucha de décadas, de siglos. El pueblo vasco es una nación, a pesar de los Espartero, Gamazo, Mola, Franco..., la unidad de España no es sino la asimilación forzada por los Borbones, los militares y la Iglesia, por los terratenientes y grandes capitalistas que necesitaban un mercado para su trigo, sus paños y su hierro.

Sorprende que la izquierda revolucionaria asuma con naturalidad los tópicos historiográficos del nacionalismo: situar a Esparte-

ro como uno de los opresores de la nación vasca implica considerar el carlismo como un exponente de la lucha del pueblo vasco contra la opresión, lo que no prueba demasiado rigor desde el punto de vista histórico y difícilmente puede calificarse de progresista.

La toma de partido por los organismos y medios vinculados a la izquierda abertzale no deja lugar a dudas: se considera que *Egin* es el diario más abierto a la participación directa de los partidos de izquierda y de las organizaciones del movimiento. Es un fenómeno único en toda Europa como diario en el que escriben y se expresan diversas corrientes de opinión, y, sobre todo, sectores del movimiento de masas. En todo caso, el terreno de desacuerdos con la línea de *Egin* se establece dentro del campo común de la izquierda.

Javier Villanueva explica la decisión adoptada en el Congreso de 1983 de romper la vinculación orgánica con el MC (manteniendo la identificación política) y pasar a defender la independencia de Euskadi. La decisión tendería a reforzar lazos con ese movimiento cuya expresión electoral mayoritaria es HB; si bien es cierto que dentro de ese movimiento se reconoce el peso de ideas nacionalistas de tipo abstracto, esencialistas y hasta exclusivistas, «tenemos que ser conscientes de que movimientos revolucionarios relativamente amplios que sean revolucionarios al 100% ni existen ni existirán. Los movimientos revolucionarios de masas son siempre movimientos complejos, en los que se mezclan y se entrecruzan influencias contradictorias» (*Zer Egin?*, 153, 29 abril-13 mayo 1983). En la izquierda radical vasca existen muchas posiciones combativas, solidarias, progresistas y revolucionarias, que predominan sobre las anteriores:

Nuestra actitud ante un movimiento de estas características es la de tratar de unirnos a él lo más estrechamente posible, intentando, desde luego, que se desprenda de todo aquello que nos parece negativo y contraproducente para la lucha popular pero reconociendo sus virtudes y tratando de aprender con toda modestia de ellas.

La idea de la subordinación al mundo del MLNV aparece nítida en estas consideraciones. De hecho, la opción por la independencia se presenta como una consecuencia de la necesidad de expresar el rechazo popular a la política centralista que practica el Estado en Euskadi, sin que, según Villanueva, el movimiento independentista presente las importantes consecuencias negativas de cara a la unidad popular que en el pasado ha tenido (*Zer Egin?*, 153, 29 abril-13 mayo 1983):

Las razones por las cuales el Congreso de EMK ha decidido asumir la lucha independentista no se refieren a cuestiones relacionadas con los movimientos tácticos, con los problemas del corto plazo, de la coyuntura... Se trata de razones profundas, estratégicas: cómo oponernos más eficazmente a la política centralista desarrollada actualmente por el estado opresor, cómo favorecer mejor la unidad de las masas revolucionarias de Euskadi, cómo ayudar más a que las nociones revolucionarias fundamentales se asienten, cómo potenciar un acercamiento a medio y largo plazo entre las corrientes de vanguardia de la izquierda revolucionaria vasca...

Las resoluciones del Congreso también son claras sobre el particular:

Hoy en día nos encontramos en una situación en la que mantener el tipo de unidad formal que mantenemos hoy en el conjunto del MC (la unidad que definen los actuales estatutos) representa un obstáculo de cierta entidad para estrechar nuestras relaciones con una parte importante de las masas de izquierda de Euskadi y para nuestra política de acercamiento con otras corrientes de la vanguardia revolucionaria vasca sin que suponga, por otro lado, una gran ventaja para el desarrollo de las fuerzas revolucionarias considerando el problema desde otras perspectivas.⁴⁷

El acercamiento a HB llega a aceptar la plausibilidad de la integración en la coalición nacionalista, operación no realizable, sin embargo, debido a la negativa de HB a dicha integración. Aunque sobre el papel existiría una amplísima coincidencia de posiciones, y, lo que es más importante aún (*Zer Egin?*, 153, 29 abril-13 mayo 1983),

una diaria coincidencia en las luchas cotidianas en los más diversos frentes, la incorporación de EMK a HB sería posible y, sin duda, positiva. Pero, desgraciadamente, HB no es, hoy por hoy, una fuerza lo suficientemente flexible y madura como para poder aceptar, sin que surgiesen serias contradicciones en su interior, la presencia de una organización como la nuestra, con iniciativa política propia, con una incidencia autónoma sobre la realidad, modesta sin duda pero efectiva, con unos planteamientos estratégicos diferenciados de los dominantes en HB.

A HB se le achaca, efectivamente, sectarismo, una política antiunitaria que hace imposible cualquier acuerdo con otras fuerzas

47. Congreso del EMK, marzo 1983, p. 58.

de la izquierda radical vasca, la no presencia en las instituciones, errores en la línea político militar de ETA (se alude en concreto a una bomba que explotó en el Banco de Vizcaya el 5 de febrero de 1983, que causó la muerte de tres trabajadores), esperanzas desorbitadas que la negociación pueda haber suscitado. El descenso en el número de votos registrado por HB en las elecciones municipales de 1983 suscita la reflexión en los medios de la izquierda revolucionaria; junto con las dudas que introduce la nueva situación creada por la hegemonía del PSOE en el conjunto de España, se ponen de relieve las insuficiencias del modelo representado por HB, con críticas centradas principalmente en el sectarismo y la prepotencia que muestran hacia organizaciones que se sitúan en la misma órbita (como una y otra vez quieren poner de manifiesto las fuerzas de la izquierda radical).

Del cambio en la valoración de las acciones de ETA da muestra el editorial en el que se enjuicia la bomba colocada en el Banco de Vizcaya, anteriormente citada; la crítica se centra en la muerte de trabajadores inocentes, desde la perspectiva del error que supone, que se debe sumar a otros cometidos por ETA en fechas recientes, pero insiste en la falta de legitimidad de los defensores del sistema para criticar a los revolucionarios que luchan contra él. Mientras que las muertes provocadas por estos últimos son «dolorosos accidentes», las que se producen como consecuencia del capitalismo o de las fuerzas represivas del Estado son producto de una acción criminal; no falta en las críticas una alusión que quizá quepa entender como dirigida a la propia LKI, a esas alturas mucho más crítica con ETA que el EMK (*Zer Egin?*, 148, 11-25 febrero 1983):

Quizá la diferencia entre unas y otras muertes está en el hecho de que las pocas con que cabe responsabilizar a las organizaciones armadas, son dolorosos accidentes inherentes a toda lucha revolucionaria que aspira a transformar profundamente la sociedad, en tanto que las multitudinarias muertes producidas por el terrorismo patronal y por los cuerpos de seguridad del estado son el producto de la acción criminal de quienes defienden el sistema social establecido. Las primeras muertes son aireadas y explotadas demagógicamente. Las segundas se ocultan o se les quita importancia.

No aceptamos ni mucho ni poco la demagogia de todo ese coro de fuerzas sociales y políticas que tratan de sacar tajada del error de ETA para mejor consolidar un estado policiaco y neocentralista, en el que las libertades reales estén enterradas en el fango de las libertades formales. Pero tampoco aceptamos la posición de aquellos que, situados a la izquierda del reformismo, parecen estar siempre con los

dientes afilados para lanzarse a morder en los errores de la lucha armada.

La creciente supeditación al nacionalismo radical no deja de provocar lamentos por la incapacidad para imprimir otras dinámicas más propias de grupos comunistas. En este sentido, se constata la pérdida de pulso del movimiento obrero en Euskadi, que constituyó la punta de lanza en la lucha contra el franquismo, pero que ha sido duramente golpeado por la crisis de los años ochenta, y que en el movimiento popular vehiculado por el MLNV no deja de ocupar un lugar secundario. Se percibe la falta de relación entre lucha obrera y radicalización política nacional, lo que vendría a constituir el principal problema de los comunistas revolucionarios vascos. Existen síntomas que resultan preocupantes, pero que no dejan de ser una consecuencia lógica de la estrategia adoptada: en las huelgas convocadas por el mundo del nacionalismo radical, en general con carácter antirrepresivo, paran con más facilidad los comercios que las fábricas. Igualmente, se advierte un amplio foso en la respuesta a las mismas de Guipúzcoa y Vizcaya, por un lado, y de Álava, por otro. Desde el fin del franquismo se ha recorrido un penoso camino de derrotas y desastres de la clase obrera, del que se hace responsables una vez más a las direcciones tradicionales de los partidos obreros mayoritarios, con su política pactista y españolista. La ejemplar lucha de los astilleros Euskalduna vendría a simbolizar el final de un ciclo de la vanguardia obrera vizcaína. La conclusión es que se avecinan duros tiempos para los comunistas revolucionarios en el País Vasco (*Combate*, 18 enero 1985):

Tiempos que exigirán una gran fuerza moral y conciencia revolucionaria para resistir, para abordar las próximas luchas obreras con pocas posibilidades de éxito (con menos tras Euskalduna),^[48] para no aceptar ser derrotados en su lucha. Conscientes de que esto es

48. Los astilleros Euskalduna, enclavados en la ría bilbaína, prácticamente en el centro de la ciudad, formaban parte del paisaje físico y humano de la ciudad. Fundados en 1900, se vieron sometidos, al igual que el conjunto de la construcción naval y la siderurgia, a un duro proceso de reconversión en los años ochenta, que culminó con su cierre definitivo. Previamente, hubo una resistencia muy fuerte por parte de los trabajadores, que protagonizaron violentos enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Para la izquierda revolucionaria, se trató de una lucha emblemática, y también de una derrota de importantes consecuencias.

necesario para mantener la continuidad del movimiento obrero revolucionario, para mantenerse como vanguardia a pesar de las debilidades de las masas (y eso ha sido dramático en el último tramo de las luchas de Euskalduna), para poder enlazar con futuras experiencias, con el surgimiento de una nueva vanguardia obrera en un porvenir no próximo.

La lucha contra la represión

La resistencia frente a la represión es considerada una de las tareas fundamentales de los revolucionarios. A este respecto, no se plantea ninguna distinción entre las personas objeto de persecución policial. Se defiende con intensidad la libertad para el diario *Egin*, y por supuesto la legalización de los partidos independentistas y de la propia HB, los derechos de reunión y manifestación, pero también se censuran todas las medidas dirigidas a la represión directa del terrorismo etarra. La amnistía sigue siendo un objetivo prioritario, al tiempo que se rechazan las extradiciones (*Combate*, 11-17 junio 1980). La defensa del derecho al exilio o al estatuto de preso político se considera vital: el hecho de que muchos exiliados practiquen métodos de lucha violenta como vehículo político no invalida lo dicho anteriormente. La posible liquidación, si triunfan los planes del Gobierno, de la izquierda nacionalista se percibe como una de las mayores derrotas para la clase obrera de todo el Estado español, y una grave amenaza para la existencia misma de otros partidos y organizaciones. La consideración del nacionalismo revolucionario como una fuerza de resistencia contra la política de represión y de explotación de la derecha y de la patronal es una de las claves de los análisis que se están exponiendo. Quienes introducen entre los trabajadores la idea de que EE y HB son fuerzas antiobreras están adoptando posiciones chovinistas y reaccionarias, están impidiendo la solidaridad, y en definitiva colaboran con la represión policial capitalista. Es emblemática la condena de un atentado cometido por ETA en Zarauz: «Ninguna razón puede justificar tu muerte [...] pero la responsabilidad fundamental es de UCD» (*Combate*, 13-20 noviembre 1980). Sin duda esta frase explica con claridad la inversión de sentido que se ha producido en el análisis de la izquierda revolucionaria: al tiempo que se reconoce la imposibilidad de justificar un asesinato, se atribuye la culpa no a quien lo ha cometido, sino a quien se ha decidido de antemano que es el responsable de todos los males que se produzcan en este ámbito.

Los luchadores, pese a sus errores, «son parte del pueblo»; este es un planteamiento recurrente en la prensa de la izquierda revolucionaria. Se considera que con la excusa de perseguir a ETA se asiste a una calculada agresión contra el sector social que no ha claudicado frente a la reforma política. De la progresiva adopción del lenguaje de la izquierda abertzale es muestra la consideración de los presos de ETA político-militar como arrepentidos y traidores, mientras que la UGT, la USO, Comisiones Obreras y ELA son tachados de sindicatos amarillos y colaboracionistas. Las críticas contra el Gobierno socialista son de una extraordinaria dureza: se le acusa de que contra ETA no hay ninguna ética; la administración socialista está dispuesta a superar con creces los planes antiterroristas de anteriores gobiernos. El pasado franquista y la mala imagen de Martín Vila o Rosón fueron obstáculos insalvables para que sus campañas de intoxicación calaran entre la población. Sin embargo, los dirigentes socialistas, apoyados en la voluntad democrática de millones de trabajadores, intentan una guerra sin cuartel contra el radicalismo vasco en la que todo método es válido. Están dispuestos a provocar y cercar a la resistencia vasca sin ningún remilgo democrático o formal. En esa vía, el plan ZEN es un compendio de ataques frontales a las libertades individuales y colectivas (*Combate*, 30 junio 1983).

En el verano de 1985, se desarrolla una gran campaña contra las extradiciones: se destaca el amplio eco alcanzado por la iniciativa de la Carta a los Pueblos y Naciones del Mundo, tanto por su tratamiento democrático humanitario como por su naturaleza de organismo abierto a cuantos quieren defender el derecho de asilo político. La apelación a Amnistía Internacional y a otras instituciones de carácter humanitario introduce por primera vez a estas organizaciones en el lenguaje y la consideración de los derechos humanos. Lo que llama la atención es que tales conceptos no asoman cuando se analizan las prácticas de ETA.

Se acusa al Gobierno del PSOE de llevar el conflicto con Euzkadi al mayor grado de enfrentamiento desde la época de la dictadura, y de generar un nivel de radicalización política nacional mayor que entonces. Durante ese año, la movilización del nacionalismo radical alcanza sus mayores expresiones (*Combate*, 21 diciembre 1985):

¿Qué ha pasado en estos meses? En primer lugar, más allá de la paralización de las transferencias, de la loapización, lo que se está evidenciando crecientemente es el agotamiento del mismo estado como vía de recuperación nacional y de pacificación (división en el PNV). Por otro lado, el Gobierno ha sometido a la población vasca a

un cerco represivo agobiante: GAL, legislación antiterrorista, plan ZEN, miles de detenciones arbitrarias, generalización de la tortura, extradiciones. Se ha abierto una nueva fase de radicalización política nacionalista. Por un lado, sectores importantes de la juventud se han sumado a la política activa. Pero la radicalización abarca un espacio más amplio que el de la izquierda consecuente, atraviesa también las bases del nacionalismo tradicional, exasperados por la política de los socialistas españoles hacia Euskadi. Cierta acción común de HB y PNV, en el terreno de HB, en la lucha y en la calle. Se puede decir que ha fracasado la política del centralismo para Euskadi. No solo la política del gobierno de González, sino la política de la llamada reforma. Ha fracasado por la resistencia popular, incluyendo la resistencia con formas armadas. Las vías políticas ensayadas parecen agotadas, el enfrentamiento se agudiza y se ha entrado en una nueva fase de radicalización nacionalista.

1983-1990: de la cercanía a la subordinación

Como toda periodización, situar en 1983 un cambio de orientación en la política de la izquierda revolucionaria en y respecto a Euskadi incluye un componente de arbitrariedad y no responde absolutamente a un corte radical en la evolución de los acontecimientos; sí que se puede fijar, con todas las salvedades posibles, en la medida en que 1983 marca el primer año completo de gobierno del PSOE, y con él pueden extraerse varias conclusiones respecto al sistema político español en su conjunto y a la situación política en el País Vasco en concreto: la transición parece llegar a su fin, al gobernar sin grandes sobresaltos una fuerza de izquierdas por primera vez en España de forma pacífica desde 1936 y alejarse casi de manera definitiva el peligro golpista. En Euskadi, desde la aprobación del Estatuto también la normalización parece avanzar, con la sensible diferencia de que en esta zona sí hay un movimiento capaz de movilizar a sectores importantes de la población con una vocación rupturista, en lo que coincide con la izquierda revolucionaria. Desde el EMK y la LKI se ha impugnado la Constitución, por las razones ya expuestas, y se ha combatido igualmente el Estatuto de Autonomía, por causas similares: de hecho, el Estatuto emana de la propia Constitución, lo que implica la falta de reconocimiento de derechos considerados elementales para estas fuerzas: la autodeterminación, la plena incorporación de Navarra al área de la autonomía vasca o la completa desaparición de las fuerzas de orden público. Significativamente, al igual que hace HB, se ignora por completo todo el avance en el autogobierno que supone el

Estatuto, sin que en ningún momento se reconozca que pueda suponer un cambio importante en la propia organización política de Euskadi.

A partir de 1983, aproximadamente, se aprecia una mayor sintonía aún de la izquierda revolucionaria con el mundo de HB, organización que desde su aparición ha conseguido una implantación notable, con muy buenos resultados electorales en las elecciones celebradas desde esa fecha. Esta sintonía se manifestaba ya en la petición de voto para dicha coalición en las elecciones generales de 1982. En esta decisión comienza a cobrar importancia un razonamiento que, probablemente, está en la base del aún más destacado apoyo posterior: la transición parece definitivamente consolidada, sobre todo tras la victoria arrolladora del PSOE en octubre de 1982. A la gran movilización de amplios sectores de la sociedad española en los años finales del franquismo y primeros de la transición, le sucede el llamado «desencanto»: esa sensación de que todas las esperanzas depositadas en el fin de la dictadura se habían traducido, efectivamente, en un régimen democrático, pero alejado de los ideales de justicia social y de igualdad que habían alentado el crecimiento del PCE y de los partidos comunistas de distinta naturaleza (fundamentalmente trotskistas y maoístas). La desmovilización que tales percepciones traen consigo hace disminuir los apoyos de dichos partidos de forma brusca: algunos desaparecen (el PTE y la ORT), otros se mantienen con un nivel de incidencia social muy rebajado. Tal estado de cosas tiene una excepción: Euskadi. En este territorio la movilización mantiene unas cotas, tanto numéricas como de intensidad, muy elevadas. Hay un nivel de oposición y resistencia al régimen surgido de la reforma muy amplio en importantes sectores sociales. Aunque la base del rechazo es el nacionalismo radical, la semejanza en temas fundamentales del discurso con el de la izquierda revolucionaria reseñada anteriormente, así como el barniz izquierdista de la retórica de ETA y HB, permiten establecer elementos de conexión que van a llevar a la LCR y al MC a considerar que los proyectos insurreccionales fallidos pueden hacerse realidad en Euskadi. El problema para esas organizaciones es que la pretensión de liderar el movimiento, considerada real a finales de los setenta, ya no es posible en los primeros ochenta. HB ha emergido como una fuerza poderosa, vinculada a la actividad armada de ETA, mientras que los partidos de la izquierda revolucionaria mantienen un nivel de actividad y militancia significativos, pero en absoluto equiparables. La voluntad de alentar la movilización y el espejismo de estar ante un pueblo dis-

puesto a hacer la revolución en el Occidente de finales del siglo XX explican el proceso desencadenado.⁴⁹

Ese progresivo acercamiento a HB no va a tener en general ningún signo de reciprocidad; HB no solo ignora las críticas recibidas desde la izquierda revolucionaria, sino que no da ningún paso para fortalecer la colaboración con sus organizaciones representativas, salvo con ocasión de acontecimientos o campañas puntuales. En las referidas elecciones de 1982, la LKI llama a votar a HB, pese a que esta manifieste explícitamente su voluntad de hacer la campaña «como es habitual», y no haya ningún atisbo de coalición o inclusión de miembros de otras organizaciones en las listas.

Un buen resumen de la posición ante ETA en este periodo viene recogido en este documento, en el que parece apreciarse ya una cierta suavización de las críticas vertidas en los años anteriores (*Combate*, 12 marzo 1982):

- A) ETA es expresión, no solo histórica sino también actual, de la lucha contra la opresión nacional y es, para todo un sector del movimiento nacional revolucionario, reconocida como su dirección.
- B) Nuestra primera posición ante ETA se basa en nuestra defensa incondicional del derecho a la independencia de Euskadi (autodeterminación) y en la defensa incondicional de todo el movimiento abertzale frente a la represión y frente al centralismo e implica también el combate político e ideológico permanente dentro del movimiento obrero vasco y de todo el estado contra toda forma de frentes y campañas «antiterroristas».
- C) Nuestras críticas a ETA se sitúan, por tanto, a este lado de la barricada, en el campo de quienes queremos combatir el centralismo y acabar con la opresión nacional.
- D) Es a partir de ello como hemos realizado siempre nuestras críticas a las acciones armadas de ETA, es decir, desde el punto de vista de que dichas acciones significaban para el avance de la conciencia y de la organización del movimiento obrero y popular.
- E) En este terreno nuestras críticas han sido en muchos momentos muy duras.

Jaime Pastor, dirigente de la LCR, no deja lugar a dudas sobre las prioridades (*Combate*, 2 abril 1982):

[...] las amenazas a la democracia vienen de este régimen enfermo de gopismo, y la tarea de toda la izquierda ha de ser la de hacerle

49. Esta es la tesis de Arriaga: «[...] restos de una izquierda radical alternativa que, tras su debate electoral y el paulatino enfriamiento y rutinización de la lucha obrera, se hallan a la búsqueda de un refugio colectivo» (1997: 18).

frente, por encima de las discrepancias que pueda haber sobre la actividad de ETA.

En relación con el Congreso de abril de 1983, en el que el EMK rompe su relación orgánica con el MC y se proclama independiente (lo cual implica, obviamente, su defensa de la independencia de Euskadi), la LCR deja ver sus discrepancias con dicha organización, con la que se han buscado fórmulas de colaboración de forma infructuosa hasta entonces, y lo hace subrayando las cuestiones que los separan del nacionalismo radical representado por HB: el militarismo, el desprecio a la acción revolucionaria dentro de las instituciones (referencia a la política de HB de no acudir a las instituciones), la insistencia en catalogar y estatificar la conciencia de los trabajadores vascos entre reforma y revolución, la obsesión por disipar y polarizar actitudes ideológicas de principio del campo de la acción de masas, son en su conjunto excesos negativos que se dan muchas veces en el campo revolucionario vasco. La LKI se defiende de la acusación de que sus posiciones representen una «tercera vía» (entre quienes defienden el régimen constitucional y la «resistencia»). Esto, se afirma, no tiene nada que ver con la pretensión de quienes tratan de ensayar formas equidistantes entre el programa y las actitudes de, por una parte, los revolucionarios, y, por otra, los reformistas, ante los graves problemas de Euskadi. Pero la LCR denuncia el empeño de sectores del nacionalismo revolucionario de continuar por mucho tiempo estableciendo una relación de cerco político hegemónica con organizaciones revolucionarias cuyo entronque estratégico no es estrictamente el suyo. Se critica con amargura al EMK por los reproches vertidos contra la LKI, sorprendentes cuando hay una práctica conjunta de ambas organizaciones, que se transmutan en exquisito cuidado, paciencia y ausencia de sectarismo en los análisis y proyectos de relaciones con la «amplia vanguardia revolucionaria vasca». Pero sin duda lo más significativo y revelador en esta puesta al día de la situación de los sectores radicales en Euskadi es que la propia LKI se considera una parte de esa vanguardia, una «parte comunista y revolucionaria», aún más, «nuestro objetivo también está abierto a una unificación partidaria con la izquierda socialista, anticapitalista, de KAS» (*Combate*, 27 octubre 1983).

Con respecto a la actuación de ETA, no se cuestiona su eficacia ni mucho menos su legitimidad, sino en todo caso su orientación (*Zer Egin?*, 155, 28 mayo-10 junio 1983):

[...] la dinámica armada no debe estar centrada como lo está en conseguir la negociación. Sobre y por encima de todas las cosas, porque en ello puede estar en un momento determinado su propia crisis. Pero es que, además, una orientación así determina la sujeción del movimiento político a las necesidades de la actuación militar, recortando de una manera importante las propias posibilidades de su renovación. En otro lugar habrían de considerarse también algunas acciones armadas particularmente desafortunadas —bomba del Banco de Vizcaya— que han contribuido no poco a confundir incluso a sectores proclives a ETA.

La sintonía del EMK con el MLNV es cada vez más evidente; la apuesta por ETA y su entorno no deja lugar a dudas, y se reafirma en un reposicionamiento en el análisis del partido sobre la situación política. Las críticas a ETA, HB y el entorno del nacionalismo radical desaparecen para dejar paso a una posición extremadamente crítica sobre el régimen surgido de la reforma política, en el que la continuidad con el franquismo se subraya con mucho mayor énfasis que antes. En la impugnación de tal sistema y la necesidad de encontrar vías de lucha contra él, se llega a superar al propio MLNV en la defensa de sus prácticas y en la importancia de su perpetuación. Ello se pone de manifiesto en el peligro que se cierne sobre una posible negociación (que aparece en los primeros meses de 1983 ante una propuesta de Carlos Garaikoetxea que lleva a la apertura de negociaciones entre el PSOE, el PNV y HB). La desconianza del EMK ante la posibilidad de que surja algún tipo de acuerdo de dichas conversaciones es fiel reflejo de una subordinación que lleva a apostar por la continuidad de la violencia como elemento clave para el desarrollo de la estrategia decidida, y, lo que sin duda es más grave, subordina cualquier otra consideración (incluidas las derivadas de la existencia de vidas humanas en peligro) (*Zer Egin?*, 147, 28 enero-11 febrero 1983):

La paz que desean el PSOE, el PNV, el PCE e incluso EE, es la resultante de la rendición del movimiento revolucionario vasco. Paz significa para ellos asumir dócilmente una Constitución derechista, centralista, machista, capitalista; renunciar a la lucha por el derecho a la independencia nacional; transformar la lucha de clases en pequeñas broncas de convenio; admitir que el monopolio de la violencia es del estado; reconocer que los cuerpos represivos son necesarios; aceptar que el euskera debe estar por siempre bajo la hegemonía del castellano... Paz significa para ellos que las fuerzas revolucionarias renunciemos a la revolución y que nos sometamos a las leyes y al juego político de la democracia burguesa.

Como marxistas sabemos que esa paz solo será posible como resultado de una larga y violenta lucha. Quien admita la lucha de clases no puede menos de admitir las guerras civiles y la violencia revolucionaria, que en toda sociedad de clases representan la continuación, el desarrollo y el recrudescimiento, a veces inevitable, de la lucha de clases. De ahí que tengamos que decir que aun en el lejano supuesto de que el Gobierno PSOE y los poderes fácticos aceptaran el programa KAS, ello no significaría la paz. Por eso, a nosotros también nos parece mejor hablar de normalización. Nuestra PAZ es demasiado seria como para comerciarla en una mesa de negociaciones.

El 19 de octubre de 1983 ETA político-militar (VIII Asamblea) asesina al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, tras quince días de secuestro. Bikila, dirigente de la LKI, califica la acción de gran error del sector de ETA (pm) que se negó a la disolución de la organización tras los acuerdos entre el ministro del Interior, Juan José Rosón, y el dirigente de EE Juan María Bandrés. Pero tampoco aquí faltan las comparaciones y las críticas al otro bloque, representado en este caso por el Gobierno del PSOE. En *Combate* (27 octubre 1983) se afirma que «la ética (del PSOE), que dicen preside sus actuaciones, es agua de borrajas ante la autoridad del Estado y la posibilidad de conseguir una victoria política contra las exigencias y reivindicaciones del pueblo vasco (estén envueltas en forma armada o no)». La importancia del asesinato del militar secuestrado es que se produce en un momento en el que están empezando los primeros episodios de guerra sucia protagonizados por los GAL. Vuelve la crítica habitual a las acciones de ETA:

El profundo rechazo popular generado está ya siendo canalizado hacia objetivos ajenos a una salida favorable a la autodeterminación del pueblo vasco. La presión del ejército influye en la actitud del PSOE y de los demás partidos. Es necesario lograr un giro de la situación política. La actividad militarista refleja también la desesperación a que es empujado un sector de la población vasca por el propio PSOE, que se empeña en no abrir ni siquiera la posibilidad de que el pueblo vasco tenga acceso a un autogobierno. [Se advierte un tipo de argumentación que hará fortuna con posterioridad: quienes practican la violencia «se ven empujados a ella por la cerrazón del Gobierno central».]

Las referencias a la violencia en el País Vasco en la prensa trotskista se muestran cada vez más proclives a la defensa de ETA. Aun sin tratarse de un pronunciamiento oficial, ni siquiera de uno de los

dirigentes políticos de la LCR, sino de un colaborador del periódico habitualmente especializado en las páginas culturales, se puede señalar como síntoma de esa tendencia, con la salvedad expresada, un comentario de Eduardo Haro Ibars. Ante una publicidad pagada aparecida en la prensa diaria, en la que un conjunto de intelectuales expresaba su rechazo a ETA y al asesinato del militar (*Combate*, 27 octubre 1983), Haro señala que los hombres y mujeres que dicen trabajar en la cultura como forma de dignificación de la convivencia humana se sublevan ante la ejecución del capitán Alberto Martín Barrios:

Ejecución que puede considerarse —y digo bien, puede— como un error político por parte de los políticos militares, como una metedura de pata, e incluso como un disparate que puede desencadenar una nueva «caza de brujas» por parte de quienes se han divertido cazando a estos simpáticos volátiles. También puede considerarse como un asesinato; pero, en este caso, habría que saber quiénes han sido los asesinos; tal vez los que, con su increíble tozudez, se han negado a difundir por la tele un comunicado de ETA (pm), que, por otra parte, era ya conocido de todos a través de la prensa. Tal vez un aparato estatal que tiene que mantener para sí el monopolio de la violencia; cuando es su brazo armado el que mata, el asesinato es siempre excusable; cuando son otros, no. En cualquier caso, la ejecución —lamentable— del capitán Alberto Martín Barrios debe ser entendida dentro del marco de una guerra: exactamente igual que los actos del IRA y de otros grupos de liberación nacional...

En el mismo número de este periódico se explica por qué la LCR no asistió a las manifestaciones contra ETA, redundando en la ya conocida teoría de que la movilización contra el terrorismo favorece la represión:

[...] porque creemos que después de las manifestaciones de masas del viernes 21 de octubre las libertades democráticas van a ser más atacadas, el gobierno va a estar más a merced de la derecha, van a aumentar las tendencias a la involución y va a aumentar la fuerza de la ideología reaccionaria en el conjunto de la sociedad.

A partir de la articulación por parte del PSOE de la política de reinserción de los presos de ETA (consistente en la aplicación de beneficios penitenciarios a quienes mostraran su voluntad de abandonar la lucha armada), la presión por parte de ETA sobre sus miembros susceptibles de acogerse a esos beneficios se intensifica. Sobre esta cuestión, la posición de destacados miembros de la LCR

está muy próxima a la de la organización terrorista; esto lleva a formulaciones que no dejan de sorprender en personas que no han participado en la lucha armada. Así se deduce de los comentarios vertidos en *Combate* (9 noviembre 1984):

Una cosa es que se pueda tomar la decisión de dejar las armas por no creer ya en la estrategia armada como vía correcta para el actual periodo, pero manteniendo el convencimiento de seguir luchando por los mismos objetivos con otros medios, y otra cosa abandonar las armas con su ideario revolucionario, pasándose al campo de la legitimidad burguesa y prestándose al más ruin de los juegos sucios, negando la legitimidad de la lucha de los hasta hace poco compañeros.

A medida que las perspectivas insurreccionales se van abandonando por la fuerza de los acontecimientos, la estrategia de ETA se centra en el intento de forzar una negociación con el Gobierno que permita rentabilizar la lucha armada y conseguir el reconocimiento de la organización como interlocutor. El análisis de *Combate* (20 septiembre 1985) en relación con la negociación incluye el cuestionamiento de los depositarios de la legitimidad democrática (es una suerte de réplica a quienes sostienen, como lo hace el discurso oficial del Gobierno, que ETA no representa al pueblo vasco, de manera que no es posible negociar con ella nada que afecte al conjunto de la ciudadanía). En esta tarea de proveer argumentos a la deseada negociación, se afirma que la legitimidad o ilegitimidad nunca viene dictada por la letra de las Constituciones ni de los supuestos ético-morales proclamados como universalmente válidos, sino por la relación de fuerzas político-sociales (en lo que constituye una argumentación que hunde sus raíces en la deslegitimación de la democracia burguesa y liberal propia de las organizaciones comunistas, pero que no deja de revestir inquietantes consecuencias en relación con la variabilidad de dicha relación de fuerzas). El relativismo se amplía a la aceptación o no de los métodos de lucha: se dice que aquí se niega la legitimidad del uso de las armas por sectores que lo admiten, por ejemplo, en Colombia, donde también hay Constitución y elecciones; aún más, la propia legalidad española, y este sigue siendo el argumento principal, se asienta en la negociación de la transición con los que estaban legitimados por la sublevación de julio del 36, de manera que el ejército triunfador en la contienda civil española es en la actualidad el único legal a efectos de pensiones; avanzando más en el tiempo, y entrando en concesiones hechas ya durante el periodo constitucional, la LOAPA no

fue sino la aceptación de las presiones militares, tras el 23 de febrero, para calmar la inquietud del ejército. De hecho, y este es sin duda el meollo de la cuestión, la Constitución y el Estatuto de Autonomía no representan sino concesiones a las presiones militares, que impidieron el reconocimiento de la plena soberanía del pueblo vasco. En definitiva, el problema es que se considera política realista (por tanto, legítima) ceder ante unos, e inmoral e inadmisiblemente hacerlo ante otros.

Otro ejemplo emblemático de la valoración ante los atentados de ETA lo encontramos en la reacción ante el asesinato del superintendente de la Ertzaintza teniente coronel Arcocha, en la medida en que se expresa de forma cruda la falta de criterios morales a la hora de valorar asesinatos, y la aplicación exclusivamente de criterios de utilidad para juzgarlos (*Combate*, 12 marzo 1985):

[...] los que estamos en la otra barrera nos hemos visto obligados a adoptar posturas defensivas: unos, porque aun estando de acuerdo con este tipo de acciones, no pueden defenderlas públicamente; y otros, porque aun no estando de acuerdo con ellas (porque consideramos que producen efectos contrarios a los deseados), no estamos dispuestos a caer en el mismo saco de basura (es ya larga la experiencia de tergiversaciones y manipulaciones); porque ante todo despreciamos la hipocresía de quienes niegan o deforman la realidad, y olvidan que la raíz de la violencia está en la opresión nacional que sufre Euskadi, y que el responsable único de ello es quien mantiene, cueste lo que cueste, los mecanismos de represión y opresión de nuestro pueblo. La responsabilidad de los autores de esas acciones las valoramos en su utilidad concreta para cada caso, de cara al movimiento de liberación nacional y social de nuestro pueblo. Una cosa es no estar de acuerdo con este tipo de acciones, por razones de oportunidad política, o de diferentes concepciones tácticas, y otra tragar la rueda de molino de unas instituciones supuestamente neutras respecto a los intereses de clase concretos u opciones políticas concretas. Lo decimos bien claro: la actual Ertzaintza, por razones derivadas del estado y por orientación del partido que gobierna en Euskadi, defiende intereses concretos.

Si el asesinato no merece valoración moral, sí hay espacio para ella ante declaraciones de representantes del Gobierno vasco (*Combate*, 22 marzo 1985):

[...] queremos mostrar la repugnancia moral que nos provocan las declaraciones «antiterroristas» de unas instituciones que no han encontrado en su raquítica historia un momento para el orgullo

nacional, aunque sí muchos, demagógicamente, para hacer el juego al poder que sustenta la opresión.

La política de apoyo a la lucha de ETA no impide que en sectores cercanos al EMK aparezca una organización armada que pretende aprovechar la legitimidad que importantes sectores de la población vasca conceden a la lucha armada, al tiempo que se propone corregir algunas de las desviaciones advertidas en las prácticas de ETA.⁵⁰ De hecho, la propia Iraultza reconoce la contribución de ETA a la causa de la resistencia al centralismo y al capitalismo que se traduce en los males que aquejan a la sociedad (paro, accidentes laborales, negación de los derechos de las mujeres, empobrecimiento del pueblo trabajador, negación de medios y derechos de la juventud, negación del derecho a la autodeterminación, negación de los derechos de Euskadi...) (*Zer Egin?*, 163, 17 diciembre 1983-13 enero 1984):

Vaya por delante nuestro reconocimiento a todas aquellas organizaciones armadas que en Euskadi están contribuyendo a mantener levantada la bandera de la resistencia. ETA, en particular, ha desbrozado un camino esencial para el futuro del movimiento popular vasco; ha mostrado la posibilidad cierta de utilizar en un Estado como el actual y en este momento la lucha armada con un apoyo popular ciertamente muy importante. A ello ha contribuido con un generoso derroche de esfuerzos que en muchos casos ha llegado a costar la propia vida.

Sin embargo, en Iraultza consideran que hay campos que ETA no llega a cubrir, e incluso hay algunas acciones de las que discrepan diversos sectores significativos del actual movimiento popular

50. La contradicción es menor si se tiene en cuenta el texto presentado al Congreso del EMK de marzo de 1983, p. 48: «Las contradicciones que la línea de ETA (m) tiene, a nuestro entender, con una perspectiva revolucionaria a largo plazo (su ambigüedad estratégica, la unilateralidad de su acción, su tendencia hacia el militarismo, etc.) hacen que se nos planteen dudas razonables sobre las líneas del desarrollo futuro de ETA (m). No cabe descartar, pues, otras dinámicas de acción violenta enfocada a esta:

- con unas perspectivas estratégicas más claramente revolucionarias;
 - con una mayor preocupación por ligar la lucha armada a las luchas de masas y viceversa;
 - con una voluntad unitaria en el plano político-militar más definida.
- Una dinámica de este estilo favorecería seguramente una evolución positiva de ETA (m)».

vasco. La orientación que se pretende en Iraultza es la de vincular la lucha armada a la problemática cotidiana de los sectores de trabajadores favorables a la utilización de la violencia: luchas por la defensa del puesto de trabajo, contra la explotación patronal en las fábricas, contra la imposición de proyectos antipopulares, contra el expolio del entorno, contra los límites impuestos al desarrollo del euskera, contra las múltiples formas de represión de la juventud, contra las leyes machistas y las agresiones contra las mujeres... En otro sentido, Iraultza se propone difundir una dinámica de auto-defensa popular, en la medida en que las acciones puedan ser cometidas por militantes sin una especialización concreta, es decir, acercar las prácticas violentas a sectores más amplios que los que integran las actuales organizaciones armadas. La lucha de Iraultza pasa por utilizar la propaganda armada para difundir unas perspectivas de lucha claramente revolucionarias, en lo que viene a ser igualmente una diferenciación con los objetivos de ETA, más centrados en primera instancia en la consecución de la alternativa KAS, y a más largo plazo básicamente en la independencia de Euskadi. Como elemento también diferenciador con respecto a ETA, se defiende la necesidad de aunar esfuerzos con las fuerzas revolucionarias del resto del Estado, y se aboga por una dinámica unitaria entre las diferentes organizaciones armadas vascas y entre las fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria vasca, como hemos visto que venían propugnando, desde posiciones diversas, el EMK y la LKI. Se propone asimismo la implantación de una relación adecuada entre las organizaciones militares y las organizaciones de la izquierda revolucionaria, lo que supone combatir la subordinación de unas a otras, o, dicho de otra manera, introducir una complementariedad en la que unas no se impongan sobre las otras. Iraultza, en definitiva, se propone como un complemento de las organizaciones armadas existentes, en ningún caso con una voluntad sustitutoria. La trayectoria de Iraultza posiblemente merezca una profundización mayor por las consecuencias morales y políticas que cabe extraer; su actividad armada se limitó a la colocación de artefactos explosivos sin causar víctimas..., salvo las propias de militantes de la organización sorprendidos por fallos o accidentes. Las ceremonias de despedida de los militantes muertos, una especie de remedo a pequeña escala de las organizadas por el entorno de ETA con motivo de funerales y entierros de sus activistas muertos, dejan un halo de tristeza, al destacar la sinrazón de la desproporción entre los medios empleados, los fines perseguidos y los resultados obtenidos.

Por lo que se refiere a los movimientos sociales, valgan unas pequeñas muestras que denotan la actitud de organizaciones supuestamente «alternativas». De la actitud de otras organizaciones del entorno de las analizadas son una muestra las afirmaciones de un miembro de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya (Arantza Urkaregi, en *Combate*, 22 enero 1982):

Habría que analizar cada acción en concreto. Las acciones de ETA no son en este momento lo más importante para el movimiento, las mujeres nos tenemos que plantear todo tipo de métodos. Las acciones armadas hay que analizarlas en este contexto: si fortalecen la organización de las mujeres, las acciones de ETA no representan un problema para el movimiento feminista.

Como otra muestra de la peculiar situación de los movimientos sociales «alternativos» en Euskadi, en los que el EMK y la LKI buscan desplegar su influencia social, se recogen movilizaciones de las mujeres de Euskadi contra el militarismo: el 2 de febrero de 1986 hay una concentración ante la fábrica de armas Star, en Eibar (*Combate*, 1 febrero 1986):

Hasta ahora, las mujeres hemos participado masivamente en todas las acciones que en Euskadi se han realizado por la salida de la OTAN y en contra de la militarización creciente de la sociedad y, en el futuro, también lo seguiremos haciendo.

Sorprendería, si no fuera por la repetición del fenómeno, que un movimiento contra el militarismo en Euskadi no tenga nada que decir sobre ETA. Así fue en la fecha citada, a lo largo de la lucha contra la OTAN, y también en el posterior movimiento por la insu-misión. Se produjeron roces entre distintas corrientes políticas participantes en estos movimientos, pero en ningún momento se cuestionó la pertinencia de que grupos etiquetados como pacifistas ignoraran la existencia de ETA en el entorno cercano y la participación de colectivos afines a ella en el propio movimiento pacifista. De hecho, el triunfo del «No» a la OTAN en Euskadi en el referéndum del 12 de marzo de 1986 fue probablemente uno de los hitos que ratificó a los partidos de la izquierda revolucionaria en el acierto de su apuesta por la vinculación al nacionalismo radical, y que contribuyó, en consecuencia, a intensificar esa vinculación. Efectivamente, el referéndum había demostrado, a sus ojos, que la «insu-misión» al sistema solo era viable en territorios con una fuerte conciencia nacionalista. El «No» únicamente triunfó en Cataluña, el

País Vasco, Navarra y Canarias. Hay que tener en cuenta que la movilización contra la alianza militar, primero para forzar el referéndum y después para ganarlo, fue la última gran movilización de los grupos situados a la izquierda social y política del PSOE, y contó con un seguimiento muy amplio. Además de las grandes manifestaciones, el resultado de la consulta, aun suponiendo una derrota, alcanzó un porcentaje de un 39% de votos «No», evidentemente cifra muy superior al respaldo social de la izquierda comunista en España. En definitiva, la confluencia entre movilización radical y nacionalismo alentó la deriva emprendida por la izquierda radical hace años y la confirmó para los posteriores.

La confluencia entre el movimiento ecologista y el nacionalismo radical se explicita de forma directa en el libro de Bárcena, Ibarra y Zubiaga, en el que se justifican las afinidades entre el nacionalismo y la ecología y, con mayor énfasis, entre esta y el nacionalismo radical (1995: 22-23):

No es de extrañar en ese sentido las desconfianzas mutuas entre el nacionalismo moderado y pragmático o de los partidos tradicionales de izquierda de ámbito estatal para con el MEV [movimiento ecologista vasco], ya que entre aquellos y este media un gran foso separador que tiene que ver tanto con los valores y proyectos de futuro como con los medios y formas de acción para acceder a los mismos. Ha existido no obstante un cierto poso común y acercador de sensibilidades entre la izquierda nacionalista y radical vasca y los NMS [nuevos movimientos sociales] al participar ambos representantes de una parte de lo social y de lo político, de un bagaje similar en torno a los modos y los objetivos de lucha. Y sobre todo de una misma percepción de los responsables y culpables de la situación sociopolítica a transformar.

La muerte de Txomin, acaecida de forma accidental en febrero de 1987 en las cercanías de Argel, es otro ejemplo de la admiración mostrada por la LCR a los «héroes de la revolución». El multitudinario acto de despedida constituyó una demostración impresionante de fuerza del nacionalismo radical. En *Combate* (14 marzo 1987) se participa con admiración y respeto:

«Errespetu osoz Estima handiz Euskal iraultzaren buruzagi zarelako.» Así decía una pancarta que los compañeros de LKI e IT de Arrasate habían colocado en el lugar del acto. Con todo el respeto, con la mayor estima, porque eres dirigente de la revolución vasca. Estas sencillas frases expresaban con todo acierto el estado de ánimo

y la actitud de muchos de los que allí nos encontrábamos, para quienes la discrepancia política no puede oscurecer en ningún momento el homenaje hacia el compañero caído.

1990-2000: la imposibilidad de la victoria

La delimitación de los bloques

Ha quedado claro en los años anteriores que la elección de campo no deja lugar a dudas: a un lado está España, al otro Euskadi; en una parte quienes han aceptado la reforma, la Constitución, y el sistema que se establece en España a la muerte de Franco, y en la otra quienes lo impugnan. En esta dicotomía, la LCR y el MC (la LKI y el EMK en el ámbito vasco) han elegido campo sin dudarlo. Y esta elección condiciona de forma permanente la actitud ante ETA y el MLNV. Expresando discrepancias que van aumentando o disminuyendo según las épocas, la toma de partido va a seguir produciéndose en esta década, como lo había hecho ya en las anteriores. La opción asumida condiciona la percepción de los acontecimientos que se producen. Así, la diferencia de tratamiento que reciben, en general, los atentados cometidos por ETA, por un lado, y, por otro, los atentados contra miembros de ETA o las actuaciones represivas —legales o ilegales— del Estado es muy grande. La reacción a estos últimos hechos une a la izquierda abertzale con la izquierda revolucionaria en la movilización y el rechazo del poder. Precisamente la lucha contra la represión es uno de los nexos de unión más importantes para la izquierda abertzale, y será un elemento esencial para entender la posición de la izquierda revolucionaria. La combinación de estas dos circunstancias (opción por uno de los supuestos bloques en lucha, y defensa incondicional frente a la represión) estrecha enormemente las posibilidades de articular un discurso claramente diferenciado. Las discrepancias con las acciones de ETA se difuminan ante los otros considerandos, o simplemente se ocultan para no dar bazas al enemigo, pero hay ocasiones en que se precisa sacarlas a la luz, por el deterioro de la imagen que el silencio pudiera provocar. Tal ocurre después del asesinato de Gregorio Ordóñez (*hika*, 54, febrero 1995), con motivo del cual Zutik expresa su opinión para manifestar su discrepancia, pero lo hace aludiendo al riesgo de que estas acciones se vuelvan en contra de las ideas que dicen defender sus autores, y al desprecio que muestran por una parte considerable de las opiniones de aquellos que hasta hoy arropan las acciones de ETA o por las de

quienes, sin aprobarlas, se niegan a la criminalización (es decir, ellos mismos).

Precisamente como respuesta a este atentado, Milagros Rubio (destacada representante de Batzarre —organización equivalente a Zutik en la Comunidad Autónoma de Navarra—) va más allá en el rechazo: subraya la importancia del atentado, al ser la primera vez que ETA atenta contra un político, lo que implica la aplicación de la pena de muerte a la disensión política.⁵¹ Si bien recuerda la violencia cotidiana (accidentes laborales, guerra sucia, torturas, paro y un largo etcétera de injusticias) procedente del poder que representaban Ordóñez y muchos otros, también es cierto que recogía el voto de mucha gente de este pueblo. La pregunta que se hace Milagros Rubio es trascendental, pero fue muy escasamente tomada en consideración: ¿qué sucedería si los responsables de la muerte de Gregorio Ordóñez llegaran al poder? La imposibilidad que muestra de permanecer en silencio ante este atentado no impide el recuerdo del necesario soporte a los presos y el reconocimiento del legítimo derecho que asiste a quien esté siendo violentamente golpeado a defenderse por todos los medios a su alcance. En consecuencia, estamos ante un criterio que no cuestiona las bases de apoyo mantenido hasta ahora, aunque sí pretende marcar un umbral que no debe ser sobrepasado si se pretende que ese apoyo se mantenga.

La incidencia en el rechazo de la represión y la solidaridad con presos y refugiados del mundo de ETA lleva en bastantes ocasiones a suscitar la cuestión del dolor que el conflicto provoca, pero restringiendo este al que sufren las personas relacionadas con el mundo abertzale. La inversión de las cosas alcanza a veces dimensiones enormes. Con motivo del asesinato de Gregorio Ordóñez, se lamenta el clima social que se está generando en torno a ETA, y se achaca a la falta de comprensión con quien va de capa caída, «aunque precisamente sean estos los que más necesitan de comprensión». En la misma idea se abunda al analizar la aparición de Elkarri (*hika*, 95, diciembre 1998):

[...] nada tiene, pues, de particular que de los entornos de uno de los colectivos humanos que más sufren, de verdad, las consecuencias del conflicto vasco surgiera una iniciativa como Elkarri; su voluntad de poner fin a este doloroso enfrentamiento tenía que encontrar en él un terreno abonado para su desarrollo.

51. Los atentados contra dirigentes de la UCD a principios de los años ochenta fueron obra de ETA (pm). El asesinato de Enrique Casas, el 23 de febrero de 1984, fue cometido por los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Reflexiones sobre la violencia

La elección de campo está hecha desde hace años, y la aceptación de la violencia como una «mal menor» también. Sin embargo, en los últimos años ochenta y principios de los noventa dos factores inciden en un replanteamiento de la segunda: por un lado, la mayor eficacia de las fuerzas policiales, que consiguen reducir la capacidad ofensiva de ETA, lo que tiene su mejor exponente en la caída de la cúpula etarra en Bidart (1992); por otro, la escalada en la acción terrorista, que cada vez utiliza en mayor medida el atentado indiscriminado. Los coches bomba ocasionan víctimas aleatorias, lo que empieza a plantear algunos problemas a los grupos políticos aquí considerados. Igualmente, el inicio de los atentados a representantes políticos (enero de 1995, con el citado asesinato de Gregorio Ordóñez, supone otro cambio cualitativo de serias consecuencias) genera reacciones muy duras en amplios sectores sociales (aparte de condenar a muerte a personas por sus ideas, se trata de representantes políticos que representan a ciudadanos que han confiado en ellos con su voto). Hay que señalar que la práctica etarra del atentado individual, la más utilizada en los primeros años, no supuso, salvo en casos aislados a los que se ha hecho referencia, ningún tipo de problema para los partidos de la izquierda revolucionaria. La catalogación por parte de ETA como «enemigos del pueblo» bastaba para considerar que su eliminación tendría alguna justificación. Así, la larga lista de miembros de las fuerzas de orden público (Policía y Guardia Civil), militares, políticos franquistas o ultraderechistas, chivatos, traficantes..., asesinados por ETA no da lugar a ningún tipo de consideración en la prensa revolucionaria. Solo se expresó alguna reacción con motivo de la muerte de trabajadores, de forma más o menos «fortuita» (trabajadores de Lemóniz, trabajadores del Banco de Bilbao, miembros de sindicatos o partidos de izquierda...). El cuestionamiento que se empieza a realizar en los años noventa problematiza la violencia, pero en general lo sigue haciendo sin una reflexión en profundidad sobre lo que ETA hace y sobre el carácter del terrorismo que practica (de hecho, esta palabra no es empleada jamás). No hay una reflexión en profundidad sobre la necesidad o la pertinencia del recurso a la violencia en la España de esos años. Esta ausencia de una teorización seria sobre el uso de la violencia se hace particularmente más grave ante la aparición y actividad del grupo Iraultza, que tiene una existencia continuada, aunque con intensidad más bien baja. De hecho, son más los propios militantes de la

organización muertos al explotarles las bombas que manejaban que las víctimas de sus atentados. La creación y mantenimiento de Iraultza responde al intento por parte del EMK, fundamentalmente, de articular un grupo armado que, siguiendo la estela de ETA, corrigiera alguno de los defectos más flagrantes de esta. Es decir, constituye un intento de utilizar la lucha armada de forma subordinada a la movilización popular, de manera que estuviera más vinculada a esta y no degenerara en una vanguardia armada desligada de las masas. Se trata de un planteamiento que reproduce los habidos en los primeros años de ETA, y que se saldaron precisamente con las escisiones que posteriormente darían lugar al MC y la LCR. En el impulso que da origen a Iraultza se advierte la voluntad de capitalizar el movimiento popular que se da en Euskadi a lo largo de los años ochenta, pero las razones que se expresan para la necesidad de la lucha armada son, cuando menos, endebles.

En relación con la actividad de ETA, los debates que en ocasiones se plantean surgen las más de las veces al hilo de atentados que, por su grado de crueldad, son francamente difíciles de aceptar para los militantes de estos partidos, y, por tanto, les plantean serias dificultades a la hora de explicar el apoyo que se está otorgando a la organización que los comete. Un argumento repetido es el de la legitimidad de la lucha armada en el Tercer Mundo, que sirve tanto como ejemplo digno de seguimiento (si Euskadi es un pueblo oprimido por el Estado español, ¿por qué lo que es válido para esos territorios dominados no ha de servir aquí?) como para subrayar las diferencias que impiden el mimetismo con las expresiones revolucionarias del Tercer Mundo. Con todo, se percibe una cierta relucencia a introducir criterios éticos en el análisis de la violencia, incluso por parte de aquellos que se muestran más contrarios a la misma. En el caso de los atentados más indiscriminados, junto con la ya inevitable condena, no faltan los argumentos que tienden a reducir la densidad del rechazo: el apunte de responsabilidades concretas de los poderes públicos (aparte de la consabida responsabilidad permanente por no acceder a las reivindicaciones del nacionalismo radical) en función de las circunstancias particulares de la actuación —llamadas previas para efectuar desalojos...—, la «necesidad» a que se ve abocada ETA de endurecer sus formas de lucha, dada la negativa del Estado a acceder a sus demandas, etc. En cualquier caso, se llega a señalar que «no nos parece ético hacer de ellas [las *ekintzas* indiscriminadas] un referente de primer orden a la hora de invalidar una práctica de lucha armada que abarca mucho más,

aunque comprendemos las dificultades y traumas que a todos nos causa» (*hika*, 34, febrero 1993).

El planteamiento que condiciona la legitimidad de la lucha armada a su papel de catalizador de las protestas reaparece en los años noventa, cuando la eficacia de la violencia de ETA es puesta en entredicho. La violencia habría tenido cierta efectividad en los años en que el Estado estaba fuertemente deslegitimado en el País Vasco; una vez que parece haber recobrado su fortaleza, la estrategia de ETA parece moverse con el único objetivo del desequilibrio militar, lo que impide la aglutinación de fuerzas sociales y propicia la secularización frente a otras corrientes políticas o sociales (*hika*, 54, febrero 1995). Se hace un llamamiento a la recuperación de la ética, recurso muy poco empleado en la tradición analítica de la izquierda revolucionaria. La propuesta consistiría en «considerar la legitimidad o ilegitimidad ética (desde nuestros valores) de la actividad armada vasca, comparándola con los objetivos por los que esa actividad se realiza y con la posibilidad de defender con efectividad tales objetivos por otros medios». No obstante, se reconoce la poca claridad que se tiene sobre el problema, aunque al menos se expresa la voluntad de no rehuirlo, lo que no es poco en vista de la trayectoria anterior. No faltan tampoco las recomendaciones para que el uso de la violencia no se convierta en insoportable (para quienes no la condenan): «La violencia, cuanto menos mejor; cuando menos prolongada mejor, y siempre, siempre, con un sentido proporcional, tratando de evitar crueldad, haciendo lo posible para que nunca sea indiscriminada». La aparición de Elkarri va a ser saludada por estos sectores con notable satisfacción. El discurso de Elkarri, que incide en la necesidad del diálogo sin condiciones, y que enmarca el final de la violencia en la solución al «conflicto vasco», encaja perfectamente en la oportunidad para la izquierda revolucionaria de encontrar salidas dignas a una situación incómoda: la perspectiva del debilitamiento paulatino de ETA junto con la evidencia de una violencia que por ineficaz y cruel se va haciendo siempre más insoportable. Encaja asimismo porque se trata de un discurso que parte de la necesidad de evitar la derrota de ETA, horizonte siempre rechazado, como hemos podido apreciar. Es por ello por lo que se critica a los grupos pacifistas que en los años noventa van cobrando fuerza y arraigo en la sociedad vasca (Funes, 1998). Efectivamente, la presencia de grupos como Denon Artean, Bakea Orain y sobre todo Gesto por la Paz introduce un elemento novedoso en las calles del País Vasco, que prácticamente por primera vez desde el inicio de la transición dejan de ser monopolio cotidiano del nacio-

nalismo radical. En *hika* se sostiene que la lógica de la paz, sin adjetivos, defendida por estos grupos se entiende como un intento de lograr la rendición de ETA, dado que es más fácil lograr el desistimiento de ETA que el del Estado, por la disimetría de las fuerzas enfrentadas.

Quizá lo más llamativo de la actitud de la izquierda revolucionaria, como ya se ha apuntado con anterioridad, sea que su apoyo a ETA creció en la medida en que su violencia perdía cualquier connotación revolucionaria o guerrillera, por lejana y discutible que fuera, para pasar a conformar una práctica estrictamente terrorista, a partir fundamentalmente de finales de los años setenta y principios de los ochenta. Así apunta Patxo Unzueta (1987: 218):

ETA, fundada a fines de los años 50 por un grupo de estudiantes católicos de familias nacionalistas, fue, al menos durante toda la década siguiente, una organización política no muy diferente a otras surgidas de medios universitarios antifranquistas, como el FLP, por la misma época. Como ellas, recibió la influencia de las doctrinas maoístas y guevaristas en boga, pero su guerrillerismo no superó en realidad el terreno del verbalismo y, en todo caso, nunca puso en cuestión su definición como grupo político. En los años 70 evolucionaría hacia posiciones más abiertamente militaristas, pero solo desde finales de esa década, una vez aprobada la Constitución y el Estatuto de Autonomía, lo específicamente militar —palabra que se añadiría expresamente a las siglas como principal seña de identidad— absorbería definitivamente a lo político. Por su ideología y por su práctica, ETA es una organización terrorista en sentido estricto desde hace 7 u 8 años, por más que sus concepciones teóricas, como las de otros grupos de extrema izquierda, legitimaban esa práctica antidemocrática desde mucho antes.

Se combate, efectivamente, a un Estado por capitalista y por centralista, pero parece ignorarse lo muy poco de anticapitalista que hay en las prácticas de ETA (como si valiera la autoidentificación, preñada de antecedentes históricos inequívocos, desde la retórica de la Falange joseantoniana al mismísimo nacionalsocialismo), y se acepta la calificación de centralista para un Estado que está iniciando un profundo camino de descentralización que cuajó (y eso ya se podía observar, con todas las dificultades que se quieran, en los años ochenta) en unas competencias autonómicas ciertamente importantes al final del proceso. La abierta falta de sintonía entre medios y fines, entre los objetivos declarados por parte de la propia ETA y los que le atribuye la izquierda revolucionaria, da pie a teo-

rizaciones ciertamente rebuscadas, encaminadas a dotar de contenido revolucionario a una práctica que solo lo tiene desde un punto de vista muy sesgado. Como ejemplo de esto, Eugenio del Río (1982: 150) pretende atribuir a la violencia de grupos como ETA el carácter de acción pionera en un proceso que habría de conducir a la erección de un contrapoder revolucionario capaz de aprovechar la descomposición del Estado:

Una política revolucionaria implica la búsqueda de formas de acumulación de fuerza armada sin esperar la posible aparición en el futuro de esas condiciones. Más aún, esa acumulación previa, por otros medios distintos, graduales y de carácter prolongado, puede convertirse en el factor decisivo para poder dar un curso revolucionario a esa situación de abierta crisis y de descomposición aguda del Estado, allí donde se produzca. Y llegamos así a lo que puede ser una hipótesis de trabajo constructiva: las pequeñas formas de organización y de acción en medios urbanos, proyectadas hacia un desarrollo de la capacidad militar del movimiento revolucionario durante un periodo de tiempo prolongado, se perfilan como una vía práctica en la compleja empresa de la construcción del contrapoder político-militar revolucionario en los países occidentales.

Lo que confiere un carácter revolucionario a la lucha de ETA, según estas teorizaciones *ad hoc*, es el apoyo popular con el que cuenta, y que permite diferenciar su práctica armada de la que efectúan organizaciones como la Facción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia (Aierbe, 1989: 190-191):

Al hablar de acción armada, es evidente que, en la inmensa mayoría de los casos, hablamos de poca gente, al menos hasta que se produzcan o aproximen los estallidos insurreccionales. No reside ahí el contencioso. El problema surge cuando esa vanguardia actúa por sí sola, protagonizando un enfrentamiento entre dos únicos contendientes, ella y el Estado; o planteando su intervención como resolutora de los problemas de la gente. Porque, en los casos de la RAF y en buena parte de la trayectoria de las Brigadas Rojas, la situación, grado de conciencia y movilización de los movimientos sociales han ido desapareciendo del ámbito de sus preocupaciones.

La aparición de la *kale borroka* (lucha callejera) en los años noventa provoca también debates y tomas de posición en las que aparecen de nuevo las perplejidades, las dudas y una búsqueda en ocasiones de explicaciones forzadas. Así, se exploran varias vías susceptibles de explicar el fenómeno: desde una especie de revuel-

ta generacional que, al estilo de Mayo del 68, enfrentaría a los jóvenes con la sociedad sin alicientes de sus mayores, hasta incluso un cuestionamiento de la lucha armada como forma de expresión de una elite (ETA), en un intento de incidir con intensidad en el enfrentamiento con el Estado sin necesidad de militar en ETA, aunque participando de sus mismos objetivos políticos.⁵² Parece evidente, sin embargo, que la *kale borroka* no es sino la plasmación de una nueva etapa en el MLNV, que pretende extender la violencia a las calles en una dinámica de «socialización del sufrimiento», y, por tanto, los jóvenes rebeldes no hacen sino cumplir las órdenes emanadas de la dirección militar del movimiento.

Tras la explosión de *kale borroka* que acompañó al acuerdo de Lizarra y la tregua de ETA, de nuevo la izquierda revolucionaria tiende a verlo como un fenómeno desligado de la estrategia del MLNV, reflejo, como se apuntaba en el momento de su inicio en los años noventa, de la respuesta sociológica al inmovilismo del Gobierno de Madrid.

La perversidad del enemigo

También es un recurso habitual atribuir intenciones perversas al previamente designado como enemigo, de manera que la posible y tan cacareada maldad del aliado, en el peor de los casos, no sería sino un pálido reflejo de la «maldad principal y originaria». Se trata de otra vía de legitimación de la violencia, que transita más por la descalificación del contrario que por la exhibición de las bondades propias. Por ejemplo, ante el secuestro de Julio Iglesias Zamora (*hika*, 39, septiembre 1993) se reconoce la dificultad de combinar la petición de libertad para los presos con la privación de la misma para la persona escogida por ETA. Pero a continuación se problematiza la cuestión a partir de los intereses de quienes se oponen al secuestro y se movilizan en la calle (se trata de la campaña del lazo azul, que no es acogida con simpatía precisamente) por la liberación del rehén: «Conjunción de intereses tras la pantalla de razones humanitarias». La conclusión lógica ante un enfrentamiento de esta

52. «En la entrevista que la revista de HB, *Herría Eginez*, hizo a miembros de esos grupos denominados por la policía como “Y” (y que ellos consideran que es una denominación falsa) ponían un extremado acento en no ser identificados con organización alguna, considerándose grupos organizados a su aire, que se coordinan solo para la pelea callejera y la realización de lo que ellos llaman sabotajes a los intereses económicos y políticos de los Estados francés y español» (Iriarte, 1996).

naturaleza, entre dos bandos que no practican juego limpio, es «no aceptar el juego de la polarización». Esta vía de argumentación se profundiza cuando se plantea el dilema «¿vida de Iglesias o movilización anti-ETA?», mediante el cual se trata de presentar las movilizaciones por la libertad del secuestrado como una iniciativa que ha concedido prioridad a la lucha contra la banda frente a la propia libertad del rehén. Se trata claramente de una argumentación que retuerce los hechos y la lógica del razonamiento hasta trasladar a quienes se pronuncian por la libertad de una persona lo que le puede suceder a esta de manos de un grupo violento al que no es posible, al parecer, achacar una responsabilidad inequívoca en aquello que hace.

La concepción de la ética es, cuando menos, extraña. No es habitual encontrar enfoques basados en ella, como ya se ha recogido con anterioridad, pero cuando aparecen solo se halla en las filas de la izquierda abertzale: se sostiene que HB mantiene una sólida red social y un capital político que reposa en actitudes morales y hasta culturales profundas. Del Río (*hika*, 88, abril 1998) llega a analizar la negativa del PP a la negociación con ETA como un temor al debilitamiento del sector de la población al que representa. Es decir, quienes se oponen a la negociación lo hacen por razones partidistas y no por cuestiones de principio. Se denuncia el carácter puramente instrumental del pretendido humanitarismo del PP y el PSOE, en relación con el rechazo que muestran a la tregua de ETA en 1998 (*hika*, 93, octubre 1998). Para el PP y el PSOE,

resulta más rentable electoralmente que en Euskadi reine un clima de crispación y violencia que de distensión. Existe una clientela electoral, que considera que el nacionalismo vasco en su conjunto constituye una amenaza de primer orden para su bienestar, estabilidad y seguridad, que hoy distorsiona tanto nuestra vida política que es una de las consecuencias políticas más graves de la acción de ETA, pero también es una de las manifestaciones más ruines de la visión de los partidos políticos más vinculados al poder estatal y de los aparatos mediáticos que han hecho del problema vasco el centro medular de su labor ideológica y política. (*hika*, 96, enero 1999)

La dimensión de las cosas

En la abigarrada política vasca de estas últimas décadas, la caracterización de los problemas varía de forma sideral según quienes sean los autores de la descripción. Para la izquierda abertzale, la opresión sufrida por el País Vasco, imbuida de ese sentimiento

agónico que ya anticipara Sabino Arana en su momento, es la mayor de las tragedias, que minimiza todas las demás, entendidas como «expresión del conflicto»; lógicamente, desde el lado de las víctimas de ETA, y del de quienes no participan de las ideas de los nacionalistas, las pérdidas humanas y la violencia terrorista constituyen el auténtico conflicto. Para las organizaciones comunistas de las que se habla, sabemos que su percepción está muy próxima a la de la izquierda abertzale. Pero no puede ser la misma; y no lo es sobre todo desde el momento en que la carga de la violencia y sus secuelas se va haciendo muy superior a las expectativas de triunfo. En los años noventa, cuando se hace patente el estancamiento electoral y movilizador de la izquierda abertzale, y cuando la violencia de ETA va siendo cada vez más difícil de asumir por la relación establecida entre hechos y resultados, los análisis de la izquierda revolucionaria se van modulando en consecuencia. Si con anterioridad también para ella la opresión nacional se convertía en el factor principal, y por tanto en el objetivo más importante a eliminar, la evolución de los acontecimientos introduce otros elementos en el análisis. Un factor importante que entra en juego al principio de esa década es la emergencia de los movimientos por la paz. La movilización contra las acciones de ETA va cobrando cuerpo, y se hace muy visible en la calle con motivo de varios secuestros protagonizados por ETA en esos años. En coherencia con la línea política mantenida, la izquierda revolucionaria no saluda precisamente de forma positiva la aparición y crecimiento de los grupos pacifistas. En el repertorio de críticas encontramos las que hacen depender a dichos grupos de grandes partidos presentes en el Pacto de Ajuria Enea, hasta lo que podría considerarse una recomposición del análisis que se hace de toda la problemática política del País Vasco (*hika*, 40, octubre 1993):

La paz es el debate nacional por excelencia, pero es discutible que la envergadura del debate corresponda a la realidad del problema. No se aprecian tan graves conflictos de convivencia que justifiquen tanta alusión a paces y guerras. Hay un problema de sobredimensionamiento, que condiciona las salidas.

Parece evidente que este modo de argumentar dista mucho del que se ha utilizado tantas veces para explicar y justificar el terrorismo de ETA (de hecho, la existencia misma del terrorismo implica un cierto desmentido a esta aproximación al tema). La minusvaloración de los daños producidos por ETA es otro de los recursos pre-

feridos para replicar los efectos de los atentados en la opinión pública (*hika*, 45, marzo 1994):

La acción de ETA, medida en términos cuantitativos, no parece razonable que en un mundo tan atormentado como el nuestro ocasione el revuelo político-simbólico que causa.

La «deuda» con HB

En los planteamientos de la izquierda revolucionaria subyace la existencia de una «deuda» con ETA y el MLNV, dada la capacidad de lucha y tenacidad tantas veces mostrada por el conjunto del movimiento, arrojando la represión del Estado, que se traduce en el colectivo de presos y exiliados, cuando no en las víctimas producidas por el propio Estado en enfrentamientos, o por medio de bandas parapoliciales. La liturgia de los mártires ha desempeñado un papel fundamental para HB y organizaciones afines (Casquete, 2009a); para la LKI, el EMK y Zutik, también la fascinación del ritual cumple una función que enlaza con las adhesiones irracionales reclamadas por el ceremonial y la liturgia de masas. El hecho de que los rituales en forma de homenajes tengan siempre como protagonistas a otros desemboca en un componente de deuda contraída por los sacrificios que hacen aquellos que han elegido el camino de la lucha armada. Difícil expresarlo con más claridad que en las siguientes líneas (*hika*, 37, junio 1993):

[...] al margen de la valoración que se puede hacer sobre la evolución y los significados actuales de HB, este movimiento ha soportado sobre sus espaldas la carga más pesada de cuantos hemos intentado evitar que las cosas hayan ido por donde han ido. Los muertos, los presos y los exiliados que jalonan su trayectoria son razones más que suficientes como para, quizá sin mucha esperanza, pero sí con un espíritu solidario modesto pero sincero, depositar su papeleta en una urna.

La combinación de deuda y de espejismo revolucionario es lo que explica en buena medida la subordinación a HB. También se expresa con nitidez en el siguiente testimonio (*hika*, 42, diciembre 1993):

La apuesta por la independencia [del EMK en 1983] no se hizo por una conversión a la concepción nacionalista de la misma, sino por acercarnos a ese movimiento; ajustamos nuestra valoración de la

lucha armada de ETA, y vimos como positivas las experiencias de nuevas formas de lucha violenta. Seguimos moviéndonos en ese terreno fronterizo y apoyando incluso electoralmente a HB.

En ocasiones aparecen las evidentes diferencias entre el grado de movilización popular en el País Vasco y en el resto de España como uno de los argumentos fundamentales para subrayar los efectos positivos de la lucha armada y el movimiento articulado en torno a ella. Si ya el resultado del referéndum de la OTAN supuso un espaldarazo a estas tesis, la prolongación en el tiempo de la «anomalía vasca» y la debilidad de la izquierda en el resto de España acentúan esa «nostalgia de Euskadi» como prácticamente el único territorio de la Europa occidental con un potencial considerable de impugnación del sistema vigente.

La cuestión es que la subordinación al mundo de la izquierda abertzale se traduce en una incapacidad notable de formular propuestas políticas, carencia que llega a poner en entredicho la función de una organización política. Así, se llega a afirmar que «no está en nuestras manos la posibilidad de influir en una u otra dirección. Nuestra aportación no pasa por decirle a ETA lo que tiene que hacer (porque ni lo sabemos ni nos iba a hacer ni puñetero caso)». ¿Dónde está entonces la aportación de la izquierda revolucionaria?: por ejemplo, en contrarrestar la demonización del mundo radical, al que se le atribuyen todo tipo de vicios morales y fundamentalismos, y en el que se descubre la viva imagen del fascismo. La deuda se prolonga cuando se sigue constatando que la sociedad vasca es mucho más rica, radical y favorable a transformaciones profundas de la sociedad como «las que nosotros buscamos». «Movimientos como el antimilitarista, la solidaridad con el Tercer Mundo, o tantos otros, tienen un terreno común más abonado para desarrollarse, lo cual está en relación con la existencia del mundo radical, tal cual es» (*hika*, 65, febrero 1996).

La rotundidad de la que hacen gala en numerosas ocasiones estas organizaciones se torna duda permanente cuando hay que valorar los hechos de la izquierda abertzale: así, cuando se analiza la violencia juvenil, como nueva forma de presión, se señala que su legitimación ética o moral no es un problema: «A uno le falta la perspectiva necesaria para tratar de ser justo» (*hika*, 70, septiembre 1996).

La deuda se mantiene incluso cuando son frecuentes las críticas a HB por no contar con otras organizaciones susceptibles de apoyar algunas de sus convocatorias; tal ocurre en la huelga general convocada en abril de 1997 con motivo de la detención de la Mesa

Nacional de HB. Zutik la convoca por un deber de solidaridad y de rechazo a la represión estatal, pero critica la unilateralidad y falta de organización de la convocatoria.

Como no puede ser de otra manera, se rechaza cualquier alusión al supuesto carácter fascista del MLNV. En *hika* (86, febrero 1998) se señala que palabras como *banda* o *asesinos* aplicadas a ETA no captan la realidad. Se citan varios datos como aval de HB: el apoyo prácticamente invariable del 15% de los votantes, la penetración en un tejido social que atraviesa clases y estratos, desde obreros hasta intelectuales, laicos y religiosos, gente madura y joven. Se afirma que el lenguaje antiterrorista es un obstáculo real para la paz: «Es un lenguaje policial, que no contiene ningún rigor y que es ineficaz y polariza en extremo la sociedad». Se insiste en que más de treinta años de políticas represivas no solo no han cosechado una victoria significativa sobre ETA, sino que han ayudado a fortificar su mundo social, armado de un cruce de imaginarios, de dolor sufrido y de una ética propia de la resistencia que se resume en la idea de que es la claudicación lo que convierte la derrota en permanente. Se resalta la importancia del factor emocional, compuesto de dolor, solidaridad primaria y deseos de venganza, con una idea fuerza: todo antes que ver a ETA humillada. Y se subraya el papel muy activo del recuerdo histórico: la lucha como prolongación del antifranquismo y el papel decisivo de los presos. Se destaca asimismo el arraigo del mito, la idea básica del discurso derivada de la guerra: o ellos o nosotros. Dos son las grandes dudas que se plantean en este momento: la posible perversión del proyecto y su viabilidad. Sus conclusiones, así como su análisis, son bastante certeros: «Los parámetros de la lucha de ETA han disuelto los valores emancipatorios, derrotado el humanismo y puesto el sectarismo político en la cima más alta». La consecuencia política que se extrae, sin embargo, es más discutible: «Sin una solución dialogada el mundo social no cederá, porque en último extremo se trata de sus propias vidas, de dar respuesta satisfactoria a un largo recorrido histórico personal y colectivo». Se establece también una analogía con el franquismo, con el que se habló y se buscó una salida dialogada. Así habrá de suceder con ETA, pues «no se puede amputar un mundo social que es inseparable de la sociedad misma».

La invencibilidad de ETA

Uno de los mitos más reiterados en torno a ETA por parte de determinados sectores es el que hace referencia a su presunta

invencibilidad, es decir, a la imposibilidad de poner fin a la violencia mediante la derrota de los terroristas y el entramado que los apoya, lo cual, por cierto, no se compadece con la postulación del conflicto como una guerra. El mito fue creciendo en la medida en que ETA demostró una capacidad de crecimiento que pocos hubieran sido capaces de pronosticar, una vez acabado el franquismo y consolidada, con dificultades pero de forma firme, la democracia en España. Pero quizá lo más importante del mito es que es difundido por aquellos sectores que no quieren la derrota de ETA; es decir, no se trata tanto de un pronóstico objetivo como de un deseo, que para verse cumplido necesita que haya mucha gente que lo crea. Porque defender la imposibilidad de derrotar a ETA tiene un añadido inmediato: es necesario acabar cuanto antes, dado que la victoria es imposible, por medio de la negociación. Este es el sentido que tiene la formulación de estas organizaciones sobre el posible final de ETA, y que se repite sin apenas variaciones con el paso de los años: «Lustros de represión no han acabado con ETA. Antes o después habrá de llegar una solución negociada» (*hika*, 64, enero 1996). «ETA no está derrotada ni va a estarlo en el horizonte probable» (*hika*, 65, febrero 1996). «[...] la tantas veces demostrada experiencia de que por medios represivos se puede dificultar más o menos la acción de ETA, no su erradicación o aplastamiento» (*Combate*, 5 julio 1985).

2000-2010: el final de las certezas

El Pacto de Estella/Lizarra representa prácticamente el último momento de colaboración abierta entre la izquierda revolucionaria y el nacionalismo radical nucleado en torno a ETA. No solo por la firma por parte de Zutik del acuerdo, sino sobre todo por la integración de esta organización y de Batzarre en Euskal Herritarrok, la nueva «marca» lanzada por la antigua Herri Batasuna para recalcar la entrada en una nueva fase política. La tregua de ETA es aprovechada por la organización de la izquierda revolucionaria para orillar sus desacuerdos con el MLNV, crecientes en la última etapa de los años noventa, y entrar en una coalición electoral en la que la hegemonía del nacionalismo radical no deja lugar a dudas.⁵³

53. Es significativo que, pese a la trayectoria de subordinación al entorno de ETA descrita hasta aquí, nunca hasta este momento la izquierda revolucionaria se había integrado en una coalición electoral con el nacionalismo radical vinculado a ETA, bien que lo hace en un periodo de tregua.

La firma del Pacto de Estella es entendida por los sectores de la izquierda revolucionaria como una deriva lógica y coherente de su posición tradicional ante ETA. Quizá lo exprese mejor que nadie Jaime Pastor⁵⁴ cuando señala que EB/IU estaba en el Pacto de Estella no por ser nacionalista, sino por ser demócrata, y, por tanto, respetuoso del ámbito vasco de decisión. En fecha tan avanzada como febrero del 2000, Jaime Pastor sigue considerando como una parte del bagaje de la izquierda la dificultad para asentar el consenso en Euskadi en torno al sistema democrático en España. Su posición en el seno de IU se esforzaba por resaltar dos cuestiones fundamentales: la necesidad de reconocer la existencia de distintas realidades nacionales en condiciones de igualdad, y la constatación de que en el caso vasco perdura el principal foco de contestación a la reforma pactada con que había concluido la transición política. Pastor negaba, por otro lado, que el retroceso de IU en las elecciones municipales y regionales de 1999 tuviera relación con su presencia en Estella.⁵⁵

Batzarre expresa la evolución de la izquierda revolucionaria quizá con mayor claridad y rapidez que Zutik, en la medida en que dicha agrupación conserva su unidad y cohesión en bastante mayor medida que esta última. Así, en 1999 Batzarre y HB acuerdan ir juntas a las elecciones municipales y forales. En el manifiesto que sella el pacto alcanzado se enumeran las causas que pretenden alentar y en algún caso rescatar (*hika*, 99, abril 1999):

[...] a quienes apoyaron la Insumisión y se opusieron al pantano de Lumbier, a la base americana de las Bardenas y al cuartel de Yaguaceros en Belagua; y que hoy exigen el desmantelamiento del polígono de tiro, se oponen a inundar el valle del Irati y a que el Pirineo sea un desierto demográfico al servicio del turismo. Que devuelva la ilusión a quienes impulsaron las primeras Comisiones

-
54. Un sector de Izquierda Alternativa formado por miembros vinculados anteriormente sobre todo a la LCR entró en Izquierda Unida, donde formó la corriente denominada Espacio Alternativo, en la que también se integró Ekaitza, tendencia de Ezker Batua citada anteriormente.
55. Izquierda Unida, en efecto, experimenta un notable retroceso en las elecciones municipales y autonómicas de 1999 en el conjunto del territorio español. Junto con la crisis padecida por la aparición del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que por medio de numerosos tránsfugas privó a IU de una parte significativa de cargos electos, es razonable pensar que los efectos del Pacto de Estella y la posición ambigua en torno al régimen de Milosevic en Serbia deterioraran la imagen de IU ante capas importantes de su electorado.

Obreras, que hoy se siguen movilizandoo por las 35 horas, el salario social y un IRPF justo; [...] desde quienes siguen diciendo «Bai euskarari» manifestándose para que sus hijos e hijas puedan estudiar en euskera hasta los republicanos de ayer, pasando por quienes se mantienen firmes en la erradicación de la tortura, o han llorado con la misma intensidad a Gladys del Estal, a Germán Rodríguez, a Mikel Zabaltza o Mikel Castillo, que fueron solidarios con Allende, hoy lo son con la causa zapatista y mañana lo serán con otros represaliados políticos del mundo.

En la lista (integrada por víctimas de la violencia policial) no hay espacio para los damnificados por ETA, lo cual sería impensable en una coalición con HB, pero Batzarre no tardará en lamentarlo. ¿Qué une a HB y Batzarre? Según esta última, la ubicación permanente en el mismo lado de la barricada durante la lucha contra la dictadura y en el posfranquismo, su neta diferencia respecto a las llamadas fuerzas reformistas de corte social o nacional, y la cierta complementariedad e influencia mutua en sensibilidades, formas de lucha o apuestas en momentos clave de la vida política o social. El momento es percibido como el inicio de una fase en la que la izquierda renueva sus planteamientos en una línea que rompa con la dinámica imprimida por el vasquismo en Navarra en las dos últimas décadas. Se reconoce que sobre el hecho nacional vasco la coalición parte de bases vagas e imprecisas, se aprecian divergencias notables. El acuerdo final alcanzado parece que pasa por unos contenidos mínimos y el derecho de cada parte a defender lo que considere oportuno.

El Pacto de Estella fracasa definitivamente tras la vuelta de ETA a las armas en enero del año 2000, aunque aún no se rompa formalmente en ese momento. El papel de la izquierda revolucionaria, prolongación del desempeñado en los años noventa, se refleja inmejorablemente en un editorial publicado en *hika* tras el asesinato de Fernando Buesa y el *ertzaina* Jorge Díez (*hika*, 109, marzo 2000): se reconoce que el camino abierto por Estella no tenía otro objetivo básico más allá de proporcionar

[...] una salida política y humana digna a ese conjunto de fuerzas sociales y políticas que, insatisfechas con el resultado de la transición política producida tras la muerte de Franco, radicalmente disconformes con el régimen constitucional y estatutario entonces establecido que valoraban como impuesto por unos poderes fácticos heredados del franquismo, continuaron una lucha en la que la acción militar de ETA ocupaba un lugar central, para tratar de que la

sociedad vasca lograra desbordar los límites que la Constitución y el Estatuto establecían... Para muchos y muchas —entre las que nos encontramos las gentes que hacemos *hika*— el problema cada vez más urgente era el cómo replantear las complejas batallas en favor de una Euskal Herria más libre, más democrática y más solidaria sin que la desaparición de la lucha armada (que aparecía cada vez más claramente como un factor de desacumulación de fuerzas favorables al avance en esa dirección y que propiciaba una acumulación de recursos de todo tipo para aquellas fuerzas más opuestas a esos avances) pudiera ser interpretada como una derrota global de dicha causa y como un triunfo de las fuerzas más centralistas del Estado.

En definitiva, la cita demuestra con claridad que ya no se trataba de perseguir una victoria imposible, sino de articular una salida que no supusiera una dura derrota para ETA y su mundo; y, por añadidura, para quienes habían estado apoyándola desde fuera durante tantos años. En esa tesitura, el asesinato de Buesa y su escolta era una difícil prueba para Zutik, integrada aún en Euskal Herritarrok. El atentado afecta directamente a la credibilidad de esta coalición, pensada como lugar de encuentro satisfactorio para esos sectores de la izquierda condescendientes con la violencia de ETA hasta entonces, pero que entendían que la continuidad de esta solo podía acarrearles prejuicios.

Tras la ruptura de la tregua de ETA, en noviembre de 1999, la posición de Zutik en EH queda seriamente dañada. En ese año, Iosu Perales, desde las páginas de *hika*, refería la virtud de EH de haber imprimido una dinámica separada de la propia de ETA, en la cual incluía al mundo de Batasuna, lo cual probablemente tenía mucho más que ver con sus deseos que con la realidad. La preocupación por la vuelta de ETA a las armas obedece, sobre todo, a la reacción que pudiera suscitar a la hora de alejar a personas y grupos que se habían acercado a EH con la condición de que la violencia formara parte del pasado (*hika*, 106, diciembre 1999):

[...] la ruptura formal de la tregua por parte de la organización armada añade un motivo real de preocupación a quienes impulsando la formación de EH deseamos fervientemente el desenlace de una nueva unidad popular, acentuando el carácter de *nueva*. Inquietud razonada en la mayor dificultad de atraer para este proyecto a una buena cantidad de gentes que no resistirán una ofensiva mediática derivada de una posible acción mortal de ETA y que, también por razones morales, se sentirían muy incómodas en EH. Gentes que en distintos momentos de los últimos años fueron alejándose de HB y otras que, no habiendo estado nunca, ponen como condición para

formar parte del proyecto EH la no tutela de ETA, e incluso su no actividad.

Estas argumentaciones se refieren, como queda explícitamente señalado, a sectores que manejan esas reticencias a la actuación de ETA; no es el caso del autor del texto (*hika*, 106, diciembre 1999):

[...] quienes sí tenemos clara la necesidad del proyecto EH, y confiamos en el camino emprendido ya hacia la consolidación de un espacio político independiente, debemos hacer un esfuerzo por blindarlo.

En la atribución de responsabilidades por el final del periodo sin atentados se culpabiliza tanto al Gobierno del PP («ha sido un despropósito temerario el que hasta la fecha no haya atendido el clamor de la sociedad vasca y de la mayoría de sus instituciones políticas, económicas y sociales en demanda de que se apliquen todas aquellas leyes que exigen el respeto a la dignidad personal de los presos») como a la propia ETA. Al tiempo que se ponen de relieve las insuficiencias del pacto de Lizarra (exigua mayoría social, confusión entre proceso de paz y proceso de construcción nacional) y se apunta al meollo de la cuestión (dificultad de pagar el precio que pone ETA para aceptar su salida de la vida pública, dificultad que afecta no solo al Gobierno del PP, sino también a los demás partidos nacionalistas), entre las conclusiones que Lizarra ha dejado claras, se señala la necesidad de aunar las fuerzas abertzales, de manera que el pacto entre el PNV y ETA está condenado a prolongarse, pues ambos se necesitan para inclinar la balanza del lado nacionalista.

La conclusión es que Lizarra ha evidenciado el callejón sin salida que la apuesta por el nacionalismo radical vinculado a ETA había supuesto para la izquierda revolucionaria; desde que en los años noventa había quedado clara la imposibilidad del triunfo de la estrategia etarra, para quienes habían apostado por ella solo cabía una salida no excesivamente deshonrosa. Este era el objetivo de Estella y de Euskal Herritarrok; la vuelta de ETA a las armas daba al traste con esta última oportunidad, que algunos aún intentaban revestir de una interpretación en el sentido de constituir una apuesta por la democracia y por la articulación de una salida de izquierdas, alentada por lo que quedaba de movimientos sociales y «no violentos» vinculados a la izquierda alternativa. Una vez más, la realidad de un frente nacionalista, «cocinado» mediante un pacto previo y secreto entre ETA y el PNV, dejaba lo anterior en eluc-

braciones con muy poco contacto con la realidad. A partir de aquí, la izquierda revolucionaria disgregará sus análisis en varias líneas divergentes, cuando no abiertamente contrapuestas. Los documentos oficiales de la organización combinan los análisis profundos con tomas de posición muy matizadas y eclécticas, en abierto contraste con el tono rotundo tan habitual en su prensa en periodos anteriores, que incluía la descalificación grosera de quien no compartía tales certezas. Así, en el año 2001 desde Zutik se fundamenta la deslegitimación de ETA no solo en criterios políticos o politicistas, sino también en criterios éticos, en la razón democrática y en el desarrollo de una potente cultura antimilitarista, «a la que Zutik ha contribuido de manera significativa».⁵⁶ Mientras algunos de sus miembros acentuarán la crítica hacia el mundo abertzale, incluyendo una visión extremadamente crítica de la trayectoria de la izquierda radical, hay otro sector de Zutik —y, en el conjunto de España, de la antigua izquierda alternativa— que se mantiene en los parámetros que se han analizado a lo largo del texto en relación con la posición de la izquierda radical ante la violencia de ETA y el mundo del MLNV. Mantiene, en líneas generales, la consideración de ese movimiento como un sujeto revolucionario, con planteamientos que presentan diferencias significativas con respecto a los de la izquierda revolucionaria, en la medida en que prima el nacionalismo por encima de otras consideraciones igualitarias. Sin embargo, estas diferencias no serían suficientes para situar al nacionalismo vasco radical en una trinchera opuesta, o al menos diferente; se les sigue considerando aliados potenciales, y en cualquier caso políticamente bastante más cercanos que las fuerzas que representan el sistema (los partidos democráticos de derecha o izquierda). En esta

56. «Para un colectivo como el nuestro, cuyos orígenes tienen un tronco común y cuya historia —a través de mil distanciamientos y acercamientos, críticas y colaboraciones, enfrentamientos y solidaridades— está tan próxima a la de ETA y el MLNV, resulta difícil sustraerse a una realidad que hoy valoramos muy preocupante y claramente negativa. Por ello juzgamos conveniente manifestar, con más frecuencia y rotundidad que en tiempos no muy lejanos, nuestro rechazo firme y claro de los aspectos más inquietantes, por antidemocráticos y etnoexclusivistas, de la línea político-militar de ETA y a los fundamentos morales, éticos e ideológicos que están detrás de su línea político-militar. No debemos, por ello, perder de vista las preocupaciones que siempre hemos tenido de no contribuir con nuestras críticas a la política de hostigamiento y de aislamiento social que, desde tantos ámbitos, se practica hacia HB-EH, hacia el MLNV y hasta el conjunto del movimiento nacionalista vasco» (*Tesis a debate sobre algunos aspectos de nuestra actualidad política*, 3.ª Asamblea Nacional de Zutik, 2.ª parte, 2001).

línea, ya desde el principio de la década, se expresa José Iriarte, *Bikila*, cuando estima que la evolución de los acontecimientos les ha dado la razón, en el sentido de que estos han coincidido con la experiencia de la izquierda revolucionaria, la de quienes durante la fase final del franquismo y principio de la transición defendieron un enfoque de la autodeterminación asociado a la federación o la confederación, para al final llegar al convencimiento de la necesidad de la independencia como requisito previo para establecer relaciones de igualdad. Y, de nuevo, son los líderes españoles, salvo excepciones, los que se niegan a abrir la caja de Pandora de la autodeterminación por miedo a que se les desarticule el chiringuito estatal. De hecho, sigue funcionando el «fetiche» de la autodeterminación como expresión de la superioridad de los argumentos propios frente a los del sistema: la no aceptación del derecho a la autodeterminación seguiría siendo la prueba de la poca calidad democrática del mismo.

Por otra parte, la valoración general de la situación del País Vasco participaba de esa imagen difundida por el nacionalismo del PNV que venía a pintar un país idílico del que únicamente a partir de una malintencionada desinformación podía difundirse una imagen de violencia y crispación que no se correspondía con la realidad; una realidad que era percibida, por consiguiente, como si la violencia de «baja intensidad» perpetrada por ETA o por los alevines de la *kale borroka* formara parte de un paisaje que solo desde la queja interesada pudiera tener relevancia. La trágica contraposición entre esta percepción y la sufrida por quienes estaban sometidos a la persecución de ETA y el mundo radical forma parte del peor bagaje que la política de la izquierda radical ha dejado en el País Vasco en estos años.

Sin embargo, y pese al mantenimiento de esas posiciones más contemporizadoras, la ruptura de la tregua fue el detonante de lo que podemos considerar ruptura definitiva del conjunto del colectivo de la izquierda revolucionaria con el mundo de ETA. Es significativo, a este respecto, que esta separación rotunda y definitiva (como colectivo, pues como se verá hay corrientes y sectores que mantienen sustancialmente las mismas posiciones, pero que en modo alguno se pueden considerar ya representativos del conjunto de la izquierda radical, como lo eran hasta el año 2000) va pareja a la desaparición de la izquierda revolucionaria como colectivo orgánico; si la existencia de Zutik es más que precaria a partir de entonces, en el conjunto de España no hay apenas corrientes organizadas que puedan presentarse como encarnación de la continuidad de la

LCR y el MC, con su secuela fallida de izquierda alternativa. La aparición de Izquierda Anticapitalista en el 2008 viene a constituir un intento de reconstruir estructuras políticas organizadas, sin que el objetivo se pueda considerar plenamente conseguido hasta el momento. Lógicamente, en este panorama de laxitud organizativa las posiciones ante ETA participan de una dispersión que hace difícil asignarlas a posiciones orgánicas; en adelante, se tratará de presentar las tomas de posición en relación con sus autores básicamente, entendiendo que en cada caso solo representan, por lo general, opiniones personales cuya disparidad pone de relieve la dispersión apuntada.

Aun cuando en las elecciones municipales del 2003 no había sido posible el acuerdo por la falta de él en Navarra, a las elecciones del 14 de marzo del 2004 Zutik acude en coalición con Aralar, lo cual viene a mostrar por un lado la incomodidad que supone seguir a la estela del nacionalismo vasco radical vinculado a ETA (y ya en esas fechas ilegalizado), y por otro la voluntad de mantener una vinculación que implica la apuesta por fórmulas nacionalistas, si bien ha ido abriéndose paso en Zutik una concepción del nacionalismo alejada del radicalismo identitario (se plantea, por ejemplo, la necesidad de defender la convivencia de identidades y la necesidad de generar elementos de cultura político-nacional compartida entre corrientes de distintos bloques). Hay asimismo un intento de frenar el declive del nacionalismo, que había ido perdiendo respaldo electoral desde su clara hegemonía de los años ochenta, para lo cual se insiste en las recetas fracasadas durante la tregua vinculada al Pacto de Estella; es decir, la conformación de un soberanismo (el ámbito vasco de decisión —defendido con entusiasmo por el lehendakari Ibarretxe y el nacionalismo conservador— se convierte en el principal marcador de posiciones políticas) democrático, integrador y progresista en cuyo seno pueda rehacerse una izquierda vasca plural, que defienda la autodeterminación y a la vez pueda abordar la lucha social y medioambiental que tantas veces se ha pospuesto por la prioridad otorgada a otras tareas.

Como ha quedado señalado, el desmarque de Batzarre respecto a la violencia de ETA precede a la de sus iguales en Euskadi. Es la primera en romper con EH y en denunciar el papel negativo que, a su juicio, desempeña ETA en relación con el avance del vasquismo en Navarra. Según un planteamiento que había empezado a esbozarse con anterioridad, pero que ahora se decanta claramente (para mantenerse y profundizarse en el futuro), ETA pasa a ser uno de los principales obstáculos que ha tenido el vasquismo en Nava-

rra para desarrollarse y consolidarse como una opción político-cultural sólida y estable. ETA ha suscitado un profundo rechazo social, que además ha sido manipulado y capitalizado por UPN (Unión del Pueblo Navarro), que no solo ha tratado de aislar a ETA sino también de golpear a todas las corrientes vasquistas y *euskaltzales*. Esa dinámica infernal ha terminado por ser un elemento central del estancamiento de la política en Navarra, en la medida en que el régimen fue consolidándose y su vida parlamentaria y autonómica asentándose; en consecuencia lógica, la legitimidad de ETA se fue progresivamente debilitando y los aspectos más negativos de su bagaje ideológico fueron poniéndose más y más en primer plano, hasta alcanzar su máxima expresión tras la ruptura de la tregua. Este desprestigio de ETA se ha extendido al conjunto de los sectores vasquistas, reduciendo su influencia y su capacidad de intervención en la sociedad navarra. El análisis de Batzarre no deja de resultar certero, en la medida en que toma nota de una realidad bastante evidente, pero obvia, al menos de momento, la responsabilidad de una izquierda que no fue capaz de articular una alternativa no subordinada o, aún más, opuesta a ETA, lo que sin duda habría redundado en beneficio de tal corriente vasquista y de izquierdas.

Desde posiciones también muy cercanas aún al MLNV, se interpretan los hechos de marzo del 2004, con los atentados del 11 de marzo en Madrid y la posterior derrota electoral y salida del Gobierno del PP, como una victoria del nacionalismo radical y de la lucha de ETA y su entorno, en la medida en que la explicación de la derrota del partido conservador residió, fundamentalmente, en su empeño por atribuir a ETA la responsabilidad de las bombas de aquella fecha. Se vincula este episodio con la legislación «excepcional» aprobada por el PP durante su etapa de Gobierno, que alcanzó su principal expresión en la ilegalización de Batasuna. El hecho de que ETA estuviera presente, aunque de una forma un tanto particular, en un acontecimiento de esas dimensiones alimenta la dimensión *euskocéntrica* del nacionalismo radical; de la misma manera que con anterioridad casi todos los avatares del tardofranquismo y la transición tuvieron una explicación de origen vasco, también algún miembro de la izquierda radical parece haber asimilado esta concepción, incluyendo la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno entre los acontecimientos solo explicables en clave vasca (en lo que, curiosamente y al menos en este caso, coincide con los sectores de extrema derecha empeñados en mantener, contra toda evidencia, la autoría de ETA en los terribles atentados de Madrid).

Algunas voces críticas que apuntaron en los años noventa se hacen más firmes e insistentes tras el cambio de siglo. Es el caso de Antonio Duplá, antiguo miembro del EMK y habitual colaborador de *hika*. Duplá⁵⁷ insta a un balance autocrítico que pase por el reconocimiento de las víctimas y por la denuncia de ETA tanto desde el punto de vista ético como desde el político. Se plantea como urgente una reconsideración del papel de ETA en las últimas décadas de la historia de Euskadi, que ponga en entredicho su papel como supuesta vanguardia armada de un movimiento de liberación nacional, instrumento de un pueblo secularmente oprimido que lucha contra un Estado español opresor, y que cuestione igualmente la imagen de los etarras como militantes sufridos, desinteresados y héroes, como expresión última de los luchadores por la libertad. La denuncia de ETA, según esta visión, debería partir de la no aceptación de una interpretación de parte de los derechos humanos. Se critica el carácter bastante utilitarista e instrumental de muchas de las críticas lanzadas por la izquierda radical. Se señala, asimismo, que nunca se ha ahondado en los problemas inherentes a una organización como ETA, frente a la argumentación de las diferentes ETAs en distintas épocas. Yendo más al fondo, a la tradición marxista ante el problema de la violencia, se apunta el olvido por parte de la izquierda de que unos medios perversos pervierten los fines más nobles, y ello afecta de lleno a las concepciones sobre la violencia y sobre la propia revolución, por más vértigo que pueda dar el tema a militantes con convicciones profundamente arraigadas en estas cuestiones. La alusión a la quiebra moral de la sociedad vasca y la necesaria consideración a las víctimas, grandes olvidadas en los mensajes de la izquierda, cierran un discurso que inaugura un tipo de lenguaje hasta entonces desconocido en los órganos de la izquierda revolucionaria. Reivindica el papel de Batzarre y Zutik en esta necesaria reflexión, dada la identidad fronteriza que supuestamente es una de las señas de identidad de ambas organizaciones.

También Javier Villanueva, otra de las plumas más prolíficas de la izquierda revolucionaria en la Euskadi de los años noventa y del siglo XXI, experimenta un cambio considerable en su visión de la violencia de ETA; hace hincapié en la quiebra de valores que el apoyo social que todavía recaba ETA supone para la sociedad vasca. Asimismo, considera que el nacionalismo es el primer perjudicado por la existencia y la acción de ETA. La crítica de Villanue-

57. Así lo manifiesta en varios artículos de *hika* y, sobre todo, en Duplá y Villanueva (2009).

va también se remonta al universo cultural predominante en la generación que luchó contra Franco en los años sesenta y setenta, cuya crítica a ETA resultó ser particularmente pobre en cuanto a la perspectiva y los valores que manejaba, con alusión especial a los registros morales que subyacían en sus comportamientos. Reveló además, según Villanueva, una clamorosa ausencia de reflexión sobre los problemas que entraña el uso de la violencia para conseguir determinados fines, y no se planteó en ningún momento una crítica al militarismo de ETA que fuera más allá de la mera valoración de la utilidad política de sus atentados, que se traducían, en el mejor de los casos, en una condena abstracta. Sin dejar de señalar la responsabilidad de la izquierda revolucionaria en esta condescendencia hacia la actividad de ETA (deslumbrada por su doble eficacia, como poder fáctico frente al Estado y como aglutinante de un amplio movimiento social antisistema, tras haber sido derrotados en las urnas en las primeras elecciones democráticas), Villanueva denuncia la aún mayor cuota de responsabilidad imputable a los partidos nacionalistas (PNV y EA) y al clero nacionalista. Sus palabras son también inequívocas al reflexionar sobre los pecados de una trayectoria demasiado errada, en la que las víctimas eran invisibles, porque el discurso y la práctica borraba sistemáticamente su cara y sus nombres. La crítica se remonta a la primera ETA (con su aureola antifranquista, rebelde, altruista, prometeica, justiciera...), que ya se construyó sobre la base de la unilateralidad, la amnesia, la condescendencia acrítica, la dualidad moral, y que todas estas cosas, si bien se desarrollaron y agravaron muchísimo más tras el franquismo, ya estaban presentes hasta en el relato de la muerte de Etxebarrieta en 1968; un relato que, señala Villanueva, se muestra olvidadizo del trascendental detalle de que el primer muerto no fue el dirigente etarra, sino el guardia civil Pardines, asesinado por el propio Etxebarrieta. Javier Villanueva denuncia asimismo la incoherencia de suspender las mismas obligaciones morales y deberes jurídicos hacia los otros que se exigían como un derecho sagrado para los propios.

Con motivo de la tregua pactada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2006, Javier Villanueva achaca precisamente al hecho de que las víctimas hayan cobrado visibilidad una buena parte del cambio producido en la moral política de la sociedad, elemento decisivo para el cambio en la situación (no en la capacidad operativa de ETA, otro factor sin duda fundamental). Dado el fracaso de todas las vías intentadas hasta entonces para poner fin a ETA, Villanueva apuesta por explorar la vía más evi-

dente en ese momento: cortar las consecuencias negativas que para su entorno más próximo y para la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco en su conjunto acarrea su existencia. La única manera de frenar el deterioro sería precisamente la salida de ETA del escenario. Se proponen compromisos claros por parte tanto del Estado como de ETA. Entre las tareas del primero, destacan el respeto del principio de legalidad y de humanización de las leyes, la facilitación de la normalización política de la izquierda abertzale, el favorecer una perspectiva de integración social a los miembros de ETA, la reparación a las víctimas de la violencia estatal, el respeto a la expresión nacionalista vasca representativa de una parte de la sociedad, y el compromiso consecuente del diálogo y la negociación de sus demandas.

El análisis de Villanueva, precisamente al hilo del proceso abierto con Zapatero para el final definitivo de ETA, incide en la importancia del juicio moral, político e histórico que se haga de ETA al final de su trayectoria, y en este sentido considera un error dejar el campo libre a la consolidación del mito de ETA. Se trata de una toma de posición significativa, en la medida en que desde el nacionalismo conservador y la izquierda radical apuntaba la tentación del «borrón y cuenta nueva», es decir, de la necesidad de que «la sociedad vasca» hiciera un esfuerzo para superar el pasado en aras de edificar un futuro en paz y armonía.⁵⁸ Rechaza la idea de que para no entorpecer la buena marcha del proceso de paz deba rebajarse o silenciarse la opinión de que ETA es sinónimo de una equivocación que ha roto la vida de infinidad de personas y que ha repercutido muy negativamente en el conjunto de la sociedad vasca y en el resto de la sociedad española. Tampoco cabría una tendencia arraigada en el seno de la izquierda, que ve a ETA como un mal y un bien al mismo tiempo, conformando una valoración ambigua de ETA a la vez víctima y verdugo fundamentada en un relativismo moral muy frecuente en la izquierda que se considera más a la izquierda y que ve a ETA con empatía, debido a cierta afinidad común (*hika*, 186, marzo 2007). La paralización del proceso deslegitimador de ETA que introduce el proceso de final dialogado de la violencia ha estimulado a ETA a exigir algún logro político que materialice la justificación de su pasado. La responsabilidad que el discurso del «otro nacionalismo» tiene en la continuación de la vio-

58. Es notoria la contradicción que supone defender estos planteamientos y al mismo tiempo denunciar el olvido de las víctimas del franquismo que se produjo durante la transición.

lencia de ETA se prolonga en ese intento de sacar réditos del abandono de la lucha armada; Villanueva deja claro que no es posible ya ninguna negociación política con ETA, que debe ser descartada por ilegítima.

La declaración de alto el fuego en marzo del 2006 (una vez más, amplios sectores de la opinión pública pensaron que se trataba del definitivo) es saludada por la revista *hika* (175, marzo 2006) como la consecuencia inevitable de una degradación que había desembocado en la incapacidad de ETA para aportar elementos positivos para nadie (ni siquiera para ella misma). Señala que se habían extinguido prácticamente los elementos de legitimidad y legitimación moral que cualquier movimiento político necesita para poder existir con un mínimo de posibilidades de éxito; se han ido extinguiendo, asimismo, las profundas frustraciones de todo tipo que, en sectores importantes de nuestra población, se crearon durante la transición del franquismo a la democracia, sobre las que ETA legitimó la ofensiva militar más potente de su historia desarrollada a comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo. También se constata la caída del prestigio de la lucha armada como herramienta legítima y hasta imprescindible para lograr la liberación de los pueblos o para poner fin al capitalismo.

No faltan, sin embargo, las respuestas de militantes que no están dispuestos a renunciar a las ideas defendidas durante años; se rechaza, de entrada, que la masa social de la izquierda abertzale sea la responsable de la quiebra de los valores fundamentales sobre los que debe asentarse la convivencia en una sociedad traspasada por un conflicto político. Se comprende que para muchos miembros de la izquierda abertzale ETA es un problema, pero sigue funcionando una lealtad frente al poder del Estado, un asunto que no puede resolverse a través de supuestas superioridades morales, sino mediante el razonamiento. Frente a la exaltación del carácter democrático del Estado, que no representa sino la repetición del discurso de los apologistas del sistema, se observa una democracia de baja calidad, destructora del tejido social, partitocrática y enemiga de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Se reconoce el divorcio entre fines y medios que impregnó a la izquierda como consecuencia del estalinismo y del estructuralismo, pero ello no debe conducir a renegar del derecho a la autodefensa armada, incluso la de carácter ofensivo, en el caso de que la violencia de las clases dirigentes y de los poderes reaccionarios así lo exija. Se parte de la idea de que en el cuestionamiento del capitalismo sí que había una elección ética, de la misma manera que en la crítica al militaris-

mo de ETA o al socialismo real latía también un juicio ético. Se subraya la diferencia entre una supuesta doble moral y la opción de una moral distinta para el esclavo respecto a la del amo, y, en consecuencia, la necesidad de tener que elegir, en situaciones trágicas, no entre el bien y el mal, sino probablemente entre un mal mayor y otro menor. Las disquisiciones sobre la legitimidad de la violencia en según qué circunstancias y condiciones no faltan en esta reflexión con aire de ajuste de cuentas; se citan los casos del Frente de Liberación Nacional argelino, la resistencia a la guerra de Irak, la violencia de la resistencia francesa contra los nazis ocupantes, la resistencia palestina o Vietnam... El apoyo inicial a los miembros de ETA represaliados por el franquismo representaba la expresión de solidaridad frente a la represión. Pero ETA, según esta visión, no era solo una reacción defensiva ante el franquismo; era también una estrategia, un modo de ver, sentir y luchar. Desde las posiciones de la izquierda revolucionaria se abandonó ETA por no compartir los principios, los valores; la crítica subió de tono cuando ETA dio el paso de atentar de forma abierta contra civiles, o cuando dio el salto mortal de los coches bomba. Sin embargo, la consideración de que se mantuvo el apoyo electoral a HB es fruto de una valoración global que incluye muchos otros aspectos, aparte de las discrepancias con la actividad de ETA señaladas. Se plantea que la crítica a ETA no deja de ser la expresión de un alejamiento definitivo de un pasado radical izquierdista, trufado de nacionalismo, de izquierdismo, de comunismo. Desde el punto de vista de la valoración que la persistencia de ETA introduce en la política vasca, se cuestiona que realmente los llamados constitucionalistas estén en desventaja respecto a los nacionalistas: si por una parte las reglas de juego trazadas en la transición (con la amenaza militar) han determinado la evolución desde entonces, por otra el hecho de que las campañas electorales se desarrollen en un terreno puramente mediático hace dudar de que los partidos mayoritarios sean perjudicados en las mismas. Se afirma que gozan de un poder mediático muy superior al del nacionalismo, incluido el gobernante; según este análisis, en España se oyen más las voces de quienes defienden las posiciones del PP y del PSOE, y es el nacionalismo vasco el que es silenciado y tergiversado ante la opinión pública. Se reconoce, no obstante, que después del 11 de marzo, dada la respuesta de la sociedad frente al terrorismo, ETA tiene muy difícil continuar con su actividad armada. En estos planteamientos continuistas con las posiciones tradicionales de la izquierda revolucionaria subyace una voluntad de no abandonar los principios revolucionarios y anticapitalistas. Es, sin

duda, uno de los nudos más persistentes en la historia que rastrea este texto. La consideración de que ETA y lo que representaba debían ser combatidos como un enemigo generalmente se ha acompañado del abandono de posiciones izquierdistas (en un sentido relativo en cuanto a la ubicación en el espectro político), de tal manera que combatir a ETA implicaba abdicar de posiciones anticapitalistas, por ejemplo. La insistencia, posiblemente equivocada, en considerar a ETA y su mundo en el ámbito de la izquierda radical (además de nacionalista) es la premisa que ha justificado semejantes inferencias. Quizá ubicar a ETA al margen de cualquier proximidad a los principios de la izquierda hubiera evitado muchos errores y bastantes de las inmorales que se están describiendo, y que aún se siguen cometiendo.⁵⁹

La búsqueda de un nacionalismo alejado de los elementos más irracionales y antidemocráticos sigue orientando las reflexiones de sectores de esta izquierda. La incompatibilidad entre la adscripción de izquierdas y el nacionalismo identitario cada vez más evidente en el nacionalismo radical (y también en sectores del considerado menos radical del PNV) lleva a la formulación de un nacionalismo más amable e integrador. Una de las fuentes del pensamiento comunitario son las tesis de Kymlicka (2004), en la defensa de una lógica consociativa que otorgue credenciales democráticas al nacionalismo vasco y permita una competencia ideológica en este terreno con el Estado español. Esa lógica desembocaría en fórmulas de carácter confederal en algunos, y en otros podría sustanciarse en acuerdos de carácter federal (asimétrico o simétrico, según los casos). Son formulaciones también defendidas por diversas corrientes del PSOE (particularmente del Partido de los Socialistas de Cataluña), y que en el caso vasco vendrían a reforzar las afirmaciones de vasquismo sustentadas también por ciertos sectores del PSE.⁶⁰ De esta manera, la reformulación de un nacionalismo de ese tipo, ya sostenida por Zutik en los años noventa, tropieza con un

59. Es muy clarificador a este respecto un artículo de Jesús Casquete (2010) en el que, analizando la teoría y la práctica de la llamada izquierda abertzale, se llega a la conclusión de que, efectivamente, hay muy poco de izquierda en ella.

60. «El sentimiento nacional es un cimiento muy eficaz de la cohesión social, de la solidaridad entre los compatriotas, de la realización de políticas redistributivas. Pero ha de tenerse presente que el valor cohesionador de la nación descansa en su fuerza como hecho o sentimiento compartido, cosa que en el caso vasco solo alcanza de momento a la comunidad abertzale» (*Un nacionalismo acogedor y creativo*, 3.^a Asamblea Nacional de Zutik, octubre del 2000).

nacionalismo «realmente existente», que sigue despreciando los pasos intermedios, fiándolo todo a una autodeterminación o, con mayor razón, a una independencia de perfiles y horizontes lejanos, a la vez que sometida aún al tutelaje y a las prácticas violentas inadmisibles de ETA.

Nafarroa Bai⁶¹ surge como un experimento que debería marcar el futuro de esta confluencia del nacionalismo y la izquierda: un movimiento de regeneración en la izquierda vasquista y abertzale, que apueste por dinámicas no frentistas, fronterizas, provasquistas; que debería estar abierta a la incorporación de IU y de HB una vez superada la fase activa de ETA. No solo hay un desmarque del nacionalismo esencialista, sino que hay un principio de autocritica por las posiciones adoptadas en el pasado, en virtud del cual una dirigente representativa como Milagros Rubio ratifica el posicionamiento crítico que ya había empezado a apuntar en los años noventa, dirigido no ya solo contra ETA, sino también contra un nacionalismo antipluralista e intolerante que no entiende tan legítima como la suya la identidad navarrista o la navarro-española. La evolución lleva incluso a la recuperación de un discurso humanista muy poco frecuente en la izquierda revolucionaria tradicional; Batzarre proclama la necesidad de humanizar la política, de introducir la sensibilidad y «el corazón» frente a la burocracia, la palabrería, los intereses meramente partidistas, la corrupción y el despotismo. De hecho, Milagros Rubio expresa el déficit de solidaridad padecido por los representantes del PSOE y el PP sometidos a la acción violenta de ETA: «Es un asunto muy grave ante el que pienso que el resto de los cargos públicos teníamos que hacer mayores gestos de solidaridad». También proclama (*hika*, 175, marzo 2006) que la izquierda abertzale y vasquista aún no ha acometido en condiciones una revisión crítica y pública acerca de sus posiciones y su consideración respecto a la lucha de ETA en el pasado. Batzarre elabora una propuesta para la formación de una Comisión de la Verdad y la Paz, que debe gestionar el fin de ETA, y que parte de unas condiciones previas: la inmediata retirada de ETA; la superación de modo inequívoco de las vulneraciones de los derechos humanos por parte del Estado; y la renuncia por parte de todas las fuerzas representativas a obtener beneficios políticos por el final de ETA. La

61. Nafarroa Bai es una coalición integrada por Aralar, Eusko Alkartasuna, Batzarre, el Partido Nacionalista Vasco e Independientes de Navarra, que se presentó por primera vez a las elecciones generales en el año 2004. En el 2010, Batzarre la ha abandonado.

comisión tendría como base cuatro ideas fundamentales: el reconocimiento, la reparación, la paz y un código ético de solidaridad con las víctimas. Con el tiempo, la crítica de Batzarre a ETA se hace aún más intensa: hay una descalificación global de la trayectoria de ETA y de la posición de la izquierda vasquista ante ella en el pasado:

El vasquismo progresista y de izquierdas en Navarra y en el conjunto de Euskadi no puede ser condescendiente con Batasuna (o sus variantes como ANV). No se puede mirar para otro lado, cuando se infringen los Derechos Fundamentales de las personas.

Cualquier solución para el «problema vasco», en consecuencia, debe pasar por unas premisas que ya tienen poco de maximalismo y en las que el adjetivo *radical* no encaja de ninguna forma. Ciertos sectores de Batzarre plantean ya, por ejemplo, la imposibilidad de formar una comunidad política a partir de una materia prima tan heterogénea como la que constituye la sociedad vasca, si esa faena se afronta sin una perspectiva de integración basada en el consentimiento de las diversas partes que la componen, sin un procedimiento para afrontarla que refleje expresamente ese consentimiento y sin un resultado final que obtenga el apoyo de mayorías muy cualificadas y que anule o neutralice toda causa legítima de oposición. Esta deriva culmina en la formulación de propuestas que acercan el nacionalismo al desarrollado en Cataluña, y que defienden un proyecto más integrador, basado en el concepto de ciudadanía y alejado de esencialismos etnicistas o culturales, es decir, de nacionalismo vasco aperturista, más o menos innovador o no tan bronco como el de HB, sin ETA y, desde luego, muy crítico con esta. Se trata de una postura que encajaría en concepciones políticas en las que las propuestas nacionalistas pierden peso en favor de una búsqueda de soluciones a situaciones enquistadas que hacen hincapié en el cruce de identidades y los espacios cívicos y sociales compartidos. Tal es la dirección en la que evoluciona el propio Villanueva, y de la que se deriva su rechazo del Plan Ibarretxe, el cual considera representativo del imaginario sentimental y simbólico del mundo nacionalista vasco. Considera el plan como una nueva pista de aterrizaje para ETA, tras el fiasco de Lizarra, lo cual revaloriza el concurso posterior de ETA, en un tiempo post-ETA, para tratar de sostener la hegemonía nacionalista vasca. Entre las críticas al lehendakari, insiste en que su plan rompe con las reglas establecidas, y se presenta con un carácter de ultimátum frente al resto de los actores del espectro político. Y, sobre todo, es impugnable porque prescinde de

la mitad del país, desdeña a la mitad de la población vasca, que no comparte la definición del país sostenida por el nacionalismo.

Pero a esta evaluación crítica se le contraponen otras que siguen defendiendo posiciones cercanas al nacionalismo, incluso a sus versiones más radicales. En ese sentido, hay también voces que aprecian más elementos positivos que negativos en el Plan Ibarretxe, aun no apoyándolo abiertamente: la propuesta mejora el nivel de democracia asentado por la Constitución y el Estatuto de Guernica; el proyecto supera de largo los niveles de soberanía (estos sectores siguen identificando la soberanía con algo positivo en sí mismo) contenidos en el Estatuto actual; las dudas vienen por el lado de la política social, en el sentido de que no aceptan la ecuación formulada por el lehendakari que vendría a identificar más soberanía con más bienestar social. Por otra parte, no aceptan que el hecho de que el Plan Ibarretxe no quepa en la Constitución sea un motivo para su rechazo; de hecho, recuerdan que esta no fue aprobada por la mayoría de la población vasca y que fue redactada bajo la sombra alargada de la dictadura y sus poderes. Igualmente, la existencia de ETA no debería ser un motivo para impedir su tramitación; ello equivaldría a impedir cualquier propuesta política hasta que ETA decidiera desaparecer.

Una argumentación que sigue manteniendo un peso significativo en los ambientes de la izquierda revolucionaria es la consideración de la autodeterminación como un derecho democrático elemental cuyo reconocimiento expresa un indicador del carácter democrático de un Estado; no es más, según esta versión, que un encuentro en torno al ejercicio de la democracia sobre un espacio territorial (Bikila y otros, en *hika*, 175, marzo 2006):

A nuestro modo de ver, la autodeterminación sigue siendo el modo más razonable de solucionar democráticamente un conflicto de aspiraciones nacionales diferentes y lograr una sociedad más cohesionada, más integrada y respetuosa de la legalidad.

El asesinato del militante del PSOE en Mondragón Isaías Carrasco, en vísperas de las elecciones generales del 2008, pone de relieve la división de opiniones en los restos de la izquierda radical. Los miembros del Grupo municipal Ezker Batua-Berdeak y de Zutik en esa localidad guipuzcoana se pronuncian de forma explícita en contra del asesinato:

Nuestra postura ante el asesinato de Isaías fue inmediata y clara condenando rotundamente el atentado. Nuestro mensaje desde la

vertiente humana, ocupando un espacio cercano de la familia y de las amistades de Isaías. Nuestra presencia, ni fácil ni cómoda.

Su decisión es abandonar el equipo de gobierno que ocupan junto a ANV; sin embargo, no aceptan apoyar la moción de censura que supondría el acceso a la alcaldía del portavoz del PSE, con el apoyo de todas las fuerzas representadas en el Ayuntamiento, salvo ANV (PSE, PNV, PP, EA y Aralar), debido a la carencia de concreción programática. También EB y Zutik alegan su compromiso electoral de apostar por la derogación de la ley de partidos:

Consideramos que hacer uso de la moción de censura en nada ayuda en el camino de la pacificación y normalización política de Euskal Herria, al contrario, ahonda en la victimización de la izquierda abertzale oficial y ofrece argumentos a la base social de ETA, cuando lo que debemos plantear desde la izquierda es un progresivo proceso de deslegitimación de la lucha armada, de quitarle cartas a ETA. Apoyar ahora una estrategia de mociones de censura nos lleva a mandar a la hoguera todo aquello que no condene la violencia y nos sitúa peligrosamente cerca del escenario de clausura de periódicos, arbitrariedades judiciales, etc.

Se critica, asimismo, que el PSE no ha condenado la práctica de la tortura, al tiempo que se designa al PP como «el partido de la guerra».

Sin embargo, van a encontrar la réplica de otros miembros de Zutik (Javier Lozano, Javier Villanueva y Juan Zubillaga, en *hika*, 198, abril 2008), que sostienen que un asesinato está más allá de la política, en otra esfera en la que pierde sentido la disputa sobre conflictos, autodeterminaciones, voluntades, derechos, procesos, democracias, territorialidades, etc.; la no condena de la alcaldesa sobrepasa las líneas rojas de lo humanamente inadmisibile:

[...] la alcaldesa Inocencia Galparsoro será indigna de representar a su pueblo mientras no sea capaz de mostrar la humanidad y moralidad suficiente para reprobador o condenar el asesinato político del convecino que piensa diferente. [...] Por eso entendemos menos aún por qué esa misma razón ética que justificó la ruptura del pacto de gobierno municipal entre EB-Zutik y ANV no sirve ahora para remover a la alcaldesa de su cargo. [...] Alguien debería explicarnos qué credibilidad tiene quien se queja de ser políticamente excluido y es capaz de asistir, sin mover una ceja, a la exclusión de un vecino del mundo de los vivos. O qué credibilidad tiene quien se dice de izquierdas y expresa su preocupación por los que menos poseen y calla cuando a un vecino le arrebatan cruelmente todo lo que poseía, su propia vida.

Probablemente esta polémica mantenida en las páginas de *hika* en el año 2008 ejemplifique los dilemas en que se movía el fragmentado mundo de lo que fue la izquierda revolucionaria. Mientras una parte hacía el camino de vuelta mediante una reflexión seria y autocrítica sobre un pasado poco edificante, otros mantenían posiciones que enlazaban con las del pasado, modulando y enduenciando la reacción ante los atentados mortales (cada vez más inaceptables para la inmensa mayoría de la población vasca), pero insistiendo en las reticencias a participar de la condena y la lucha antiterrorista con el conjunto de las fuerzas democráticas. Esta persistencia en un comportamiento que no solo se niega a participar en la lucha contra ETA y lo que representa, sino que incluso pretende detectar puntos de encuentro entre la izquierda revolucionaria (lo que queda de ella) y la autodenominada izquierda abertzale, tiene su correlato en fuerzas políticas implantadas (aunque débilmente) en el territorio español, como la ya mencionada Izquierda Anticapitalista, o Corriente Roja, además de sitios de Internet como Nodo 50 o Rebelión.org. En ellos se siguen recogiendo las actividades y los llamamientos del nacionalismo radical vasco en el marco de la dinámica de la izquierda «antisistema». El análisis de la última tregua de ETA (septiembre del 2010) por parte de algunos miembros de Izquierda Anticapitalista incorpora la necesidad de articular la solidaridad de la izquierda revolucionaria de fuera de Euskadi con el entorno de ETA para garantizar una salida favorable a sus intereses (o desfavorable para los intereses del «sistema») en el previsible periodo que se abre tras el momento en que las armas de ETA callen definitivamente.⁶² Sostener a finales del año 2010 que una de las tareas de la izquierda revolucionaria es la solidaridad con ETA y su mundo (con un legado de casi mil muertos a sus espaldas en aras de la imposición de un proyecto político estrictamente nacionalista) constituye un triste recordatorio de que la historia que en estas páginas se ha pretendido modestamente rastrear aún no ha terminado.

62. Tal planteamiento figura en la intervención de Miguel Romero (antiguo dirigente de la LCR, y posteriormente de Izquierda Alternativa e Izquierda Anticapitalista) en la mesa redonda del Foro Viento Sur «¿Adónde va la izquierda abertzale?», celebrada el 10 de noviembre del 2010, con la participación de Sabino Cuadra, militante internacionalista; Carmen Lamarca, profesora de Derecho Penal de la Universidad Carlos III; Miguel Romero, editor de *Viento Sur*, y Mario Zubiaga, profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Dicho acto está reproducido en <<http://www.traficantes.net/index.php/trafis/herramientas/noticias>>.

III. Conclusiones

La izquierda comunista ha mantenido en general una posición respecto a la actividad armada de ETA que, salvo en lo que se refiere a los primeros años de la democracia por parte del PCE, ha oscilado entre la comprensión y el apoyo (nunca incondicional y absoluto, pero sí palpable en la medida en que el objetivo era evitar la derrota de ETA a manos del Estado), pasando siempre por la negativa a combatirla con el mismo vigor que otros fenómenos violentos y antidemocráticos. A través de varios órganos de prensa y de algunos materiales de varias organizaciones de la izquierda radical, que no agotan la producción de las organizaciones consideradas pero sí permiten extraer conclusiones sobre la cuestión, se han podido rastrear los cambios en la actitud hacia ETA, lo que a su vez ayuda a explicar las razones que están en el fondo de la misma. En este sentido, hay que diferenciar el PCE, con su prolongación en IU, de la izquierda revolucionaria. Se trata de culturas políticas diferentes, con trayectorias diversas y estrategias incluso contrapuestas en ocasiones: mientras que el PCE, a la muerte de Franco, pretende el asentamiento de la democracia en España, en la que espera ocupar un lugar preeminente, la LCR y el MC buscan desbordar el régimen surgido de esa reforma política, inaceptable por capitalista y por insuficientemente democrático. Son estas prioridades las que condicionan la aproximación al fenómeno etarra. Para el PCE, ETA solo pretende la obstaculización del proceso democrático, lo que, junto con la naturaleza de sus prácticas, lo convierte en aliado objetivo de los ultraderechistas, y permite incluso calificarlos como fascistas. El tratamiento que deben recibir, en consecuencia, es la oposición frontal y la movilización popular como método más adecuado para propiciar su final. La

LCR y el MC, por el contrario, consideran el régimen nacido de la reforma política como el enemigo principal. Durante la transición, creen posible su desbordamiento por la movilización popular, sobre todo en Euskadi; una vez consolidada la democracia, solo en esa comunidad autónoma se mantiene un movimiento popular importante, con un componente nacionalista, antirrepresivo y al menos retóricamente de izquierda. La izquierda revolucionaria coincide con el nacionalismo radical en el cuestionamiento del Estado desde el punto de vista territorial; no tanto desde el punto de vista socioeconómico, pero este factor pasa cada vez más a un segundo plano debido a la hegemonía alcanzada por los nacionalistas en la movilización popular.⁶³ La dinámica marcada por la estrategia militar dirigida por ETA subordina todos los demás componentes a sus intereses; esta situación pone en primer plano la represión policial, que es el otro elemento fundamental de unión de la izquierda revolucionaria con el nacionalismo radical. A la falta de rigor por parte de esta izquierda a la hora de combatir la actuación del Estado⁶⁴ se unen los excesos cometidos por las fuerzas de orden público (disparos contra manifestaciones, torturas a los detenidos, desmanes...) o por los grupos antiterroristas, con componentes policiales y/o gubernamentales hasta finales de los años ochenta. Esta prolongación de comportamientos antidemocráticos significativos de las fuerzas de orden público sirve para reafirmar el análisis sobre las deficiencias democráticas del sistema político, y genera lazos que van más allá de lo estrictamente político y que establecen un espacio común de solidaridad con los presos, refugiados y víctimas del entorno abertzale. Este espacio común delimitado por la dureza (para los directamente implicados en la lucha armada; para el amplio sector de la población militante, simpatizante o votante de HB, incluida la izquierda revolucionaria, se vive la confortable paradoja de un nivel de vida occidental con la supuesta implicación en un movimiento revolu-

63. «[...] lo más significativo de esta presencia del marxismo será su irrelevancia cara a una transformación revolucionaria del País Vasco, paralela a su funcionalidad para el relanzamiento y potenciación de un discurso nacionalista vasco que consigue, desde finales de los años 70, una importancia sin paralelo a la de su pasado» (Blas, 1994: 92).

64. Ya se ha aludido en el texto al recurso al lenguaje de los derechos humanos y a organizaciones como Amnistía Internacional solo para hacer frente a actuaciones del Estado. El doble rasero de esta izquierda se hace visible asimismo cuando se considera que asesinar no es motivo suficiente para ser juzgado y encarcelado o extraditado desde otro país.

III. CONCLUSIONES

cionario) del enfrentamiento con el Estado sirve para consolidar la toma de partido decidida. El apoyo a los presos y refugiados es la última frontera que resulta psicológicamente casi imposible de cruzar.

El PCE (y luego IU) no va a llegar nunca al grado de apoyo expresado por la izquierda revolucionaria hacia el nacionalismo radical, pero va a experimentar un giro considerable a partir de la llegada del PSOE al Gobierno de España. De la descalificación sin paliativos y la ubicación de ETA en el campo de los enemigos de la democracia y el socialismo se va a pasar a una percepción mucho menos crítica, en la que al rechazo de la violencia (que nunca es dejado de lado) se unen valoraciones relativas al importante apoyo social de los violentos y a la necesidad de arbitrar medidas de carácter político que completen la imprescindible acción policial (otra diferencia importante con la LCR y el MC, que nunca apoyarán la labor de los cuerpos policiales). De este cambio de orientación se deduce que la posición ante ETA está más influida por las expectativas de ubicación del PCE en el mapa político español que por factores vinculados a un análisis serio del significado de la violencia de ETA (lo que no quiere decir que no haya un planteamiento serio y honesto por parte de quienes denuncian desde fecha temprana a ETA como una organización de rasgos fascistas y mafiosos). Sin embargo, a medio y largo plazo va a tener más peso la consideración en el PCE y en IU del PSOE como adversario político, debido a las prácticas desarrolladas por el Gobierno de España (los GAL, la OTAN, la reconversión industrial, las reformas laborales, los casos de corrupción...). La necesidad de acentuar el papel de oposición al PSOE determinará un discurso que remarca más los elementos de izquierda respecto a los años de la transición. A partir de 1984, aproximadamente, ETA no aparecerá ya como un enemigo al que se debe combatir con las armas tradicionales de la izquierda: la denuncia permanente y la movilización. Hay siempre una condena de sus acciones, indudablemente, pero también unas propuestas que coinciden objetivamente con el discurso de fondo del nacionalismo radical: la vinculación de la violencia política con el conflicto sobre la ubicación de Euskadi en el conjunto de España, y la negociación como único horizonte para la resolución del problema terrorista. De hecho, prácticamente todas las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos centrales (como la Ley de Partidos, aprobada en el 2002, que suponía la ilegalización de Batasuna) han contado desde los años noventa con la oposición de Izquierda Unida, con argumentos que han ido desde la posibilidad de atentar

contra derechos democráticos hasta los hipotéticos efectos contraproducentes que pudieran implicar las medidas destinadas a combatir a ETA y el entramado político que la apoya. La culminación de la posición de IU/EB vino dada por su participación en el Pacto de Estella, que no hay que olvidar vino precedida por su negativa a participar en los acuerdos de los partidos democráticos para desalojar a HB de las alcaldías de Mondragón y Arrigorriaga (en el verano de 1977, poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco). No cabe duda de que la estrategia de EB ha estado en relación con su apuesta por la coalición con el PNV, que se hizo efectiva en los gobiernos tripartitos (PNV-EA-EB) entre el 2001 y el 2009; su inclusión en el bloque nacionalista, desmintiendo con los hechos su teórica opción por el papel de «puente» entre nacionalistas y no nacionalistas, precisamente además en el momento en que el partido *jeltzale* ha mostrado una deriva soberanista acusada, responde al deseo de sustituir al PSOE como partido de gobierno en Euskadi. Su posición ante ETA se explica, en consecuencia, en función de estos diseños partidistas que llevan a olvidar pronunciamientos emitidos con claridad poco tiempo antes, como hemos visto en el caso de Madrazo.

Lógicamente, el oportunismo, con ser un factor explicativo de primer orden en determinadas coyunturas, no puede ser el único elemento digno de consideración a la hora de analizar la falta de una respuesta nítida de la izquierda comunista a la violencia terrorista de ETA. Como fondo, hay, con las contadas y temporales excepciones que se han podido ver a lo largo del trabajo, una clara incapacidad de caracterizar a ETA a partir de sus prácticas. Continuando algunas de las peores tradiciones de la izquierda, se trata de luchar contra el capitalismo y los partidos y gobiernos que lo encarnan sin consideraciones a la posibilidad de que quien lo combate no tiene necesariamente que ser mejor que aquel. A la izquierda revolucionaria, parte de la cual tiene una trayectoria antiestalinista indudable, se le pueden aplicar las palabras que Tony Judt (2007: 205) consagra a parte de la izquierda francesa en los años de la guerra fría:

El contexto en el que se dan tales apreciaciones del comunismo y de sus adversarios, la circunstancia en la cual personas sin duda inteligentes pueden ser absolutamente sordas no solo a la crueldad y la injusticia, sino también a la incoherencia y la contradicción en los argumentos políticos y morales, es el de un negativismo fundamental. Por esta razón, la mayoría de los intelectuales relevantes del periodo no fueron miembros del PC. La inmensa

III. CONCLUSIONES

mayoría de los escritores, artistas, profesores y periodistas no estaban a favor de Stalin: eran contrarios a Truman; no estaban a favor de los campos de concentración: estaban en contra del colonialismo. No estaban a favor de los juicios de escarmiento en Praga: estaban en contra de las torturas en Túnez. No estaban a favor del marxismo (salvo en teoría): estaban en contra del liberalismo (especialmente en teoría). Y, sobre todo, no estaban a favor del comunismo (salvo *sub specie aeternitatis*): estaban en contra del anticomunismo.

Efectivamente, la izquierda comunista en general no ha estado a favor de ETA: ha estado en contra de quienes la combatían y eran perseguidos por ella; no han sido nacionalistas vascos: se han opuesto al nacionalismo español, incluso cuando este se ha expresado en formas más cívicas y respetuosas con los derechos humanos que algunas manifestaciones del nacionalismo vasco; no han estado en contra del respeto a los derechos humanos: solo han elevado la voz contra la supuesta conculcación de derechos colectivos de nunca bien definida plasmación (el derecho de autodeterminación, transmutado en los últimos años en «derecho a decidir»).

Se ha podido apreciar el empeño de la izquierda revolucionaria en negar el carácter fascista del MLNV. No podía ser de otra manera, dada la trayectoria de dicha izquierda. También se entiende la reluctancia hacia tal definición si se tienen en cuenta los orígenes de ETA y la existencia de un componente socialista y revolucionario en el MLNV. No obstante, la historia es pródiga en ejemplos de movimientos que se van transformando al hilo de la acción, y sobre todo en la medida en que es esta la que marca la evolución. Precisamente la depuración que se va produciendo a partir de la primacía de la acción sobre la reflexión, más allá de la retórica (por otra parte, cada vez más vacía en cuanto a los postulados socialistas), es lo que va transformando la naturaleza del grupo hasta adquirir otras connotaciones.⁶⁵ La analogía en este punto con el sindicalismo revolucionario que sumariamente se ha apuntado en la primera parte de este escrito no es baladí. Un origen marxista y revolucionario no impide una deriva totalitaria que en aquel caso enlaza de manera inequívoca con el fascismo y en el de ETA se asemeja a este de forma rotunda. Desde un punto de vista político, pero también académico, es posible verificar las concomitancias entre las prácticas

65. Sobre el papel de la acción y el mito a ella asociado para el caso de ETA, véase Wiewiorka (1991: 290-293).

de ETA y las tradiciones fascistas.⁶⁶ El relato de Angelo Tasca de los desmanes de los *squadristi* en la Italia de los primeros años veinte puede aplicarse sin grandes esfuerzos de imaginación a la *kale borroka* que sacudió las ciudades vascas en los años noventa. Lejos de responder a una revuelta espontánea de una juventud insatisfecha y rebelde, como algunos de los analistas consultados en *hika* parecen querer ver, el fenómeno no era sino una modalidad más de la lucha armada decidida por el «estado mayor», que buscaba nuevas formas de desestabilizar la sociedad en beneficio de sus objetivos. Si la izquierda comunista hubiera analizado este asunto con seriedad, sin oportunismo y sin lastres en forma de prejuicios, probablemente habría llegado a conclusiones similares, y se habrían asumido posturas de rechazo radical a ETA. Ello hubiera restado legitimidad a ETA en el seno de la sociedad vasca y seguramente hubiera acelerado su final. No se hizo, y la actitud de esta parte de la izquierda hacia el terrorismo de ETA en la mayor parte de los años de su existencia queda como uno de los grandes lunares que requieren una revisión en profundidad para sacar conclusiones tan urgentes como necesarias.

66. Véase Varela Ortega (2001a, 2001b). Igualmente, Julio Aróstegui (2002) considera que el terrorismo de ETA es susceptible de una interpretación dentro del marco analítico de los procesos de fascistización. José Luis de la Granja (2001) opina de forma similar: «[...] estos planteamientos de limpieza ideológica, su culto a la violencia y a la muerte (que recuerda a los fascistas del periodo de entreguerras) y su absoluta dependencia de ETA (evidente tras la ruptura de la reciente tregua) hacen de HB una fuerza antidemocrática y totalitaria». Ramón Zallo, por el contrario, niega las tesis anteriores: «No hay fascismo en Euskadi, sí una limpieza ideológica selectiva» (2001: 193).

Lista de siglas

ANV	Acción Nacionalista Vasca
BOC	Bloque Obrero y Campesino
CGV	Consejo General Vasco
EB	Ezker Batua (Izquierda Unida)
EE	Euskadiko Ezkerra (Izquierda Vasca)
EGI	Euzko Gaztedi (Juventud Vasca)
EH	Euskal Herritarrok
EIA	Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido de la Revolución Vasca)
ELA	Euzko Langileen Alkartasuna (Solidaridad de Trabajadores Vascos)
EMK	Euskadiko Mugimendu Komunista (Movimiento Comunista de Euskadi)
EPK	Euskadiko Partidu Komunista (Partido Comunista de Euskadi)
ESB	Euskal Sozialista Biltzarrea (Asamblea Socialista Vasca)
ETA	Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad)
ETA (m)	ETA militar
ETA (pm)	ETA político-militar
FLP	Frente de Liberación Popular
FOP	Fuerzas de orden público
FRAP	Frente Revolucionario Antifascista Patriótico
GAL	Grupos Antiterroristas de Liberación
GEO	Grupo Especial de Operaciones

GRAPO	Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
HASI	Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario Popular)
HB	Herri Batasuna (Unidad Popular)
IRA	Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
IU	Izquierda Unida
KAS	Koordinadora Abertzale Sozialista
LAB	Langile Abertzaleen Batzordeak (Comisiones de Trabajadores Abertzales)
LAIA	Langile Abertzaleen Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución de los Trabajadores Abertzales)
LC	Liga Comunista
LCR	Liga Comunista Revolucionaria
LKI	Liga Komunista Iraultzailea (Liga Comunista Revolucionaria)
LOAPA	Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico
MC	Movimiento Comunista
MLNV	Movimiento de Liberación Nacional Vasco
OIC	Organización de Izquierda Comunista
ORT	Organización Revolucionaria de Trabajadores
PCE	Partido Comunista de España
PNV	Partido Nacionalista Vasco
POUM	Partido Obrero de Unificación Marxista
PP	Partido Popular
PSE	Partido Socialista de Euskadi
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PST	Partido Socialista de los Trabajadores
PTE	Partido del Trabajo de España
RAF	Rote Armee Fraktion (Facción del Ejército Rojo)
UAR	Unidad de Acción Rural
UCD	Unión de Centro Democrático
UGT	Unión General de Trabajadores
UPN	Unión del Pueblo Navarro
USO	Unión Sindical Obrera
ZEN	Zona Especial Norte

Bibliografía

- ÁGUILA, Rafael del (2008): *Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales*, Madrid, Taurus.
- AIERBE, Peio (1989): *Lucha armada en Europa. IRA, RAF, Brigadas Rojas, Rote Zora, FLNC, Células Revolucionarias*, San Sebastián, Gakoa.
- ARANZADI, Juan (1981): *Milenarismo vasco (Edad de oro, etnia y nativismo)*, Madrid, Taurus.
- ARENILLAS, José Luis, y José María ARENILLAS (1981): *Sobre la cuestión nacional en Euskadi*, Barcelona, Fontamara.
- ARÓSTEGUI, Julio (2002): «Una reflexión sobre la violencia política y el terrorismo», en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA (ed.): *Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa*, Madrid, Biblioteca Nueva, 27-33.
- ARREGI, Natxo (1994): *Proceso contra la violencia política*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- ARRIAGA LANDETA, Mikel (1997): *... y nosotros que éramos de HB... Sociología de una heterodoxia abertzale*, San Sebastián, Haranburu.
- AULESTIA, Kepa (1998): *HB. Crónica de un delirio*, Madrid, Temas de Hoy.
- AYER. REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA (2006): *Más allá de la historia social*, 62, 2006 (2), Madrid, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons.
- AZURMENDI, Mikel (1998): *La herida patriótica. La cultura del nacionalismo vasco*, Madrid, Taurus.
- BALCELLS, Albert (2004): *Breve historia del nacionalismo catalán*, Madrid, Alianza Editorial.

- BALFOUR, Sebastián, y Alejandro QUIROGA (2007): *España reinventada Nación e identidad desde la transición*, Barcelona, Península.
- BÁRCENA, Iñaki, Pedro IBARRA y Mario ZUBIAGA (1995): *Nacionalismo y ecología. Conflicto e institucionalización en el movimiento ecologista vasco*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- BAUER, Otto (1979): *La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia*, México, Siglo XXI.
- BENEGAS, José María (2004): *Diccionario del terrorismo*, Madrid, Espasa-Calpe.
- BERNSTEIN, Eduard, Ernest BELFORT BAX, Karl KAUTSKY y Karl RENNER (1978): *La Segunda Internacional y el problema nacional y colonial (1.ª parte)*, México, Cuadernos de Pasado y Presente.
- BLANCO VALDÉS, Roberto L. (2005): *Nacionalidades históricas y regiones sin historia. A propósito de la obsesión ruritana*, Madrid, Alianza Editorial.
- BLAS GUERRERO, Andrés de (1984): *Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas*, Madrid, Espasa-Calpe.
- (1994): *Nacionalismos y naciones en Europa*, Madrid, Alianza Universidad.
- BOTTI, Alfonso (2003): *La questione vasca. Dalle origini allo scioglimento di Batasuna*, Milán, Mondadori.
- BRUNI, Luigi (1987): *ETA. Historia política de una lucha armada*, 1.ª parte. Estella, Txalaparta.
- BUENO, Manuel, Carmen GARCÍA y José HINOJOSA (coords.) (2007): *Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977*, 2 vols., Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
- CABRERA, Miguel Ángel (2001): *Historia, lenguaje y teoría de la sociedad*, Madrid, Cátedra.
- CARRÈRE D'ENCAUSSE, Hélène (1977): *Comunistas y/o nacionalistas*, Barcelona, Anagrama.
- CASANOVA, Iker (2007): *ETA. 1958-2008. Medio siglo de historia*, Tafalla, Txalaparta.
- CASQUETE, Jesús (2009a): *En el nombre de Euskal Herria. La religión política del nacionalismo vasco radical*, Madrid, Tecnos.
- (ed.) (2009b): *Comunidades de muerte*, Barcelona, Anthropos.
- (2010): «Abertzale, sí, pero ¿quién dijo que de izquierda?», *El Viejo Topo*, 268, 14-19.

- CASTELLS, Luis, Arturo CAJAL y Fernando MOLINA (eds.) (2007): *El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y Estado (siglos XIX y XX)*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- y Arturo CAJAL (eds.) (2009): *La autonomía vasca en la España contemporánea*, Madrid, Marcial Pons.
- CLARK, Robert P. (1980): *The Basques. The Franco years and beyond*, Reno, University of Nevada Press.
- COLOMER, Josep M. (1990): *El arte de la manipulación política. Votaciones y teoría de juegos en la política española*, Barcelona, Anagrama.
- CONVERSI, Daniele (2004): *Els bascos, els catalans i Espanya. Entre la modernitat i la violència*, Lleida, Pagès Editors.
- CORCUERA ATIENZA, Javier (2001): *La patria de los vascos. Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1903)*, Madrid, Taurus.
- CRUZ, Rafael (1987): *El Partido Comunista de España en la II República*, Madrid, Alianza Universidad.
- CUCÓ GINER, Josepa (2008): «Recuperando una memoria en la penumbra. El Movimiento Comunista y las transformaciones de la extrema izquierda española», *Historia y Política*, 20, 73-96.
- DAVIS, Horace B. (1972): *Nacionalismo y socialismo. Teorías marxistas y laboristas sobre el nacionalismo hasta 1917*, Barcelona, Península.
- DOMÍNGUEZ, Florencio (1998): *ETA: estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992*, Madrid, Taurus.
- (2002): *Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas*, Madrid, Santillana.
- DROZ, Jacques (dir.) (1984): *Historia general del socialismo*, 8 vols., Barcelona, Destino.
- DUPLÁ, Antonio, y Javier VILLANUEVA (coords.) (2009): *Con las víctimas del terrorismo*, San Sebastián, Gakoa.
- ELKARRI (2002): *Claves para hacer las paces*, Pamplona.
- ELORZA, Antonio (coord.) (2000): *La historia de ETA*, Madrid, Temas de Hoy.
- ESTRUCH, Joan (1978): *Historia del PCE 1920-1939*, Barcelona, El Viejo Topo.
- (1982): *El PCE en la clandestinidad, 1939-1956*, Madrid, Siglo XXI.
- FANON, Frantz (2007): *Los condenados de la tierra*, México, Fondo de Cultura Económica.

- FERNÁNDEZ, Jonan (1989): *La autovía en el espejo*, Tafalla, Txalaparta.
- (2006): *Ser humano en los conflictos. Reflexión ética tras una vivencia directa en el conflicto vasco*, Madrid, Alianza Editorial.
- FLOR, Julio (2008): *El sueño sigue vivo. Ezker Batua-Berdeak*, Bilbao, Ezker Batua-Berdeak.
- FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos (2009): «Los socialistas y la nación», en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el siglo XX*, Valencia, Universitat de Valencia, 15-34.
- Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.) (2009): *Discursos de España en el siglo XX*, Valencia, Universitat de Valencia.
- FRADERA, Josep M. (2002): «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», en Anna María GARCÍA ROVIRA (ed.): *España, ¿nación de naciones?*, Madrid, Marcial Pons, 87-100.
- FUNES RIVAS, María Jesús (1998): *La salida del silencio. Movilizaciones por la paz en Euskadi 1886-1998*, Madrid, Akal.
- FUSI, Juan Pablo (1979): *El problema vasco en la II República*, Madrid, Turner.
- (1984): *El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad*, Madrid, Alianza Universidad.
- GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio (2001): *Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- GARCÍA ROVIRA, Anna María (ed.) (2002): *España, ¿nación de naciones?*, Madrid, Marcial Pons.
- GARMENDIA, José María (1995): *Historia de ETA*, San Sebastián, Haranburu.
- GAURHUTS (1976): *Sobre nacionalismo revolucionario, socialismo abertzale y marxismo nacional vasco*, Hendaya, Mugalde.
- GELLNER, Ernest (1995): *Encuentros con el nacionalismo*, Madrid, Alianza Editorial.
- GENTILE, Emilio (2009): «*La nostra sfida alle stelle*». *Futuristi in politica*, Bari, Laterza.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (ed.) (2002): *Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- GOÑI ALZUETA, Joseba, y José María RODRÍGUEZ ERDOZAIN (1979): *Euskadi, la paz es posible. 100 personas del Estado español y francés analizan las causas de la violencia y presentan soluciones*, Bilbao, Desclée de Brouwer.

- GRANJA SAINZ, José Luis de la (1986): *Nacionalismo y II República en el País Vasco*, Madrid, Siglo XXI/Centro de Investigaciones Sociológicas.
- (2001): «La idea de España en el nacionalismo vasco», en Manuel MORALES MOYA (coord.): *Nacionalismos e imagen de España*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 37-62.
- (2007): *El oasis vasco. El nacimiento de Euskadi en la República y la guerra civil*, Madrid, Tecnos.
- (2009): *El nacionalismo vasco. Claves de su historia*, Madrid, Anaya.
- Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA (2003): *La España de los nacionalismos y las autonomías*, Madrid, Síntesis.
- GURRUCHAGA, Carmen, e Isabel SAN SEBASTIÁN (2002): *El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y PNV*, Madrid, Temas de Hoy.
- GUTIÉRREZ MUÑOZ, Kati (1987): «Crisis de la izquierda, auge del nacionalismo radical», *Nuestra Bandera*, 140-141, 9-12.
- HÁJEK, Milos (1984): *Historia de la Tercera Internacional. La política de frente único*, Barcelona, Crítica.
- HALIMI, Gisèle (1971): *Le procès de Burgos*, París, Gallimard.
- HAMILTON, Carrie (2007): *Women and ETA. The gender politics of radical Basque nationalism*, Manchester, Manchester University Press.
- HAUPT, Georges, y Michael LÖWY (1980): *Los marxistas y la cuestión nacional*, Barcelona, Fontamara.
- HERMET, Guy (1972): *Los comunistas en España*, París, Ruedo Ibérico.
- HOBBSAWM, E. J. (1991): *Naciones y nacionalismo desde 1780*, Barcelona, Crítica.
- IBARRA GÜELL, Pedro (1987): *La evolución estratégica de ETA. De la «guerra revolucionaria» (1963) a la negociación (1987)*, San Sebastián, Kriselu.
- y Ramón ZALLO (1995): «Comunidad, nación y federalismo», *Viento Sur*, 19, 71-81.
- IRIARTE, Bikila, José (1991): *¿Los obreros tienen patria? Internacionalismo y cuestión nacional*, San Sebastián, Gakoa.
- (1996): «Juventud y violencia en Euskadi», *Viento Sur*, 26, 7-12.
- JÁUREGUI, Gurutz (1981): *Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1968*, Madrid, Siglo XXI.
- JORDÁN, Javier (coord.) (2004): *Los orígenes del terror. Indagando en las causas del terrorismo*, Madrid, Biblioteca Nueva.

- JOYCE, Patrick (2006): «Materialidad e historia social», *Ayer*, 62, 73-87.
- JUARISTI, Jon (1997): *El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos*, Madrid, Espasa-Calpe.
- (1999): *Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos*, Madrid, Espasa-Calpe.
- JUDT, Tony (2007): *Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses 1944-1956*, Madrid, Taurus.
- KOLAKOWSKI, Leszek (1983): *Las principales corrientes del marxismo*, 3 vols., Madrid, Alianza Editorial.
- KRIEDEL, Annie (1978): *Los comunistas franceses*, Madrid, Villalar.
- KYMLICKA, Will (2004): *Estados, naciones y culturas*, Córdoba, Almuzara.
- LAIZ, Consuelo (1995): *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- LANEGI, Aingeru, y otros (1977): *Eurocomunismo y Euskadi (Crítica a un debate)*, San Sebastián, L. Haranburu.
- LENIN, Vladímir Ilich (1972): *Obras escogidas en dos tomos*, París, Librairie du Globe.
- LETAMENDÍA, Francisco (1994): *Historia del nacionalismo vasco y de ETA*, 3 vols., San Sebastián, R y B Ediciones.
- LÓPEZ DE LACALLE, José Luis (2010): *La niebla y el trasluz: escritos de un hombre de acción*, Madrid, La Esfera de los Libros.
- MATA, José Manuel (1993): *El nacionalismo vasco radical. Discurso, organización y expresiones*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- MEDEM, Julio (2003): *La pelota vasca, la piel contra la piedra*, Madrid, Aguilar.
- MEDVEDEV, Roy A. (1977): *Que juzgue la historia. Orígenes y consecuencias del estalinismo*, Barcelona, Destino.
- MEES, Ludger, Santiago de PABLO y José Antonio RODRÍGUEZ RANZ (1999): *El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco*, 2 vols., Barcelona, Crítica.
- MOLINA APARICIO, Fernando (2005): *La tierra del martirio español. El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- MOLINERO, Carmen, y Pere YSÀS (2008): «La izquierda en los años 70», *Historia y Política*, 20, 21-42.
- y Pere YSÀS (2010): *Els anys del PSUC. El partit de l'antifranquisme (1956-1981)*, Barcelona, L'Avenç.

- MORALES MOYA, Manuel (coord.) (2001): *Nacionalismos e imagen de España*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio.
- MORÁN, Gregorio (1986): *Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985*, Barcelona, Planeta.
- MORÁN, Sagrario (2004): *PNV-ETA, historia de una relación imposible*, Madrid, Tecnos.
- MUÑOZ SORO, Javier, y Sophie BABY (2005): «El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1982)», en VV. AA.: *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares.
- NIN, Andreu (1979): *La cuestión nacional en el estado español*, Barcelona, Fontamara.
- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M.^a (1998): *Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX*, Madrid, Síntesis.
- (2006): *¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil española (1936-1939)*, Madrid, Marcial Pons.
- ONAINDÍA, Mario (2004): *El aventurero cuerdo. Memorias (1977-1981)*, Madrid, Espasa-Calpe.
- PALTI, Elías José (2008): «Pensar históricamente en una era postsecular. O del fin de los historiadores después del fin de la historia», en Pablo SÁNCHEZ LEÓN y Jesús IZQUIERDO MARTÍN (eds.): *El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo XXI*, Madrid, Siglo XXI, 27-40.
- QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO, Alejandro (2008): «Amistades peligrosas. La izquierda y los nacionalismos catalanes y vascos (1975-2008)», *Historia y Política*, 20, 97-127.
- (2009): «Coyunturas críticas. La izquierda y la idea de España durante la transición», *Historia del Presente*, 13, II época, 21-40.
- RAMIRO FERNÁNDEZ, Luis (2004): *Cambio y adaptación en la izquierda. La evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000)*, Madrid, Siglo XXI/Centro de Investigaciones Sociológicas.
- REIMAN, Michal (1982): *El origen del estalinismo*, Barcelona, Crítica.
- REINARES, Fernando (2001): *Patriotas de la muerte. Quiénes han militado en ETA y por qué*, Madrid, Taurus.
- RIDAO, Joan (2006): *Les contradiccions del catalanisme*, Barcelona, L'Esfera dels Llibres.
- RÍO, Eugenio del (1982): *La razón de la fuerza. La amenaza de guerra en Europa. Política revolucionaria y violencia en Occidente. Ejército y política en el Estado español*, Madrid, Revolución.

- RIQUER I PERMANYER, Borja de (2001): *Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal*, Madrid, Marcial Pons.
- RIVERA, Antonio (2003): *Señas de identidad. Izquierda obrera y nación en el País Vasco, 1880-1923*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- (2009): «La izquierda y la cuestión vasca. Segunda parte: 1923-1960. Acercamiento y disolución», en Luis CASTELLS y Arturo CAJAL (eds.): *La autonomía vasca en la España contemporánea*, Madrid, Marcial Pons, 257-284.
- ROBLES EGEA, Antonio (ed.) (2003): *La sangre de las naciones. Identidades nacionales y violencia política*, Granada, Universidad de Granada.
- ROCA, José Manuel (ed.) (1994): *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- RODINSON, Maxime (1975): *Sobre la cuestión nacional*, Barcelona, Anagrama.
- RUBIRALTA CASAS, Fermí (1997): *El nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catalán y vasco (1959-1973)*, San Sebastián, Gakoia.
- SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio (2001): *ETA contra el Estado. Las estrategias del terrorismo*, Barcelona, Tusquets.
- SÁNCHEZ LEÓN, Pablo, y Jesús IZQUIERDO MARTÍN (eds.) (2008): *El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo XXI*, Madrid, Siglo XXI.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús (2004): *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
- SEGURA, Antoni (2009): *Euskadi. Crónica de una desesperanza*, Madrid, Alianza Editorial.
- SILVER, Philip W. (1988): *Nacionalismos y transición. Euskadi, Cataluña, España*, San Sebastián, Txertoa.
- SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José (1975): *El primer nacionalismo vasco: industrialismo y conciencia nacional*, Madrid, Tucur.
- SOREL, Georges (2005): *Reflexiones sobre la violencia*, Madrid, Alianza Editorial.
- STERNHELL, Zeev (1986): *Neither Right nor Left. Fascist Ideology in France*, Princeton University Press, Princeton.
- Mario SZNAJDER y Maia ASHERI (1994): *El nacimiento de la ideología fascista*, Madrid, Siglo XXI.

- SUÁREZ-ZULOAGA, Ignacio (2007): *Vascos contra vascos. Una explicación ecuaníme de dos siglos de lucha*, Barcelona, Planeta.
- SULLIVAN, John (1988): *El nacionalismo vasco radical 1959-1986*, Madrid, Alianza Editorial.
- TOWNSHEND, Charles (2008): *Terrorismo. Una breve introducción*, Madrid, Alianza Editorial.
- TRAVERSO, Enzo (2002): *Il totalitarismo. Storia di un dibattito*, Milán, Mondadori.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel (1980): «De la Dictadura de Primo de Rivera al congreso de Sevilla», en VV. AA.: *Para una historia del PCE. Conferencias en la F.I.M.*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
- UNZUETA, Patxo (1987): *Sociedad vasca y política nacionalista*, Madrid, El País.
- (1988): *Los nietos de la ira. Nacionalismo y violencia en el País Vasco*, Madrid, El País-Aguilar.
- URKIJO, Txema (2009): «Las víctimas del terrorismo practicado por incontrolados, grupos de extrema derecha y el GAL», en Antonio DUPLÁ y Javier VILLANUEVA (coords.) (2009): *Con las víctimas del terrorismo*, San Sebastián, Gakoa, 33-45.
- VARELA ORTEGA, José (2001a): *Contra la violencia. A propósito del Nacional-Socialismo alemán y del vasco*, Alegia, Hiria.
- (2001b): «Del Nacional-Socialismo alemán y del vasco», *Claves de Razón Práctica*, 110, 8-21.
- VILLANUEVA, Javier (1985): «Marxismo y autodeterminación», en VV. AA.: *Autodeterminación de los pueblos. Un reto para Euzkadi y Europa*, Bilbao, Herria 2000 Eliza, 279-287.
- (1987): *Lenin y las naciones*, Madrid, Revolución.
- VV. AA. (1980): *Para una historia del PCE. Conferencias en la F.I.M.*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
- VV. AA. (1983): *Una historia de incompreensión exige negociar. 80 personas de la cultura y la política opinan sobre la negociación entre ETA, Gobierno vasco y Gobierno español*, Getxo, Colectivo Herria 2000 Eliza.
- VV. AA. (1985): *Autodeterminación de los pueblos. Un reto para Euzkadi y Europa*, Bilbao, Colectivo Herria 2000 Eliza, tomo II.
- VV. AA. (2005): *Culturas y políticas de la violencia. España siglo xx*, Madrid, Siete Mares.

- WALDMANN, Peter (1997): *Radicalismo étnico: análisis comparado de las causas y efectos en conflictos étnicos*, Madrid, Akal.
- WIEVIORKA, Michel (1991): *El terrorismo. La violencia política en el mundo*, Barcelona, Plaza y Janés.
- WINOCK, Michael (1982): *Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France*, París, Éditions du Seuil.
- ZABALETA, Patxi, Juan José LABORDA y Consuelo LAIZ (eds.) (2008): *Conversaciones. ¿Se puede ser nacionalista y de izquierda?*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- ZALLO, Ramón (1997): *Euskadi o la segunda transición. Nación, cultura, ideologías y paz en un cambio de época*, San Sebastián, Erein.
- (2001): *El país de los vascos. Desde los sucesos de Ermua al segundo Gobierno Ibarretxe*, Madrid, Fundamentos.
- ZULAIKA, Joseba (2007): *Polvo de ETA*, Irún, Alberdania.



